

DIARIO DE SESIONES

Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba

23 de diciembre de 2020

42ª REUNION – 32º SESION ORDINARIA

142º PERIODO LEGISLATIVO

32º Sesión Virtual

**Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Presidente del Poder Legislativo**

CALVO, Manuel

Presidente Provisorio

GONZALEZ, Oscar Félix

Vicepresidente

DE LA SOTA, Natalia

Vicepresidente 1ª

AMBROSIO, Alberto

Vicepresidente 2ª

COSSAR, Marcelo Arnolfo

Secretaria Administrativo

COMBA, Ana Carolina

Secretario Legislativo

ARIAS, Guillermo Carlos

Secretario de Coordinación

Operativa y Comisiones

DANIELE, Fredy Horacio

Secretario Técnico Parlamentario

ROBERI, Gabriel Ignacio

Pro-Secretario Administrativo

TINI, Ignacio Florencio

Pro-Secretario Legislativo

GALLO, Juan Manuel

Pro-Secretario de Coordinación

Operativa y Comisiones

Prosecretario Técnico Parlamentario

ESNAOLA, Manuel

**LEGISLADORES
PRESENTES**

ABRAHAM, Liliana Noldy
ALESANDRI, Carlos Tomás
AMBROSIO, Alberto Vicente
ARDUH, Orlando Víctor
ARGAÑARÁS, Iohana Carolina
ARGAÑARAZ, María Noel
BAÑUELOS, Julio Alberto
BLANGINO, Juan José
BUSSO, María Victoria
CAFFARATTI, María Elisa
CAPITTANI, Darío Gustavo
CARPINTERO, Leandro Martín
CARRILLO, Marisa Gladys
CASERIO, Mariana Alicia
CASTRO, Juan Carlos
CHAMORRO, Matías Ezequiel
CID, Juan Manuel
COSSAR, Marcelo Arnolfo
DE LA SOTA, Natalia
ECHEVARRIA, Luciana Gabriela
ESLAVA, Gustavo Alberto
ESLAVA, María Emilia
FERNANDEZ, Nadia Vanesa
FORTUNA, Francisco José
GARADE PANETTA, María Verónica
GARCIA ELORRIO, Aurelio Francisco
GIRALDI, Ramón Luís
GONZÁLEZ, Oscar Félix
GUIRARDELLI, María Adela
GUDIÑO, Daniela Soledad
HAK, Diego Pablo
ITURRIA, Dardo Alberto
JURE, Juan Rubén
LABAT, María Laura
LATIMORI, Raúl Horacio
LENCINAS, Luís Carlos
LIMIA, Luis Leonardo
LORENZO, Carlos Mariano
MAJUL, Miguel Ángel
MALDONADO, Miguel Ángel
MANSILLA, Doris Fátima
MANZANARES, María Graciela
MARCONE, María Rosa
MARTÍNEZ, Natalia Herminia
MIRANDA, Franco Diego
PALEO, Silvia Gabriela
PEREYRA, Cristina Alicia

PETRONE, María Andrea
PIASCO, Alejandra Danila
PIHEN, José Emilio
PRESAS, Carlos Alberto
RAMALLO, Walter Andrés
RECALDE, Raúl Guillermo
RINALDI, Julieta
RINS, Benigno Antonio
RONGE, Jacqueline Viviana
ROSSI, Dante Valentín
ROSSO, Milena Marina
RUIZ, Alejandro Antonio
SCORZA, Adrián Rubén
SERRANO, Patricio Eduardo
SUÁREZ, Carmen Esther
VIOLA, Matías Marcelo
ZORRILLA, Ricardo Roberto

**LEGISLADORES
AUSENTES
JUSTIFICADOS**

ALTAMIRANO, Alfredo
GARCIA, Sara del Carmen
IRAZUZTA, Cecilia Cristina del Carmen
KYSHAKEVYCH, Tania Anabel
RUFEL, Rodrigo Miguel

**LEGISLADORES AUSENTES
NO JUSTIFICADOS**

SUMARIO

- 1.- Izamiento de la Bandera Nacional .3644
- 2.- Versión taquigráfica. Aprobación ...3644
- 3.- Asuntos entrados:

De los señores legisladores

I.- Hospital San Antonio de La Carlota. Personal. Desempeño ante la pandemia generada por el virus Covid-19. Beneplácito. Proyecto de declaración (31997/L/20) de la legisladora Ronge..3644

II.- Bomberos Voluntarios de la ciudad de La Carlota. Desempeño en la contención de los focos de incendios rurales en La Carlota y otros puntos de la Provincia de Córdoba. Beneplácito. Proyecto de declaración (31998/L/20) de la legisladora Ronge3644

III.- Canal Maestro Sur. Roturas a la altura de Bouwer. Preocupación. Proyecto de declaración (32001/L/20) del bloque de la Unión Cívica Radical3644

IV.- Firma Ferias Rodeo Huinca S.C.A. Reconocimiento. Proyecto de declaración (32002/L/20) del bloque de la Unión Cívica Radical3644

V.- Puentes de calles Rosario de Santa Fe (Centro Cívico) y 25 de Mayo (Legislatura Provincial) que conectan el centro con barrios General Paz y Juniors. Apertura peatonal y vehicular. Solicitud al PE. Proyecto de declaración (32003/L/20) del bloque de la Unión Cívica Radical ...3644

VI.- Ex múltiple Campeón Argentino y varias veces representante olímpico y Maestro Internacional, Prof. Guillermo Gustavo Soppe, actual Presidente de la Federación de Ajedrez de la Provincia de Córdoba, nominado para los Premios Cóndor 2020. 50 Años de trayectoria en el Ajedrez. Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración (32004/L/20) del legislador Chamorro3644

VII.- Cantautora Ana Robles, radicada en Alta Gracia. Galardón obtenido con su tema "Cielo y Serenata", en el "Concurso Iberoamericano 100 Años del Nacimiento de Chabuca Granda", otorgado por la República del Perú. Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración (32005/L/20) de la legisladora De la Sota.....3644

VIII.- Operaciones de retina en el Hospital Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (32006/L/20) del bloque Encuentro Vecinal Córdoba3644

X.- Actor Daniel Pedro Aráoz. Beneplácito y reconocimiento. Proyecto de declaración (32007/L/20) de los legisladores Hak, Fernández, Pereyra, Serrano y Limia.....3644

X.- Fiesta de la Familia, en La Francia. 25º Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración (32008/L/20) de los legisladores Piasco y Giraldi3644

XI.- Ministerio de Educación. Jornadas de reflexión y evaluación. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (32009/L/20) del bloque Encuentro Vecinal Córdoba3644

XII.- Legislatura de la Provincia de Jujuy. Decisión de rechazar la renuncia del diputado Iñaki Aldasoro. Preocupación. Proyecto de declaración (32010/L/20) de la legisladora Argañaraz3644

XIII.- Día Internacional de la Educación. Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración (32011/L/20) de la legisladora García3644

XIV.- ERSeP y Administración Provincial de Recursos Hídricos. Falta de provisión de agua potable en dos barrios de la localidad de Cosquín. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (32012/L/20) del bloque Encuentro Vecinal Córdoba3644

XV.- Puente de ingreso al Autódromo Oscar Cabalén. Señalización. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (32013/L/20) del legislador Ambrosio3644

XVI.- Ministerio de Finanzas y Agencia Córdoba Inversión y Financiamiento. Contrato de préstamo que suscribirá el Gobierno de la Provincia de Córdoba con la Corporación Andina de Fomento. Pedido de informes. Proyecto de resolución (32014/L/20) del bloque Encuentro Vecinal Córdoba3644

XVII.- Modelo de Convenio de Ejecución y Financiamiento de Obras, a suscribir entre la Provincia de Córdoba y los Municipios y Comunas, en el marco del Programa de Inversiones Municipales – Contrato de Préstamo BID 2929/OC-AR. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (32015/L/20) del bloque Encuentro Vecinal Córdoba3644

XVIII.- Bienal de Música Córdoba, organizada por el Sindicato de Músicos de la Provincia de Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de declaración (32016/L/20) de los legisladores García y Pihen3644

XIX.- Equinoterapia. Regulación. Proyecto de ley (32017/L/20) del bloque de la Unión Cívica Radical3644

4.- A) Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (30096/L/20) de la legisladora Díaz García, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión. Se aprueba3644

B) Personal de Salud. Testeos masivos. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (30802/L/20) de la legisladora Díaz García, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión. Se aprueba3644

C) Reserva Hídrica, Natural y Recreativa de Villa Allende. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de

resolución (30804/L/20) de la legisladora Díaz García, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión. Se aprueba3644

D) Ministerio de Salud. Consecuencias sanitarias por el uso de agroquímicos y por los incendios en nuestra provincia. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (31180/L/20) de la legisladora Díaz García, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión. Se aprueba3644

E) Enfermero profesional Sr. Víctor Eduardo Castro. Traslado al Hospital de Niños de la Santísima Trinidad. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (30642/L/20) de la legisladora Díaz García, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión. Se aprueba3644

F) Obra de provisión y armado de instalación eléctrica del árbol de Navidad del Faro del Bicentenario. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (31199/L/20) de la legisladora Díaz García, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión. Se aprueba3644

G) Operativo de desalojo de la ocupación de tierras en barrio Estación Ferreyra de la ciudad de Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (31822/L/20) de la legisladora Díaz García. Moción de vuelta a comisión. Se aprueba3644

H) Secretaría de Ambiente y Cambio Climático. Sectores de Sierras Chicas afectados por incendios. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (31006/L/20) de los legisladores Caffaratti, Ambrosio, Recalde, Gudiño, Paleo, De Ferrari Rueda, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba3644

I) Médicos titulados en el extranjero, sin reválida ni convalidación. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (31395/L/20) de los legisladores Cossar, Rins, Garade Panetta, Rossi y Carillo, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba3645

J) Dirección Provincial de Vialidad. Nueva traza de la Autovía de Punilla. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (31454/L/20) del Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba.3645

K) Ministerio de Industria, Comercio y Minería. Programas 859 -Fundación TIC 'S-; 860 -Seguimiento de la Exploración de Hidrocarburos-; 861-Consumidor Informado- y 870 -Registro Industrial SIIC- de la Jurisdicción 185, tercer período de 2020. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (31103/L/20) del bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de preferencia. Moción

de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba3645

L) Dirección de Policía Ambiental. Intervenciones ilegales sobre el bosque nativo de los años 2019 y 2020. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (30793/L/20) del bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba3645

M) Fundación Banco de la Provincia de Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (31385/L/20) del bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba3645

N) Cámaras de filmación en vehículos pertenecientes a la Policía de la Provincia. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (30453/L/20) del bloque de la Unión Cívica Radical, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba.3645

O) Programa Contrataciones Sustentables. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (30996/L/20) de los legisladores Cossar, Rins, Garade Panetta, Carrillo y Rossi, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba.3645

P) Ley General del Ambiente de la Provincia de Córdoba N°10208, complementaria de la Ley N° 7343. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (30627/L/20) del bloque de la Unión Cívica Radical, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba3645

Q) Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos N° 9.814. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (30628/L/20) del bloque de la Unión Cívica Radical, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba3645

R) Programa Promotores de los Servicios Públicos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (31610/L/20) del bloque de la Unión Cívica Radical, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba.3645

S) Dirección General de Catastro y Dirección General de Rentas. Procedimientos y métodos para identificar los inmuebles que han realizado mejoras o ampliaciones. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (31734/L/20) de los legisladores Rins, Cossar, Garade Panetta, Carrillo y Rossi, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba.3645

T) Lic. Nadín Argañaraz, consultor de diferentes dependencias del gobierno provincial. Contratación. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (31737/L/20) de los legisladores Cossar, Rins, Garade Panetta, Carrillo y Rossi, con

moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba.3645

U) Adquisición de equipos para bomberos. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (31768/L/20) de los legisladores Carrillo, Cossar, Rins, Garade Panetta y Rossi, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba.3645

V) Muertes de Blas Correa y Joaquín Paredes. Citación al Ministro de Seguridad para informar. Proyecto de resolución (31808/L/20) del bloque Encuentro Vecinal Córdoba. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba3645

W) Planificación del Ciclo Lectivo 2021. Citación al Ministro de Educación para informar. Proyecto de resolución (31851/L/20) de los bloques de la Unión Cívica Radical, Juntos por el Cambio, Encuentro Vecinal Córdoba y Coalición Cívica ARI. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba3645

X) Tomas ilegales de tierras en nuestra provincia. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (31586/L/20) de la legisladora Irazuzta, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba.3645

Y) Obra del acueducto Santa Fe – Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (31619/L/20) de la legisladora Irazuzta, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba.3645

Z) Hospitales Arturo Humberto Illia y Domingo Funes. Personal. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (31653/L/20) de la legisladora Irazuzta, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba3645

A1) Caminos de las Sierras. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (29919/L/20) del bloque Juntos por el Cambio, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba3645

B1) Planes de vivienda Semilla, Semilla Plus, Tengo Casa Bancor y Casa Bancor. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (30066/L/20) de los legisladores Gudiño, Paleo, Jure, Caffaratti, Ambrosio, Recalde, Arduh y Capitani, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba3645

C1) Ministerio de Educación. Encuesta sobre la disponibilidad y usos de recursos tecnológicos por parte de docentes de la provincia. Pedido de informes. Proyecto de resolución (30457/L/20) de la legisladora Echevarría, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba3645

D1) Programa 518 - "Plan Lotengo". Servicios de vigilancia. Contratación. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (30494/L/20) del

bloque Encuentro Vecinal, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba3645

E1) Partida 06060700 - Transferencias para Actividades Científicas y Académicas-, del Programa 314 Innovación Científica y Tecnológica de la Jurisdicción 130 -Ministerio de Ciencia y Tecnología. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (30502/L/20) del bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba.3645

F1) Agencia Córdoba Turismo. Plan de Gestión en la Contingencia del COVID-19. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (30503/L/20) del bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba.3645

G1) Ministerio de Desarrollo Social. Convenio N° 28, celebrado con la Fundación Graduados de la Universidad Nacional de Córdoba para el Desarrollo de la Ciencia, Cultura y Sociedad. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (30510/L/20) del bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba3645

H1) Secuestro de vehículos en la provincia en virtud del DNU 297/2020. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (30512/L/20) de los legisladores Gudiño, Recalde, Caffaratti, De Ferrari Rueda y Jure, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba3646

I1) Agencia Córdoba Cultura. Empleo para discapacitados. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (30525/L/20) del bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba3646

J1) Cortes de rutas y bloqueos en distintos municipios y comunas de la Provincia de Córdoba. Pedido de informes. Proyecto de resolución (30526/L/20) del bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba.3646

K1) Proyecto Escuela de Programación. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (30544/L/20) del bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba3646

L1) Cuenta de Inversión – Ejercicio Financiero 2019. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (30556/L/20) del bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba3646

M1) Biblioteca Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (30557/L/20) del bloque

Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba3646

N1) Ministerio de Educación. Programa 368, Mejora continua de la calidad de la educación técnico profesional (INET). Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (30558/L/20) del bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba.3646

O1) Programas Reparación y construcción de edificios dependientes de la policía de la provincia y Mantenimiento de móviles y edificios policiales. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (30575/L/20) del bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba3646

P1) Camino Altos de San Pedro. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (30602/L/20) de la legisladora Echevarría, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba3646

Q1) Camino público S-522 que une Villa Allende con San Fernando por la Reserva Hídrica y Recreativa Natural Villa Allende. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (30603/L/20) de la legisladora Echevarría, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba.....3646

R1) Documento 'Recomendaciones integrales para el cuidado de la salud ante la reapertura de centros educativos'. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (30626/L/20) de la legisladora Echevarría, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba3646

S1) FERIAR. Actividades durante la contingencia COVID-19. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (30629/L/20) del bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba3646

T1) Banco de la Provincia de Córdoba. Plataforma virtual. Deficiencias. Pedido de informes. Proyecto de resolución (30677/L/20) de las legisladoras Caffaratti, Gudiño y De Ferrari Rueda, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba3646

U1) Edificio de Tribunales de la ciudad de Deán Funes. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (30699/L/20) de los legisladores Ambrosio, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba.....3646

V1) Ministerio de Finanzas. Portal de Transparencia y Portal de Compras web. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (30849/L/20) del bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con

moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ...

W1) PAICor. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (30243/L/20) de la legisladora De Ferrari Rueda, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba3646

X1) Ministerio de Desarrollo Social. Contratación de la Empresa José Guma S.A a través del programa 208, Fondo permanente para la atención de situaciones de desastre. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (30978/L/20) del bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba3646

Y1) Agencia Córdoba Turismo. Estado epidemiológico. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (30984/L/20) del bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba.....3646

Z1) Instalaciones de granjas de cerdos a gran escala. Posible acuerdo con la República Popular China. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (30999/L/20) de la legisladora Echevarría, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba.....3646

A2) Secretaría de Ambiente y Cambio Climático. Focos de incendios activos en nuestra provincia. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (31000/L/20) de la legisladora Echevarría, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba.....3646

B2) Policía de la Provincia. Procedimiento aplicado al Personal Superior y Subalterno en actividad que es procesado y/o imputado en causa penal. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (31005/L/20) de los legisladores Caffaratti, Ambrosio, Recalde, Gudiño, Paleo, De Ferrari Rueda, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba3646

C2) Hospitales Rawson, San Roque y Vidal Abal. Guardias "en bloque". Pedido de informes. Proyecto de resolución (30814/L/20) de la legisladora Echevarría, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba.....3646

D2) Deuda de la Provincia. Pedido de informes. Proyecto de resolución (29955/L/20) del bloque Juntos por el Cambio, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba3646

E2) COE -Comité Operativo de Emergencia. Nómina de profesionales y expertos que lo asesoran. Pedido de informes. Proyecto de resolución (30467/L/20) de los legisladores De Ferrari

Rueda, Recalde, Gudiño y Jure, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba3646

F2) Subsecretaría de Cooperativas y Mutuales. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (30711/L/20) del bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba3646

G2) IPEM Nº 384 - Anexo Las Palmas, de la localidad de Las Palmas, Dpto. Pocho. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (30723/L/20) de los legisladores Paleo, Recalde y Capitani, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba.3647

H2) Escuelas provinciales. Programa Jornada Extendida, espacios físicos y funcionamiento del PAICor. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (29784/L/19) del legislador García Elorrio, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba3647

I2) APROSS. Compras realizadas en China. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (30989/L/20) del bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba3647

J2) Nuevo Hospital de Río Tercero. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (30391/L/20) del bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba.3647

K2) Árbol de navidad. Emplazamiento en el Faro del Bicentenario. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (31139/L/20) de los legisladores Gudiño, Recalde, De Ferrari Rueda y Caffaratti, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba3647

L2) Ministerio de Educación. Colegio Religioso Santo Tomás de Aquino. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (31157/L/20) de la legisladora Echevarría, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba3647

M2) Ministerio de Coordinación. Plan Conectividad Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (31160/L/20) del Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba3647

N2) Programa 471, de Integración Sanitaria. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (31166/L/20) del bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba3647

O2) Ruta Nacional Nº 7. Bloqueo en el límite con la Provincia de San Luis y

situación del conflicto. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (31168/L/20) de los legisladores Arduh, Gudiño, Recalde, Caffaratti y De Ferrari Rueda, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba3647

P2) Protocolo del COE de ingreso fronterizo a la provincia de Córdoba. Aplicación. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (31186/L/20) de los legisladores De Ferrari Rueda, Gudiño y Caffaratti, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba3647

Q2) Proyecto Escuelas Proa. Licitación pública internacional Nº 48/2017. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (31190/L/20) de los legisladores Recalde, De Ferrari Rueda, Gudiño, Caffaratti y Jure, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba3647

R2) Escuela Manuel Belgrano, de la ciudad de La Calera. Reclamo sobre el terreno donde está construido el edificio. Pedido de informes. Proyecto de resolución (31204/L/20) del bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba3647

S2) Secretaria de Ambiente, Policía Ambiental de Córdoba. Hotel "Alto San Pedro", de la localidad de Villa Giardino. Denuncia contra su propietario por desmonte de bosque nativo y movimiento de suelo en zonas roja y amarilla. Pedido de informes. Proyecto de resolución (31207/L/20) del bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba3647

T2) Programa 472-Fondo Para Atención del Estado de Alerta, Prevención y Acción Sanitaria por Enfermedades Epidémicas. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (31390/L/20) del bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba3647

U2) Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (31421/L/20) del legislador Arduh, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba3647

V2) Ministerio de Ciencia y Tecnología. Semana Tic's en Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (31427/L/20) del Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba.3647

W2) Ministerio de Salud. Diagnósticos, hisopado, detección y evolución a los enfermos de Covid-19 del interior de la provincia. Diversos aspectos.

Pedido de informes. Proyecto de resolución (31447/L/20) del Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba3647

X2) Vuelta a clases presenciales, de docentes y alumnos. Disposiciones ministeriales. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (31451/L/20) del Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba3647

Y2) APROSS. Prestación brindada a la Sra. Elisa Martínez en 2015-2019. Pedido de informes. Proyecto de resolución (31468/L/20) de la legisladora Irazuzta, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba.3647

Z2) Ministerio de Seguridad. Programas 750 Políticas de Seguridad Pública y 755 Seguridad Vial y Prevención - Cuenta Especial Ley 8560. Pedido de informes. Proyecto de resolución (31471/L/20) del Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba3647

A3) Ministerio de Desarrollo Social. Programa Fondo Permanente para la Atención de Situaciones de Desastres 208-000. Pedido de informes. Proyecto de resolución (31472/L/20) del Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba3647

B3) Programa 690 -Contención y Protección de Víctimas del Narcotráfico. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (31478/L/20) del Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba.3647

C3) Programa 451 -Actividades de Fiscalización, Evaluación y Registro- Ley 6222, en la Ejecución Presupuestaria de junio de 2020. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (31479/L/20) del Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba3647

D3) Liga Nacional de Básquet, en la modalidad "burbuja". Cancelación. Pedido de informes. Proyecto de resolución (31480/L/20) del legislador Ambrosio, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba.3647

E3) Nueva Terminal de Ómnibus de Villa General Belgrano. Construcción. Predio donado por la Provincia de Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (31494/L/20) del bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba.3648

F3) Programa 504 "Sistema Provincial de control de Cargas". Ejecución. Diversos aspectos. Pedido de informes.

Proyecto de resolución (30322/L/20) del bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba.3648

G3) Bancor. Atención al cliente durante la crisis de COVID-19. Pedido de informes. Proyecto de resolución (30378/L/20) del bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba3648

H3) Dirección General de Vivienda. Revalúo de viviendas IPV. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (31318/L/20) del bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba3648

I3) Resolución Ministerial N° 343/2020 sobre la promoción y acreditación de los y las estudiantes de los distintos niveles educativos en tiempos de emergencia sanitaria. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (31321/L/20) de los bloques Movimiento Socialista de los Trabajadores, Encuentro Vecinal Córdoba, Coalición Cívica ARI y de la Unión Cívica Radical, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba3648

J3) Ministerio de Justicia. Robo sufrido por el Sr. Vocal del Tribunal Superior de Justicia Dr. López Peña. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (31361/L/20) del bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba3648

K3) Agencia Córdoba Cultura. Nueva sede en el edificio de la ex Legislatura. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (31502/L/20) del bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba.3648

L3) Docencia de Educación Media, Especial y Superior de la provincia. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (31524/L/20) de la legisladora Echevarría, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba3648

M3) Centro Socioeducativo Cerrado Complejo Esperanza. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (31552/L/20) de la legisladora Echevarría, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba.....3648

N3) APRHI, Administración Provincial de Recursos Hídricos. Personal. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (31613/L/20) del bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba3648

O3) Agencia Córdoba Turismo. Ejecución presupuestaria. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de

resolución (31617/L/20) del bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba3648

P3) Joaquín Paredes. Muerte, a manos de la policía provincial, en la localidad de Paso Viejo, Dpto. Cruz del Eje. Citación al Sr. Ministro de Seguridad para informar. Proyecto de resolución (31620/L/20) de los legisladores Jure, Caffaratti, Ambrosio, Recalde y Gudiño, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba3648

Q3) Ministerio de Educación. Programa 359 - Escuelas de Oficiales y Suboficiales de Policía de la Provincia de Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (31656/L/20) del bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba3648

R3) Ministerio de Educación. Programa 372-000 - Finalización de Estudios para Jóvenes y Adultos (FinEs). Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (31657/L/20) del bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba3648

S3) Ministerio de Educación. Memorandum N°10/2020. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (31668/L/20) del bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba3648

T3) Call center de los Hospitales de la Provincia de Córdoba durante la Pandemia Covid 19. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (31365/L/20) del bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba3648

U3) Residentes del Área de Salud, en hospitales públicos y privados de la Provincia. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (31366/L/20) del bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba3648

V3) Consorcio caminero único para rpiado de 10 km del camino secundario S-266. Contratación directa. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (30192/L/20) del bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba3648

W3) Obra Pavimentación de Caminos Rurales - Acceso a Cooperativa Agrícola de Monte Maíz Ltda. Dpto. Unión. Contratación directa de un consorcio caminero único. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (30196/L/20) del bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con

moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba.3648

X3) Agencia Córdoba Cultura. Ejecución presupuestaria. Pedido de informes. Proyecto de resolución (31568/L/20) del bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba3648

Y3) Ministerio de Ciencia y Tecnología. Ejecución presupuestaria. Pedido de informes. Proyecto de resolución (31569/L/20) del bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba3648

Z3) Caminos de las Sierras S.A. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (30717/L/20) de la legisladora Echevarría, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba3648

A4) EPEC. Tendido eléctrico de media y baja tensión. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (31388/L/20) de la legisladora Irazuzta, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba.3648

B4) EPEC. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (31266/L/20) de la legisladora Irazuzta, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba.3648

C4) Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Población carcelaria. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (31369/L/20) del legisladora Echevarría, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba3648

D4) Ministerios de Salud y de Desarrollo Social. Programa de Lucha contra el VIH-Sida e ITS -Ley 9161 y el Plan para Grupos Vulnerables. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (31525/L/20) de la legisladora Echevarría, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba.....3649

E4) Obras: Camino que une a Río de Los Sauces con Elena y Camino de la Costa en el tramo entre Río de Los Sauces y Alpa Corral. Pedido de informes. Proyecto de resolución (31571/L/20) de la legisladora Echevarría, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba3649

F4) Protocolos de acción policial durante protestas, manifestaciones y marchas en nuestra Provincia. Pedido de informes. Proyecto de resolución (31733/L/20) de la legisladora Irazuzta, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba.3649

G4) Incendio ocurrido en Ambul. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (31766/L/20) de la legisladora Irazuzta, con moción de

preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba3649

H4) Escuelas de Córdoba. Habilitación de un día final de clase presencial para los últimos años. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (31804/L/20) del bloque Encuentro Vecinal Córdoba. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba3649

I4) Avenida de Circunvalación. Nuevos tramos. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (31805/L/20) de los legisladores Ronge, Caffaratti, Gudiño, Paleo, Ambrosio y Recalde. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba3649

J4) Ley 10181. Controles de alcoholemia realizados durante la Pandemia generada por el virus Covid-19. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (31806/L/20) de los legisladores Ronge, Caffaratti, Gudiño, Paleo, Ambrosio y Recalde. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba3649

K4) Tratamiento con plasma a pacientes Covid 19. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (31841/L/20) de los legisladores Gudiño y Jure. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba3649

L4) Hospitales modulares en zonas turísticas. Personal y presupuesto. Pedido de informes. Proyecto de resolución (31842/L/20) de los legisladores Ronge, Caffaratti, Gudiño, Recalde, Ambrosio y Paleo. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba3649

M4) Dirección General de Rentas. Cierre de oficinas físicas en diferentes ciudades y pueblos del interior provincial. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (31843/L/20) de los legisladores Ronge, Caffaratti, Gudiño, Recalde, Ambrosio y Paleo. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba3649

5.- Consenso Fiscal 2020, suscripto entre el Estado Nacional y las Provincias. Aprobación. Proyecto de ley (31988/E/20) del Poder Ejecutivo, con despacho de comisión. Tratamiento sobre tablas. Se considera y aprueba en general y en particular3666

6.- A) Ley de Seguridad Pública N°9235. Modificación. Proyecto de ley (31911/E/20) del Poder Ejecutivo, con despacho de comisión. Tratamiento sobre tablas. Se considera y aprueba en general y en particular3688

B) Sistema de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad de la Provincia de Córdoba. Creación. Proyecto de ley (31912/E/20) del Poder Ejecutivo, con despacho de comisión. Tratamiento sobre tablas. Se considera y aprueba en general y en particular3688

7.- A) Obras: "Ruta alternativa a Ruta Nacional N° 38 – Tramo 1: Variante Costa

Azul – La Cumbre en la sección comprendida entre Variante Costa Azul (Pr. 0+000) y el Acceso a la localidad de Molinari (Pr. 21+500)". Inmuebles necesarios para la realización. Declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación. Proyecto de ley (31990/E/20) del Poder Ejecutivo, con despacho de comisión. Tratamiento sobre tablas. Se considera y aprueba en general y en particular3797

B) Obras: "Variante Ruta Provincial N° 5 – Tramo: Rotonda Ruta Provincial N° 5 (Km. 25,5) y el Acceso a la localidad de Villa Los Aromos (Km. 45,2)". Inmuebles necesarios para la realización. Declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación. Proyecto de ley (31991/E/20) del Poder Ejecutivo, general y en particular3797

8.- A) Hospital San Antonio de La Carlota. Personal. Desempeño ante la pandemia generada por el virus Covid-19. Beneplácito. Proyecto de declaración (31997/L/20) de la legisladora Ronge. Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se considera y aprueba con modificaciones3825

B) Bomberos Voluntarios de la ciudad de La Carlota. Desempeño en la contención de los focos de incendios rurales en La Carlota y otros puntos de la Provincia de Córdoba. Beneplácito. Proyecto de declaración (31998/L/20) de la legisladora Ronge. Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se considera y aprueba con modificaciones3825

C) Ex múltiple Campeón Argentino y varias veces representante olímpico y Maestro Internacional, Prof. Guillermo Gustavo Soppe, actual Presidente de la Federación de Ajedrez de la Provincia de Córdoba, nominado para los Premios Cóndor 2020. 50 Años de trayectoria en el Ajedrez. Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración (32004/L/20) del legislador Chamorro. Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se considera y aprueba con modificaciones3825

D) Cantautora Ana Robles, radicada en Alta Gracia. Galardón obtenido con su tema "Cielo y Serenata", en el "Concurso Iberoamericano 100 Años del Nacimiento de Chabuca Granda", otorgado por la República del Perú. Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración (32005/L/20) de la legisladora De la Sota. Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se considera y aprueba con modificaciones3825

E) Actor Daniel Pedro Aráoz. Beneplácito y reconocimiento. Proyecto de declaración (32007/L/20) de los legisladores Hak, Fernández, Pereyra, Serrano y Limia. Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se considera y aprueba con modificaciones3825

F) Fiesta de la Familia, en La Francia. 25° Aniversario. Adhesión y beneplácito.

Proyecto de declaración (32008/L/20) de los legisladores Piasco y Giraldi. Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se considera y aprueba con modificaciones3826

del artículo 157 del Reglamento interno. Se considera y aprueba.....3826

G) Día Internacional de la Educación. Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración (32011/L/20) de la legisladora García. Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se considera y aprueba3826

H) Bienal de Música Córdoba, organizada por el Sindicato de Músicos de la Provincia de Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de declaración (32016/L/20) de los legisladores García y Pihen. Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se considera y aprueba con modificaciones3826

I) Stéfano Tiezzi. Designación como nuevo portador de la Bandera Mayor de la Universidad Nacional de Villa María (UNVM). Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración (32018/L/20) de la legisladora Guirardelli. Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se considera y aprueba3826

J) Club Recreativo Confraternidad, de la localidad de Sampacho. 89º Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración (32019/L/20) de la legisladora Guirardelli. Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se considera y aprueba3826

K) Sr. Walter Nicolás Martínez de Bell Ville. Elección como uno de los "Diez Jóvenes Sobresalientes de la Provincia de Córdoba", por parte de la Bolsa de Comercio de Córdoba. Beneplácito. Proyecto de declaración (32020/L/20) del legislador Iturria. Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se considera y aprueba3826

L) Día Internacional del Migrante. Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración (32021/L/20) del legislador Lencinas. Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se considera y aprueba con modificaciones.....3826

M) Natalicio de Jesucristo. Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración (32022/L/20) del legislador Viola. Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se considera y aprueba3826

N) Trabajadores rurales. Reconocimiento otorgado por el Gobierno Nacional y lucha gremial de la UATRE. Beneplácito. Proyecto de declaración (32023/L/20) del legislador Castro. Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se considera y aprueba3826

O) Documental "La Pandemia en los Hospitales Universitarios". Reconocimiento y felicitación. Proyecto de declaración (32024/L/20) de los legisladores Piasco y Abraham. Tratamiento conjunto en virtud

– En la ciudad de Córdoba, a 23 días del mes de diciembre de 2020, siendo la hora 14 y 59:

-1-

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente (Calvo).- Contando con 46 señores legisladores, entre los presentes y los que se conectaron a la plataforma Zoom, se ha alcanzado el quórum suficiente para dar inicio a la 32º sesión ordinaria y 32º sesión virtual del 142º período ordinario de sesiones.

Invito a la señora legisladora Julieta Rinaldi a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.

– Puestos de pie los legisladores y autoridades presentes, la señora legisladora Rinaldi procede a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2-

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

Sr. Presidente (Calvo).- Vamos a poner en consideración la versión taquigráfica de la sesión ordinaria anterior.

Si no hay objeciones, la daremos por aprobada.

– Asentimiento.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.

-3-

ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente (Calvo).- Recuerdo a los señores y las señoras legisladoras que en este tipo de sesiones virtuales se va a considerar que el voto de los presidentes o voceros de cada bloque equivale al voto de todos los legisladores de su bancada.

Asimismo, se recuerda que los proyectos a discutir serán tratados con o sin despacho, sin necesidad de constituir la cámara en estado de comisión.

Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados de esta sesión, que han sido remitidos por correo electrónico a todos los legisladores y las legisladoras de esta Cámara. Asimismo, el legislador o la legisladora que así lo desee puede solicitar la inclusión de coautores o el giro a otras comisiones de los respectivos proyectos.

-4-

A) CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

B) PERSONAL DE SALUD. TESTEOS MASIVOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

C) RESERVA HÍDRICA, NATURAL Y RECREATIVA DE VILLA ALLENDE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

D) MINISTERIO DE SALUD. CONSECUENCIAS SANITARIAS POR EL USO DE AGROQUÍMICOS Y POR LOS INCENDIOS EN NUESTRA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

E) ENFERMERO PROFESIONAL SR. VÍCTOR EDUARDO CASTRO. TRASLADO AL HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

F) OBRA DE PROVISIÓN Y ARMADO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL ÁRBOL DE NAVIDAD DEL FARO DEL BICENTENARIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

G) OPERATIVO DE DESALOJO DE LA OCUPACIÓN DE TIERRAS EN BARRIO ESTACIÓN FERREYRA DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

Moción de vuelta a comisión

H) SECRETARÍA DE AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO. SECTORES DE SIERRAS CHICAS AFECTADOS POR INCENDIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

I) MÉDICOS TITULADOS EN EL EXTRANJERO, SIN REVÁLIDA NI CONVALIDACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

J) DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD. NUEVA TRAZA DE LA AUTOVÍA DE PUNILLA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

K) MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA. PROGRAMAS 859 -FUNDACIÓN TIC´S-; 860 -SEGUIMIENTO DE LA EXPLORACIÓN DE HIDROCARBUROS-; 861-CONSUMIDOR INFORMADO- Y 870 -REGISTRO INDUSTRIAL SIIC- DE LA JURISDICCIÓN 185, TERCER PERÍODO DE 2020. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

L) DIRECCIÓN DE POLICÍA AMBIENTAL. INTERVENCIONES ILEGALES SOBRE EL BOSQUE NATIVO DE LOS AÑOS 2019 Y 2020. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

M) FUNDACIÓN BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

N) CÁMARAS DE FILMACIÓN EN VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA POLICÍA DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

O) PROGRAMA CONTRATACIONES SUSTENTABLES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

P) LEY GENERAL DEL AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA N°10208, COMPLEMENTARIA DE LA LEY N° 7343. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

Q) LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOSQUES NATIVOS N° 9.814. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

R) PROGRAMA PROMOTORES DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. PEDIDO DE INFORMES.

S) DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO Y DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. PROCEDIMIENTOS Y MÉTODOS PARA IDENTIFICAR LOS INMUEBLES QUE HAN REALIZADO MEJORAS O AMPLIACIONES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

T) LIC. NADÍN ARGÑARÁZ, CONSULTOR DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO PROVINCIAL. CONTRATACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

U) ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA BOMBEROS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

V) MUERTES DE BLAS CORREA Y JOAQUÍN PAREDES. CITACIÓN AL MINISTRO DE SEGURIDAD PARA INFORMAR.

W) PLANIFICACIÓN DEL CICLO LECTIVO 2021. CITACIÓN AL MINISTRO DE EDUCACIÓN PARA INFORMAR.

X) TOMAS ILEGALES DE TIERRAS EN NUESTRA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

Y) OBRA DEL ACUEDUCTO SANTA FE – CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

Z) HOSPITALES ARTURO HUMBERTO ILLIA Y DOMINGO FUNES. PERSONAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

A1) CAMINOS DE LAS SIERRAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

B1) PLANES DE VIVIENDA SEMILLA, SEMILLA PLUS, TENGO CASA BANCOR Y CASA BANCOR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

C1) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. ENCUESTA SOBRE LA DISPONIBILIDAD Y USOS DE RECURSOS TECNOLÓGICOS POR PARTE DE DOCENTES DE LA PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.

D1) PROGRAMA 518 - "PLAN LOTENGO". SERVICIOS DE VIGILANCIA. CONTRATACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

E1) PARTIDA 06060700 -TRANSFERENCIAS PARA ACTIVIDADES CIENTÍFICAS Y ACADÉMICAS-, DEL PROGRAMA 314 INNOVACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DE LA JURISDICCIÓN 130 -MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

F1) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO. PLAN DE GESTIÓN EN LA CONTINGENCIA DEL COVID-19. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

G1) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. CONVENIO N° 28, CELEBRADO CON LA FUNDACIÓN GRADUADOS DE LA UNIVERSIDAD

NACIONAL DE CÓRDOBA PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA, CULTURA Y SOCIEDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

H1) SECUESTRO DE VEHÍCULOS EN LA PROVINCIA EN VIRTUD DEL DNU 297/2020. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

I1) AGENCIA CÓRDOBA CULTURA. EMPLEO PARA DISCAPACITADOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

J1) CORTES DE RUTAS Y BLOQUEOS EN DISTINTOS MUNICIPIOS Y COMUNAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. PEDIDO DE INFORMES.

K1) PROYECTO ESCUELA DE PROGRAMACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

L1) CUENTA DE INVERSIÓN - EJERCICIO FINANCIERO 2019. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

M1) BIBLIOTECA CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

N1) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. PROGRAMA 368, MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL (INET). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

O1) PROGRAMAS REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEPENDIENTES DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA Y MANTENIMIENTO DE MÓVILES Y EDIFICIOS POLICIALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

P1) CAMINO ALTOS DE SAN PEDRO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

Q1) CAMINO PÚBLICO S-522 QUE UNE VILLA ALLENDE CON SAN FERNANDO POR LA RESERVA HÍDRICA Y RECREATIVA NATURAL VILLA ALLENDE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

R1) DOCUMENTO 'RECOMENDACIONES INTEGRALES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD ANTE LA REAPERTURA DE CENTROS EDUCATIVOS'. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

S1) FERIAR. ACTIVIDADES DURANTE LA CONTINGENCIA COVID-19. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

T1) BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. PLATAFORMA VIRTUAL. DEFICIENCIAS. PEDIDO DE INFORMES.

U1) EDIFICIO DE TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE DEÁN FUNES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

V1) MINISTERIO DE FINANZAS. PORTAL DE TRANSPARENCIA Y PORTAL DE COMPRAS WEB. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

W1) PAICOR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

X1) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA JOSÉ GUMA S.A A TRAVÉS DEL PROGRAMA 208, FONDO PERMANENTE PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES DE DESASTRE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

Y1) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO. ESTADO EPIDEMIOLÓGICO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

Z1) INSTALACIONES DE GRANJAS DE CERDOS A GRAN ESCALA. POSIBLE ACUERDO CON LA REPÚBLICA POPULAR CHINA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

A2) SECRETARÍA DE AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO. FOCOS DE INCENDIOS ACTIVOS EN NUESTRA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

B2) POLICÍA DE LA PROVINCIA. PROCEDIMIENTO APLICADO AL PERSONAL SUPERIOR Y SUBALTERNO EN ACTIVIDAD QUE ES PROCESADO Y/O IMPUTADO EN CAUSA PENAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

C2) HOSPITALES RAWSON, SAN ROQUE Y VIDAL ABAL. GUARDIAS "EN BLOQUE". PEDIDO DE INFORMES.

D2) DEUDA DE LA PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.

E2) COE -COMITÉ OPERATIVO DE EMERGENCIA. NÓMINA DE PROFESIONALES Y EXPERTOS QUE LO ASESORAN. PEDIDO DE INFORMES.

F2) SUBSECRETARÍA DE COOPERATIVAS Y MUTUALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

G2) IPEN N° 384 - ANEXO LAS PALMAS, DE LA LOCALIDAD DE LAS PLAMAS, DPTO. POCHO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

H2) ESCUELAS PROVINCIALES. PROGRAMA JORNADA EXTENDIDA, ESPACIOS FÍSICOS Y FUNCIONAMIENTO DEL PAICOR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

I2) APROSS. COMPRAS REALIZADAS EN CHINA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

J2) NUEVO HOSPITAL DE RÍO TERCERO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

K2) ÁRBOL DE NAVIDAD. EMPLAZAMIENTO EN EL FARO DEL BICENTENARIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

L2) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. COLEGIO RELIGIOSO SANTO TOMÁS DE AQUINO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

M2) MINISTERIO DE COORDINACIÓN. PLAN CONECTIVIDAD CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

N2) PROGRAMA 471, DE INTEGRACIÓN SANITARIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

O2) RUTA NACIONAL N° 7. BLOQUEO EN EL LÍMITE CON LA PROVINCIA DE SAN LUIS Y SITUACIÓN DEL CONFLICTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

P2) PROTOCOLO DEL COE DE INGRESO FRONTERIZO A LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. APLICACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

Q2) PROYECTO ESCUELAS PROA. LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° 48/2017. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

R2) ESCUELA MANUEL BELGRANO, DE LA CIUDAD DE LA CALERA. RECLAMO SOBRE EL TERRENO DONDE ESTÁ CONSTRUIDO EL EDIFICIO. PEDIDO DE INFORMES.

S2) SECRETARIA DE AMBIENTE, POLICÍA AMBIENTAL DE CÓRDOBA. HOTEL "ALTO SAN PEDRO", DE LA LOCALIDAD DE VILLA GIARDINO. DENUNCIA CONTRA SU PROPIETARIO POR DESMONTE DE BOSQUE NATIVO Y MOVIMIENTO DE SUELO EN ZONAS ROJA Y AMARILLA. PEDIDO DE INFORMES.

T2) PROGRAMA 472-FONDO PARA ATENCIÓN DEL ESTADO DE ALERTA, PREVENCIÓN Y ACCIÓN SANITARIA POR ENFERMEDADES EPIDÉMICAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

U2) SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RIESGO CLIMÁTICO, CATÁSTROFES Y PROTECCIÓN CIVIL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

V2) MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. SEMANA TIC'S EN CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

W2) MINISTERIO DE SALUD. DIAGNÓSTICOS, HISOPADO, DETECCIÓN Y EVOLUCIÓN A LOS ENFERMOS DE COVID-19 DEL INTERIOR DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

X2) VUELTA A CLASES PRESENCIALES, DE DOCENTES Y ALUMNOS. DISPOSICIONES MINISTERIALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

Y2) APROSS. PRESTACIÓN BRINDADA A LA SRA. ELISA MARTÍNEZ EN 2015-2019. PEDIDO DE INFORMES.

Z2) MINISTERIO DE SEGURIDAD. PROGRAMAS 750 POLÍTICAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 755 SEGURIDAD VIAL Y PREVENCIÓN - CUENTA ESPECIAL LEY 8560. PEDIDO DE INFORMES.

A3) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. PROGRAMA FONDO PERMANENTE PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES DE DESASTRES 208-000. PEDIDO DE INFORMES.

B3) PROGRAMA 690 -CONTENCIÓN Y PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS DEL NARCOTRÁFICO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

C3) PROGRAMA 451 -ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN, EVALUACIÓN Y REGISTRO- LEY 6222, EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE JUNIO DE 2020. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

D3) LIGA NACIONAL DE BÁSQUET, EN LA MODALIDAD "BURBUJA". CANCELACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.

E3) NUEVA TERMINAL DE ÓMNIBUS DE VILLA GENERAL BELGRANO. CONSTRUCCIÓN. PREDIO DONADO POR LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

F3) PROGRAMA 504 "SISTEMA PROVINCIAL DE CONTROL DE CARGAS". EJECUCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

G3) BANCOR. ATENCIÓN AL CLIENTE DURANTE LA CRISIS DE COVID-19. PEDIDO DE INFORMES.

H3) DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA. REVALÚO DE VIVIENDAS IPV. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

I3) RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 343/2020 SOBRE LA PROMOCIÓN Y ACREDITACIÓN DE LOS Y LAS ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS EN TIEMPOS DE EMERGENCIA SANITARIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

J3) MINISTERIO DE JUSTICIA. ROBO SUFRIDO POR EL SR. VOCAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DR. LÓPEZ PEÑA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

K3) AGENCIA CÓRDOBA CULTURA. NUEVA SEDE EN EL EDIFICIO DE LA EX LEGISLATURA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

L3) DOCENCIA DE EDUCACIÓN MEDIA, ESPECIAL Y SUPERIOR DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

M3) CENTRO SOCIOEDUCATIVO CERRADO COMPLEJO ESPERANZA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

N3) APRHI, ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE RECURSOS HÍDRICOS. PERSONAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

O3) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

P3) JOAQUÍN PAREDES. MUERTE, A MANOS DE LA POLICÍA PROVINCIAL, EN LA LOCALIDAD DE PASO VIEJO, DPTO. CRUZ DEL EJE. CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE SEGURIDAD PARA INFORMAR.

Q3) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. PROGRAMA 359 - ESCUELAS DE OFICIALES Y SUBOFICIALES DE POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

R3) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. PROGRAMA 372-000 - FINALIZACIÓN DE ESTUDIOS PARA JÓVENES Y ADULTOS (FINES). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

S3) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. MEMORÁNDUM N°10/2020. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

T3) CALL CENTER DE LOS HOSPITALES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA DURANTE LA PANDEMIA COVID 19. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

U3) RESIDENTES DEL ÁREA DE SALUD, EN HOSPITALES PÚBLICOS Y PRIVADOS DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

V3) CONSORCIO CAMINERO ÚNICO PARA RIPIADO DE 10 KM DEL CAMINO SECUNDARIO S-266. CONTRATACIÓN DIRECTA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

W3) OBRA PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS RURALES - ACCESO A COOPERATIVA AGRÍCOLA DE MONTE MAÍZ LTDA. DPTO. UNIÓN. CONTRATACIÓN DIRECTA DE UN CONSORCIO CAMINERO ÚNICO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

X3) AGENCIA CÓRDOBA CULTURA. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.

Y3) MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.

Z3) CAMINOS DE LAS SIERRAS S.A. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

A4) EPEC. TENDIDO ELÉCTRICO DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

B4) EPEC. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

C4) MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. POBLACIÓN CARCELARIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

D4) MINISTERIOS DE SALUD Y DE DESARROLLO SOCIAL. PROGRAMA DE LUCHA CONTRA EL VIH-SIDA E ITS -LEY 9161 Y EL PLAN PARA GRUPOS VULNERABLES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

E4) OBRAS: CAMINO QUE UNE A RÍO DE LOS SAUCES CON ELENA Y CAMINO DE LA COSTA EN EL TRAMO ENTRE RÍO DE LOS SAUCES Y ALPA CORRAL. PEDIDO DE INFORMES.

F4) PROTOCOLOS DE ACCIÓN POLICIAL DURANTE PROTESTAS, MANIFESTACIONES Y MARCHAS EN NUESTRA PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.

G4) INCENDIO OCURRIDO EN AMBUL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

H4) ESCUELAS DE CÓRDOBA. HABILITACIÓN DE UN DÍA FINAL DE CLASE PRESENCIAL PARA LOS ÚLTIMOS AÑOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

I4) AVENIDA DE CIRCUNVALACIÓN. NUEVOS TRAMOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

J4) LEY 10181. CONTROLES DE ALCOHOLEMIA REALIZADOS DURANTE LA PANDEMIA GENERADA POR EL VIRUS COVID-19. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

K4) TRATAMIENTO CON PLASMA A PACIENTES COVID 19. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

L4) HOSPITALES MODULARES EN ZONAS TURÍSTICAS. PERSONAL Y PRESUPUESTO. PEDIDO DE INFORMES.

M4) DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. CIERRE DE OFICINAS FÍSICAS EN DIFERENTES CIUDADES Y PUEBLOS DEL INTERIOR PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

Moción de vuelta a comisión, con preferencia

Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento al Orden del Día.

Tiene la palabra el legislador Francisco Fortuna.

Sr. Fortuna.- Gracias, señor presidente.

Conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, voy a mocionar lo siguiente: en primer lugar, volver a comisión los proyectos que figuran en los puntos 3, 31, 32, 46, 83, 88 y 113 del Orden del Día; volver a comisión, con una preferencia de 7 días, para la 33ª sesión ordinaria, los proyectos incluidos en los puntos 30, 68, 80, 96 al 103, 105, 106, 108, 112 y 117 del Orden del día; volver a comisión, con una preferencia de 14 días, para la 2ª sesión ordinaria del período legislativo 2021, los proyectos que figuran en los puntos 93 al 95 del Orden del día; volver a comisión, con una preferencia de 21 días, para la 3ª sesión ordinaria del período legislativo 2021, los proyectos que obran en los puntos 1, 2, 4 al 29, 33 al 45, 47 al 67, 69 al 79, 81, 82, 84 al 87, 89 al 92, 104, 107, 109 al 111 y 114 al 116 del Orden del Día.

Muchas gracias, señor presidente.

-Ocupa la Presidencia el Presidente Provisorio, legislador Oscar González.

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción formulada por el legislador Fortuna de volver a comisión los proyectos que figuran en los puntos 3, 31, 32, 46, 83, 88 y 113 del Orden del Día; volver a comisión, con preferencia de 7 días, para la 33ª sesión ordinaria, los proyectos incluidos en los puntos 30, 68, 80, 96 al 103, 105, 106, 108, 112 y 117 del Orden del Día; volver a comisión, con preferencia para la 2ª sesión ordinaria del período legislativo 2021, los proyectos que figuran en los puntos 93, 94 y 95 del Orden del Día, y, finalmente, volver a comisión, con preferencia para la 3ª sesión ordinaria del período legislativo 2021, a los proyectos obrantes en los puntos 1, 2, 4 al 29, 33 al 45, 47 al 67, 69 al 79, 81, 82, 84 al 87, 89 al 92, 104, 107, 109 al 111, 114 al 116 del Orden del Día.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.

PUNTO 1

PUNTO 3

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30096/L/20

Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre jubilaciones anticipadas para personal del Estado provincial y municipal, posible desfinanciamiento y otras cuestiones relacionadas con la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba ante la posible implementación de pasividades anticipadas.

Comisión: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.

PUNTO 2 PUNTO 31

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30802/L/20

Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitado al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos puntos relacionados con la suspensión de la realización de tests masivos a personal de salud en violación a lo determinado por la "Ley Silvio".

Comisión: de Salud Humana.

PUNTO 3 PUNTO 32

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30804/L/20

Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitado al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos relacionados a la situación de la Reserva Hídrica, Natural y Recreativa de Villa Allende.

Comisión: de Ambiente.

PUNTO 4 PUNTO 46

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31180/L/20

Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud, todo lo relativo a las consecuencias sanitarias en la población a raíz del dramático cambio de las condiciones ambientales en nuestra provincia.

Comisión: de Salud Humana.

PUNTO 5 PUNTO 83

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30642/L/20

Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Sr. Ministro de Salud, Dr. Diego Cardozo, sobre los algunos puntos relacionados con el traslado del enfermero profesional Sr. Víctor Eduardo Castro del Hospital de Niños de la Santísima Trinidad.

Comisión: de Salud Humana.

PUNTO 6 PUNTO 88

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31199/L/20

Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos puntos relacionados a la licitación para llevar adelante la obra de provisión y armado de instalación eléctrica del árbol de Navidad del Faro del Bicentenario.

Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación

PUNTO 7 PUNTO 113

Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195

31822/L/20

Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio Fiscal y el Ministerio de Seguridad, sobre el operativo de desalojo sin orden judicial de la ocupación de tierras en barrio Estación Ferreyra de la ciudad de Córdoba.

Comisión: de Legislación General.

PUNTO 8 PUNTO 30

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31006/L/20

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Bloque de la Unión Cívica Radical, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, y atento a las obligaciones previstas en la Ley provincial N° 8751 sobre Manejo del Fuego y demás normas concordantes, sobre diversos aspectos referidos a los sectores de Sierras Chicas afectados por incendios.

Comisión: de Ambiente.

PUNTO 9 PUNTO 68

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31395/L/20

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cossar, Rins, Garade Panetta, Rossi y Carillo, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) la situación de médicos extranjeros que optaron por Córdoba como sitio de residencia y que no cuentan con matrícula profesional pertinente.

Comisión: de Salud Humana.

PUNTO 10 PUNTO 80

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31454/L/20

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Dirección Provincial de Vialidad, sobre la nueva traza de la Autovía de Punilla.

Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.

PUNTO 11 PUNTO 96

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31103/L/20

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Industria, Comercio y Minería, respecto de la no ejecución de los Programas 859 -Fundación TIC'S-; 860 -Seguimiento de la Exploración de Hidrocarburos-; 861 - Consumidor Informado- y 870 -Registro Industrial SIIC- de la Jurisdicción 185, tercer período de 2020.

Comisión: de Industria y Minería.

PUNTO 12 PUNTO 97

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30793/L/20

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Dirección de Policía Ambiental, respecto de las intervenciones ilegales sobre el bosque nativo de los años 2019 y 2020.

Comisión: de Ambiente.

PUNTO 13 PUNTO 98

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31385/L/20

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Finanzas y la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas, sobre diferentes aspectos relacionados a la Fundación Banco de la Provincia de Córdoba.

Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación

PUNTO 14 PUNTO 99

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30453/L/20

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos puntos relacionados a la utilización de cámaras de filmación en la vía pública y su vinculación con la Policía de la Provincia.

Comisión: de Legislación General.

PUNTO 15 PUNTO 100

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30996/L/20

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cossar, Rins, Garade Panetta, Carrillo y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos puntos relacionados al Programa Contrataciones Sustentables desde el 10 de diciembre de 2019 hasta el 31 de julio de 2020.

Comisión: de Promoción y Desarrollo de Economías Regionales y Pymes.

PUNTO 16 PUNTO 101

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30627/L/20

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos aspectos referidos a la Ley General del Ambiente de la Provincia de Córdoba N° 10208, complementaria de la Ley N° 7343.

Comisión: de Ambiente.

PUNTO 17 PUNTO 102

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30628/L/20

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos aspectos referidos a la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos N° 9814.

Comisión: de Ambiente.

PUNTO 18 PUNTO 103

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31610/L/20

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), sobre distintos puntos vinculados al Programa Promotores de los Servicios Públicos, creado mediante Decreto 687 del 29 de septiembre de 2020 del Gobernador de la Provincia Cr. Juan Schiaretti.

Comisión: de Servicios Públicos.

PUNTO 19 PUNTO 105

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31734/L/20

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rins, Cossar, Garade Panetta, Carrillo y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art 102 CP), a través de la Dirección General de Catastro y a la Dirección General de Rentas, sobre los procedimientos y métodos que se utilizan para identificar los inmuebles que han realizado mejoras o ampliaciones.

Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.

PUNTO 20 PUNTO 106

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31737/L/20

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cossar, Rins, Garade Panetta, Carrillo y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art 102 CP), sobre sobre los tipos, modalidades de contratación, plazos y honorarios profesionales percibidos o a percibir por el Lic. Nadín Argañaraz como consultor de diferentes dependencias del gobierno provincial.

Comisión: de Legislación General.

PUNTO 21 PUNTO 108

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31768/L/20

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Carrillo, Cossar, Rins, Garade Panetta y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), respecto al anuncio efectuado en la semana de 20 de octubre de 2020 por el Sr. Gobernador sobre la adquisición de equipos para bomberos por valor de 143 millones de pesos, y de otras compras anteriores a dicho anuncio.

Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación

PUNTO 22 PUNTO 112

Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195

31808/L/20

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, citando al Sr. Ministro de Seguridad (Art. 101 CP) a los fines de brindar información detallada respecto de las muertes de Blas Correa y Joaquín Paredes; y la circulación de videos supuestamente realizados en la provincia de Córdoba en los que se pueden ver claramente las comisión de delitos.

Comisión: de Legislación General.

PUNTO 23 PUNTO 117

Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195

31851/L/20

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Bloques de la Unión Cívica Radical, Juntos por el Cambio, Encuentro Vecinal Córdoba y Coalición Cívica ARI, citando al Ministro de Educación, Lic. Walter Grahovac (Art. 101 CP), con el objeto de conocer la planificación del Ciclo Lectivo 2021 y cómo se garantizará la educación de los cordobeses en todos los niveles.

Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.

PUNTO 24 PUNTO 93

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31586/L/20

Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos puntos relacionados a las medidas concernientes a evitar tomas ilegales de tierras en nuestra provincia.

Comisión: de Legislación General.

PUNTO 25 PUNTO 94

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31619/L/20

Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de los Ministerios de Obras Públicas y Servicios Públicos de la Provincia, sobre algunos puntos relacionados a la obra del acueducto Santa Fe – Córdoba.

Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.

PUNTO 26 PUNTO 95

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31653/L/20

Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), sobre la situación contractual del personal de salud en distintas instituciones de nuestra provincia.

Comisión: de Salud Humana.

PUNTO 27 PUNTO 1

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

29919/L/20

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Juntos por el Cambio, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el pedido de incremento en la tarifa de peaje por parte de Caminos de las Sierras, obras realizadas, presupuestadas y porcentaje de obras que se hacen con la recaudación por peaje.

Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.

PUNTO 28 PUNTO 2

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30066/L/20

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Paleo, Jure, Caffaratti, Ambrosio, Recalde, Arduh y Capitani, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los planes de vivienda Semilla, Semilla Plus, Tengo Casa Bancor y Casa Bancor, viviendas entregadas, fondos, crédito con la Agencia Francesa de Desarrollo y controles.

Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.

PUNTO 29 PUNTO 4

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30457/L/20

Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Educación, respecto a la encuesta implementada por dicha cartera sobre la disponibilidad y usos de recursos tecnológicos por parte de docentes de la provincia durante el aislamiento social preventivo y obligatorio.

Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.

PUNTO 30 PUNTO 5

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30494/L/20

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), sobre diferentes aspectos relacionados a la contratación de servicios de vigilancia para el Programa 518 - "Plan Lotengo".

Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.

PUNTO 31 PUNTO 6

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30502/L/20

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre de la falta de ejecución de la Partida 06060700 - Transferencias para Actividades Científicas y Académicas-, del Programa 314 - Innovación Científica y Tecnológica de la Jurisdicción 130 -Ministerio de Ciencia y Tecnología-.

Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.

PUNTO 32 PUNTO 7

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30503/L/20

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Turismo SEM, respecto a cuestiones relacionadas con el Plan de Gestión en la contingencia del COVID-19 para su Agencia.

Comisión: de Turismo y su relación con el Desarrollo Regional.

PUNTO 33 PUNTO 8

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30510/L/20

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Desarrollo Social, sobre algunos puntos vinculados al Convenio N° 28 celebrado con la Fundación Graduados de la Universidad Nacional de Córdoba para el Desarrollo de la Ciencia, Cultura y Sociedad.

Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social.

PUNTO 34 PUNTO 9

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30512/L/20

Proyecto de Resolución: Iniciado por Legisladores Gudiño, Recalde, Caffaratti, De Ferrari Rueda y Jure, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos relacionados al secuestro de vehículos en la provincia en virtud del DNU 297/2020.

Comisión: de Legislación General.

PUNTO 35 PUNTO 10

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30525/L/20

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Cultura, acerca del cumplimiento del cupo de empleo para discapacitados.

Comisiones: de Derechos Humanos y Desarrollo Social, y de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.

PUNTO 36 PUNTO 11

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30526/L/20

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Seguridad, sobre los cortes de rutas y bloqueos en distintos municipios y comunas de la Provincia.

Comisión: de Legislación General.

PUNTO 37 PUNTO 12

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30544/L/20

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Joven, sobre diversos aspectos del proyecto Escuela de Programación.

Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.

PUNTO 38 PUNTO 13

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30556/L/20

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento y el Ministerio de Obras Públicas, sobre algunos puntos referidos a la Cuenta de Inversión - Ejercicio Financiero 2019.

Comisiones: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones; y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.

PUNTO 39 PUNTO 14

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30557/L/20

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Cultura, acerca de la modalidad de trabajo en la Biblioteca Córdoba desde la vigencia del DNU 297/20.

Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.

PUNTO 40 PUNTO 15

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30558/L/20

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Educación, sobre distintos puntos del Programa 368 -Mejora continua de la calidad de la educación técnico profesional (INET)-.

Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.

PUNTO 41 PUNTO 16

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30575/L/20

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la sub-ejecución de los programas Reparación y construcción de edificios dependientes de la policía de la provincia y Mantenimiento de móviles y edificios policiales.

Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.

PUNTO 42 PUNTO 17

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30602/L/20

Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Dirección de Catastro dependiente del Ministerio de Finanzas y de la Dirección de Patrimonio Cultural, sobre distintos puntos referidos al tramo del Camino Altos de San Pedro.

Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.

PUNTO 43 PUNTO 18

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30603/L/20

Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Industria, Comercio y Minería, la Secretaría de Ambiente y la Dirección Provincial de Vialidad, sobre distintos aspectos referidos estado del camino público S-522 que une Villa Allende con San Fernando por la Reserva Hídrica y Recreativa Natural Villa Allende.

Comisión: de Ambiente.

PUNTO 44 PUNTO 19

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30626/L/20

Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Educación, sobre distintos aspectos referidos al documento titulado 'Recomendaciones integrales para el cuidado de la salud ante la reapertura de centros educativos'.

Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.

PUNTO 45 PUNTO 20

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30629/L/20

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Turismo SEM, acerca de las actividades de FERIAR durante la contingencia Covid-19.

Comisión: de Turismo y su relación con el Desarrollo Regional.

PUNTO 46 PUNTO 21

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30677/L/20

Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Caffaratti, Gudiño y De Ferrari Rueda, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Presidencia del Banco de la Provincia de Córdoba, sobre fallas en el funcionamiento de la plataforma virtual de dicha institución.

Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación

PUNTO 47 PUNTO 22

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30699/L/20

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ambrosio, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos vinculados a la construcción, refacción y/o adecuación del Edificio de Tribunales de la ciudad de Deán Funes.

Comisiones: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y Legislación General.

PUNTO 48 PUNTO 23

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30849/L/20

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Finanzas, acerca de carga de información y/o detalles en Portal de Transparencia y Portal de Compras web.

Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación

PUNTO 49 PUNTO 24

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30243/L/20

Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora De Ferrari Rueda, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos aspectos vinculados a las condiciones de funcionamiento del PAICor.

Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social.

PUNTO 50 PUNTO 25

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30978/L/20

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Desarrollo Social, sobre

algunos puntos referidos a la contratación de la empresa José Guma S.A a través del Programa 208 -Fondo permanente para la atención de situaciones de desastre-.

Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social.

PUNTO 51 PUNTO 26

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30984/L/20

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Turismo SEM, acerca del estado epidemiológico de su repartición.

Comisión: de Turismo y su relación con el Desarrollo Regional.

PUNTO 52 PUNTO 27

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30999/L/20

Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Echavarría, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería, sobre diversos aspectos vinculados a la posibilidad de un acuerdo con la República Popular China para invertir en instalaciones de granjas de cerdos a gran escala.

Comisión: de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.

PUNTO 53 PUNTO 28

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31000/L/20

Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Echavarría, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección y de la Dirección de Policía Ambiental; sobre distintos aspectos vinculados a los focos de incendios activos en nuestra provincia.

Comisión: de Ambiente.

PUNTO 54 PUNTO 29

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31005/L/20

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Ambrosio, Recalde, Gudiño, Paleo, De Ferrari Rueda, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Seguridad, sobre el procedimiento aplicado por la Policía de la provincia respecto del Personal Superior y Subalterno en actividad que es procesado y/o imputado en causa penal por delito doloso, sin privación de la libertad, mientras transcurre la etapa de investigación, y tras el estado de citación a juicio firme.

Comisión: de Legislación General.

PUNTO 55 PUNTO 33

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30814/L/20

Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las modalidades con que se están cumpliendo las guardias "en bloque", según lo previsto por los protocolos del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) en los hospitales Rawson, San Roque y Vidal Abal.

Comisión: de Salud Humana.

PUNTO 56 PUNTO 34

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

29955/L/20

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Juntos por el Cambio, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el estado de deuda de la provincia.

Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación

PUNTO 57 PUNTO 35

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30467/L/20

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Ferrari Rueda, Recalde, Gudiño y Jure, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) acerca de la nómina de profesionales y expertos que están asesorando al COE -Comité Operativo de Emergencia- en medio de la pandemia por el Covid-19.

Comisión: de Salud Humana.

PUNTO 58 PUNTO 36

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30711/L/20

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Industria, Comercio y Minería, respecto de cuestiones relativas al funcionamiento de la Subsecretaría de Cooperativas y Mutuales.

Comisión: de Industria y Minería.

PUNTO 59 PUNTO 37

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30723/L/20

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Paleo, Recalde y Capitani, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos referidos al IPEM Nº 384 - Anexo Las Palmas de la localidad de homónima.

Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.

PUNTO 60 PUNTO 38

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

29784/L/19

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de la aplicación del Programa Jornada Extendida en las escuelas, espacios físicos y el funcionamiento del PAICor.

Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.

PUNTO 61 PUNTO 39

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30989/L/20

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Administración Provincial de Seguro de Salud APROSS, sobre algunos puntos referidos a las compras realizadas en la República Popular China.

Comisión: de Salud Humana.

PUNTO 62 PUNTO 40

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30391/L/20

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando informe al Poder Ejecutivo (Art. 102 CP) sobre el estado de construcción y avance de obras del Nuevo Hospital de Río Tercero.

Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.

PUNTO 63 PUNTO 41

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31139/L/20

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Recalde, De Ferrari Rueda y Caffaratti, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos puntos referidos al árbol de navidad a emplazarse en el Faro del Bicentenario.

Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación

PUNTO 64 PUNTO 42

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31157/L/20

Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Educación, respecto a algunos puntos referidos al Colegio Religioso Santo Tomás de Aquino.

Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.

PUNTO 65 PUNTO 43

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31160/L/20

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Coordinación, sobre algunos puntos referidos al Plan Conectividad Córdoba.

Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.

PUNTO 66 PUNTO 44

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31166/L/20

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos relacionados al Programa 471, de Integración Sanitaria.

Comisión: de Salud Humana.

PUNTO 67 PUNTO 45

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31168/L/20

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Arduh, Gudiño, Recalde, Caffaratti y De Ferrari Rueda, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto del estado de situación del conflicto y bloqueo de la Ruta Nacional N° 7 en el límite con la Provincia de San Luis.

Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.

PUNTO 68 PUNTO 47

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31186/L/20

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Ferrari Rueda, Gudiño y Caffaratti, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos vinculados a la aplicación de los distintos lineamientos del Protocolo del COE de ingreso fronterizo a la provincia de Córdoba que condujeron a la denegación del ingreso al Sr. Pablo Musse, el pasado 16 agosto.

Comisión: de Legislación General.

PUNTO 69 PUNTO 48

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31190/L/20

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Recalde, De Ferrari Rueda, Gudiño, Caffaratti y Jure, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos vinculados al proceso de contratación de ejecución del Proyecto escuelas Proa; y los criterios de evaluación para adjudicar la licitación pública internacional N° 48/2017 a la empresa Makiber S.A. (Grupo ACS).

Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.

PUNTO 70 PUNTO 49

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31204/L/20

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Educación, si existe algún reclamo sobre el terreno donde está construido el edificio de la "Escuela Manuel Belgrano" de la ciudad de La Calera.

Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.

PUNTO 71 PUNTO 50

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31207/L/20

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Secretaria de Ambiente, sobre las denuncias realizadas por vecinos de la localidad de Villa Giardino contra el Sr. Mario Decara, propietario del Hotel "Alto San Pedro".

Comisión: de Ambiente.

PUNTO 72 PUNTO 51

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31390/L/20

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud, respecto a la manera en que se instrumentó la gestión y se realizó la inversión del programa 472-Fondo Para Atención del Estado de Alerta, Prevención y Acción Sanitaria por Enfermedades Epidémicas.

Comisión: de Salud Humana.

PUNTO 73 PUNTO 52

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31421/L/20

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil, sobre algunos puntos vinculados a su funcionamiento.

Comisión: de Ambiente.

PUNTO 74 PUNTO 53

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31427/L/20

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología, acerca de la organización y resultados de la Semana Tic's en Córdoba.

Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.

PUNTO 75 PUNTO 54

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31447/L/20

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud, sobre los diagnósticos, hisopado, detección y evolución a los enfermos de Covid-19 del interior de la provincia.

Comisión: de Salud Humana.

PUNTO 76 PUNTO 55

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31451/L/20

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Educación y del Ministerio de Salud, sobre las disposiciones ministeriales para la vuelta a clases presenciales de docentes y alumnos.

Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.

PUNTO 77 PUNTO 56

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31468/L/20

Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la prestación de la APROSS brindada a la Sra. Elisa Martínez D.N.I. 24.857.047 en el período 2015-2019.

Comisión: de Salud Humana.

PUNTO 78 PUNTO 57

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31471/L/20

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Seguridad, algunos puntos referidos a los Programas 750 Políticas de Seguridad Pública y 755 Seguridad Vial y Prevención - Cuenta Especial Ley Nº 8560.

Comisión: de Legislación General.

PUNTO 79 PUNTO 58

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31472/L/20

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Desarrollo Social, sobre algunos puntos vinculados al Programa Fondo Permanente para la Atención de Situaciones de Desastres 208-000.

Comisión: de Legislación General.

PUNTO 80 PUNTO 59

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31478/L/20

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos puntos vinculados al Programa 690 - Contención y Protección de Víctimas del Narcotráfico.

Comisión: de Salud Humana.

PUNTO 81 PUNTO 60

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31479/L/20

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el Programa 451 -Actividades de Fiscalización, Evaluación y Registro- Ley Nº 6222, en la Ejecución Presupuestaria de junio de 2020.

Comisión: de Salud Humana.

PUNTO 82 PUNTO 61

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31480/L/20

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ambrosio, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Deportes SEM, sobre algunos aspectos vinculados a la suspensión o cancelación de las actividades de la Liga Nacional de Básquet en la modalidad "burbuja", previstas en su desarrollo para nuestra provincia.

Comisión: de Deportes y Recreación.

PUNTO 83 PUNTO 62

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31494/L/20

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Secretaría de Ambiente y la Policía Ambiental, sobre algunos puntos relacionados al predio donado por la Provincia de Córdoba para la construcción de la Nueva Terminal de Ómnibus de Villa General Belgrano.

Comisión: de Ambiente.

PUNTO 84 PUNTO 63

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30322/L/20

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos referidos a la no ejecución del Programa 504 "Sistema Provincial de Control de Cargas" según se refleja al día 29/04/2020 en el Portal de Transparencia del Gobierno de la Provincia de Córdoba.

Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación

PUNTO 85 PUNTO 64

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30378/L/20

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Directorio de Bancor, sobre algunos aspectos relacionados con atención al cliente durante la crisis de Covid-19.

Comisión: de Servicios Públicos.

PUNTO 86 PUNTO 65

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31318/L/20

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Dirección General de Vivienda, sobre algunos puntos referidos al revalúo de viviendas IPV.

Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.

PUNTO 87 PUNTO 66

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31321/L/20

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Bloques Movimiento Socialista de los Trabajadores, Encuentro Vecinal Córdoba, Coalición Cívica ARI y de la Unión Cívica Radical, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre aspectos referidos a la Resolución Ministerial N° 343/2020 sobre la promoción y acreditación de los y las estudiantes de los distintos niveles educativos en tiempos de emergencia sanitaria.

Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.

PUNTO 88 PUNTO 67

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31361/L/20

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Justicia, sobre la existencia del hecho informado por La Voz del Interior el día 30/09/2020 relacionado a un robo realizado al Sr. Vocal del Tribunal Superior de Justicia Dr. López Peña, y si éste habría ejercido algún tipo de presión sobre representantes del Ministerio Público Fiscal.

Comisión: de Legislación general.

PUNTO 89 PUNTO 69

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31502/L/20

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Agencia Córdoba Cultura, acerca del estado de las obras de refuncionalización de las oficinas para personal y la instalación del Sistema de Climatización en la nueva sede sita en el edificio de la ex Legislatura.

Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.

PUNTO 90 PUNTO 70

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31524/L/20

Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a la docencia de Educación Media, Especial y Superior de la provincia.

Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.

PUNTO 91 PUNTO 71

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31552/L/20

Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sobre aspectos referidos a las instalaciones edilicias del Centro Socioeducativo Cerrado Complejo Esperanza.

Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.

PUNTO 92 PUNTO 72

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31613/L/20

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHI) de la Provincia, acerca de la organización y sueldos de su personal.

Comisión: de Servicios Públicos.

PUNTO 93 PUNTO 73

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31617/L/20

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Turismo, acerca del estado de ejecución de su presupuesto conforme Cuenta de Ejecución Junio 2020.

Comisión: de Turismo y su relación con el Desarrollo Regional.

PUNTO 94 PUNTO 74

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31620/L/20

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jure, Caffaratti, Ambrosio, Recalde y Gudiño, citando al Sr. Ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera (Art. 101 CP), para que de las explicaciones en este recinto de las causas que produjeron la muerte, a manos de la policía provincial, del ciudadano Joaquín Paredes de 15 años en la localidad de Paso Viejo.

Comisión: de Legislación General.

PUNTO 95 PUNTO 75

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31656/L/20

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Educación, acerca del Programa 359 - Escuelas de Oficiales y Suboficiales de Policía de la Provincia de Córdoba.

Comisiones: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática; y de Legislación General.

PUNTO 96 PUNTO 76

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31657/L/20

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Educación acerca del Programa 372-000 - Finalización de Estudios para Jóvenes y Adultos (FinEs).

Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.

PUNTO 97 PUNTO 77

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31668/L/20

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Educación, acerca del Memorandum N°10/2020.

Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.

PUNTO 98 PUNTO 78

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31365/L/20

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunas cuestiones referidas al 0800-555-4141, call center de los Hospitales de la Provincia de Córdoba durante la Pandemia Covid 19.

Comisión: de Salud Humana.

PUNTO 99 PUNTO 79

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31366/L/20

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos puntos referidos a la situación de los Residentes del Área de Salud (Ley 22127 Sistema de Residencia de Salud y la Resolución Provincial N° 0876 Reglamento de Residencias de Salud), tanto en los hospitales públicos como privados de toda la Provincia de Córdoba.

Comisión: de Salud Humana.

PUNTO 100 PUNTO 81

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30192/L/20

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diferentes aspectos vinculados a la contratación directa del consorcio caminero único para riego de 10 km del camino secundario S-266.

Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.

PUNTO 101 PUNTO 82

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30196/L/20

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diferentes aspectos relacionados a la contratación directa del consorcio caminero único para la obra Pavimentación de Caminos Rurales - Acceso a Cooperativa Agrícola de Monte Maíz Ltda., Dpto. Unión.

Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.

PUNTO 102 PUNTO 84

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31568/L/20

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Cultura SE, sobre el estado de ejecución de su presupuesto conforme Cuenta de Ejecución de junio 2020.

Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.

PUNTO 103 PUNTO 85

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31569/L/20

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología, acerca de la Ejecución Presupuestaria del segundo trimestre del período 2020.

Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.

PUNTO 104 PUNTO 86

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30717/L/20

Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos vinculados a Caminos de las Sierras S.A.

Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.

PUNTO 105 PUNTO 87

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31388/L/20

Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), sobre algunos aspectos vinculados a los procesos de mantenimiento, así como responsables y controles, del tendido eléctrico de media y baja tensión en zonas urbanas, rurales y pasibles de ser afectadas por incendios en nuestra provincia.

Comisión: de Servicios Públicos.

PUNTO 106 PUNTO 89

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31266/L/20

Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba -EPEC-, sobre el VAD (Valor Agregado de Distribución) por cada kw, y los criterios que se tienen en cuenta para su cálculo.

Comisión: de Servicios Públicos.

PUNTO 107 PUNTO 90

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31369/L/20

Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sobre algunos puntos referidos a la población carcelaria en toda la provincia al día de la fecha.

Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social.

PUNTO 108 PUNTO 91

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31525/L/20

Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud y del Ministerio de Desarrollo Social, sobre diversos aspectos relacionados al Programa de Lucha contra el VIH-Sida e ITS -Ley 9161 y el Plan para Grupos Vulnerables.

Comisiones: de Salud Humana; y de Derechos Humanos y Desarrollo Social.

PUNTO 109 PUNTO 92

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31571/L/20

Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Dirección Provincial de Vialidad, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, detalle en qué estado se encuentra el proyecto para el asfalto del camino que une a Río de Los Sauces con Elena y la obra del Camino de la Costa en el tramo entre Río de Los Sauces y Alpa Corral.

Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.

PUNTO 110 PUNTO 104

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31733/L/20

Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), sobre algunos puntos relacionados a los protocolos policiales durante protestas, manifestaciones y marchas en nuestra Provincia.

Comisión: de Legislación General.

PUNTO 111 PUNTO 107

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31766/L/20

Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Secretaría de Ambiente y el Ministerio de Seguridad, sobre algunos puntos relacionados al incendio ocurrido en Ambul.

Comisión: de Ambiente.

PUNTO 112 PUNTO 109

Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195

31804/L/20

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la posibilidad de habilitar en el mes de diciembre en las escuelas un día final de clase presencial para los últimos años en las escuelas de Córdoba.

Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.

PUNTO 113 PUNTO 110

Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195

31805/L/20

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ronge, Caffaratti, Gudiño, Paleo, Ambrosio y Recalde, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos relacionados al mantenimiento y demarcación de los nuevos tramos de la Avenida de Circunvalación y, específicamente, del último tramo de 2,8 kilómetros comprendidos entre Av. Fuerza Aérea y el puente sobre arroyo La Cañada.

Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.

PUNTO 114 PUNTO 111

Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195

31806/L/20

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ronge, Caffaratti, Gudiño, Paleo, Ambrosio y Recalde, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos referidos a los controles de alcoholemia (Ley Nº 10181) realizados durante la Pandemia generada por el virus Covid-19.

Comisión: de Legislación General.

PUNTO 115 PUNTO 114

Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195

31841/L/20

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gudiño y Jure, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), sobre algunos puntos vinculados al tratamiento con plasma a pacientes Covid 19.

Comisión: de Salud Humana.

PUNTO 116 PUNTO 115

Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195

31842/L/20

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ronge, Caffaratti, Gudiño, Recalde, Ambrosio y Paleo, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), sobre el personal de salud afectado a los tres hospitales modulares que se instalarán en zonas turísticas y el presupuesto destinado a su funcionamiento.

Comisión: de Salud Humana.

PUNTO 117 PUNTO 116

Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195

31843/L/20

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ronge, Caffaratti, Gudiño, Recalde, Ambrosio y Paleo, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), sobre algunos aspectos vinculados al cierre de oficinas físicas de la Dirección General de Rentas en diferentes ciudades y pueblos del interior provincial.

Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación

-5-

CONSENSO FISCAL 2020, SUSCRITO ENTRE EL ESTADO NACIONAL Y LAS PROVINCIAS. APROBACIÓN.

Tratamiento sobre tablas

Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota que mociona el tratamiento sobre tablas del proyecto 31988/E/20, que se leerá a continuación.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Córdoba, 23 de diciembre de 2020.

**Señor Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba**

De mi mayor consideración:

Por la presente me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas, en la sesión del día de la fecha, del despacho de comisión correspondiente al proyecto de ley 31988/E/20, por el cual se aprueba el Consenso Fiscal 2020, suscripto entre el Estado Nacional y las provincias.

Sin otro particular, saluda a usted atentamente.

Francisco Fortuna
Legislador Provincial

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas que acaba de ser leída.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.

Tiene la palabra el legislador Leonardo Limia.

Sr. Limia.- Muchas gracias, señor presidente.

Como recién decía, tenemos en tratamiento el proyecto 31988/E/20, enviado por el Poder Ejecutivo a la Legislatura de la Provincia de Córdoba, mediante el cual se propicia el tratamiento del Consenso Fiscal 2020, suscripto el día 4 de diciembre de este año entre el Estado Nacional y todas las provincias, a excepción de CABA, San

Luis y La Pampa, éstas dos últimas provincias en razón de que no lo habían firmado anteriormente.

El Consenso Fiscal consiste en un acuerdo entre la Nación y las provincias en el que se contemplan temas relacionados con aspectos de política fiscal y el esquema en las distintas jurisdicciones.

Como antecedentes de acuerdos fiscales firmados entre la Nación y las provincias, podemos mencionar como los principales el Acuerdo para un Nuevo Federalismo del año 2016, ratificado por la Ley 27.260, en el que, principalmente, se acordó la eliminación gradual de la detracción del 15 por ciento de la masa coparticipable a las provincias.

Después, en el año 2017, la firma del Consenso Fiscal tuvo como finalidad armonizar las políticas tributarias de las distintas jurisdicciones, a fin de evitar distorsiones y efectos desfavorables en las actividades económicas, y que sentó las bases de una política federal de restructuración del sistema tributario de nuestro país y que, en nuestra Provincia, adoptamos en todos los puntos. En esta línea, se produjo un proceso asimilable al Pacto Fiscal I, que sucedió en el año 1992.

En el año 2018, frente a las circunstancias adversas que comenzaban a vislumbrarse, se aplicó una primera enmienda o adecuación al Consenso Fiscal original, con ciertas modificaciones en los compromisos originales, para permitir la consolidación fiscal de los distintos niveles de gobiernos subnacionales.

Luego, ya en el año 2019, atento a la profundización de la crisis económica durante dicho ejercicio, se introdujeron nuevas modificaciones a los compromisos asumidos en el Pacto Fiscal del año 2017. Básicamente se suspendió por un año la rebaja de alícuotas en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos y en el Impuesto de Sellos prevista originalmente en el año 2017, con lo cual las provincias podían seguir con el esquema de alícuotas vigente al año 2019. Acá es importante destacar, señor presidente, que esto no implica la posibilidad de subir alícuotas, sino el no continuar reduciéndolas tal como se estaba haciendo en el compromiso del Consenso Fiscal inicial.

Señor presidente: ahora quiero exponer los principales aspectos que tienen que ver con el Consenso Fiscal 2020, por lo que podemos separar dicho acuerdo en cuatro puntos principales: en primer término, las cuestiones que tienen que ver con la administración tributaria. En este sentido, la Administración Federal de Ingresos Públicos se compromete a poner a disposición herramientas que colaboren a que todos los organismos provinciales de recaudación tributaria validen los números de clave de identificación y, en este marco, devolver los resultados del proceso de análisis y de los archivos recibidos con información sobre la titularidad de los bienes inmuebles y otros bienes registrables.

También, las provincias se comprometen a remitir, una vez al año, a la Administración Federal de Ingresos Públicos la información sobre la titularidad de bienes inmuebles y otros bienes registrables y su valuación, con corte al 31 de diciembre de cada año.

Tanto las provincias como la Nación se comprometen a trabajar en un programa integral de simplificación y coordinación de políticas tributarias federales.

Además, la reasignación de recursos, en el marco de transferencias de competencias, servicios o funciones, no se implementará mediante el mecanismo de la Coparticipación Federal de Impuestos.

En un segundo término tenemos los aspectos que tienen que ver con la política tributaria provincial. Entre los principales puntos tenemos el hecho de prorrogar, hasta el 31 de diciembre del año 2021, la suspensión de los compromisos mencionados en los incisos b), c), d), h), j), k), l), m) y s), de la cláusula III del Consenso Fiscal del año 2017. Los principales aspectos contenidos en estos incisos, que nuevamente son suspendidos por un año más, son los siguientes: en el inciso b), desgravar ingresos provenientes de la exportación de bienes; en el c), desgravar ingresos provenientes de servicios en el exterior; en el d), la reducción gradual de alícuotas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, según actividades y cronogramas previstos; en el h), rango de alícuotas a aplicar por el Impuesto Inmobiliario; en el j), no aumentar alícuotas del Impuesto de Sellos a ciertas operatorias; en el k), la reducción gradual del Impuesto de Sellos, según operaciones y cronogramas previstos; en el l) y el m), eliminar tributos sobre la nómina salarial y tratamientos diferenciales basados en tributos del trabajador, y en el inciso s), derogar los tributos específicos que graven la transferencia

de combustible, gas, energía eléctrica y servicios sanitarios, excepto transferencias a consumidores finales.

Otro aspecto, dentro de este punto, es el de excluir del Anexo 1, del inciso d), de la cláusula III del Consenso Fiscal del año 2017, las alícuotas máximas establecidas para las actividades de intermediación financiera y servicios financieros.

Otro de los puntos consiste en profundizar la adecuación del funcionamiento de los regímenes de retención, percepción y recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, de manera de respetar el límite territorial de la potestad tributaria de las jurisdicciones y evitar la generación de saldos inadecuados o permanentes a favor de los contribuyentes.

Otro punto es procurar la aplicación de mecanismos de devolución automática, compensación o transferencia de crédito del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a aquellos contribuyentes que tengan saldos a favor generados por retenciones, percepciones y/o recaudaciones.

En cuanto al Impuesto a los Automotores, determinar como base imponible del impuesto –como mínimo– el 95 por ciento de las valuaciones de los vehículos automotores que establezca la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad del Automotor; fijar como alícuota anual del tributo el 2 por ciento de la base imponible determinada, excepto para el caso de automotores vinculados con actividades productivas; adoptar medidas tendientes a incrementar la cobrabilidad del tributo y promover la adhesión de los gobiernos municipales.

El tercer eje de este acuerdo es el del endeudamiento responsable. En este punto se plantea que, a partir del 31 de diciembre del año 2020, y durante un año, las provincias no podrán incrementar el stock de deuda denominada en moneda extranjera, respecto a los valores registrados a tal fecha, quedando en este punto exceptuadas las líneas de financiamiento con organismos bilaterales o multilaterales de crédito o con acreedores institucionales, siempre que estos últimos otorguen financiamiento de largo plazo, con características similares a los primeros, como también los desembolsos pendientes, originados en convenios firmados con anterioridad al 31 de diciembre de 2020, cuyos montos o saldos se encuentren detallados en la normativa correspondiente, y también los incrementos de stock generados por operaciones que impliquen administración de pasivos y/o canjes y reestructuraciones de los servicios, de vencimientos de intereses o amortizaciones de capital de títulos públicos denominados en moneda extranjera y emitidos con anterioridad al 31 de diciembre del año 2020.

Aquellos endeudamientos que tengan como garantía o repago recursos tributarios o no tributarios de origen provincial, percibidos en moneda extranjera y que no se encuentren afectados en el Presupuesto en curso y en los sucesivos, constituyen también uno de los puntos incluidos.

A su vez, a partir del 31 de diciembre de 2020, y durante un año, las operaciones de emisiones de títulos públicos en moneda nacional de las provincias cuyo vencimiento sea superior a los 18 meses desde su fecha de emisión, estarán exceptuadas de lo establecido en la Ley 23.928, en sus artículos 7º y 10, siempre y cuando los fondos obtenidos se destinen a financiar obras de infraestructura o reestructuración de servicios de deuda emitida con anterioridad al 31 de diciembre de 2020.

Por último, en cuanto a los cuatro ejes mencionados del Consenso Fiscal 2020, se plantea que las provincias se comprometen a abstenerse de iniciar por un año procesos judiciales y suspender los ya iniciados, relacionados con el Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, afectados específicamente a recursos y transferencias de competencias de servicios y funciones.

Señor presidente: en base a lo descripto, creemos que es necesario entender que la presión impositiva tiene un límite y que la disciplina fiscal es fundamental para volver a crear las condiciones de desarrollo para nuestro país. Este Consenso Fiscal habla de eso: de la responsabilidad que necesitamos para emprender un camino de desarrollo, crecimiento y generación de empleo en el manejo de los recursos fiscales, tanto de la Nación como de la Provincia.

En términos generales, en el texto del nuevo Consenso se especifica que, ante la depresión de la economía nacional que provocó el aumento significativo de la vulnerabilidad económica y social de vastos sectores de la población, más la ampliación de la emergencia pública en materia sanitaria, en virtud de la pandemia declarada por

la Organización Mundial de la Salud, se redujo la actividad económica de manera inevitable, impactando en los niveles de recaudación. Y, ante la necesidad de contar con recursos fiscales para la atención de una creciente demanda social para contener a los sectores más vulnerables de la población, junto con la decisión de definir una nueva estrategia para un endeudamiento responsable de las provincias, es que se dicta este Consenso Fiscal 2020.

Señor presidente: esta nueva adenda al Consenso Fiscal, que fuera entrada en reunión de la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación, cuenta con despacho a favor y la consideramos de vital importancia para la armonización de las políticas tributarias provinciales de una manera federal y consensuada por la Nación y que esta Provincia de Córdoba siempre tomó con total compromiso y seriedad, dado que consideramos que estos acuerdos son los que llevan a un mayor federalismo y, por ende, a un mayor bienestar para los habitantes de nuestra Provincia.

De esta manera, mantenemos el camino de encontrar unidos las mejores herramientas que nos permitan a los argentinos en general, y a los cordobeses en particular, la recuperación y el crecimiento que necesitamos en medio de una pandemia que nos ha perjudicado en todo sentido, sólo así podremos alcanzar una Argentina más federal y con más desarrollo productivo.

Quiero destacar también un aspecto importante, que fue consulta por parte de algunos legisladores de los bloques minoritarios en las reuniones de comisión que hemos realizado: este tipo de acuerdos son celebrados con el Gobierno nacional y las provincias y se encuentra dentro de las atribuciones que le son conferidas al Gobierno provincial, que está contemplada en el artículo 144 de la Constitución provincial, en su inciso 4), y que le da el poder de firmar convenios, acuerdos y tratados con el Gobierno Nacional. Respecto de lo que hoy estamos realizando, es decir, refrendar este acuerdo y darle fuerza de ley, también es atributo de este Cuerpo legislativo refrendar los mismos, de acuerdo a lo que prevé el artículo 102, inciso 2), de la Constitución provincial, por lo cual, estamos realizando dicho acto con el presente acuerdo en tratamiento.

De esta manera, señor presidente, adelanto el voto positivo del bloque de Hacemos por Córdoba y pido el acompañamiento por parte de los legisladores al proyecto en cuestión.

Nada más.

Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador Limia.

Tiene la palabra el legislador Arduh.

Sr. Arduh.- Señor presidente: hablar del Consenso Fiscal significa poner en marcha un compromiso entre la Nación y las provincias para encarar una ejecución de todos los presupuestos provinciales. Pero, además, significa entender, desde nuestra Constitución Nacional, el rol del federalismo y la autonomía de la que gozan nuestras jurisdicciones.

En este sentido, y previo al análisis meramente técnico, quiero detenerme y decir que convalidar la idea del federalismo de este Gobierno nacional es, sin lugar a duda, avalar el despojo y el uso irrestricto de la chequera aleccionadora del mismo Ministerio del Interior que castiga a sus adversarios.

Hace unas semanas el Congreso aprobó una ley para proceder a la quita de los fondos de la ciudad de Buenos Aires, una ley que contó con los votos del oficialismo cordobés y de todos sus representantes, una ley que avala la discrecionalidad y, por lo tanto, es arbitraria y contraria a los principios de la Constitución.

Ustedes pueden pensar que CABA está lejos, que algo así nunca le podría suceder a la Provincia de Córdoba porque son gobiernos que, seguramente, comulgan con el mismo breviario ideológico. Sin embargo, nuestra Provincia, como todas las demás, queda siempre a merced de los caprichos de un Estado nacional que nos avasalla contra las autonomías y deja en claro que en cualquier momento puede hacer una quita porque considera que es necesario compensar a otras provincias que seguramente son menos productivas.

Así es como, en su momento, no castigaron al Gobernador De la Sota pero sí castigaron a los cordobeses; hoy no castigan al Jefe de Gobierno porteño pero sí castigan a los porteños. Y, de paso, con esa manera brutal que tienen, muestran que pueden erosionar principios e instituciones sin ponerse colorados.

Hoy se trae al recinto el documento de estos despojos, con una serie de medidas claves no para que los representantes de los cordobeses podamos participar, sino, más que todo, para convalidar esta decisión ya tomada.

Este nuevo acuerdo suspende el camino de lo que fue la baja de los Impuestos en Ingresos Brutos, de Sellos y los principales ingresos tributarios para los estados provinciales, que, en el caso de Córdoba, Ingresos Brutos significa nada más y nada menos que el 70 por ciento de sus ingresos por su cobro, mientras que con el Impuesto de Sellos casi estamos llegando al 10 por ciento.

Además, con la firma de este nuevo Pacto Fiscal se habilita a no reducir no sólo estos tributos distorsivos como son los Impuestos sobre los Ingresos Brutos y de Sellos, sino contar con dinero extra que seguramente lo van a tener en el 2021, que es el año en que se juega una renovación legislativa.

Hablando un poco también de las empresas, que son las generadoras de empleo en un contexto con 4 millones de desocupados, por un lado, es una buena noticia, pero muy mala, por el otro, porque, como la Nación no tiene pensado reducir los impuestos, la presión tributaria continuará en torno al 42 por ciento promedio, de las más altas del mundo, insostenible.

Esta rebaja progresiva en estos dos impuestos había sido acordada en el Consenso Fiscal que los gobernadores firmaron con el entonces Presidente Mauricio Macri, en el 2017, y ahora se los ve que con el mismo entusiasmo que felicitaron al expresidente por esa iniciativa, hoy están aplaudiendo la suspensión.

Pero, además, este pacto -urdido, desde ya, desde el Instituto Peña- establece la imposibilidad de las jurisdicciones de presentar recursos judiciales y determina la suspensión de los que estén en curso en materia de recursos coparticipables ante la Corte Suprema. Quiere decir que nuestra Provincia renuncia a la posibilidad de acudir a la Justicia en caso de que se vulneren los legítimos intereses de los cordobeses.

Señor presidente: el Pacto Fiscal fija una serie de restricciones a las provincias para la adquisición de deuda en dólares, en nombre del endeudamiento responsable, pero establece nuevos mecanismos de endeudamiento en pesos a tasas verdaderamente usurarias.

Por lo tanto, como este acuerdo que está lejos de tratarse de una política federal, adelantamos el voto negativo del bloque Juntos por el Cambio para la presente ley.

Muchas gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador Arduh.

Tiene la palabra el legislador Rins.

Sr. Rins.- Señor presidente: cuando escuchábamos al señor miembro informante, claramente tenemos que coincidir en los objetivos que lleva adelante este Consenso Fiscal, que básicamente son dos: uno, aliviar la situación financiera de las provincias, en el caso de Córdoba también, que tiene, obviamente, una situación financiera comprometida, sin ninguna duda por el tema de la pandemia, pero también por algunos arrastres de los que ya hemos hablado en otras oportunidades, que tienen que ver con la Caja de Jubilaciones y la deuda, que dependerá de cómo se reperfile, y, sin ninguna duda, el otro fundamento que tenemos que compartir absolutamente todos es que este Consenso Fiscal dice que quiere implementar políticas tributarias con el fin de promover la inversión y el empleo privado. Es decir que, si miramos estos dos títulos que se resaltan, de acuerdo a lo que establecía el propio miembro informante, no podemos más que coincidir, son dos objetivos más que loables.

Ahora, da la sensación de que depende por donde uno lo empiece a leer a este proyecto, es como si fuese una matriz doble entrada, se puede ver una interpretación claramente distinta. ¿Cómo se logran estos objetivos? Mejorar la situación fiscal de las provincias y generar, como corresponde, empleo e inversión, algo en lo que, en muchas oportunidades, hemos acompañado al Gobierno provincial cuando ha presentado leyes que promueven alguna actividad específica ya sea industrial, de servicio, etcétera.

Ahora, cuando empezamos a leer este nuevo Consenso Fiscal, encontramos -yo diría- prácticamente una contradicción. Lo primero, señor presidente, es lo siguiente: hay una visión equivocada porque se habla de la crisis financiera, pero se habla de la crisis financiera del Estado, como si el sector privado no tuviese crisis, y lo dice claramente, se lo leo: "como consecuencia de la emergencia económica generada por la cuarentena, se ha reducido la actividad económica con inevitable impacto en los

niveles de recaudación, a la vez que los gobiernos nacional y provinciales necesitan contar con recursos fiscales para la atención de una creciente demanda social cuya resolución permita la contención de los sectores más vulnerables”.

Aparece como una contradicción porque dice que la crisis en que entramos es producto de la pandemia y afecta al Estado, como si los otros sectores, como el privado, de donde se nutre el Estado no estuviesen en crisis. Y no hay posibilidad de un Estado fuerte, señor presidente, sin que la actividad privada esté al máximo.

Además, el sector privado ha estado muy impactado por el manejo de la pandemia; uno puede estar de acuerdo o no, pero lo concreto es que ha tenido un impacto destructivo en la actividad económica privada del país y, evidentemente, como vamos a ir desgranando a lo largo del análisis de este proyecto, una posibilidad de aumento de impuestos no solo que no fomenta la recuperación económica, sino que la obstruye.

En el Consenso Fiscal 2020 también se deja de lado, ya en el título, el tema de la pandemia, porque se habla del Consenso 2021 post pandemia, en el cual la recuperación de la economía –dice- será el eje central de toda política pública. Pero el año 2021, por lo menos hasta mitad del año, va a estar impactado por el tema de la pandemia también, y si gravamos con más impuestos a la actividad privada, va en contra de la recuperación económica esperada.

Por eso decíamos, señor presidente, que estamos totalmente de acuerdo con los objetivos, como no vamos a estar de acuerdo de aliviar la renta de la Provincia, cómo no vamos a estar de acuerdo en generar inversión privada y más empleos. Estamos totalmente de acuerdo, pero para seguir la línea argumental que llevó adelante el miembro informante, y los cuatro ejes que planteó, es bueno analizarlo desde punto de vista, él habla de las disposiciones referidas en materia tributaria nacional, un eje; provincial, otro eje; regulación de endeudamiento, otro eje, y la regulación de los procesos judiciales, otro eje.

Vamos a analizarlo: primero, en estas disposiciones referidas a materia tributaria nacional estamos totalmente de acuerdo con que siga el compromiso adquirido, por el cual la AFIP se pone a disposición de los organismos de recaudación provinciales para lograr una recaudación adecuada y el objeto de mejorar la administración tributaria de la Provincia, por supuesto, nos parece bárbaro.

Ahora -repito: para seguir el eje de lo que planteaba el miembro informante-, cuando entramos en el tema de la cuestión tributaria provincial allí se empieza a complicar porque, como bien fue expuesto aquí, en el Consenso Fiscal 2021, lo primero que se establece, o lo primero que se planteó acá, es una prórroga hasta el 31 de diciembre de 2021 de la suspensión de los compromisos y ahí pone una serie de incisos, que se los voy a leer: el inciso b), c), d), h), j), k), l), m) y el s) de la cláusula III del Consenso Fiscal 2017. Pero, para no ser tan casuístico, básicamente, esto implica que: a) no se va a desgravar más las actividades de exportación ni las actividades radicadas en el exterior, no es un tema menor, es desaliento a las exportaciones con las necesidades de dólares que tiene el país; b) se deja de lado el límite de rango entre el 0,5 y 2 por ciento que se había establecido para determinar el monto a pagar por los impuestos inmobiliarios. El miembro informante dijo que no es intención del Gobierno de la Provincia hacer uso de esta cláusula que le facilitaría aumentarlo, pero nosotros lo que tenemos que analizar no son las intenciones, sino lo que está escrito, y lo que está escrito claramente dice que se deja de lado ese límite; c) se permitirá incrementar las alícuotas de Impuestos de Sellos a las transferencias de inmuebles y automotores; d) se anula, digamos, el sendero de descenso que se había establecido que llegaba hasta el 2022 para la eliminación de las alícuotas de los Sellos; e) se suspende la eliminación de tratamientos diferenciados sobre trabajadores y la derogación de todo tributo que recaiga sobre la masa salarial; f) se suspende la derogación de los tributos específicos que gravan las transferencias de combustibles, de gas, de energía eléctrica, servicio sanitario.

En general, le da la Provincia las herramientas necesarias para aumentar la presión fiscal, más allá de que después lo haga, pero el documento tiene que ser analizado objetivamente, y el documento autoriza a una mayor presión fiscal.

Pasa lo mismo con el tema de incluir sobretasas a la actividad financiera. Eso se podrá discutir, hay algunos que lo ven bien, otros que lo ven mal, cuando se lo ve descontextualizado de la economía puede parecer bueno, pero eso implica un

encarecimiento del crédito, y el encarecimiento del crédito con la necesidad que hay de crédito que apoye al desarrollo.

Después, el otro tema importante también es el del Impuesto a los Automotores. Se determina como base imponible del impuesto, como lo dijo el legislador Limia, el 95 por ciento del valor que le pone el Registro de la Propiedad del Automotor y créditos prendarios, y sobre esos precios le fija una alícuota mínima del 2 por ciento, excepto, para los vehículos que están para otro tipo de actividades productivas. Ahora, fija los mínimos de las bases imponibles y de las alícuotas, pero no los límites máximos, o sea que ahí también se abre la posibilidad de un incremento, con lo que esta cláusula lo único que busca es armonizar los pisos de los tributos, pero no fija un techo en cuanto a lo que cobrarán las provincias.

El otro título al que hacía referencia el miembro informante es el de la regulación del endeudamiento público. Está claramente planteado que las provincias no pueden tomar créditos en moneda extranjera, durante el año 2021, obviamente, con el interés que tiene la Nación de evitar que las provincias demanden dólares. Pero, a cambio de eso, les da todas estas otras facilidades y, les permite también, con organismos multilaterales de crédito que cumplan con los mismos estándares, tomar estos créditos, siempre y cuando que sean para pagar deuda contraída antes del 31 de diciembre del 2020. Y aparece la posibilidad de indexar la emisión de títulos públicos; antes estaba prohibida la indexación y ahora se permite bajo determinadas condiciones.

El otro título -repito: de lo que íbamos anotando de lo que decía el miembro informante- es el tema de los procesos judiciales; este es un compromiso de suspender por un año el litigio entre Provincia y la Nación que tenga un origen en el reparto fondo público.

En resumen, señor presidente, este acuerdo les permite a las provincias -más allá de que lo hagan- incrementar la presión fiscal de los Impuestos sobre los Ingresos Brutos y de Sellos, a cambio de no requerir dólares durante el 2021.

Y, ya para finalizar, me parece importante algo que dijo el legislador Limia; él dijo claramente que hay un límite y, tal cual, la presión fiscal tiene un límite. ¿Cuál es ese límite? Hay muchos estudios hechos sobre esto, señor presidente, pero me parece que es bastante didáctico tomar una curva, que es muy simple de interpretar, que ideó un economista estadounidense -Laffer- de la década del 80, que estableció dos puntos extremos en donde no se recauda.

Si usted tiene un tipo impositivo, o sea una alícuota cero, recauda cero, y si en esa curva va en aumento esa línea también, va en aumento la alícuota y usted la lleva al tipo impositivo hasta el ciento por ciento, también no recauda nada, o sea que cuando la alícuota es cero no se recauda nada y cuando la alícuota es el ciento por ciento no se recauda nada, porque la actividad económica obviamente se desalienta.

Ahora, en el medio, hay un punto de equilibrio -que es el punto de equilibrio de este economista Laffer-, que dice que es el punto óptimo, que obviamente es distinto en cada organización administrativa, en cada país y en cada provincia, y quienes se ocupan de esta actividad tributaria o de hacer leyes sobre esto tienen en cuenta mucho este tema.

No sé si se ha hecho un estudio de esta Curva de Laffer, pero creo que estamos muy cerca del punto en donde cualquier aumento de alícuota va a traer como consecuencia una caída de la recaudación, por una cuestión muy simple: estamos en una situación económica difícil, la actividad privada está asfixiada. Hasta antes de firmarse este Consenso Fiscal, tenía un horizonte en donde había un compromiso por parte del Gobierno provincial y nacional de ir bajando la presión tributaria como una forma de favorecer esta Curva de Laffer y lograr que un incremento de la actividad económica traiga como consecuencia un incremento en la recaudación.

Y me parece un absurdo lo que se está planteando sobre una economía caída, en el piso; con entre el 10 y el 12 por ciento de la caída de la actividad económica, plantear mayor presión tributaria va a ser muy difícil que se cumpla con la premisa de este nuevo Consenso Fiscal.

Es por eso que nosotros, desde el bloque de la Unión Cívica Radical, hemos querido con responsabilidad venir a hacer un análisis, y a lo largo del año y en años anteriores hemos estado haciendo aportes tratando de encontrar caminos que nos permitan bajar la presión tributaria sin que eso signifique que en Provincia cobre menos, porque tenemos claro que la Provincia necesita tener sus recursos.

De lo que sí estamos convencidos, señor presidente, y por eso nuestro voto va a ser negativo para este proyecto, es de que este Consenso Fiscal no va a cumplir con esos dos objetivos -muy loables los dos-: generar inversión privada y más empleo y aliviar las rentas de la Provincia.

Por lo dicho –reitero- no vamos a acompañar el proyecto, señor presidente.

Muchísimas gracias.

Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador Rins.

Tiene la palabra el legislador García Elorrio.

Sr. García Elorrio.- Señor presidente: este Consenso Fiscal que traen a nuestra consideración pudo perfectamente haberse tratado entre el 13 de noviembre y el 4 de diciembre, que fue la fecha en que nosotros debíamos estar analizando el Presupuesto la Provincia, porque perfectamente era conocido, sobre todo a fin de noviembre, que era la pretensión del Estado nacional.

Entonces, perfectamente el Gobernador de la Provincia o esta Legislatura pudimos haber emitido una resolución, en virtud de la cual autorizábamos al Gobernador de la Provincia a firmar este Consenso Fiscal sobre la base de la minuta que acompañaba la hipotética resolución, porque estaba ya el conocimiento.

Pero, bueno, como acá se hacen las cosas de otra forma, ahora solamente nos llega el pacto que han firmado el 4 de diciembre, donde nosotros no le podemos poner ni una coma, ni un punto, ni hacerle el más mínimo reproche. Y fíjense, esto no es competencia del Gobernador de la Provincia, en este caso del contador Calvo, que lo pude distinguir por televisión el día de la firma del Consenso, yo creo que no lo es.

Que se puede hacer, se puede, más cuando se tiene la mayoría que ustedes tienen se puede ratificar sin ningún inconveniente, pero es una mala praxis institucional hacerlo porque, según el artículo 104 de la Constitución, si hay una materia que es propia del Parlamento es el tema de los impuestos; tiene una trayectoria de siglos que sean los parlamentos los que tengan la última palabra en materia de impuestos. Desde hace siglos en occidente el pueblo y sus representantes... ¿Sabe por qué? Porque el que tiene la caja y maneja el poder, a veces es manirroto, maniloca, hace pavadas con los recursos públicos o cobra demasiados impuestos, entonces, en definitiva, es materia del Parlamento, y en este caso el Parlamento de la Provincia de Córdoba, porque son impuestos atinentes.

Entonces, creo que el procedimiento, no sé si estuvo viciado, pero se pudo haber hecho mejor, alguna vez tenemos que empezar a cuidar las formas constitucionales.

Mire, a la hora de firmar un consenso fiscal con la Nación, lo que vi ese día es a todos los gobernadores ahí en una carrera de necesitados, quién necesitaba menos, todos perfectamente ordenaditos por la chequera, porque nosotros reproducimos a escala provincial un inmenso desfasaje que la Nación tiene a nivel federal. Esa actitud de los gobernadores provinciales, todos puestos en fila para decirle a quien hoy manda que ese era el pacto fiscal y firmarle el Consenso Fiscal ya lo vimos con Macri en el 2017, no recuerdo cómo se discutió, la verdad es que los años no pasan en vano en mi cabeza, pero sí leo los diarios del 2020, y más o menos me doy cuenta de que los gobernadores, en definitiva, tienen necesidades de toda especie.

Le decía que este sistema de desfasaje que tenemos nosotros de quitarle cada día a la Legislatura atribuciones propias, pero ya escandalosamente quitarle atribuciones propias, como es venir a refrendar un pacto que afecta de lleno a la esencia fiscal de esta Provincia, sin haber tenido ninguna posibilidad de ninguna especie, a ver, ¿a quién de nosotros lo convocó el Poder Ejecutivo?

Miren, esta es la prueba de lo que quiero afirmar: hemos tenido reuniones de comisión este año hasta aburrirnos y ¿en qué comisión y cuándo vino el Poder Ejecutivo a decirnos lo que pensaba firmar y por qué lo pensaba firmar. Se puede haber tocado de refilón el tema, y estábamos todos acá. Pero ¿saben por qué no lo hicieron? Porque no está ni en la cabeza "imperator" del señor que tenemos acá a 300 metros a la derecha, no está en la cabeza de ese emperador que esto es un Cuerpo que merece respeto, y bien pudo -y no lo hizo- habernos pedido que sacáramos una resolución apoyando este Consenso Fiscal, dándole facultad al Gobernador para firmarlo o, por lo menos, venir a contarle. Es más, vinieron ministros -no todos los que tenían que venir- y este tema no se desarrolló de ninguna manera específicamente lo que iba a firmar Córdoba.

Pero así es un país que está devaluado federalmente; está al revés, está exactamente al revés de cómo lo diseñaron los constituyentes del '53, cuando se hizo al revés: se hizo desde las provincias a la Nación, hasta que llegó el día en el cual las provincias cedieron facultades muy concretas y precisas a la Nación y, después, a lo largo del tiempo la Nación se fue apropiando de un montón de facultades que no le corresponden y, hoy, a las provincias nos maneja con la chequera, tal cual lo estamos viendo.

Esa Constitución que establece que las provincias deben estar en el mismo sistema basado en una división de Poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, tampoco funciona a escala provincial, como el caso de nuestra provincia, en dónde, en este momento, prácticamente no se distinguen los tres Poderes del Estado; el único que se distingue es el Poder Ejecutivo; el Legislativo –lo vemos en multitud de cosas– directamente va por detrás de los acontecimientos, sin ningún tipo de autonomía, y la cabeza del Poder Judicial parece una delegación del Poder Ejecutivo.

Por lo tanto, ¿por qué me escandalizaría yo que nos hagan votar esto de esta forma?

Lo escuché al señor miembro informante que defendió el Pacto Fiscal, el Consenso Fiscal, decir una frase que no sé si la ha meditado convenientemente al momento de proferirla. Dijo: “esto ayuda para el endeudamiento responsable”; entonces, a Córdoba llegó tarde este Pacto o Consenso Fiscal, porque nuestra provincia se endeudó en moneda extranjera a 16 pesos por dólar, y ahora anda a conseguir dólares a menos de 160 pesos, y la Nación no los quiere entregar a las provincias; o sea, no sólo no se consiguen los dólares, sino que, aunque se consiguieran, nunca estuvo en los planes del Gobernador Schiaretti afrontar las deudas; pensó que iba a negociar fácil, y ahora vemos que firma como si no pasara nada un pacto, un consenso en el cual nos hablan del endeudamiento responsable. No entiendo esa devaluación de la palabra, en una provincia doblemente en default que se jacta de sí misma y considera que esto ayuda a su endeudamiento responsable.

Por estas razones, por la forma, quiero recordarles que esta provincia ha tenido, por las decisiones fiscales que los Ejecutivos de esta Provincia tomaron en los últimos 20 años, una pérdida incommensurable en impuestos patrimoniales directos, como eran los inmobiliarios rurales. Ese manejo electoral que ha hecho Hacemos por Córdoba con el Impuestos Inmobiliario Rural, desde hace muchísimo tiempo, para impedir que la Nación cobrara impuestos nacionales vinculados a la actividad de los campos, fundamentalmente, eso ha sido espantoso para Córdoba.

Cuando se escriban las malas praxis del Gobierno de Hacemos por Córdoba y de Unión por Córdoba, la número uno va a ser la política fiscal, cómo Córdoba aniquiló impuestos patrimoniales con finalidad electoral, y se cebó en los Ingresos Brutos.

La segunda mala praxis que será recordada históricamente es cómo endeudaron a Córdoba al punto de su destrucción.

Y la tercera mala praxis que, evidentemente, también será recordada, es un tema al que me voy a referir más adelante, cuando se traten los puntos que siguen en este debate.

Por estas razones, por la ausencia mínima del sistema federal previsto en el artículo 5º de la Constitución provincial, esta banca y este bloque va a votar en contra de este Consenso.

Sr. Presidente (González).– Gracias, legislador.

Tiene la palabra la legisladora Noel Argañaraz.

Sra. Argañaraz.– Muchas gracias, señor presidente.

La firma de este Consenso Fiscal, para nosotros, no es solamente un acuerdo económico, es también un pacto político que acuerda la sumisión de nuestro país a los dictados del Fondo Monetario Internacional.

Estamos en el régimen del FMI, y todas las discusiones entre Nación y las provincias y los municipios son por los restos que quedan luego de que se garantice el pago a los organismos y los acreedores internacionales y que los grandes capitalistas mantengan sus exenciones.

Esta deuda, tomada de manera ilegal, fue –como reconoció el propio FMI–, un préstamo para bancar la campaña de la reelección del ex Presidente Macri.

La burguesía argentina hizo lo que siempre hace cuando ve dólares dando vuelta: los fuga. Así es como nuestro país tiene 400 mil millones de dólares en paraísos fiscales u otros países.

Lo que se firma en este pacto, luego tiene la correlación en el Congreso nacional, donde parlamentarios que responden políticamente a los gobernadores apoyan iniciativas del Gobierno.

Vale recordar, además, aquel Consenso firmado en 2017. El primer paso, luego de la firma de ese pacto, fue la votación del robo a los jubilados de 100 mil millones de pesos. Ese fue el comienzo del fin del Gobierno de Macri.

Ahora, casualmente, la primera medida económica que se vota en el Congreso, luego de la firma del Consenso, es la misma: la nueva movilidad jubilatoria, que busca profundizar el ajuste, ya que ni siquiera garantiza una cláusula de piso inflacionario.

Los diputados de Hacemos por Córdoba van a votar, cuando no, de la misma forma que en el 2017, a favor de las fórmulas que achiquen el déficit de las Cajas de Jubilaciones.

Como dije hace un par de semanas, en la votación del Presupuesto, los adultos mayores, luego de una vida dedicada al trabajo, son para ustedes simplemente un gasto.

Tampoco podemos dejar de recordar un gran hecho político que subyace a la discusión de la transferencia de fondos de la Nación a las provincias, que fue la quita de recursos a la ciudad de Buenos Aires para la provincia de Buenos Aires, para financiar la “paritaria 9 milímetros” que obtuvo la Bonaerense mediante una extorsión armada, rodeando la quinta presidencial de Olivos.

La Policía bonaerense, con el bolsillo lleno y un nuevo equipamiento, celebró el triunfo de su paritaria reprimiendo brutalmente a las familias de Guernica que exigen un pedazo de tierra donde vivir; es decir, una política reaccionaria en toda la línea.

Hay un asunto central que atraviesa todo el Consenso que es la deuda de la Nación y de las provincias. Sabemos que algunas, como Neuquén y Chubut, han puesto como garantía las regalías petroleras.

Aún no sabemos qué más quiere entregar Córdoba; les han rechazado al menos tres propuestas y estamos en default técnico; es más probable que usen de garantía la coparticipación, como hizo la municipalidad de Córdoba con el crédito que le aprobaron la semana pasada por 60 millones de dólares. Esto significa, para que sepa la población que, ante cualquier devaluación, como la que vivimos casi de manera permanente desde hace un año y medio, los recursos para salud o educación se verán reducidos sensiblemente e irán a parar a fondos de inversión extranjeros que han ganado miles de millones de dólares durante la pandemia, devaluaciones que -dicho sea de paso- vienen siendo pedidas insistentemente por uno de los pilares políticos de su gobierno, que son las patronales rurales.

Este Consenso es también la consumación del Presupuesto 2021 que, aún en medio de la pandemia, y con la segunda ola –que señalan los especialistas- más cercana, tienen previstos recortes en salud y la eliminación del IFE. También eliminan la reducción de impuestos como Ingresos Brutos, este impuesto se aplica de una manera tan regresiva que las patronales lo descargan sobre los consumidores en el precio final del producto -claro- porque ellas nunca pierden.

Por eso, desde el Frente de Izquierda rechazamos este Consenso Fiscal y, por supuesto, llamamos al pueblo trabajador a enfrentarlo mediante la organización independiente y la movilización para evitar que le sigan robando a nuestros jubilados y jubiladas, y las pensiones; para garantizar la educación, la salud, y la vivienda para todas y todos tenemos que imponer un desconocimiento soberano de la deuda, una deuda que es odiosa y no fue tomada en provecho del pueblo trabajador; un desconocimiento que incluya, de mínima, el control del comercio exterior y la estatización del sistema bancario para evitar que se sigan fugando miles de millones de dólares al exterior.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.

Tiene la palabra la legisladora Luciana Echevarría.

Sra. Echevarría.- Señor presidente: voy a ser muy breve, porque es evidente que no se está proponiendo ningún debate sobre este Consenso Fiscal, sino, simplemente, refrendar lo ya firmado, algo que, claramente, no voy a hacer.

Siempre soy muy crítica de las instituciones de este régimen político porque la democracia a la que yo aspiro es una con mecanismos de participación mucho más directos del conjunto de la población en la toma de decisiones. Pero ni siquiera estamos en ese punto del debate.

Ahora estamos hablando de que ustedes no pueden ni siquiera garantizar la institucionalidad limitada y acotada que tenemos; manosean cada una de las instituciones y las leyes que ustedes mismos defienden en sus discursos; todo lo que estamos votando hoy, no sólo este Consenso Fiscal, da cuenta de esto.

Más allá de los discursos de ocasión, de la sonrisa exultante de Alberto Fernández, y de los gobernadores -en nuestro caso el Vicegobernador-, lo cierto es que no hay nada para que el pueblo se ponga contento detrás de este Consenso, sino más bien todo lo contrario.

De lo que se trata la firma de este acuerdo es de cómo repartir, acomodar, gestionar los recursos de una economía marcada de punta a punta por una crisis brutal. Y lo que deciden es seguir priorizando el pago de la deuda a los bonistas, al FMI, seguir endeudándose porque, a pesar de que, supuestamente, acuerdan no tomar nueva deuda en moneda extranjera durante un año, lo cierto es que son tantas las excepciones que prácticamente todos los créditos quedan incluidos, y sostener un nivel impositivo alto para aumentar la recaudación, y que, obviamente, van a pagar los sectores que menos tienen, porque es mentira que los Ingresos Brutos los pagan los empresarios, siempre se termina trasladando al consumidor.

Entonces, se pelean por un punto de coparticipación y todos tironean para ver con qué porción de la torta fiscal se quedan, mientras la pobreza y la indigencia crecen, mientras crece la desocupación, el trabajo precario, crece el hambre, la desnutrición; ese es el único crecimiento de nuestro país. Y ni siquiera en esta situación tan crítica se abren a pensar un sistema impositivo distinto.

El consenso al que nosotros aspiramos no es con los gobernadores y el Presidente, todos ellos responsables de los padecimientos que sufre la población, sino que aspiramos a un consenso con los de abajo, con las mayorías populares que viven de su trabajo, y eso arranca por terminar con este sistema impositivo regresivo e injusto, y plantear uno progresivo donde realmente paguen más los que más tienen y se eliminen, por ejemplo, impuestos injustos como el IVA de la canasta básica familiar.

De esto hablábamos desde el Frente de Izquierda Unidad cuando planteábamos la necesidad de implementar un Impuesto a las Grandes Fortunas, un impuesto y no un aporte miserable y por única vez como el que finalmente se votó. La idea es que los que siempre ganan sean los que paguen las crisis que provocaron, porque las crisis no caen del cielo, siempre hay responsables que no son, claramente, los sectores populares.

Por eso vamos a seguir peleando contra este sistema injusto, porque estamos realmente convencidos y convencidas de que no sólo es posible, sino, fundamentalmente, necesario.

Gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora Echevarría.

En consideración en general y en particular, en una misma votación, el proyecto 31988/E/20, tal como fuera despachado por las Comisiones de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado en general y en particular.

Se comunicará al Poder Ejecutivo.

**PROYECTO DE LEY
31988/E/20**

**Al Sr. Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Fernando CALVO
S_____/____D**

Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio, a los integrantes del Cuerpo que preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144, inciso 3º, de la Constitución Provincial, a fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el que se propicia la aprobación del "Consenso Fiscal 2020", suscripto en la Ciudad de Buenos Aires, el día 4 de diciembre de 2020, entre el Estado Nacional y las Provincias.

Cabe señalar que el referido acuerdo tiene como antecedentes al Acuerdo para un Nuevo Federalismo, de fecha 23 de mayo de 2016, ratificado por Ley Nacional Nº 27.260, al Consenso Fiscal 2017, de fecha 16 de noviembre de 2017, aprobado por Ley Nacional Nº 27.429 y Ley

Provincial N° 10.510, al Consenso Fiscal 2018, de fecha 13 de septiembre de 2018, aprobado por Ley Nacional N° 27.469 y Ley Provincial N° 10.591, y al Consenso Fiscal 2019, de fecha 17 de diciembre de 2019, aprobado por Ley Nacional N° 27.542 y Ley Provincial N° 10.683.

Los objetivos principales de dichos acuerdos fueron la realización de acciones y/o políticas concurrentes a la armonización de las estructuras tributarias de las distintas jurisdicciones, y generar la consolidación fiscal en todos los niveles de gobierno, reducir inequidades del sistema tributario, lograr la distribución de los fondos públicos equitativamente y aplacar las desigualdades y asimetrías en el esquema de gastos y recursos públicos. Luego, en diciembre de 2019, atento a la grave crisis económica, se determinó que resultaba imprescindible introducir modificaciones a los compromisos oportunamente asumidos por el Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 2017 y 2018.

En ese marco, se ha suscripto el Convenio cuya aprobación por la Legislatura Provincial se gestiona, el cual incluye, entre otras:

I.- En materia administración tributaria nacional: el compromiso de la AFIP de poner a disposición herramientas que colaboren a que todos los organismos provinciales de recaudación tributaria validen los números de claves de Identificación (CUIT/CUIL/CDI) y devolver los resultados del proceso de análisis e incorporación de los archivos recibidos con la información sobre la titularidad de bienes inmuebles y otros bienes registrables; y el compromiso de las Provincias de remitir una vez al año a AFIP la información sobre la titularidad de bienes inmuebles y otros bienes registrables y su valuación, con corte al 31 de diciembre de cada año, a través de los sistemas que ponga a disposición dicho organismo;

II.- En materia tributaria provincial: prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2021 la suspensión de los compromisos mencionados en los incisos b), c), d), h), j), k), l), m) y s) de la Cláusula III del Consenso Fiscal 2017, de fecha 16 de noviembre de 2017, aprobado por Ley N° 27.429; excluir del Anexo I del inciso d) de la Cláusula III del Consenso Fiscal 2017, las alícuotas máximas establecidas para las Actividades Intermediación Financiera y Servicios Financieros; Profundizar la adecuación del funcionamiento de los regímenes de retención, percepción y recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos – Convenio Multilateral, de manera de respetar el límite territorial de la potestad tributaria de las jurisdicciones y evitar la generación de saldos inadecuados o permanentes a favor del contribuyente; procurar las medidas necesarias en los procedimientos vigentes en cada Jurisdicción a efectos de aplicar mecanismos de devolución automática, compensación o transferencia de crédito del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a aquellos contribuyentes que tengan saldos a favor generados por retenciones, percepciones y/o recaudaciones, siempre que cumplan con los requisitos específicos del caso en cuestión; en relación al Impuesto a los Automotores, determinar como base imponible del Impuesto, como mínimo, el 95% de las valuaciones de los vehículos automotores que establezca la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios (DNRNPAYCP) y fijar como alícuota mínima anual del tributo un 2% de la base imponible determinada, excepto para el caso particular de los automotores vinculados a actividades productivas;

III.- En materia de endeudamiento responsable: se determina que, a partir del 31 de diciembre de 2020 y durante un año, las Provincias no podrán incrementar el stock de deuda denominada en moneda extranjera respecto a los valores registrados a tal fecha, quedando exceptuadas: a- las líneas de financiamiento con organismos bilaterales o multilaterales de crédito o con acreedores institucionales siempre que, estos últimos otorguen financiamiento de largo plazo con características similares a los primeros, en términos de repago y de destino de los fondos; b- los desembolsos pendientes originados en convenios firmados con anterioridad al 31 de diciembre de 2020, cuyos montos o saldo se encuentren detallados en la normativa correspondiente; c- los incrementos de stock generados por las operaciones que impliquen administración de pasivos y/o canjes y/o reestructuraciones de los servicios de vencimiento de intereses y/o amortizaciones de capital de títulos públicos, denominados en moneda extranjera emitidos con anterioridad al 31 de diciembre de 2020; d- aquellos endeudamientos que tengan como garantía o repago recursos tributarios o no tributarios de origen provincial percibidos en moneda extranjera y que no se encuentren afectados en el presupuesto en curso ni en los sucesivos.

Por otra parte, a partir del 31 de diciembre de 2020 y durante un (1) año, las operaciones de emisión de Títulos Públicos, en moneda nacional de las Provincias, cuyo vencimiento sea superior o igual a los 18 meses desde su emisión, estarán exceptuadas de lo establecido en los artículos 7º y 10º de la Ley N° 23.928, siempre y cuando los fondos obtenidos se destinen a financiar obras de infraestructura o a reestructuración de servicios de deuda emitida con anterioridad al 31 de diciembre de 2020.

IV.- En materia de Procesos Judiciales: el compromiso de las Provincias de abstenerse, por un período de un año, de iniciar procesos judiciales, y suspender por igual término los ya iniciados, relativos al régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, a afectaciones específicas de recursos y transferencias de competencias, servicios o funciones, por hechos anteriores a la entrada en vigencia del Consenso, con excepción de aquellos que cuenten con sentencia firme y aquellas acciones que se inicien al solo efecto de interrumpir la prescripción, cuando ésta se produzca durante el lapso referido.

Por último, destácase que en el Punto III del Convenio en cuestión se impone la obligación de los poderes ejecutivos de las Provincias firmantes de elevar un proyecto de ley aprobatorio del Consenso Fiscal 2020, así como gestionar la modificación de las leyes necesarias para su cumplimiento, autorizando a los respectivos Poderes Ejecutivos para dictar normas a tal fin.

Por las razones expuestas, solicito a Usted ponga el presente a consideración de la Legislatura Provincial, para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.

Sin otro particular, saludo a Usted con distinguida consideración.

Juan Schiaretti, Jorge Córdoba, Osvaldo Giordano.

**LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:**

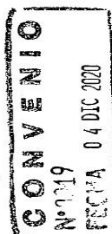
ARTÍCULO 1º. - APRUÉBASE el "Consenso Fiscal 2020", suscripto entre el Estado Nacional y las Provincias, celebrado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 4 de diciembre de 2020 y registrado en el Protocolo de Convenios y Tratados de la Secretaría Legal y Técnica de Fiscalía de Estado con el Nº 19, de fecha 4 de diciembre de 2020.



El Acuerdo, compuesto de cinco (5) fojas útiles, forma parte integrante de la presente Ley como Anexo I.

ARTÍCULO 2º.- El Poder Ejecutivo Provincial dispondrá todas las medidas y dictará las normas necesarias para dar cumplimiento a los compromisos asumidos en el Acuerdo aprobado por el artículo 1º de esta Ley.

ARTÍCULO 3º. - De forma.

Juan Schiaretti, Jorge Córdoba, Osvaldo Giordano.

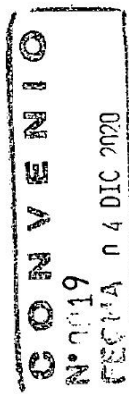


TESTIMONIO	
 	
1007969	
Escritorio General del Gobierno de la Nación	
1	Folio 333.- PRIMER TESTIMONIO: PROTOCOLIZACIÓN ACUERDO: ESTADO
2	NACIONAL ARGENTINO – PROVINCIAS. ESCRITURA NÚMERO: OCHENTA Y TRES.
3	En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los cuatro días
4	del mes de diciembre del año dos mil veinte, ante mí Escritorio General del
5	Gobierno de la Nación, COMPARECE el señor Ministro del Interior, Doctor Eduardo
6	Enrique de PEDRO, argentino, nacido el 11 de noviembre de 1976, casado, con
7	Documento Nacional de Identidad número 25.567.121, domiciliado legalmente en
8	la calle 25 de Mayo número 101, de esta Ciudad. IDENTIFICO al compareciente en
9	los términos del artículo 306, inciso b) del Código Civil y Comercial de la Nación.
10	INTERVIENE en representación del ESTADO NACIONAL ARGENTINO – MINISTERIO
11	DEL INTERIOR, en su carácter de Ministro, de cuya notoriedad en el cargo que
12	ocupa, doy fe; y EXPONE: Que en el día de fecha se suscribió un Convenio entre el
13	Estado Nacional Argentino y las provincias. Que el mismo fue suscripto por el señor
14	Presidente de la Nación, Doctor Alberto Ángel FERNÁNDEZ y los siguientes
15	gobernadores: de la Provincia de Buenos Aires, Doctor Axel KICILLOF; de la
16	Provincia de Catamarca, Licenciado Raúl Alejandro JALIL; de la Provincia del Chaco,
17	Contador Jorge Milton CAPITANICH; de la Provincia del Chubut, Doctor Mariano
18	Ezequiel ARCIONI; de la Provincia de Corrientes, Doctor Gustavo Adolfo VALDÉS;
19	de la Provincia de Entre Ríos, Contador Gustavo Eduardo BORDET; de la Provincia
20	de Formosa, Doctor Gildo INSFRÁN; de la Provincia de Jujuy, Contador Gerardo
21	Rubén MORALES; de la Provincia de La Rioja, señor Ricardo Clemente QUINTELA;
22	de la Provincia de Mendoza, Doctor Rodolfo Alejandro SUÁREZ; de la Provincia de
23	Misiones, Doctor Oscar Alberto HERRERA AHUAD; de la Provincia del Neuquén,
24	Contador Omar GUTIÉRREZ; de la Provincia de Río Negro, Licenciada Arabela
25	Marisa CARRERAS; de la Provincia de Salta, Doctor Gustavo Adolfo RUBERTO



SÁENZ STIRO; de la Provincia de San Juan, Doctor Sergio Mauricio UÑAC; de la
Provincia de Santiago del Estero, Doctor Gerardo ZAMORA; de la Provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Profesor Gustavo Adrián
MELELLA; de la Provincia de Tucumán, Doctor Juan Luis MANZUR; y por los
señores Vicegobernadores: de la Provincia de Córdoba, Contador Manuel
Fernando CALVO; de la Provincia de Santa Cruz, Contador Eugenio Salvador
QUIROGA; y de la Provincia de Santa Fe, Doctora Alejandra Silvana RODENAS.

Que, con la finalidad de que cada uno de los firmantes cuente con el instrumento
que acredite la firma de ese acuerdo, me hace entrega del ejemplar firmado por las
partes, para que lo agregue a este Protocolo, proceda a transcribirlo y expida
testimonio de esta escritura. Acepto el requerimiento y procedo a transcribir el
documento que agregó, que es del siguiente tenor: **"CONSENSO FISCAL 2020 En la
Ciudad de Buenos Aires, a los 4 días del mes de diciembre de 2020, el señor
Presidente de la Nación Argentina, los señores gobernadores y las señoras
gobernadoras abajo firmantes, y los señores vicegobernadores y las señoras
vicegobernadoras expresamente autorizados al efecto, declaran: Que, con fecha 23
de mayo de 2016, los señores gobernadores y las señoras gobernadoras de
diecinueve (19) provincias, el Vicejefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (en adelante "CABA") y el entonces Ministro del Interior, Obras
Públicas y Vivienda de la Nación firmaron el Acuerdo para un Nuevo Federalismo,
posteriormente ratificado por el Honorable Congreso de la Nación por medio de la
Ley N° 27.260. Que, con fecha 16 de noviembre de 2017, el Estado Nacional,
veintidós (22) provincias y la CABA, celebraron el Consenso Fiscal (en adelante
"Consenso Fiscal 2017"), por medio del cual se buscó armonizar las estructuras
tributarias de las distintas jurisdicciones. Dicho acuerdo fue ratificado por el**



TESTIMONIO



T007970

Escribanía General del Gobierno de la Nación

YANINA L. CAPURRO
ESCRIBANA ADSCRIPTA

Honorable Congreso de la Nación mediante la sanción de la Ley N° 27.429, mientras que veintiún (21) provincias y la CABA hicieron lo propio a través de sus respectivas legislaturas. Que, en el año 2018, resultó necesario adecuar algunas disposiciones de las acordadas en el Consenso Fiscal 2017. Por tal motivo, con fecha 13 de septiembre de 2018, el Estado Nacional, dieciocho (18) provincias y la CABA, celebraron el "Consenso Fiscal 2018", que fue ratificado por el Congreso de la Nación a través de la Ley N° 27.469. Que, el 17 de diciembre de 2019, ante una depresión de la economía nacional que provocó un aumento significativo de la vulnerabilidad económica y social de vastos sectores de la población, resultó imprescindible introducir modificaciones a los compromisos asumidos por las provincias y la CABA en los citados consensos fiscales celebrados en 2017 y 2018, por lo que se suscribió el Consenso Fiscal 2019, que fuera ratificado mediante la Ley N° 27.542. Que, a través de la Ley N° 27.541 se estableció la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, hasta el 31 de diciembre de 2020. Que, a su vez, mediante el Decreto N° 260/20 se amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541 por el plazo de UN (1) año, en virtud de la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el virus SARS-COV-2. Que, por otro lado, frente al escenario de una crisis sanitaria y social sin precedentes y con el objetivo de proteger la salud pública, a través del Decreto N° 297/20 se estableció para todas las personas que habitaran en el país o se encontraran en él en forma temporaria al momento del dictado del mismo, la medida de "aislamiento social, preventivo y obligatorio" (ASPO), por un plazo determinado, durante el cual todas las personas debían permanecer en sus residencias habituales o en el lugar en que se encontrasen y

CONVENIO
N° 7119
FECHA 04 DIC 2020



abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo, quedando excluidas solo las personas afectadas a las actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia. Dicha medida, fue prorrogada sucesivamente, con las adecuaciones pertinentes, por los decretos Nros. 325/20, 355/20, 408/20, 459/20, 493/20, 520/20, 576/20, 605/20, 641/20, 677/20, 714/20, 754/20, 792/20, 814/20, 875/20 y 956/20. Que de acuerdo a las previsiones del Decreto Nro. 956/20, se dispuso la vigencia hasta el día 20 de diciembre del presente año del denominado "distanciamiento social, preventivo y obligatorio" ("DISPO") en la gran mayoría de las provincias del país y del "aislamiento social, preventivo y obligatorio" ("ASPO") en algunos aglomerados urbanos en particular. Que como consecuencia de la citada emergencia se ha reducido la actividad económica con inevitable impacto en los niveles de recaudación, a la vez que los Gobiernos Nacional y Provinciales necesitan contar con recursos fiscales para la atención de una creciente demanda social cuya resolución permita contener a los sectores más vulnerables de la población. Que en dicho marco resulta imprescindible aunar los esfuerzos de las administraciones tributarias a efectos de mejorar y avanzar en la armonización de las acciones, reduciendo y simplificando trámites y presentaciones de los y las contribuyentes, en el marco del federalismo fiscal. Que resulta necesario que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a los fines de optimizar sus procesos de verificación y fiscalización, cuente con la información concerniente a la titularidad de los bienes inmuebles y otros bienes registrables y su valuación, cuyos resultados se verán reflejados en la coparticipación federal de los impuestos nacionales. Que se evalúa conveniente suspender las obligaciones en materia de exenciones y escalas de alícuotas máximas contempladas para los períodos fiscales 2020 y 2021 para el Impuesto sobre los Ingresos Brutos y las disposiciones de los

CONVENIO
Nº 19
FECHA 04 DIC 2020

TESTIMONIO



T007971

Escribanía General del Gobierno de la Nación

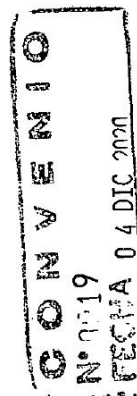
VANINA L. CAPURRO
ESCRIBANA ADSCRIPTA

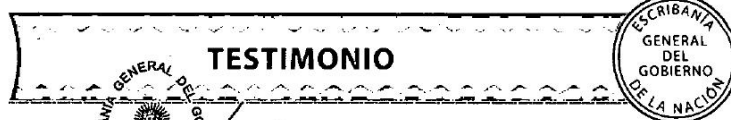
CONVENIO
Nº 19
FECHA 04 DIC 2020

1 *Impuestos Inmobiliario, a los Sellos, aquellos que gravan la nómina salarial y a los*
2 *tributos específicos. Que deben introducirse modificaciones a la escala de alícuotas*
3 *máximas establecidas en el anexo I de la Cláusula III del Consenso Fiscal, en*
4 *particular para la Actividad Intermediación Financiera y en lo atinente a los*
5 *servicios conexos a las actividades económicas allí mencionadas. Que corresponde*
6 *dar continuidad a una mejor adecuación del funcionamiento de los regímenes de*
7 *retención, percepción y recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para los*
8 *contribuyentes del Convenio Multilateral. Que es conveniente introducir*
9 *modificaciones tendientes a homogeneizar el tratamiento impositivo que las*
10 *distintas jurisdicciones provinciales o municipales, según sea el caso, otorgan en el*
11 *impuesto automotor a fin de eliminar distorsiones en la carga tributaria basadas en*
12 *el lugar de radicación así como mejorar el índice de cobrabilidad del mismo. Que*
13 *resulta oportuno coadyuvar a definir una estrategia para el endeudamiento*
14 *responsable de las Provincias que posibilite el acceso a nuevas fuentes de*
15 *financiamiento y el desarrollo de nuevos instrumentos para captar crédito en*
16 *moneda doméstica, a la vez que se mantenga como eje la sostenibilidad de sus*
17 *deudas. Que en un marco de resolución de conflictos concertado y, considerando*
18 *imperioso reducir el nivel de litigiosidad entre el Estado Nacional y las jurisdicciones*
19 *provinciales en el marco de un 2021 "post-pandemia" en el cual la recuperación de*
20 *la economía será el eje central de toda política pública, resulta necesario poner en*
21 *suspense las causas judiciales vinculadas controversias derivadas del federalismo*
22 *fiscal. En virtud de lo expuesto, las autoridades abajo firmantes celebran este*
23 *acuerdo por medio del cual se conviene lo siguiente: I. COMPROMISOS COMUNES*
24 *En materia administración tributaria nacional 1.- La Administración Federal de*
25 *Ingresos Públicos reafirma el compromiso de poner a disposición herramientas que*



colaboren a que todos los organismos provinciales de recaudación tributaria validen los números de claves de Identificación (CUIT/CUIL/CDI) y, en dicho marco, devolver los resultados del proceso de análisis e incorporación de los archivos recibidos desde las distintas jurisdicciones con la información sobre la titularidad de bienes inmuebles y otros bienes registrables. 2.- Las Provincias remitirán una vez al año a la Administración Federal de Ingresos Públicos la información sobre la titularidad de bienes inmuebles y otros bienes registrables y su valuación, con corte al 31 de diciembre de cada año, a través de los sistemas que ponga a disposición dicho organismo. 3.- Las Provincias ratifican su voluntad de avanzar con la Administración Federal de Ingresos Públicos en la consolidación de acciones que reduzcan y simplifiquen los trámites necesarios para asegurar el cumplimiento tributario por parte de los y las contribuyentes a escala nacional, provincial y municipal en el marco del federalismo fiscal vigente. 4.- Se propenderá a que las Provincias adhieran al Padrón Federal - Registro Único Tributario administrado por la Administración Federal de Ingresos Públicos y la Comisión Arbitral, para todos los contribuyentes inscriptos en Convenio Multilateral, en el transcurso del año 2021. 5.- Las Provincias y Nación se comprometen a trabajar en un programa integral que tendrá por objetivo la simplificación y coordinación tributaria federal, que establezca criterios comunes sobre: i) normas generales y de procedimientos acerca de tributos nacionales, provinciales y municipales, ii) sistemas de registro, declaración y pago de las obligaciones, iii) regímenes de retención, percepción y recaudación, iv) regímenes especiales para pequeños contribuyentes y v) domicilio fiscal electrónico unificado. 6.- Reafirmar que la reasignación de recursos en el marco de la transferencia de competencias, servicios o funciones previstas en el párrafo quinto del inciso 2º del artículo 75 de la Constitución Nacional, no se





T007972

Escribanía General del Gobierno de la Nación

YANINA L. CAPURRO
ESCRIBANA ADSCRITA

1 implementa mediante el esquema de distribución de fondos previsto en la Ley N°
2 23.548 y sus normas modificatorias, complementarias y reglamentarias. II.-

3 **COMPROMISOS ASUMIDOS POR LAS PROVINCIAS En materia tributaria**

4 **provincial 1.-** Prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2021 la suspensión de los
5 compromisos mencionados en los incisos b), c), d), h), j), k), l), m) y s) de la Cláusula

6 III del Consenso Fiscal 2017 de fecha 16 de noviembre de 2017, aprobado por Ley N°

7 27.429. La prórroga de la suspensión del inciso d) de la Cláusula III, referida
8 precedentemente, operará exclusivamente respecto de las exenciones y/o escalas

9 de alícuotas contempladas para los períodos fiscales 2020 y 2021. Para el año 2021,

10 aplicarán las exenciones y/o escalas de alícuotas que establece el Consenso Fiscal

11 2019, aprobado por Ley N° 27.542. 2.- Reafirmar que los servicios conexos a las

12 actividades detalladas en el Anexo I del inciso d) del Consenso Fiscal mencionado

13 precedentemente, no se encuentran sujetos a las alícuotas máximas establecidas en

14 el mismo. 3.- Excluir del Anexo I del inciso d) de la Cláusula III del Consenso Fiscal

15 2017 las alícuotas máximas establecidas para las Actividades Intermediación

16 Financiera y Servicios Financieros. 4.- Profundizar la adecuación del funcionamiento

17 de los regímenes de retención, percepción y recaudación del Impuesto sobre los

18 Ingresos Brutos – Convenio Multilateral, de manera de respetar el límite territorial

19 de la potestad tributaria de las jurisdicciones y evitar la generación de saldos

20 inadecuados o permanentes a favor del o la contribuyente. Las Provincias

21 respetarán las pautas generales que fijen los organismos del Convenio Multilateral

22 en materia de regímenes de retención, percepción, recaudación e información. 5.-

23 Procurar las medidas necesarias en los procedimientos vigentes en cada Jurisdicción

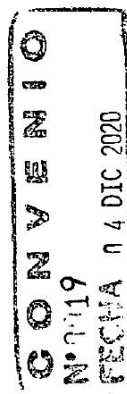
24 a efectos de aplicar mecanismos de devolución automática, compensación o

25 transferencia de crédito del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a aquellos o

CONVENIO
N° 7019
FECHA 04 DIC 2020



aquellas contribuyentes que tengan saldos a favor generados por retenciones, percepciones y/o recaudaciones, siempre que cumplan con los requisitos específicos del caso en cuestión. 6.- En relación al Impuesto a los Automotores: 6.1. Determinar como base imponible del Impuesto, como mínimo, el noventa y cinco por ciento (95%) de las valuaciones de los vehículos automotores que establezca la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios (DNRNPAYCP). 6.2. Fijar como alícuota mínima anual del tributo un dos por ciento (2%) de la base imponible determinada conforme lo establecido en el inciso anterior, excepto para el caso particular de los automotores vinculados a actividades productivas. 6.3. Adoptar las medidas necesarias tendientes a incrementar el índice de cobrabilidad del tributo. 6.4. Promover la adhesión de los gobiernos municipales a lo establecido precedentemente para el caso de aquellas jurisdicciones que hayan delegado el tributo en la órbita municipal. **B- En materia de endeudamiento responsable** 1.- A partir del 31 de diciembre de 2020 y durante un (1) año, las Provincias no podrán incrementar el stock de deuda denominada en moneda extranjera respecto a los valores registrados a tal fecha. A los fines del cumplimiento de lo dispuesto precedentemente quedan exceptuadas: a- las líneas de financiamiento con organismos bilaterales o multilaterales de crédito o con acreedores institucionales siempre que, estos últimos, otorguen financiamiento de largo plazo con características similares a los primeros, en términos de repago y de destino de los fondos. b- los desembolsos pendientes originados en convenios firmados con anterioridad al 31/12/2020, cuyos montos o saldo se encuentren detallados en la normativa correspondiente. c- los incrementos de stock generados por las operaciones que impliquen administración de pasivos y/o canjes y/o reestructuraciones de los servicios de vencimiento de intereses y/o amortizaciones



TESTIMONIO



T007973

Escribanía General del Gobierno de la Nación

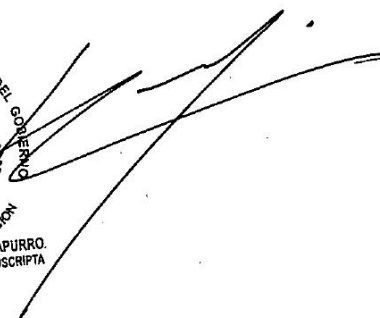
CONVENIO
Nº 0019
FECHA 04 DIC 2020

1 de capital de títulos públicos denominados en moneda extranjera emitidos con
2 anterioridad al 31 de diciembre de 2020. d- aquellos endeudamientos que tengan
3 como garantía o repago recursos tributarios o no tributarios de origen provincial
4 percibidos en moneda extranjera y que no se encuentren afectados en el
5 presupuesto en curso ni en los sucesivos. 2- Las provincias se comprometen a
6 implementar un régimen como el establecido en la presente cláusula para sus
7 respectivos municipios, impulsar su adhesión por parte de estos y controlar su
8 cumplimiento. 3.- A partir del 31 de diciembre de 2020 y, durante un (1) año, las
9 operaciones de emisión de Títulos Públicos, en moneda nacional de las Provincias,
10 cuyo vencimiento sea superior o igual a los 18 meses desde su emisión, estarán
11 exceptuadas de lo establecido en los artículos 7º y 10º de la Ley Nº 23.928, siempre
12 y cuando los fondos obtenidos se destinen a financiar obras de infraestructura o a
13 reestructuración de servicios de deuda emitida con anterioridad al 31 de diciembre
14 de 2020. 4.- El gobierno nacional en uso de las facultades conferidas por el artículo
15 25 de la Ley 25.917, denegará la autorización a toda operación de crédito que se
16 aparte de lo establecido en los puntos 1 y 2 del presente. C- En materia de Procesos
17 Judiciales Abstenerse por un periodo de UN (1) año de iniciar procesos judiciales, y
18 suspender por igual término los ya iniciados, relativos al régimen de Coparticipación
19 Federal de Impuestos, a afectaciones específicas de recursos y transferencias de
20 competencias, servicios o funciones, por hechos anteriores a la entrada en vigencia
21 de este Consenso, con excepción de aquellos que cuenten con sentencia firme y
22 aquellas acciones que se inicien al solo efecto de interrumpir la prescripción, cuando
23 ésta se produzca durante el lapso antes referido. III.- DISPOSICIONES COMUNES
24 Implementación. Dentro de los treinta (30) días de la suscripción del presente, los
25 poderes ejecutivos de las provincias firmantes y del Estado Nacional elevarán a sus



poderes legislativos proyectos de ley para aprobar el presente acuerdo, modificar las leyes necesarias para cumplirlo y autorizar a los respectivos poderes ejecutivos para dictar normas a tal fin. El presente acuerdo producirá efectos respecto de las jurisdicciones que lo aprueben por sus legislaturas y a partir de esa fecha, quedando abierto a la adhesión por parte de los señores gobernadores y señoras gobernadoras de las provincias que no lo suscriben en el día de la fecha. Hay veintidós firmas ilegibles". Es copia fiel, doy fe. Dejo así protocolizado al folio 333 del Registro Notarial del Estado Nacional, el acuerdo precedentemente transcrito, de lo que se expedirá testimonio a sus efectos.- LEO al compareciente que la otorga y firma ante mí, doy fe.- **EDUARDO ENRIQUE DE PEDRO.- CARLOS VÍCTOR GAITÁN.-** Hay un sello: **CARLOS VÍCTOR GAITÁN – ESCRIBANO GENERAL DEL GOBIERNO DE LA NACIÓN.**

-----**CONCUERDA** con su escritura matriz que pasó ante el Escribano General del Gobierno de la Nación, al folio trescientos treinta y tres del Registro Notarial del Estado Nacional, del que soy Escribana Adscripta.- Para la **PROVINCIA DE CÓRDOBA** expido el presente Primer Testimonio en cinco fojas numeradas del T007969 al T007973 correlativamente, que sello y firmo en el lugar y fecha de su otorgamiento.-


 ESCRIBANA GENERAL DEL GOBIERNO
 DE LA NACIÓN
 VANINA L. CAPURRO.
 ESCRIBANA ADSCRIPTA

CONVENIO
 N° 19
 FECHA 4 DIC 2020

DESPACHO DE COMISIÓN

Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 22 de diciembre de 2020

A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:

Las Comisiones de ECONOMÍA, PRESUPUESTO, GESTIÓN PÚBLICA E INNOVACIÓN y de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, al dictaminar acerca del **Proyecto de Ley Nº 31988/E/20**, iniciado por el Poder Ejecutivo, aprobando el "Consenso Fiscal 2020", suscrito entre el Estado Nacional y las Provincias, celebrado en esa ciudad el 4 de diciembre de 2020 y registrado en el Protocolo de Convenios y Tratados de la Secretaría Legal y Técnica de Fiscalía de Estado con el Nº 19, ACONSEJAN, por las razones que en el Plenario dará el señor miembro informante, PRESTARLE APROBACIÓN de la siguiente manera:

**LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:**

ARTÍCULO 1º.- Apruébase el "Consenso Fiscal 2020", suscrito entre el Estado Nacional y las Provincias, celebrado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 4 de diciembre de 2020 y registrado en la misma fecha en el Protocolo de Convenios y Tratados de la Secretaría Legal y Técnica de Fiscalía de Estado con el Nº 19.

El Acuerdo, compuesto de cinco fojas, forma parte integrante de la presente Ley como Anexo I.

ARTÍCULO 2º.- El Poder Ejecutivo Provincial dispondrá todas las medidas y dictará las normas necesarias para dar cumplimiento a los compromisos asumidos en el Acuerdo aprobado por el artículo 1º de esta Ley.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial

Leg. LIMIA, Luis Leonardo, Leg. BLANGINO, Juan José, Leg. RINALDI, Julieta, Leg. SCORZA, Adrián Rubén, Leg. ZORRILLA, Ricardo Roberto, Leg. RONGE, Jaqueline Viviana, Leg. PALEO, Silvia Gabriela, Leg. COSSAR, Marcelo Arnolfo, Leg. MARCONE, María Rosa, Leg. CID, Juan Manuel, Leg. BUSO, María Victoria, Leg. ESLAVA, María Emilia, Leg. LABAT, María Laura, Leg. PETRONE, María Andrea, Leg. ARDUH, Orlando Víctor, Leg. GUDIÑO, Daniela Soledad, Leg. GARADE PANETTA, María, Leg. GARCÍA ELORRIO, Aurelio

**PROYECTO DE LEY – 31988/E/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10730:**

Artículo 1º.- Apruébase el "Consenso Fiscal 2020", suscrito entre el Estado Nacional y las Provincias, celebrado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 4 de diciembre de 2020 y registrado en la misma fecha en el Protocolo de Convenios y Tratados de la Secretaría Legal y Técnica de Fiscalía de Estado con el Nº 19.

El Acuerdo, compuesto de cinco fojas, forma parte integrante de la presente Ley como Anexo I.

Artículo 2º.- El Poder Ejecutivo Provincial dispondrá todas las medidas y dictará las normas necesarias para dar cumplimiento a los compromisos asumidos en el Acuerdo aprobado por el artículo 1º de esta Ley.

Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

DADA EN CÓRDOBA, A LOS VEINTITRÉS DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

Cr. Manuel Fernando Calvo

Vicegobernador

Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

-6-

A) LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA Nº9235. MODIFICACIÓN.

**B) SISTEMA DE CONTROL DISCIPLINARIO DE LAS FUERZAS DE
SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. CREACIÓN.**

Tratamiento sobre tablas

Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota por la que se mociona el tratamiento sobre tablas, en conjunto, de los proyectos 31911 y 31912/E/20, que se leerá a continuación.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Córdoba, 23 de diciembre de 2020.

**Señor Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba**

De mi mayor consideración:

Por la presente me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas, en la sesión del día de la fecha, de manera conjunta y con votación por separado, de los despachos de comisión correspondientes a los proyectos de ley 31912/E/20 y 31911/E/20, por los cuales se establece el control disciplinario de las Fuerzas de Seguridad y se modifica la Ley 9235 de Seguridad Pública de la Provincia de Córdoba, respectivamente.

Sin otro particular, saluda a usted atentamente.

Francisco Fortuna
Legislador provincial

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas que acaba de ser leída.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.

Tiene la palabra la legisladora Julieta Rinaldi.

Sra. Rinaldi.- Muchas gracias, señor presidente,

Tenemos en tratamiento dos proyectos de ley iniciados por el Poder Ejecutivo Provincial, por un lado, el proyecto 31911 que introduce modificaciones a la Ley 9235 de Seguridad Pública y, por otro lado, el proyecto 31912 que crea un novedoso Régimen de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana.

Para el tratamiento de ambos proyectos contamos con la visita del Ministro de Seguridad, el doctor Alfonso Mosquera, y del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, el doctor Julián López, quienes, de manera exhaustiva, explicaron los mismos y evacuaron todas las dudas de los señores legisladores.

Asimismo, se realizó un importante trabajo en las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, donde pudimos debatir y recibir aportes de todos los bloques que integran esta Cámara, muchos de los cuales fueron incorporados -aclaro- sin ningún tipo de condicionamientos, independientemente de la posición que tomen los señores legisladores a la hora de votar, por supuesto, los proyectos de ley en tratamiento, ya que se privilegió la necesidad de enriquecer y mejorar las propuestas, en el convencimiento de que todos debemos involucrarnos en materia de seguridad por ser un tema que afecta a la sociedad en su conjunto.

En primer lugar, señor presidente, y para referirme a las modificaciones introducidas a la Ley 9235, quiero manifestar que dichas reformas persiguen ampliar la base de participación de las instituciones, tanto en el control disciplinario como en el diseño de las políticas públicas en materia de seguridad.

En ese sentido, se reformulan los objetivos del Sistema Provincial de Seguridad Pública y Ciudadana incorporando, entre otros, la promoción de procesos de democratización, modernización y profesionalización de las fuerzas de seguridad, la incorporación de una perspectiva interministerial en la gestión de la conflictividad social, el desarrollo de una política criminal coordinada mediante desarrollos tecnológicos, y la gestión interinstitucional e interministerial y la creación de mecanismos de control de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana que aseguren su funcionamiento transparente.

Asimismo, incorpora en el Sistema Provincial de Seguridad Ciudadana como responsables en la planificación y ejecución de políticas de seguridad al Ministerio Público Fiscal por su importancia en el desarrollo de la política criminal y en su carácter de titular de la Fuerza Policial Antinarco tráfico, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ya que la impronta de los derechos humanos es un pilar fundamental en estos proyectos, y por ser el titular del Servicio Penitenciario, y a la Legislatura porque esta Casa es actora clave en los debates y avances legislativos en materia de seguridad, y por último, al Consejo de Política Criminal y Gestión de las Fuerzas de Seguridad, que también se crea en esta oportunidad y que tendrá el papel de la conducción de las Fuerzas de Seguridad y la coordinación de la política criminal.

Dicho Consejo estará presidido por el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y el Ministerio Público Fiscal, ya que de ellos dependen las tres fuerzas de

seguridad pública, es decir, la Policía de la Provincia, el Servicio Penitenciario y la Fuerza Policial Antinarcotráfico, respectivamente, y tiene como misión conducir los procesos de democratización, modernización y profesionalización de las Fuerzas, a través de diferentes comisiones que funcionarán en su seno.

Por otro lado, se crea un Sistema de Control Democrático de las Fuerzas de Seguridad, que tiene como objetivo establecer mecanismos que aseguren un funcionamiento transparente, que respete el orden constitucional y el sistema democrático por parte de las Fuerzas de Seguridad. Dicho sistema se integrará por el Consejo de Política Criminal y de Gestión de las Fuerzas de Seguridad –anteriormente mencionado-, que hace el control político, por los Organismos de Control Disciplinario de las Fuerzas -a lo que me referiré detalladamente al hablar sobre el proyecto 31912-, y por los mecanismos de participación y consulta ciudadana previstos en las leyes vigentes que hacen al control ciudadano.

Por último, en lo que respecta a las modificaciones introducidas a la Ley 9235, se crea la Defensoría de las Fuerzas de Seguridad, cuyo objetivo es la promoción y protección de los derechos del personal de las Fuerzas de Seguridad, siendo su función básica la de ocuparse del bienestar de los miembros de las Fuerzas de Seguridad, recepcionando sus inquietudes para mejorar su formación y sus condiciones de trabajo.

Señor presidente: a continuación, voy a pasar al tratamiento del proyecto 31912, que introduce un nuevo Régimen de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad para la modernización y armonización del actual régimen vigente y, como bien lo dice su nombre, es de aplicación para las faltas cometidas por la Policía de la Provincia, el Servicio Penitenciario y la Fuerza Policial Antinarcotráfico.

Consideramos que el control de las Fuerzas de Seguridad debe ser una cuestión de Estado, que no reconozca pertenencias políticas ni ideológicas, en el que están involucrados todos los actores de la vida democrática. Por ello, este nuevo mecanismo de control será externo, civil, democrático, autónomo, transparente y eficaz.

El proyecto 31912 está dividido en tres grandes títulos: el primero, regula los organismos de control disciplinario; el segundo, fija el régimen disciplinario; y el tercero, establece las disposiciones necesarias para la entrada en vigencia de la ley.

En cuanto a los organismos de control disciplinario, este nuevo sistema estará integrado por el Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad. Quiero hacer una aclaración en lo que respecta a la composición del Tribunal; en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria del día de la fecha, se decidió incorporar una nueva propuesta, realizada por la legisladora Paleo, de ampliar el número de miembros, ya que originariamente eran 5 y ahora pasarán a ser 7, manteniéndose la conformación interinstitucional, que es: un miembro propuesto por el Ministerio Público Fiscal; otro por la Universidad Nacional de Córdoba; otro por el Ministerio de Justicia; otro por el Ministerio de Seguridad y, finalmente, la modificación que hoy se trató radica en la representación de la Legislatura, ya que se decidió que la misma esté representada por tres legisladores, dos pertenecientes a la mayoría y uno perteneciente a la minoría. En este sentido, señor presidente, solicito que se rectifique el artículo 8º del despacho ya emitido.

La competencia del Tribunal será, principalmente, el conocimiento y la aplicación de las sanciones por faltas disciplinarias graves, gravísimas y pasibles de destitución, cometidas por miembros de la fuerza. También formará parte del sistema la Dirección General de Control e Investigación, que tendrá a su cargo la prevención e investigación de las faltas graves, gravísimas y pasibles de destitución, contando para ello con personal altamente calificado y capacitado en la detención temprana y en el mantenimiento de las acusaciones que se formulen ante el Tribunal de Conducta.

Dicha Dirección General de Control e Investigación estará a cargo de un director general y contará con dos direcciones: una, de investigación propiamente dicha, y otra, de prevención, evaluación y seguimiento, de la cual dependerá la prevención de los hechos e inconductas que pudieran cometerse en el ámbito de las tres fuerzas.

Por último, y para garantizar las normas del debido proceso y los derechos de aquellos que estén sometidos a investigación, el sistema se termina de integrar con la Asesoría Letrada Disciplinaria, que brinda asistencia técnica gratuita en el marco del presente régimen, sin perjuicio de la defensa privada que deseen utilizar aquellos sometidos a proceso.

La Asesoría Letrada Disciplinaria está a cargo de un asesor letrado propuesto por cada una de las fuerzas, atento a la propia idiosincrasia de cada una de ellas; se integrará también por un cuerpo de abogados. Es importante también resaltar y destacar el carácter externo y civil del sistema. El personal en actividad o retirado de las fuerzas de seguridad y el personal civil que se haya desempeñado dentro de las fuerzas no puede ser miembro del Tribunal de Conducta ni de la Dirección General de Control e Investigaciones.

Quiero destacar también que se regula en esta primera parte un sistema de control patrimonial, con la obligación de los miembros de las tres fuerzas de presentar anualmente una declaración jurada patrimonial, en consonancia con las disposiciones de la Ley 8198.

Por otro lado, con relación a la transparencia del sistema, esta la vemos reflejada en la creación de diferentes Registros, como el de Faltas, el de Disparos de Armas de Fuego, el de Violencia Institucional y de Género, de Discriminación y Corrupción, así como los que son gestionados por la Dirección de Prevención. Asimismo, refuerza la transparencia la obligación de los distintos organismos del sistema de rendir cuentas mediante la elaboración de un informe de gestión anual, que deben remitir al Ministerio de Seguridad, al Ministerio de Justicia, al Ministerio Público Fiscal y a esta Legislatura.

Otro aspecto que contribuye a la transparencia –y, por sobre todo, a la publicidad– es la obligación de publicar en las páginas web de las distintas fuerzas de seguridad las resoluciones firmes de cesantía y destitución, que deben ser de libre acceso para todos los ciudadanos.

En la segunda parte del proyecto se crea un nuevo Régimen Disciplinario, que reemplaza al vigente y que se encuentra distribuido en distintas normas, teniendo en cuenta que cada fuerza tiene uno propio. Por ello, a partir de la sanción de esta ley el Régimen Disciplinario será el mismo para todas las fuerzas de seguridad. Se regulan aquí los deberes de actuación del personal de las fuerzas de seguridad, entre los que quiero destacar la eximición del deber de obediencia cuando la orden impartida fuera manifiestamente ilegal o fuera impartida por autoridades constituidas de manera no democrática. Esta disposición es muy importante porque consagra, hacia adentro de la fuerza, la primacía de la ley y la Constitución por sobre el deber de obediencia.

Asimismo, se ha dispuesto, en esta segunda parte, un cambio de paradigma en lo que hace al deber de intervención por parte de los miembros de las fuerzas de seguridad ante situaciones riesgosas o de conflictos que puedan constituir delitos, ya que, para el supuesto de que el personal se encuentre fuera de servicio, si bien debe dar inmediato aviso al personal en servicio, no está obligado a intervenir ni a identificarse, a los fines de evitar quizás un mal mayor; es decir, deja de ser obligatoria la intervención para pasar a ser optativa, pero si el personal decide intervenir tendrá todas las facultades y las obligaciones que establece la ley.

Por otro lado, se refuerza la prohibición del personal de las fuerzas de adoptar medidas de acción directa como movilizarse o manifestar, protestar o reclamar ya que estas cuestiones ahora serán receptadas y canalizadas a través de la Defensoría que se crea en la Ley 9235 y respecto de la cual ya me he referido.

Se desarrollan aquí los principios generales del nuevo régimen disciplinario destacándose la protección a la víctima, con la obligación a cargo de los organismos de brindarles información e incluso notificarle las resoluciones importantes.

Se regulan los agravantes genéricos, como cuando las faltas sean cometidas por el concurso premeditado de 3 o más integrantes de la fuerza de seguridad, cuando sea cometida por el titular de una dependencia en ejercicio de sus funciones, el agravamiento de la sanción cuando la falta implique un caso de violencia de género, violencia institucional o un caso de discriminación o de corrupción.

En esta parte también se instituyen las sanciones, que se circunscriben a cuatro: apercibimiento, suspensión, cesantía y destitución, eliminándose las sanciones vigentes de arresto y exoneración que son antiguas en relación a los nuevos modelos de control en el mundo.

La nueva sanción de destitución se reserva para los casos más graves e implica no sólo la expulsión de las fuerzas de seguridad, sino también la inhabilitación absoluta y perpetua para ocupar cualquier cargo o empleo público en la Provincia de Córdoba en los tres Poderes del Estado.

Como algo completamente novedoso se destaca la incorporación de las sanciones sustitutivas y accesorias, estableciéndose que las sanciones principales de apercibimiento y suspensión pueden ser reemplazadas por sanciones sustitutivas o complementadas por sanciones accesorias. Dichas sanciones sustitutivas y accesorias son: los tratamientos terapéuticos, los deberes especiales de conducta, los cursos educativos, la reparación del daño y las tareas comunitarias. Las sustitutivas se imponen a través de un procedimiento ágil y simplificado en el que la persona imputada solicita su aplicación quedando excluida de este procedimiento el caso de las faltas gravísimas y las pasibles de destitución. Por su parte, en el caso de faltas graves es la Dirección General de Control e Investigación la que las requiere al Tribunal de Conducta.

Por su parte, el Tribunal de Conducta puede, a requerimiento de la Dirección General, imponer sanciones accesorias en las faltas expresamente enumeradas en el artículo 66 del despacho.

Entrando a lo que sería el corazón del sistema disciplinario, se regulan en el texto, de manera clara y sin ambigüedades, las faltas graves, gravísimas y las pasibles de destitución. Por su parte, será la reglamentación la que defina las faltas leves y medias; en lo que respecta a las investigaciones y sanciones de éstas se realizará dentro del propio ámbito de las fuerzas de seguridad pública.

Ser regulan también las cuestiones procesales del régimen disciplinario definiendo los principios y garantías del proceso como el derecho de defensa, el derecho a no autoincriminarse, el debido proceso, la imparcialidad y la celeridad, entre otros.

Se establece la incorporación al proceso de las tecnologías de la información y comunicación para poder registrar el mismo no sólo a través del tradicional medio escrito, sino también a través de las filmaciones y otros medios tecnológicos que brindan celeridad y modernización.

Quiero destacar que se refuerza la independencia del procedimiento administrativo con respecto al proceso penal, es decir, se podrá aplicar una sanción administrativa sin importar si está resuelta o no la causa penal respectiva, ello a los fines de brindar una respuesta rápida en el control de las fuerzas de seguridad.

Asimismo, de suma importancia es la obligación de los organismos disciplinarios de remitir a la Secretaría de Derechos Humanos aquellas actuaciones que versen sobre violencia institucional y discriminación como así también remitir al Ministerio de la Mujer las que constituyen hechos de violencia de género.

Por último, se regulan los aspectos referidos a las medidas cautelares administrativas, es decir, la suspensión preventiva, el retiro del arma y el pase a situación pasiva y las vías impugnativas como son los recursos de reconsideración y de revisión.

Finalmente, el Título III establece las disposiciones finales determinando la fecha cierta de entrada en vigencia de esta ley, la derogación expresa de las normas y artículos que son contrarios al presente régimen y las formas en que se resolverán las causas en trámite y las conductas cometidas hasta la entrada en vigencia de este nuevo régimen disciplinario.

En definitiva, señor presidente, todos conocemos los lamentables acontecimientos que nos sacudieron este año y que, claramente, nos obligan a tomar medidas para que no se repitan. Es doloroso para el Gobierno y, sobre todo, para la sociedad encontrarnos en las crónicas y los noticieros semanales las noticias referidas a policías que actúan de manera ilícita y esto bajo ningún punto de vista será tolerado.

Consideramos que los proyectos en tratamiento vienen a dar un salto de calidad en materia de seguridad pública y sobre el control disciplinario de las fuerzas que la integran, para garantizar el trabajo de aquella inmensa mayoría que actúa con verdadera vocación de servicio.

Por todo lo expuesto, voy a adelantar el voto positivo del bloque Hacemos por Córdoba a los proyectos en tratamiento solicitando, por supuesto, el acompañamiento de los restantes bloques.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora Rinaldi.

Tiene la palabra la legisladora Daniela Gudiño.

Sra. Gudiño.- Señor presidente: en consideración a los proyectos que estamos tratando, y según lo fundamentado por el Poder Ejecutivo, se pretende profundizar los

controles sobre las fuerzas de seguridad, así como en cuanto al régimen disciplinario propiamente dicho, reforzando, supuestamente, la independencia del procedimiento administrativo con respecto al del proceso penal, pudiendo sancionarse a los integrantes de las tres fuerzas de seguridad más allá de que esté resuelta o no la causa penal respectiva.

Mi voto será negativo para los dos proyectos que estamos tratando, y paso a explicar por qué.

En primer término, aunque este proyecto se presente como una iniciativa innovadora en el que elocuentemente hacemos referencia a la democratización y a la modernización, el escandaloso e inocultable fracaso del actual Tribunal de Conducta Policial varias explicaciones les debe a los cordobeses por la forma de actuar. Y hablando de democratización y modernización, bien podemos preguntarnos qué hicieron durante 20 años hasta la fecha, porque no llegaron al gobierno el año pasado, entonces, podríamos suponer que teníamos una política de seguridad no muy democrática y que ha hecho agua por todos lados.

Hoy nadie duda de que la seguridad es uno de los principales problemas que azota a Córdoba, y que las fuerzas de seguridad deben ser objeto de una profunda reestructuración. Si entramos a hilar más fino en lo que a este nuevo Tribunal de Conducta respecta, el proyecto destaca su autonomía y, en relación al vigente, aumenta su cantidad de miembros, pero lo cierto es que han ampliado a más miembros que serán de la mayoría del oficialismo, por lo tanto, esa autonomía es un relato más. ¿Es adecuado que así sea? La verdad es que el órgano que tiene más integrantes lo va a ser, pero va a ser más de lo mismo y no va a solucionar absolutamente nada.

En otro orden, establecen diversas direcciones de control, de investigaciones, de prevención, evaluación. La verdad es que una asesoría letrada es -en fin- todo un organismo que habrá que ver cómo funciona; tampoco podemos afirmar que sea una garantía de eficiencia.

Pero, en realidad, lo que termina de definir mi voto negativo es el artículo 88 del proyecto que textualmente determina la vigencia de la ley. El texto dice: "La presente ley comenzará a regir a partir del día 1º de julio de 2021, prorrogable por hasta 180 días más por decreto del Poder Ejecutivo provincial". Acá me hago una pregunta: ¿para qué estamos debatiendo, casi a las apuradas, un proyecto de ley que eventualmente se aplicará dentro de un año? Si es tan necesaria y urgente esta ley, ¿por qué todavía no tenemos el Fiscal General? Porque el proyecto dice que es el responsable de nombrar a un miembro del Ministerio Público.

Para finalizar, le puedo decir que la Policía de la Provincia de Córdoba desde hace mucho tiempo es una mala noticia para los cordobeses: homicidios, violencia de género, femicidios, robos y hasta narcotráfico. Es lamentable la realidad de la noticia que los de la Policía nos dan por la conducta de algunos de sus miembros.

Es urgente que el Gobierno retome el control político sobre las fuerzas de seguridad. Este proyecto es otro más de tantos destinados al fracaso, seguramente, por la ausencia de una política de seguridad del Gobernador.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.

Tiene la palabra el legislador Cossar.

Sr. Cossar.- Señor presidente: hoy nos toca tratar en la misma sesión dos propuestas del Gobierno provincial que están vinculadas; una reforma parcial a la Ley provincial 9235, de Seguridad Pública, y otra propuesta legislativa que busca establecer las bases jurídicas e institucionales de un sistema de control disciplinario de las fuerzas de seguridad pública y ciudadana de la Provincia de Córdoba.

¿Qué tienen en común ambas normas? Que son respuestas superficiales, parciales y oportunistas no a un problema al que están atentos los numerosos sondeos de opinión que circulan por este recinto y por el Panal, sino a un problema ciudadano que para cualquier ciudadano representa la diferencia entre la vida y la muerte.

Ese problema, señor presidente, tiene dos caras: una es la inseguridad, es un flagelo que afecta a los habitantes de todo el territorio provincial y que crece de un modo vertiginoso día a día en Córdoba; la otra cara, son las fuerzas de seguridad; a los cordobeses, a todos, sin excepción, nos preocupa profundamente el estado de situación actual de quienes tienen el deber de cuidarnos.

Sobre el primer aspecto, señor presidente, existe una relación de causalidad estrecha entre la pobreza y el delito, entre exclusión social y violencia. En varios países

del norte de Europa han dejado abierta solamente una cárcel, dado que el delito se ha vuelto marginal en las sociedades más igualitarias del planeta. Pero, si no nos queremos ir tan lejos, lo que podemos hacer es mirar a nuestro país vecino, Uruguay. Hace pocos meses leíamos en la prensa que Uruguay traspasó el manejo de su sistema penitenciario –el manejo– al Ministerio de Educación de su país. De esta manera nos muestran por dónde va la cosa, señor presidente, cuál es la raíz del problema de la inseguridad, también desde donde y con qué herramientas hay que combatirlo.

Cuando la agenda del Gobierno no es la agenda de la gente, cuando la lucha contra la pobreza se agota en un slogan, cuando se relega de inclusión educativa y se clausura, como han clausurado este año, el acceso a la educación, cuando se desentienden de apoyar y de generar más empresas y puestos de trabajos genuinos; cuando abandonan al sector productivo, entre otras deudas que acarrean en estos más de 20 años, el resultado, señor presidente, es el que tenemos hoy: más de la mitad de nuestros niños y jóvenes son pobres o indigentes, la escuela no los contiene u obtienen pésimos resultados, como vimos en los recientes resultados del Operativo Aprender 2019, o también cuando nos encontramos que el 14,5 por ciento de los cordobeses están desocupados, siendo este dato aún más grave en el Gran Córdoba.

Mientras quieren expropiar para seguir poniendo cemento caro, mientras financian con el Banco Provincia las obras de sus propias empresas, como si estuvieran construyendo en vida su propio mausoleo, lo que se escapa de las manos como la arena es nuestro capital social, señor presidente, el que alguna vez nos conformó como sociedad justa, igualitaria y en donde el mérito y el sacrificio de todos valía la pena.

El resultado lógico de esta reprochable actitud es el crecimiento del delito y sus redes, es la inseguridad alarmante en que vivimos los cordobeses, el hecho de acostumbrarnos a vivir en sociedades desiguales, donde cada uno solamente defiende lo propio.

¿Sabe qué, señor presidente, señores legisladores? No nos podemos acostumbrar, no tenemos que acostumbrarnos, todo lo contrario, hay que luchar para cambiar esta dura realidad.

Según datos del Ministerio de Seguridad de la Nación, durante 2019, Córdoba, nuestra Córdoba, se ubicó tercera en el mapa de robos de Argentina, subió dos puestos en un solo año. En lo que va del 2020, ya tenemos 29 muertos en ocasión de robo, 17 de ellos, son víctimas; en poco más de una semana hubo 8 crímenes en Córdoba.

Créame, presidente, que cuando le hablo, cuando hablamos desde la Unión Cívica Radical de incertidumbre, cuando hablamos de miedo, es la descripción que compartimos una enorme mayoría de quienes habitamos esta Provincia.

Pero le decía que tenía dos caras, y la segunda cara de la moneda es quizás la más preocupante, es que los cordobeses no creen que las Fuerzas de Seguridad hoy sean la contraparte; no creen que la solución al flagelo de la inseguridad venga de la mano de las Fuerzas de Seguridad, sino que muchas veces sospechan que son parte de la misma cara, que son parte del problema.

Entre los fracasos -porque son fracasos- más resonantes de estos 20 años, la seguridad se halla, sin lugar a duda, en los primeros puestos.

No es el único de nuestros problemas que nos preocupa, pero sí le tengo que decir, presidente, que la sociedad está cansada de tener miedo, estamos cansados de tener miedo: miedo a los delincuentes, miedo a las redes organizadas del delito y, también, a veces, justificado miedo a quienes, portando un uniforme, deben defendernos y brindarles cuidado y seguridad, a esos también muchas veces les tenemos miedo.

El gran problema, en definitiva, señor presidente, es la política que vienen llevando adelante. Siempre llegan con el anuncio de que esta vez sí, pero no; entre un ensayo y otro ensayo hay familias que han perdido a sus seres queridos para siempre, y esto les pido que no se lo olviden nunca más: entre ensayo y ensayo hay familias que han perdido a sus seres queridos para siempre.

Ayer, escuchaba a un periodista decir: ¿cómo vamos a hacer el 24 los que celebramos la Navidad para decirnos Feliz Navidad en una Argentina que hoy está lamentando la muerte de más de 42.000 argentinos a causa del Covid?, ¿con qué cara nos vamos a mirar mañana a la noche a la hora de brindar y nos vamos a decir Feliz Navidad, cuando todavía estamos sufriendo, y no sabemos hasta dónde va a llegar?, ¿cuál es el techo? Y yo les agrego ¿cómo nos vamos a decir Feliz Navidad mañana en Córdoba, cuando a esos 42.000 argentinos que murieron por Covid les tenemos que

sumar los pibes, les tenemos que sumar los jóvenes que murieron a manos de las Fuerzas de Seguridad de la Provincia de Córdoba? Yo no voy a decir Feliz Navidad mañana, no porque no tenga ganas, sino porque no lo siento.

Voy a tomar, como punto de base, presidente, el 2 de julio, no voy a remontarme mucho tiempo más atrás; el 2 de julio, hace casi seis meses. Ese 2 de julio, los jueces que dictaron sentencia por el tiroteo de Nueva Córdoba, el caso de la financiera, recomendaron por escrito al Gobierno provincial capacitar al personal policial, por escrito. Dijeron textualmente: "para evitar que en el futuro se repita lo advertido en el presente proceso". Eso fue el 2 de julio, al día siguiente, el 3, a las 24 horas, en declaraciones a distintos medios el Gobierno respondió diciendo que no pensaba revisar el Programa de Capacitación de la Policía de Córdoba. Un día después, el 4 de julio, la Policía mató a Juan Ávila, vendedor ambulante de Villa El libertador y, sólo un mes después, las Fuerzas de Seguridad asesinaron a Blas Correa, de tan solo 17 años, lo fusilaron; hubo dos meses de silencio por parte del Gobierno, y a los dos meses, al que asesinaron fue a Joaquín Paredes, otro joven, también por la espalda. Tres muertes consecutivas, presidente, en julio, agosto y octubre; tres muertes absolutamente evitables, tres muertes a manos de las Fuerzas de Seguridad -de la mala fuerza de seguridad.

Entonces, presidente, dos días después de la muerte de Joaquín nos presentaron un protocolo -ustedes se acuerdan, ¿no?-, irrumpió un asesor a quien no conocemos -o al menos yo no lo conozco- por todos los medios con un protocolo. Nos dijeron que esa sí era la solución, "ahora sí, esta es la solución", y volvieron a repetir que no era necesario revisar la capacitación de la fuerza de seguridad.

El 1º de noviembre, 5 días después del protocolo mágico presentado por el asesor del Gobernador, Stampalija, removieron a toda la cúpula policial y designaron nuevos jefes, y nos dijeron: ahora sí todo se va a resolver. Al día siguiente, 2 de noviembre, la actual jefa de la fuerza anunció la extensión de la capacitación de la Escuela de Suboficiales a tres años.

Este relato, que puede sonar aburrido, lo que busca es darle fundamentos y datos duros dolorosísimos. Pasaron 4 meses, presidente, porque yo no empecé hablando desde el mes de julio, dos chicos y un pibe asesinados por gatillo fácil; esperaron 4 meses, esperaron 3 asesinatos, cuando debieron haber escuchado las recomendaciones que la Justicia les había hecho en el mes de julio.

El 2 de diciembre, ingresaron a esta Legislatura los proyectos que hoy debatimos, y el 3 de diciembre el Gobernador, la autoridad máxima, autorizó, por decreto, la modificación del Decreto Reglamentario de la Ley 9728 para ingresos en la Policía de la Provincia, porque entonces sí, ahora sí, estaban resolviendo el problema. Habían pasado julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, pero esta vez sí se resolvió el problema.

La Sala B de la Cámara Federal hizo un nuevo llamado de atención al Ministerio de Seguridad por la capacitación policial, remitiendo copia del fallo en una causa por narcotráfico, a fin de evitar procedimientos irregulares.

Pero, para que tomen dimensión, desde el día que ingresaron los proyectos que hoy estamos discutiendo hasta hoy, imputaron a tres policías por el caso del ladrón muerto en Urca; un policía fue detenido e imputado por asaltar una estación de servicio en Biale Massé con uniforme, fue hace un mes y lo detuvieron hoy; detuvieron a dos policías en La Cesira el fin de semana por chocar y golpear -en realidad, no los mataron de milagro, porque si no hoy estaríamos hablando de 5 muertos-; dos policías con sus motos persiguieron, chocaron y golpean a dos jóvenes, y los podrían haber matado ¿saben por qué?, porque iban sin barbijo -todo esto ocurrió desde que ingresaron los proyectos-; dos ex policías mataron a golpes a una mujer en Barrio Jofre Sud; un policía apuñaló siete veces a su pareja; un subcomisario de La Falda fue acusado por violencia de género; un comisario de la Departamental Punilla fue denunciado y está siendo investigado por abuso sexual de una subalterna; un cabo mató a su pareja de cuatro balazos y después se quitó la vida.

Entonces, yo le quiero preguntar, a través suyo, presidente, ¿esta vez sí estamos debatiendo la solución? ¿Ustedes creen que realmente con estos dos proyectos estamos debatiendo la solución? Porque entre un caso y otro, mientras se ensayan protocolos, mientras ensayan explicaciones, hay personas que nunca más van a volver a sus hogares.

Señor presidente: el problema de la policía provincial es un problema de la seguridad pública, es estructural, no se soluciona con una mímica de la democracia.

El bloque de la Unión Cívica Radical va a acompañar con su voto cuando estén decididos a discutir los problemas de fondo de nuestras fuerzas de seguridad, con valentía, sin temor a reconocer sus propios errores.

Voy a adelantar algunas cuestiones, después me van a suceder en el uso de la palabra la legisladora Garade y el legislador Rossi.

Mire, presidente, tenemos una Policía que, por definición, es una institución civil armada, repito: una institución civil armada, y decimos que vamos a poner un control civil. Esto aparece como la primera contradicción, que no es solamente la palabra "civil", representa no entender cuál es el funcionamiento de la institución en democracia. Escuchar a algunos funcionarios decir que a la Policía le van a poner un control civil es desconocer que la Policía, por definición, es una institución civil.

La política de ingreso a la carrera policial ha sido, lamentablemente, captada por el clientelismo y atravesada por la lógica de los intereses partidarios, El acceso a un cargo público en las Fuerzas de Seguridad ha dejado de basarse en el mérito y las calidades profesionales y humanas de los aspirantes para resolverse en una oficina gubernamental como un favor político o adquirir carácter hereditario entre familias.

La formación de los agentes que controlan la seguridad en el espacio público es corta y deficiente; el equipamiento con el que salen a la calle es precario; muchos policías desconocen sus obligaciones y los derechos de los ciudadanos y, lo que es más preocupante, el uso desproporcionado de la fuerza se ha vuelto habitual en las generaciones más jóvenes de la Policía provincial.

Quieren discutir la conformación del nuevo sistema de control disciplinario de las fuerzas de seguridad, pero no quieren debatir el rol del Tribunal de Conducta Policial frente a los casos de los policías que no debían estar en la calle portando un uniforme y mucho menos un arma reglamentaria. Para pasarlo en limpio: los dos policías que el 6 de agosto dispararon a quemarropa al vehículo en el cual iba Blas Correa, y uno de ellos lo asesinó, los dos estaban imputados, ninguno de los dos tendría que haber estado en la calle, y mucho menos con un arma, y todavía estamos dando las explicaciones de por qué estaban en la calle.

Si esos dos policías no hubiesen estado en la calle, si los miembros del actual Tribunal de Conducta no hubiesen mirado para otro lado, es muy probable que por lo menos la familia Correa, mañana, podría decir "Feliz Navidad". Esos dos policías son suboficiales, pero si alguien cree que el problema es la Escuela de Suboficiales, le tengo que decir que, entre los cuatro policías que estaban en ese retén, había una policía oficial, por lo cual el problema no es suboficial u oficial, el problema no se resuelve extendiendo la Escuela de Suboficiales de un año y medio a tres años, o presentando una nueva conformación del Tribunal de Conducta.

Mire, presidente, en uno de los proyectos se encargan de enumerar las incompatibilidades para formar parte del nuevo Tribunal de Conducta. Les pido -que se entienda bien, no digo que lo incluyan en el texto de la ley-, por favor, que no se les ocurra designar en el nuevo Tribunal de Conducta a ninguno de los miembros del actual y de los anteriores Tribunales de Conducta, porque fracasaron, presidente, por acción algunos y por omisión otros, porque a lo mejor no tendrían ni siquiera que haber aceptado estar ahí. Lo cierto es que los actuales y los anteriores miembros del Tribunal de Conducta debieron haber estado incluidos dentro de aquellos que tienen incompatibilidades para ocupar ese cargo a futuro.

Dicen que quieren democratizar la Fuerza, pero, en realidad, están profundizando una estructura militarizada. La Policía de la Provincia de Córdoba tiene 23 jerarquías, ¿para qué queremos oficiales y suboficiales cuyo único mérito ha sido la puerta por la que ingresaron. ¿No entienden que necesitamos policías debidamente capacitados y trabajando en la calle? Luego, la pirámide se va a formar de acuerdo a lo que demuestre cada uno en su trabajo y con su trabajo, como ocurre en todos los órdenes de la vida; como ocurre en Estados Unidos, por ejemplo, en donde me consta que miembros del Gobierno, ex funcionarios del Gobierno viajaron en más de una oportunidad para tomar experiencias, en donde existe una sola academia, de la cual egresan como oficiales a la calle para promocionar, luego, según su trabajo y según su aptitud de servicio, y no si entraron por la puerta de la Escuela de Suboficiales o por la puerta de la Escuela de Oficiales.

Pero, no, han concebido a la Escuela de Oficiales de la Policía como una escuela de líderes, en donde el 95 por ciento o más de los egresados llegan a oficiales jefes; es la única escuela de líderes en el mundo en porcentaje de efectividad. Para que se entienda: ingresan 100 y egresan 95; quieren seguir con una escuela de jefes y otra de subalternos.

¿Ustedes se imaginan una escuela para ser maestra y otra para ser directora? ¿Ustedes se imaginan una escuela para ser médicos de planta y otra para ser jefe de Servicio? ¿Ustedes se imaginan un seminario para ser cura y otro para ser obispo? ¿Por qué, entonces, se imaginan una escuela para ser suboficial, donde el que ingresa sale siendo suboficial, y otra escuela con los mismos requisitos donde se ingresa para ser oficial?

Anunciaron la extensión a tres años de la Escuela de Suboficiales, y hasta este momento no está elaborado el plan de estudio; no saben en qué aulas van a dictar los cursos de la Escuela de Suboficiales.

Por eso no podemos acompañar, presidente, no por oponernos o porque no queramos que la situación mejore, sino porque no podemos moralmente, no tenemos cara para acompañarlos.

La propuesta que están elevando a este recinto es una expresión de deseos, señor presidente, de transparencia, de participación, términos políticamente correctos para un espacio del aparato estatal que está lleno de vicios y que hay que repensarlo de manera integral.

¡No se puede comenzar por el final!

¡No podemos discutir estos temas como si fuéramos Suiza o Bélgica!

¡No podemos hacer de cuenta que acá no ha pasado nada grave, porque pasa y todos los días, y cada vez más!

Crear un burocrático entramado de oficinas y direcciones cuyos titulares van a ser designados, en su mayoría, por el Poder Ejecutivo, sea por el Gobernador, por sus ministerios o por sus dependencias, lo único que logra es dilatar sus procesos y, por las responsabilidades, esconder debajo de la mesa lo que incomoda o lo que es inoportuno.

Expresan y funden de manera ampulosa que la titularidad del Tribunal de Conducta Policial va a ser por el representante del Ministerio Público Fiscal; este nuevo Tribunal de Conducta que nos va a solucionar el problema que tenemos hoy de las Fuerzas de Seguridad, la solución a todos nuestros problemas de inseguridad tiene como dato innovador o novedoso que va a depender del representante del Ministerio Público Fiscal; mientras tanto, hace dos años que les venimos pidiendo que dejen de violar la Constitución y designen al Fiscal General.

¿Cómo quieren que les crean? ¿Cómo quieren que les creamos, si violan sistemáticamente la Constitución?

Quieren modificar el Tribunal de Conducta y no modifican la conducta.

Mire, presidente, la transparencia en sí misma, como valor, es un gran valor, y la transparencia como herramienta, ni hablemos; y la transparencia para recuperar la confianza en las instituciones, ni hablemos. Por eso felicité a las autoridades de esta Cámara cuando presentaron -hace poco tiempo- un portal de datos abiertos, donde se transparenta lo que pasa en la Legislatura, en el Poder Legislativo porque, entre otras cosas, entiendo, estoy convencido de que es la gran herramienta para recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones, en este caso, en el Poder Legislativo.

La desconfianza que hay en las Fuerzas de Seguridad es tremenda, y sobran motivos para que los cordobeses desconfíen de las Fuerzas de Seguridad, lamentablemente.

Una forma -aprovecho para sugerírselo- es transparentar; una forma es garantizar el acceso a la información pública; una forma es poner a disposición de la ciudadanía absolutamente todos los datos.

¿Por qué le digo esto, presidente? Acá tengo el parte de la Policía, del 18 de diciembre del 2020, no llega ni a un tercio de una hoja A4; tengo el parte del 19 de diciembre de 2020, directamente es un párrafo. En el parte del 18 de diciembre hablan de dos hechos, uno en la ciudad de Villa Allende y otro en la ciudad de San Nicolás, hechos menores, y en el parte del 19 hablan de un hecho en la ciudad de Córdoba. Mientras, la Policía, la nueva Policía, la nueva conducción de la Policía, la nueva jefa de la Policía, de manera oficial, daba esta información, el fin de semana hubo dos homicidios en Córdoba, uno el sábado y otro el domingo. Búsquenlos; no los van a

encontrar nunca en ninguno de los dos partes, porque no lo informan. Quieren que la gente confíe y le ocultan los homicidios. ¡Es grave!

Sr. Presidente (González).- Legislador Cossar: ¿usted ha puesto ese fondo musical?

Sr. Cossar.- No, pero parece que es el legislador Pihen.

Señor presidente: son datos de la realidad. Como menciono lo bueno, tengo que mencionar lo que está mal; como menciono lo que se hizo bien acá, como que hoy cualquier cordobés puede acceder, a través del Portal, a lo que sucede en la Legislatura, cómo puede ser que eso mismo no suceda –y más aún- en una institución como la Policía, que está absolutamente desprestigiada. Con el que usted hable le va a decir que hemos involucionado, que antes había más información y desde que asumió la nueva conducción prácticamente no hay información. Pero no lo dice el radicalismo, lo dice el periodismo, del palo que sea, del pensamiento que sea; está ahí.

Mire, si realmente quieren un tribunal de conducta, si tienen vocación de tener un tribunal de conducta innovador, transparente, distinto, sumen una silla de alguna organización de la sociedad civil comprometida con la agenda de los derechos humanos. Eso sería realmente novedoso, no llevar de tres a cinco, o de cinco a siete; si sabemos sumar; en vez de cinco son siete, pero cuatro miembros del Tribunal de Conducta van a responder al Gobernador; no cambia absolutamente nada.

Lo mismo sucede con los responsables de la profusa cantidad de direcciones que están presentes en la propuesta; debieran acceder a su cargo por concurso abierto de antecedentes y oposición, en base a dictámenes de tribunales mixtos, con participación de las universidades con sede en la Provincia.

Hago un llamado a mi querida Universidad, a mi querida Facultad de Derecho -soy egresado de la Facultad de Derecho-; le pido al miembro que va a estar en el Tribunal de Conducta, en representación de la Facultad de Derecho, que nos haga quedar bien, que nos haga seguir sintiéndonos orgullosos de ser egresados de la Universidad Nacional de Córdoba, de tener a la Universidad Nacional de Córdoba que tenemos.

Presidente: nos generan muchas dudas cláusulas como la que recién mencionaba la legisladora Rinaldi de los alcances y límites de intervención del policía fuera del horario de trabajo, o aquella que plantea la reparación del daño causado, cuando en la mayor parte de los casos el mismo es absolutamente insanable.

La seguridad pública no es sólo llegar a tiempo, es llegar antes, fundamentalmente. Fíjense lo que nos pasó con el fuego: tuvieron que quemarse 300 mil hectáreas para que el Gobernador saliera en un anuncio a difundir la compra de nuevo equipamiento para los bomberos, y empezaron a entregar parte del equipamiento cuando ya se habían prendido fuego las 300 mil hectáreas en la provincia de Córdoba. Eso ya, de por sí, es doloroso.

Pero cuando uno dice que tuvieron que morir 3 jóvenes en menos de 3 meses para que anunciaran un protocolo, eso supera absolutamente todo.

Mañana es 24 y se celebra Nochebuena y pregunto, a través suyo, señor presidente, ¿están garantizadas las condiciones de seguridad, las condiciones sanitarias?, ¿o van a salir, luego, a castigar a los intendentes por los desbordes? Porque si creen que la solución es prohibir y mirar para otro lado, mañana a desbordar la provincia de Córdoba, y eso también tiene que ver con una responsabilidad por parte del poder político.

Señor presidente: nuestro voto negativo se funda, centralmente, en cuestionar las intervenciones legales que operan en la superficie y que no cambian la realidad de nuestras Fuerzas de Seguridad, y mucho menos sirven para suturar las heridas que provocan los desbordes y excesos, lamentablemente, ocurridos.

Vamos a tender nuestra mano cuando quieran discutir en serio en problema de las fuerzas públicas porque necesitamos volver a confiar en la policía. Hay buenos policías, pero, como ciudadanía, necesitamos poder volver a confiar porque necesitamos debatir urgente la agenda, en serio, de la inseguridad que azota a los cordobeses como nunca antes sucedió.

Obviamente, el bloque de la Unión Cívica Radical va a votar en contra de los dos proyectos en tratamiento.

Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.

Tiene la palabra el legislador García Elorrio.

Sr. García Elorrio.- Señor presidente: voy a ser muy breve porque creo que este va a ser un debate muy largo, y no quiero repetir cosas que ya he dicho hasta el cansancio.

Es más, no quiero abusar de la palabra porque el miércoles pasado en esta Casa se debatía un pedido de informes sobre por qué no se les ponía coto a las bandas narcos en barrio Maldonado, e hice mi queja sobre la Policía Antidrogas y una queja sobre la Policía de la Provincia, y el sábado a la noche los allanaron. Supongo que algo habrá tenido que ver lo que dijimos acá el miércoles, pero pienso que lo que dije en esa oportunidad está a disposición de todo el mundo como para que puedan verlo.

En segundo lugar, cuando se entra en este tipo de temas no se puede entrar pisoteando a la gente que trabaja bien; en la Policía de Córdoba, en el Servicio Penitenciario y en la FPA hay gente de bien que trabaja bien, como en todos los órdenes de la vida. Así que los que trabajen bien, por favor, reciban de nosotros una palabra de apoyo ante la gravísima situación en la que les toca desempeñar su tarea.

En tercer lugar, quiero decirles que el problema de la seguridad en Córdoba tiene muchos, pero muchos años. Quiero recordar tres episodios históricos, muy brevemente, para después manifestarles por qué a una ley la vamos a votar en general y a la otra no, porque en el fondo hay un problema de paradigma; el Gobierno de la Provincia tiene un paradigma al enfrentar estos problemas, mientras que nosotros tenemos otro. Lo que pasa es que no tenemos la consideración popular como para implementarlo, aunque siempre pensamos que desde esta Legislatura, alguna vez, íbamos a poder influir en esta materia, y la verdad es que, estando a dos meses de irme de esta Casa, no he logrado imponer o, de alguna forma, convencer, sobre esta cuestión.

Lo que les quiero decir es lo siguiente: en el año 1994, que debe haber sido en el Gobierno radical de Córdoba, obviamente, o en el año 1996, en una casa de la periferia de Córdoba, donde trabajábamos en un hogar para mamás solas, en la mañana de año nuevo fui requerido y levanté del patio de esa casa 32 vainas servidas. ¿Qué había pasado? Había habido una balacera entre dos grupos de chicos que se disputaban la predominancia en el barrio. Hoy, la mayoría de esos chicos ya no están, murieron en esos enfrentamientos, o por la droga, ya no están.

En el año 2006, me tocó defender, en un juicio de amparo, a 5 mil familias de 62 barrios de Córdoba que pedían que les sacaran a los vendedores de drogas de sus barrios. O sea, el mismo problema que había visto en el 90 y tantos aparecía con más fuerza en el 2006; fue in crescendo el problema y 5.200 personas que pertenecían a 62 barrios de Córdoba iniciaron una acción de amparo colectiva con mi patrocinio. Yo era abogado de toda esa gente y logramos que la Justicia Federal de Córdoba les diera algunas capacitaciones a miles de personas, de esto el ministro Giordano sabe bien porque él fue el perito convocado por el juez, por la organización IDESA, para sugerir qué medidas había que tomar para ayudar a todas esas familias para no vivir de un plan.

Así, llegué a esta Legislatura en el año 2011, y lo primero que presenté fue un proyecto sobre este tema y que abarcaba dos cosas: primero que todo, buscar ayudar a esos miles de chicos, miles y miles, y han sido miles y seguirán siendo miles, que ni estudian, ni trabajan, ni la escuela los contiene, a todos esos chicos darles una posibilidad de que conozcan su proyecto de vida. Y es mi primer proyecto presentado el 20 de diciembre de 2011, apunta a eso, ahí se combaten todas las cosas que estamos hablando; si yo les doy proyecto de vida a todos esos miles de chicos y les doy proyecto de vida si los ayudo, no voy a generar personas sin destino en la sociedad, dañándose ellas y dañando a los demás.

Ese proyecto era absolutamente federal, se basaba en poner en cada localidad o cada tantos habitantes, una mesa donde la sociedad y el Gobierno trabajaran juntos, era una Mesa de Gestión Asociada para encontrar qué necesitaban los chicos de cada lugar para encontrar su proyecto de vida, y que el Estado invirtiera ahí, donde la sociedad asociada –valga la redundancia– al Estado priorizan las inversiones; o sea, transformar a esos chicos en individuos absolutamente libres, empoderados de un proyecto de vida, para que ellos puedan defenderse de las drogas, de la trata. ¿Por qué?, porque una persona que tiene proyecto de vida se defiende, ese fue nuestro proyecto. Nuestro proyecto está ahí, pueda ser que se trate o algún día tengamos la fuerza política para hacerlo tratar. Pero eso tenía muchísimo que ver con el tema de la seguridad, tenía muchísimo que ver.

Y ahí también teníamos la prueba de que eso había funcionado porque, en el año '62, la Provincia de Córdoba tenía un servicio de complementación educativa, o sea, complementaba la escuela y trabajaban sobre el proyecto de vida de los chicos, y a los chicos de Córdoba los llevaban a conocer la Argentina, el Norte, el Sur, y esos chicos que eran huérfanos, hijos sin padres ni madres, que estaban abandonados en los institutos del Estado, conocían más la Argentina que los chicos que teníamos en esa edad 7 u 8 años, y lo sé porque lo viví familiarmente.

Entonces, se puede hacer tanto para ayudar a nuestros jóvenes. Pero, si no hay un plan de este tipo, es muy difícil lo que estamos haciendo.

En segundo lugar, con respecto a las Fuerzas de Seguridad, en aquellos años lo que le propusimos al Gobierno de la Provincia era –con esto voy a ir concluyendo el relato para dar la definición en minutos más– que de los tres modelos que se pueden tener de relacionamiento entre la Fuerza de Seguridad y el poder político, uno es una excesiva presencia del poder político en las Fuerzas de Seguridad; otro, una ausencia absoluta de directivas del poder político sobre las Fuerzas de Seguridad, y nos quedábamos con un tercero, que era una posición equilibrada donde, a través de mecanismos institucionales, la sociedad y el poder político controlaban a sus Fuerzas de Seguridad.

Cada uno sabe dónde está parada Córdoba; yo, como no quiero explayarme más, yo ya sé dónde está parada Córdoba, los invito a que reflexionen sobre estas tres cosas.

Por eso, propusimos –nuestra diferencia con el Gobierno de la Provincia es un problema de paradigma, y el paradigma nuestro es el tercero– una fuerza de seguridad que trabaje con reglamentos claros y con leyes claras que le marquen su funcionamiento, un Fiscal General que, desde afuera del sistema, pero con el sistema, coadyuve al funcionamiento entre el Poder Judicial y la Policía de la Provincia, pero sin interferencias nocivas de un lado ni del otro.

Dado el estado en que ya se encontraba la Policía en 2011; nosotros, en ese amparo, vimos que los vendedores de drogas de estos 62 barrios tenían protección policial de malos elementos de la Policía, no de los buenos. La gente me decía: “doctor, acá qué vamos a denunciar si se paran en la puerta del que vende”, y cosas así. Lo escuché en muchos barrios.

Entonces, nosotros propusimos al Gobernador De la Sota, en aquel momento, un sistema intermedio que consistía en buscar seis comisarios mayores o generales que se hubieran ido pobres, como corresponde a un comisario de la Policía que se retira; tiene que ser forzosamente pobre; si vive del retiro, tiene que ser un retiro decoroso, no voy a decir pobre, y si encontramos –que los vamos a encontrar– comisarios mayores o generales que están en esa actitud y han tenido un papel lucido en la fuerza, darles la Policía por un plazo de dos años para que reconstituyan, ellos que vivieron bien la función policial, con independencia, sin dejarse molestar, sin tener acceso a las cajas que tienen estos sistemas –cajas irregulares, obviamente–, y dejarles que recuperen ese espíritu de cuerpo.

Es un problema de paradigma en relación con lo que está planteando el Gobierno de la Provincia, y a la ley de reforma de la seguridad se la vamos a acompañar en general porque les reconocemos que tienen un problema y que hay que resolverlo, pero no estamos de acuerdo con el paradigma de fondo; entendemos que el paradigma debe ser otro. Y algún día nos gustaría que pudiéramos debatir ese tema.

Entonces, nosotros les apoyamos en general esa ley, pero, lo que no podemos apoyar es la del Tribunal en reemplazo del que está haciendo agua, precisamente, porque no va con nuestro paradigma. Según nuestro paradigma –ese tercero–, el poder político le da la direccionalidad a la Policía, pero lo hace en el marco de leyes y reglamentos, y después la Policía es esclava de esas leyes y de esos reglamentos.

Pero el hombre de la Policía no tiene que estar mirando al poder político, ni para que te designen al comienzo ni para que te asciendan al final; tiene que ser un sistema con una relativa autonomía, y eso le va a traer sanidad al sistema. Entonces, con lo que ustedes proponen vos empezás a ver quiénes van a ser los integrantes, y bueno, es de nuevo el poder político el que tiene también ahí control a la entrada, a la salida. Esa conformación nosotros no la queremos.

Por estas razones, así expresamos nuestro voto y confiamos que alguna vez podamos tener un debate sobre los paradigmas.

Nada más, señor presidente.

-Ocupa la Presidencia el señor Presidente, Vicegobernador Manuel Calvo.

Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador García Elorrio.

Tiene la palabra la señora legisladora Noel Argañaraz.

Sra. Argañaraz.- Señor presidente: yo creo que hay que empezar a debatir cuáles son las razones profundas por las cuales hoy estamos tratando estos proyectos, y las razones profundas no creo que sean, como las que dijo el ministro de Seguridad Mosquera, que se está buscando una definitiva democratización de las fuerzas de seguridad o que se busca ampliar el control civil de las fuerzas represivas.

Las causas profundas por las cuales estamos debatiendo acá, las verdaderas causas tienen nombre, tienen apellido y son jóvenes que ya no están más, y por más que se les cambie el nombre a consejos o que se le agreguen actores a los Tribunales de Conducta esa realidad no va a cambiar.

Los brutales asesinatos de Blas y de Joaquín dejaron en evidencia ante los ojos de todos los cordobeses cómo es la práctica cotidiana de la Policía de la Provincia, quisieron hacer de cuenta que era un enfrentamiento, quisieron hacer de cuenta que era para actuar por defensa propia, lo intentaron, pero no pudieron, y los medios de comunicación, muchas grandes corporaciones de medios de comunicación, que revictimizan a las víctimas tampoco pudieron, y quedó en evidencia cuál es el accionar de la Policía de la Provincia que dispara, asesina y planta armas. Esa impunidad quedó a los ojos de todo el mundo.

Para entender la profundidad del planteo que hacemos desde el Frente de Izquierda que, desde ya vamos a rechazar ambos proyectos, hay que tener una visión de conjunto de lo que pasa en el mundo, incluso. Porque la brutalidad policial, los asesinatos racistas por parte de las fuerzas de seguridad son un hecho internacional y hasta podríamos decir que aumentan proporcionalmente como va aumentando la desigualdad social en medio de una crisis, los ataques al pueblo trabajador, el asesinato del joven George Floyd, por parte de las fuerzas de seguridad de la policía norteamericana, que tanto algunos legisladores acá reivindican; asesinatos racistas que conmovieron y desarrollaron movilizaciones históricas en Estados Unidos, poniendo en cuestión un racismo estructural. Lo vimos también en Colombia, por ejemplo, cuando asesinaron a Javier Ordoñez y lo hicieron con una pistola Taser, esas que tanto le gustan a Berni, a la Patricia Bulrich y a muchos cordobeses, tanto oficialista como opositores.

No puedo respirar, decía George Floyd, y es lo que les pasa a millones pibes y jóvenes trabajadores de los barrios populares en el mundo, están asfixiados por la pobreza y por la desocupación, pero, a su vez, las respuestas a la violencia policial también son internacionales y crecen en todo el mundo creando enormes fuerzas que ponen en cuestión lo que está sucediendo.

Argentina, por supuesto, no se queda atrás y desde que empezó la pandemia vimos el caso emblemático de Facundo Castro, asesinado por la policía bonaerense, o el caso de Luis Espinosa, una de las tantas víctimas de la Policía de Tucumán, y son nombres, son historias de una larga lista.

Les voy a leer unos datos: según el informe de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, en todo el país, hubo 441 asesinatos a manos de las fuerzas de seguridad sólo bajo el Gobierno de Alberto Fernández.

Pero Córdoba merece un capítulo aparte, y acá me gustaría hacer un poco de historia, señor presidente, porque pareciera que falta memoria, pero sobra cinismo cuando tenemos que debatir cuál es el accionar de las fuerzas de seguridad y las responsabilidades de los gobiernos y, además, para explicar por qué no se trata de un problema coyuntural, y por qué no se puede cambiar a través de reformas a las instituciones.

La Policía de Córdoba, como tantas otras en de diferentes provincias, tuvo una continuidad directa con la dictadura genocida, incluso, en las primeras décadas de los gobiernos constitucionales, luego del '83, es la Policía del Navarrazo, la del D2, la que torturó, la que asesinó, la que desapareció, la que tenía vínculos directos con el poder político y que, incluso, fue intocable bajo gobiernos radicales en los años '80 y '90. Esos mismos represores son los que educan a las nuevas camadas de las fuerzas en democracia. Esos represores tuvieron vínculos estrechos con los gobiernos de la época, pero no fue solamente la policía; las cúpulas de los ejércitos, sin ir más lejos, Benjamín Menéndez se paseaba por los palcos de los actos políticos de la UCR.

El aval político a esa continuidad de genocidas fue tal que quedó evidente cuando el “Tucán” Yanicelli, quien integró el D2 en la dictadura, llegó a director de Inteligencia Criminal bajo el gobierno de Ramón Mestre. El encubrimiento de ese gobierno para que se reciclaran represores fue brutal, y bajo esos personajes se fueron conformando las nuevas fuerzas de seguridad.

Su accionar represivo ya no estaba direccionado a la desaparición de las generaciones de militantes revolucionarios, no; había otro plan que era mantener un orden social neoliberal que, una vez impuesto por la dictadura genocida, lo garantizaron y lo profundizaron Menem y Cavallo, consistente, por supuesto, en reprimir las luchas obreras, ejercer los controles sociales en los barrios populares, justamente, para evitar levantamientos de quienes sufrían las consecuencias del pacto de hambre y miseria con el FMI, políticas que tanto los peronistas como los radicales impusieron, incluso, hasta el propio Néstor Kirchner como Gobernador de Santa Cruz, desde donde festejó la privatización de YPF. Obviamente, las consecuencias de esas políticas no se pueden contener con una mísera asistencia social.

Por eso, a comienzos de los años 2000 se endurecieron los códigos contravencionales bajo la excusa de la inseguridad, y esta política fue vanguardia bajo el Gobierno de De la Sota, que tomó el paquete de “tolerancia cero” traído de Nueva York e implementó lo que muy lúcidamente decía Wacquant en su libro “Las cárceles de la miseria”, lo que fue una limpieza de clase.

Bajo el Gobierno de De la Sota se impusieron figuras como la del merodeo, que realmente es un mamarracho jurídico que llenaba las cárceles de pibes y pibas de los barrios populares. Entre las divisiones especiales para ejercer el control estaban las CAP, denominadas por el ingenio y la creatividad popular “comandos antipobre”, como le decían las pibas y los pibes de los barrios.

Pero, como siempre, el gran delito siempre estuvo garantizado por las fuerzas de seguridad. Los distintos escándalos ligados al narcotráfico, a la venta de armas, a la trata de personas, como lo vimos en los casos de Soledad Cuello, Delia, Nora, entre tantos otros, escándalos que incluso llevaron a tener que remover la cúpula policial en el 2003 por los vínculos que tenía la Dirección de Drogas Peligrosas con el narcotráfico; tuvo que renunciar, en su momento, el Ministro de Seguridad Alejandro Paredes.

Después, para represtigiarse, para intentar represtigiarse, el “amenaza periodistas” Suárez impuso un operativo de saturación policial llenando los retenes en los puentes de policías, yendo a los barrios populares, a las plazas, haciendo corralitos con los jóvenes de los barrios, ¿recuerdan lo que era? No cuidaban ni la forma. Esa es la política que le da verdadero poder de fuego a la Policía, que después se lleva la vida de nuestros pibes. Y esto ha pasado durante cuatro décadas de gobiernos constitucionales.

Según un informe de la CORREPI, desde el año '83 hasta el 2019, 463 personas fueron asesinadas por las fuerzas de seguridad en Córdoba, casi la mitad por casos de gatillo fácil.

Pero es lógico que la juventud no acepte pasivamente esta brutalidad, y organizaron una de las movilizaciones más emblemáticas, que es referencia a nivel nacional de lucha contra la impunidad y el abuso policial, que son las “marchas de la gorra”, donde miles de pibes acceden al centro y se movilizan con sus familias, con las madres, que tienen en las remeras, en los carteles a sus hijos, a los compañeros del colegio que ya no están más y pelean por justicia. Porque acá se ve que hay una política de Estado, porque la Justicia nunca avanza con las causas de gatillo fácil, con las causas de abuso policial, no avanzan. Ahí se ve la complicidad de la Justicia y se ve que es un verdadero plan de Estado.

Hubo muchos intentos: modificaciones normativas, todos los cambios en los tribunales de disciplina o de conducta no son cosas nuevas. Recuerdo cuando Schiaretti asumió, en su segundo mandato, que nos querían hacer creer que era un cambio importante el cambio de Código de Faltas y el Código de Convivencia, y desde el Frente de Izquierda nos opusimos, en ese momento, mi compañera Laura Vilches, fuimos los únicos que nos opusimos, y la verdad es que lograron desmovilizar, desviar la movilización, pero no porque en los barrios populares significara un cambio importante, sino porque muchas organizaciones sociales, que en ese momento se ubicaban en la oposición, se volvieron obsecuentes al gobierno, y muchas organizaciones de derechos humanos, que hoy cumplen funciones, en algunos momentos hacen silencios que son cómplices.

Pero, así como las reformas anteriores no modificaron nada, éstas tampoco lo van a hacer. Es verdad que hay gente que se ilusiona con un mayor control civil en los Tribunales de Conducta, o algunos piensan que es insuficiente y lo que hay que hacer son cosas utópicas como llamar a elecciones populares de comisarios, o salir a reaccionar y sindicalizar a la policía, lo que le daría un mayor poder de fuego todavía. Pero la verdad es que las fuerzas policiales no son independientes de las políticas de gobierno, del orden social que sostienen, que hoy implica una Córdoba de un 40 por ciento de pobreza o más, un récord en desocupación, una pobreza en los niños que es más de dos tercios, y como no es independiente de ese orden social, al contrario, es el brazo ejecutor de ese orden social.

¿Realmente creen que, por incorporar a miembros de la Facultad de Derecho a un Tribunal de Conducta, la policía va a dejar de disparar, de asesinar a jóvenes en los barrios populares? La política que hay hoy para los barrios populares son balas, palos y míseras asistencias sociales.

No estoy haciendo una especulación ni una predicción porque, si uno va a lugares como Paso Viejo, muy lejos, adonde nadie quiere ir, y va a hablar con las docentes de Joaquín, con la familia de Joaquín, te van a decir que no solo la policía asesinó a Joaquín por la espalda, sino que, además, marchan todos los lunes pidiendo justicia y a los pibes los siguen hostigando en las plazas populares y siguen exigiendo justicia y que pare el abuso policial.

Ellos, como muchos otros familiares, como lo seguimos haciendo por Facundo Rivera Alegre, que seguimos buscándolo, seguimos exigiendo justicia, por todos los casos de gatillo fácil y la única forma en la que, en última instancia, nosotros confiamos es la fuerza de la movilización para frenar la impunidad policial y el gatillo fácil, y confiamos en la enorme tradición que tiene la juventud de Córdoba en construir grandes fuerzas, como lo hacen acá, y hacemos propia la consigna que levantan miles y miles de jóvenes en Estados Unidos que llaman a la abolición de este aparato represivo.

Mire, señor presidente, la juventud trabajadora y precaria de los barrios populares de nuestro país tampoco puede respirar, pero esta situación no va a seguir así por mucho tiempo.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora Argañaraz.

Tiene la palabra la legisladora Luciana Echevarría.

Sra. Echevarría.- Señor presidente: nuevamente, sin un debate profundo e integral, el Ejecutivo provincial nos presenta dos proyectos que tratan cuestiones de mucha sensibilidad social, como son la seguridad y el control de la fuerza policial.

Lo hacemos en el cierre de un año en el cual ocurrieron hechos de altísima gravedad institucional y, sin embargo, nunca logramos que el Ministro de Seguridad se hiciera presente en esta Legislatura.

Uno de los proyectos propone una serie de modificaciones a la Ley de Seguridad pública de Córdoba, la 9235, y puede verse con claridad que el único propósito de dichas reformas es cambiar algunos aspectos cosméticos del sistema de seguridad, como un intento desesperado de dar cierta legitimidad a las mismas políticas nefastas y obsoletas que viene implementando este Gobierno desde hace más de 20 años, cuyo fracaso resulta más que evidente.

Acá no se puede tapar el Sol con las manos, hace años que lo intentan, pero, obviamente, no lo logran, porque mientras persistan las profundas desigualdades sociales, mientras más de la mitad de la población sea pobre, mientras subsista este sistema que sólo reproduce y profundiza la miseria y la exclusión, no habrá soluciones mágicas a la problemática de la inseguridad. Cualquier abordaje sobre seguridad que no contemple una política estatal agresiva en materia inclusión social, de trabajo genuino y de educación, será claramente incompleto y está destinado a fracasar.

No se trata de poner más y más policías, al contrario; de hecho, si estamos discutiendo esto hoy acá es porque, justamente, la Policía es una de las principales usinas de los hechos de inseguridad.

Más allá de esta consideración, aun cuando pongamos la lupa solo sobre esta institución, vemos que estamos ante proyectos que sólo reforman ciertos principios generales, con los cuales podemos acordar, modifican la composición de algunos organismos y crean otros. En definitiva, son apenas una pantalla para hacer de cuenta

que se hace algo frente al creciente cuestionamiento social, es el famoso “cambiar algo para que nada cambie”.

La composición del nuevo Organigrama del Sistema de Seguridad Pública y Ciudadana sólo aumenta el número de integrantes y áreas con relación a la ley vigente, pero sigue garantizando la hegemonía absoluta del oficialismo en las tomas de decisiones.

Lo mismo puede decirse de la constitución del flamante Consejo de Política Criminal y de Gestión de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana. De esta manera, la pretendida participación ciudadana -en algún renglón del proyecto se menciona el desarrollo de estrategias de prevención- se reduce a una expresión que puede sonar linda, pero que no tiene ningún correlato concreto para su efectivización.

El proyecto crea el Sistema de Control Democrático de las Fuerzas de Seguridad Pública Ciudadana; la verdad es que es un nombre bien ambicioso, y le asignan la función de asegurar un funcionamiento transparente de las fuerzas de seguridad, un desafío más ambicioso aún.

Sin embargo, la mayoría de las instituciones integrantes de este sistema pertenecen al poder político, al Ejecutivo, y los únicos mecanismos de participación social a los cuales se hace referencia son los ya previstos en la Ley 10.197 que, ciertamente, vienen siendo un procedimiento puramente formal no vinculante y que, por ende, no garantiza ninguna participación ciudadana y popular. O sea que pretenden que creamos que el mismo Gobierno, responsable del fracaso rotundo de nuestra Provincia en materia de seguridad, va a ser el que lo resuelva.

Pero esto no termina acá, porque si vamos al otro proyecto, éste crea el denominado Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana. Acá, el oficialismo llega realmente al colmo de la caradurez, porque dice que va a instituir un mecanismo de control externo, civil, democrático, autónomo, transparente y eficaz de la actuación de las Fuerzas de Seguridad. Pero, cuando uno ahonda un poco más, surge la pregunta: ¿qué cambia este proyecto respecto al viejo Tribunal de Conducta Policial? Agregan un representante más del Ejecutivo, un miembro de la Universidad Nacional de Córdoba y, ahora, a último momento, agregaron dos integrantes más de la Legislatura. Pero, en definitiva, poco importa, porque lo más probable es que no se reúnan nunca, porque, de hecho, se dice ahí explícitamente que, para la mayoría de las causas, no hace falta que decida el pleno.

Entonces, el destino de este nuevo tribunal va a ser el mismo del que deroga: años al servicio de la impunidad policial. Hasta los asesinos de Blas tenían causas estancadas en este tribunal, entonces, no sé de qué cambios hablan. Incluso, después del escándalo de Joaquín cambiaron de urgencia al jefe de Policía, pusieron a una mujer para intentar dar una imagen menos hostil, pero da la triste casualidad de que esta mujer era previamente la directora general de recursos humanos y miembro del Consejo Asesor de Formadores Policiales. O sea, tenía a su cargo seleccionar y formar a los policías y, a juzgar por los gravísimos hechos que tuvimos que presenciar, evidentemente, no lo estaba haciendo muy bien.

Miren, en los últimos meses -y tomo sólo los últimos tres meses porque, si no, no nos vamos más-, hemos tenido que escuchar barbaridades de la Policía de la Provincia de Córdoba; un titular: “Detienen a dos policías por el robo de motos secuestradas por la Justicia”, “Córdoba: avanza otra causa contra policías acusados por gatillo fácil”, “Imputan y detienen por abuso a un alto jefe policial”, “Acusan a un policía recién egresado de aprovecharse del uniforme para violar”; “Apresan a policías por robarse un cuchillo en un control vehicular”; “Imputan a un jefe policial y detienen a dos comisarios por el robo de autopartes en Villa María”, “Tres efectivos cayeron presos por robos en apenas una semana”, y estos bien recientes de hoy y ayer, “Femicidio: la violencia de un policía dejó a tres niños huérfanos en Córdoba”, “Detuvieron a un policía que quedó filmado cuando robaba en una YPF en Biale Massé”. Bueno, así, cientos de titulares.

Y me van a decir: “bueno, legisladora, justamente, por eso estamos debatiendo lo que estamos debatiendo”; les preguntó -y les pido que se pongan una mano en el corazón-, ¿realmente creen que estos dos proyectos están a la altura de las circunstancias para frenar estas aberraciones, que no son aisladas, sino sistemáticas y estructurales?

Ni siquiera garantizan una composición democrática de la famosa Dirección General de Control e Investigación, que es el organismo encargado de la función

instructora, es decir, el que recepta las denuncias, investiga y puede actuar de oficio. Todos los miembros de esta dirección son nombrados por el Poder Ejecutivo, que es la que tiene todo el poder; incluso, dice explícitamente "El Tribunal de Conducta no puede sancionar a nadie sin que sea esta Dirección de que eleve la causa ni puede imponer una sanción mayor a la que propone esta Dirección".

En definitiva, nos están proponiendo que quien controle a las fuerzas de seguridad sea exclusivamente la misma casta política que ha edificado a imagen y semejanza una fuerza policial profundamente corrupta y asesina.

Entonces, sinceramente, esto que traen hoy acá es una burla a la memoria de Blas, de Joaquín, de Yamil y de José Ávila, y a la enorme lista de víctimas de gatillo fácil, de violencia institucional en nuestra Provincia, y también a sus familias, que siguen peleando hasta el día de hoy por Justicia.

Lamentablemente, en nuestro país y en la mayor parte del mundo, la institución policial es una de las patas fundamentales del delito organizado -del narcotráfico, de las redes de trata y de los secuestros extorsivos. Es por esto que cuando hablamos de seguridad, la institución policial -porque no podemos hablar de policías en forma aislada- es siempre parte del problema y nunca parte de la solución. Y -como siempre decimos- la policía no actúa sola, el triángulo de impunidad es absolutamente claro y es lo que pretenden seguir sosteniendo con estas leyes. La policía, el poder político y el Poder Judicial son una unidad indivisible, hecha a la medida de la impunidad de los poderosos y, por supuesto, enemiga de los intereses populares.

Solo para traer un ejemplo que conozco en primera persona, en 2015, yo misma denuncié el faltante de más de 70 armas de la Central de Policía, incluso, esa denuncia fue citada como antecedente en el histórico fallo por la balacea en Nueva Córdoba.

Cinco años después ¿qué creen que pasó con esta causa? Nada. Adivinó, legislador Cossar, absolutamente nada. No avanzó ni un centímetro y, justamente, algunas de esas armas fueron utilizadas en el tiroteo de Nueva Córdoba, donde, una vez más, la Policía tuvo un rol nefasto.

Por eso, señor presidente, lamentablemente, todas estas reformas cosméticas van a quedar en letra muerta.

Nosotros insistimos en que la única forma de acabar con la corrupción, el abuso policial y el gatillo fácil es con verdaderas medidas de fondo. Es imprescindible dismantelar este aparato represivo y organizar unas fuerzas de seguridad sobre nuevas bases directamente controladas por las organizaciones populares donde los comisarios y los altos mandos sean elegidos por el voto popular directo y que también puedan ser revocados. Esto es una necesidad urgente, porque los de abajo no podemos ni queremos padecer más abusos ni lamentar más víctimas en manos de esta Policía. Este mensaje lo dejamos claro en las calles y lo seguiremos haciendo hasta terminar con tanta impunidad.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legisladora Echevarría.

Tiene la palabra la legisladora Verónica Garade Panetta.

Sra. Garade Panetta.- Gracias, señor presidente.

Venimos, desde la Unión Cívica Radical, a manifestar nuestro rechazo a las modificaciones propuestas a la Ley 9235, porque advertimos, como lo hemos efectuado a lo largo de las sesiones de este año, que la inseguridad pública es la principal preocupación de los cordobeses, evidenciándose un grave problema de gestión de Hacemos por Córdoba, después de 20 años que conocen, o deberían conocer, la evolución del delito en la Provincia de Córdoba.

Estamos convencidos de que la inseguridad que azota a los cordobeses, la enorme propagación de robos con armas, los múltiples casos de gatillo fácil en manos de las fuerzas de seguridad, como las imágenes de hoy, donde un policía es detenido por robo, otro por femicidio, las armas policiales que aparecen en manos de los delincuentes, como otros tantos, representan el padecimiento de millones de cordobeses que no tienen absolutamente nada que ver con las modificaciones de la Ley de Seguridad Pública de la Provincia, porque no es un problema normativo o de leyes, sino que claramente es un problema de gestión, de políticas de seguridad y de profunda crisis de la institución policial.

Esta problemática, de la cual es parte solamente una parte de la Policía de la Provincia de Córdoba -porque también existe gran cantidad de agentes idóneos,

honrados y honorables-, es la que evidencia que existen policías inmersos dentro del esquema delictual de la Provincia como cuando vemos, como hoy, en los medios de comunicación y advertimos que existen policías de Córdoba que roban como ha ocurrido, donde en una estación de servicio de Bialet Massé se comprueba que un policía estaba robando con uniforme policial, o cuando se expone como una herida abierta que los policías que intervinieron en el asesinato de Blas Correa no sólo lo mataron, sino que existió, por parte de los comisarios jefes, un armado de la escena del crimen, encubrimiento agravado y falsos testimonios, además de los ya comprobados hechos de plantar un arma y lesiones a los otros partícipes del hecho, o como cuando hoy la Cámara Federal insta a la Jefa de la Fuerza policial y al ministro de Seguridad a que aborden la problemática de ausencia de capacitación de las Fuerzas Antinarcotráfico.

Las modificaciones propuestas evidencian que Hacemos por Córdoba no quiere hacerse cargo de que lo que afronta es un problema de gestión con la seguridad, porque este proyecto de ley es lo mismo que pensar que el delito disminuirá por el hecho de que creemos más juzgados penales para que se condene a mayor cantidad de delincuentes, o porque construyamos más cárceles para albergar a más condenados.

Ahora, no podemos pensar que pueden ser solución o respuesta de gestión estas modificaciones a la Ley de Seguridad Pública.

Es así, que declarar y ampliar los objetivos de promover la participación ciudadana en el desarrollo de estrategias en la prevención del delito y la violencia, e impulsar la convivencia ciudadana desde una perspectiva interagencial e integral de la gestión de conflictividad social, o fomentar el protagonismo de los gobiernos locales en el desarrollo de políticas de prevención de la violencia; promover procesos de democratización y profesionalización de las Fuerzas de Seguridad o establecer mecanismos de control de las Fuerzas de Seguridad Pública que aseguren el funcionamiento transparente respecto de estos nuevos objetivos, no tenemos nada que indilgar, pero no son más que elevadas declaraciones que en nada sirven para cambiar.

No existe un plan de seguridad pública que aborde la temática con una visión integral, que tenga en cuenta la pobreza, la gran inserción del narcotráfico en la sociedad, la ausencia de políticas de prevención del delito, el perfeccionamiento y tecnificación de los delincuentes, la violencia ciudadana, etcétera.

Nada de esto podrá ser abordado, sino con políticas de gestión, y es por ello, que no acordamos con este proyecto porque evidencia una clara miopía de la realidad.

También entendemos inconducente la incorporación de sujetos al esquema del Sistema Provincial de Seguridad Pública y Ciudadana porque son actores que ya existen y son hoy responsables de la temática de seguridad, como es el Ministro de Seguridad, el Ministro de Justicia, el Ministerio Público, el Consejo de Política Criminal, el Observatorio de Estudios de Convivencia y Seguridad Ciudadana y los Consejos Departamentales, Municipales y Barriales; es decir, todo un organigrama de sujetos e instituciones que ya participan de la problemática de seguridad desde hace tiempo y, pese a ello, el problema se agravó, por lo que su nominación dentro de una ley como una estructura orgánica de políticas de seguridad en nada contribuye a la solución del problema.

Por último, quiero reseñar que este proyecto de ley incorpora la figura de la Defensoría de las Fuerzas de Seguridad con notables funciones, pero entendemos que hubiera sido también conveniente crear una Defensoría de los Ciudadanos Víctimas de los Delitos de las Fuerzas de Seguridad.

Nada más, señor presidente.

Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora Garade Panetta.

Tiene la palabra la legisladora Silvia Paleo.

Sra. Paleo.- Muchas gracias, señor presidente.

Quiero dejar constancia de que, más allá de que están en tratamiento dos proyectos, sólo voy a referirme brevemente al proyecto 31912, de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad, ya que otros integrantes de mi bloque también harán uso de la palabra en relación a estos proyectos.

En primer lugar, es importante puntualizar que este acompañamiento de algunos legisladores del bloque de Juntos por el Cambio de ninguna manera significa respaldar ni convalidar la actuación de lo que fue hasta ahora el Tribunal de Conducta

Policial; muy por el contrario, esta actuación fue duramente cuestionada por los legisladores de este bloque en más de una oportunidad.

Tampoco significa que estemos conformes con las políticas de seguridad que el Gobierno viene llevando adelante desde hace más de 20 años.

Tal como muchas veces hemos señalado desde estas bancas, claramente, una de las mayores deudas de Córdoba es en materia de seguridad; sobran casos en toda la provincia de reclamos incesantes de muchos vecinos de diferentes localidades exigiendo mayor seguridad.

Córdoba no es un lugar tranquilo para vivir; antes se podía usar eso como eslogan, pero ya no se puede más.

Como ya lo han dicho algunos de los legisladores preopinantes, un tema es la inseguridad, y otro la violencia institucional, ambos nos preocupan y mucho.

Sí queremos destacar lo que entendemos es una buena noticia, aunque sea recién ahora, en diciembre, y es que, finalmente, nos dispongamos a hablar de seguridad en este recinto.

Nos alegra porque no es un tema que sea sólo de los políticos, es un tema de la agenda de la gente y, en este año tan difícil, es hora de escuchar sus reclamos.

Desde hace mucho tiempo la inseguridad está en el ranking de las preocupaciones más frecuentes de los cordobeses; eso no es casualidad y muestra, claramente, que hasta ahora no se ha tomado el camino correcto.

Queda mucho por hacer todavía, pero –insistimos– es una buena noticia que nos dispongamos a debatir, al menos en parte, un aspecto de la seguridad en esta Legislatura.

Quienes acompañamos la propuesta para reformar el Régimen Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad, lo hacemos porque queremos ser parte de la solución, sin dejar de reconocer el problema, que es real y que afecta a miles de cordobeses.

El 20 de mayo de este año, tomó estado parlamentario el proyecto 30144/L/20, que presentamos junto al legislador Darío Capitani. Esa iniciativa buscaba reformar la Ley 9.120 incorporando al entonces Tribunal de Conducta Policial un legislador más.

La ley prevé la integración con tres titulares, uno del Poder Ejecutivo, un legislador provincial y un representante de la Fiscalía. Nuestra propuesta pretendía hacer honor a lo que entendemos es el espíritu de esa ley, que al plantear la integración con un representante del Poder Legislativo no pretendía solamente darle un voto más al oficialismo, sino, por el contrario, garantizar la participación de las otras fuerzas políticas.

Con la firme convicción de que si queremos organismos democráticos que realmente hagan honor al sistema republicano que pregonamos, son las voces que representan a los partidos no gobernantes las que tienen que ser escuchadas.

Por ello sugerimos, en aquella oportunidad, que fueran dos los representantes de la Legislatura que pudieran integrar el Tribunal de Conducta Policial: uno por la mayoría, como es uso y costumbre, y uno por la minoría.

Por eso, celebramos que aquella propuesta de reforma a la, entonces, Ley 9.120, que presentamos hace ya varios meses con el legislador Capitani, sea incluida hoy como parte del artículo 8º del proyecto que he mencionado, y además de la integración más completa que preveía el proyecto del Ejecutivo, se incorpore a un legislador de la oposición.

Un aspecto más que queríamos señalar y destacar es el gran trabajo que se hizo en las comisiones, donde pudimos acercar propuestas y sugerencias desde los diferentes bloques, muchas de las cuales fueron incluidas en los despachos que hoy llegan al recinto. Deberíamos tomar esta metodología para todos los debates y todas las propuestas.

Finalmente, tal como lo establece el Preámbulo de nuestra Constitución provincial, se pretende el establecimiento de una democracia pluralista y participativa.

Por otro lado, los Objetivos de Desarrollo Sostenible también plantean la necesidad de avanzar hacia la construcción de sociedades pacíficas e inclusivas; y en esa línea hay que trabajar, fortaleciendo las instituciones.

Esa democracia que queremos no se hace sólo con palabras, requiere hechos concretos.

Tampoco alcanza con una sola ley, o con dos, como estamos tratando hoy. Como lo venimos sosteniendo, mejorar la seguridad en la Provincia de Córdoba es un desafío que requiere de acciones integrales. No por esta ley tendremos resueltos todos

los problemas en Córdoba, pero sigo creyendo en que algo puede cambiar. Aspiramos a que esta nueva ley signifique un avance que permita que los cordobeses podamos estar tranquilos con relación a las conductas de quienes están para cuidarnos.

Por último, enhorabuena que hoy podamos modificar el Régimen Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad. Ojalá aprender que había que reformar lo que fue el Tribunal de Conducta Policial no nos hubiera costado tantas vidas.

Nada más, señor presidente. Muchas gracias.

Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora Paleo.

Tiene la palabra el legislador Oscar González.

Sr. González.- Gracias, presidente.

Tenemos en debate dos leyes vinculadas a la seguridad. Si hay un tema en la agenda pública en el mundo, hoy, ese es el problema de la seguridad, en los países desarrollados y también en los países emergentes y en países subdesarrollados.

Por distintas causas, este es un problema que parece de difícil control para los gobiernos de distintos signos, en el mundo.

Algunos indicadores son importantes porque desnudan lo que ocurre con el problema de la seguridad en nuestro país y en la región. Uno de los indicadores más fieles en este tema es la cantidad de homicidios por cada 100 mil habitantes. Cuando uno mira esas cifras, en la provincia de Buenos Aires es de 5,2, en la provincia de Santa Fe es de 9,7, en la provincia de Tucumán es de 8,4, en la provincia de Mendoza es de 4,8, en Montevideo -ciudad muy parecida a Córdoba, y que fue puesta hoy como ejemplo- esa cifra es de 14 muertos en homicidio por cada 100 mil habitantes. En nuestra Provincia esa cifra es sensiblemente más baja a todas las anteriormente mencionadas, es de sólo 3,3 muertos en homicidio por cada 100 mil habitantes.

Pero la tarea de controlar la criminalidad con más eficacia, reduciendo la violencia social, es un desafío enorme. Esta tarea debe procurar también evitar prácticas y lógicas autoritarias relacionadas con el uso la fuerza. La consolidación de una política de seguridad respetuosa del Estado de derecho requiere la democratización en temas de seguridad y de sus instituciones. Este proceso es siempre inacabado, es perfectible, dinámico y abierto, siempre.

Para avanzar hacia esa democratización, la modernización de las instituciones, la profesionalización de sus miembros y la transparencia son importantes, pero resulta imprescindible para esa democratización un mayor control político, judicial, disciplinario y social de las fuerzas de seguridad.

No existe en el mundo -salvo en la quimera de algunos fantasiosos que alguna vez escuchamos en este recinto- un Estado que pueda prescindir de sus fuerzas de seguridad, porque ellas son las que garantizan derechos fundamentales como el derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad y al resguardo de la propiedad.

El gobierno y control de las fuerzas de seguridad constituyen una responsabilidad que requiere de la atención permanente de las autoridades que representan al pueblo, porque la gran cantidad de poderes y facultades que esas fuerzas tienen implican también el riesgo latente del ejercicio arbitrario de esas atribuciones.

La posibilidad de privar a una persona de su libertad, o de ejercer violencia física, incluso utilizando un arma de fuego, implica siempre una enorme responsabilidad que los Estados depositan en sus fuerzas de seguridad.

Por eso, resulta esencial contar con mecanismos de control en la prevención y detección de infracciones a las normas y ser contundentes en la aplicación de sanciones frente a las conductas ilegales.

Históricamente, presidente, fueron las propias fuerzas de seguridad las responsables de ejercer el control sobre la actividad de sus integrantes, a través de sus propias direcciones y de lo que se denominan las áreas de asuntos internos. Históricamente, mantuvieron también un altísimo nivel de autonomía en ese sentido.

Sin embargo, y esto ha sucedido en todas partes del mundo, la ausencia de resortes de control externo, sumada al espíritu de cuerpo que se genera en este tipo de instituciones, ocasionan desviaciones al interior de estas estructuras que siempre producen un grave daño sobre la comunidad que deben resguardar, a veces, con hechos dolorosos, como los que nos ha tocado vivir en nuestra Provincia durante este año. En definitiva, la democratización de las políticas de seguridad y de las fuerzas es un proceso siempre complejo, lleno de obstáculos y desafíos.

Córdoba ha impulsado una verdadera política de Estado en materia de seguridad, dando cuenta de la vocación democrática y del irrestricto respeto por los derechos humanos que nuestros gobiernos han impuesto a todas las políticas públicas. Algunos hitos son prueba de esta decisión. Por ejemplo, la creación de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, en el año 2014, única en su tipo a nivel nacional; dicha fuerza se encuentra a cargo del Ministerio Público Fiscal, posee estándares de transparencia institucional para la actuación de sus efectivos y protocolos para la trazabilidad de los estupefacientes encontrados.

También, esta Legislatura, en el año 2015, derogó el viejo y cuestionado Código de Faltas, que ha sido también citado hoy aquí, reemplazándolo por el Código de Convivencia Ciudadana que incorporó un nuevo paradigma en la materia.

En el año 2017, se reformó la Ley 9235 ampliando los objetivos e integración del Sistema Provincial de Seguridad Pública y Ciudadana. Esa reforma creó el Plan Integral de Seguridad Pública, que incorporó una concepción democrática en las políticas de seguridad; esa reforma privilegió la prevención, la participación ciudadana y el modelo de proximidad para la Policía Provincial.

A partir de ese cambio, se creó el Consejo Provincial de Seguridad Ciudadana, los Consejos Barriales de Prevención, el Equipo Interministerial de Seguridad, el Observatorio de Estudios de Convivencia y Seguridad Ciudadana, etcétera, que surgieron de la citada norma y produjeron una verdadera innovación en el campo de las políticas de seguridad y que han merecido el reconocimiento de organismos internacionales.

El Ministerio de Seguridad puso en marcha el Programa de Policía Barrial, que instauró la proximidad como filosofía y estrategia para una reforma progresiva de la institución provincial. También se avanzó mucho en la formación y capacitación policial en derechos humanos, género y diversidad sexual.

Más allá de los avances realizados en estos años, los dos proyectos de ley que hoy tratamos son un nuevo salto de calidad para seguir avanzando hacia el objetivo perseguido.

En materia disciplinaria, Córdoba fue pionera a nivel nacional y latinoamericana en la creación de un Sistema de Control para las Fuerzas de Seguridad cuando, en el año 2003, se creó el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciaria, instituido por la Ley 9120; esto implicó un hito fundamental en el control disciplinario a través de un organismo autárquico y externo a la fuerza. Desde entonces, el tribunal que juzga a los miembros de las fuerzas de seguridad que cometen ilegalidades es presidido por un funcionario del Poder Ejecutivo y se integra, además, por un vocal designado por esta Legislatura y por otro designado por el Ministerio Público.

Si hace 17 años, la creación del Tribunal de Conducta implicó subir un peldaño en la democratización de las fuerzas de seguridad, este proyecto, señor presidente, profundiza ese camino.

Los proyectos que hoy tratamos proponen la nueva institucionalidad, un régimen disciplinario y un conjunto de procedimientos sobre la base de algunas ideas que hoy quiero resaltar con toda claridad.

Primero: la profundización del sistema de control externo de las fuerzas de seguridad, con la incompatibilidad para que miembros de las Fuerzas de Seguridad y Fuerzas Armadas, tanto en actividad como en retiro, conformen el Organismo de Control e Investigación y el Tribunal de Conducta. De esta manera, se intenta evitar que ese espíritu de cuerpo mencionado termine favoreciendo la impunidad.

Segundo: la instauración de un mecanismo disciplinario único para las tres fuerzas de seguridad de Córdoba, con las mismas faltas, sanciones, procedimientos y órganos encargados de investigar y juzgar a las tres fuerzas de seguridad, asegurando el principio de igualdad ante la ley; esto es completamente novedoso en Argentina.

Tercero: la diferenciación de la función de investigar con la de juzgar, el aseguramiento del derecho de defensa del personal investigado, profundizando los principios constitucionales y las garantías que rigen en nuestra Provincia.

El Control Externo Civil de Interpoderes resulta un avance sustancial en el control en el control social sobre la actuación de las fuerzas de seguridad.

Otras legislaciones de nuestro país muestran también avances en la materia, por ejemplo, provincias como Chubut, Mendoza, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Santa Fe, que tiene un proyecto que ya cuenta con estado parlamentario, tienen proyectos o leyes de este tipo, sin embargo, todas esas iniciativas proponen

organismos externos unipersonales bajo el comando de los ministerios de Seguridad, por lo que no tienen la representatividad institucional que, efectivamente, tiene la ley que hoy discutimos en esta Legislatura.

El proyecto de ley de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad se convertirá en la legislación más moderna de la región, promoviendo el respeto absoluto a los derechos humanos, la prevención y sanción de hechos de violencia institucional, violencia de género, actos de corrupción y discriminación, entre otros aspectos.

El artículo 2º de la ley destaca con claridad la esencia del proyecto: un control externo, civil, democrático, autónomo, transparente y eficaz. La legisladora Rinaldi se refirió a algunos de estos aspectos que quiero resaltar. Es externo y civil porque el proyecto, continuando con la línea de la Ley 9120, implica la creación de organismos por fuera de las estructuras de las fuerzas de seguridad, pero avanza más porque expresamente prohíbe la participación de los miembros activos o retirados de las fuerzas de seguridad dentro del Organismo de Control y del Tribunal de Conducta. Es democrático porque fortalece el gobierno de las fuerzas de seguridad por las autoridades representativas de la sociedad, además de profundizar la pluralidad en la integración del Tribunal de Conducta. Es autónomo porque tanto el Tribunal como el Organismo de Control no reciben instrucciones de nadie para investigar, acusar y juzgar, este carácter le asegura la independencia e imparcialidad necesarias. Es transparente porque los integrantes de las Fuerzas de Seguridad tendrán que presentar una declaración jurada patrimonial anual al Organismo, quien realizará un severo control.

Además, la Defensoría, el Organismo y el Tribunal se encuentran obligados a presentar un informe anual de gestión a esta Legislatura, al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Seguridad y al Ministerio Público Fiscal, de esta forma, los órganos deben dar cuenta de su actuación a los tres poderes del Estado.

Y, finalmente, es eficaz porque garantiza la independencia de la sanción administrativa de la sanción penal –como aquí se dijo– posibilitando imponer sanciones aún en aquellos casos en que se encuentre pendiente la respuesta del sistema penal.

En esta primera parte, en sintonía con el sistema acusatorio, se separan las áreas encargadas de la investigación, de la defensa y del juzgamiento. El nuevo sistema cuenta con la Dirección General de Control e Investigación encargada de la instrucción, investigación y acusación, de todas las faltas disciplinarias graves y pasibles de destitución. La designación del Director General estará a cargo del Poder Ejecutivo, a propuesta del Ministerio Público Fiscal. Los requisitos para ser Director General son los mismos que establece la Constitución Provincial para ser Vocal de Cámara en el Poder Judicial, lo que implica que se ha pensado en que sólo personas altamente capacitadas puedan acceder a este cargo.

Para la defensa técnica, disciplinaria, y a los fines de asegurar el debido proceso legal, se crea la Asesoría Letrada Disciplinaria de las Fuerzas de Seguridad, compuesta por un abogado de cada una de las fuerzas de seguridad.

Por último, el encargado del juzgamiento será el Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad. Este Tribunal de Conducta tendrá dependencia funcional, a partir de esta ley, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; estará integrado por 7 miembros, de los cuales 3 son designados por esta Legislatura. No es menor que uno de sus integrantes sea propuesto por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, y de los 3 miembros restantes, dos son propuestos por el Poder Ejecutivo y uno por el Ministerio Público Fiscal.

En la segunda parte del proyecto se crea un nuevo Régimen Disciplinario, también único para todas las fuerzas de seguridad de nuestra Provincia.

También se regulan deberes de actuación del personal, y quiero resaltar algo que mencionó la legisladora Rinaldi: la eximición del deber de obediencia cuando la orden impartida fuera manifiestamente ilegal, porque eso pone hacia dentro de las fuerzas la primacía en la ley y la Constitución, por sobre lo que se denomina el deber de obediencia.

El proyecto establece también los deberes funcionales de los integrantes de las fuerzas de seguridad. Queremos destacar aquí el principio de la mínima utilización de las armas de fuego, sólo en casos excepcionales de legítima defensa –propia o de terceros– o en un estado de necesidad palmario, procurando reducir al mínimo los daños y lesiones sobre las personas. Este principio es congruente con lo que ya el

Poder Ejecutivo puso en marcha a través del Protocolo para la Policía sobre el Uso de Armas de Fuego.

En su segunda parte, el proyecto también desarrolla los principios generales del nuevo Régimen Disciplinario, y voy a detenerme en un punto que para nosotros es muy importante: la protección de la víctima. Consideramos muy importante el reconocimiento del derecho de las víctimas a participar en el proceso disciplinario, a interponer recursos y obtener reparaciones. Este derecho ha sido contemplado en importantes instrumentos internacionales dictados por la Asamblea General de las Naciones Unidas; en concordancia con esos instrumentos, el proyecto establece también el deber del Organismo y del Tribunal de Conducta de notificar a las víctimas las resoluciones que se dicten.

También es importante resaltar los agravantes: cuando las faltas sean cometidas por el concurso premeditado de tres o más integrantes, cuando sean cometidas por el titular de una dependencia en el ejercicio de sus funciones, cuando la falta –y este es un tema no menos importante– implique un caso de violencia de género, de violencia institucional o de corrupción.

Asimismo, para precisar con claridad la interpretación de los principios de actuación, se incorporan definiciones operativas muy claras de violencia institucional, de discriminación, de violencia de género y de corrupción.

En esta parte, también se instituyen las principales sanciones; ya la legisladora Rinaldi habló de las sanciones de destitución reservadas para los casos más graves, que implican no sólo la expulsión de las fuerzas de seguridad, sino la inhabilitación absoluta y perpetua para ocupar cualquier cargo público en los tres Poderes del Estado de la Provincia de Córdoba, o bien para integrar empresas de seguridad privada.

También son novedosas las sanciones sustitutivas, que incluyen tratamientos terapéuticos, deberes especiales de conducta, cursos educativos, reparación del daño y tareas comunitarias. Estas sanciones sustitutivas se imponen a través de un régimen muy sencillo, muy ágil y muy simplificado; obviamente, el imputado debe brindar su consentimiento para sustituir a la sanción principal. Además, las sanciones sustitutivas deben ser cumplidas fuera del horario en el que se presta servicio.

El nuevo sistema disciplinario incorpora también un lenguaje claro en la definición de las faltas graves y de destitución dejando la redacción de las faltas leves y medias para el decreto reglamentario.

Recordemos que, actualmente, todas las faltas de la Policía y el Servicio Penitenciario se encuentran reguladas por decretos. Con el cambio propuesto por esta ley las faltas más graves son de competencia del Organismo de Control e Investigación y quedan reguladas por ley con la participación de esta Legislatura en su elaboración.

Entre las conductas tipificadas se contempla la comisión de un delito doloso cuya pena sea inferior a los 3 años, sancionado con la suspensión de 60 días o la cesantía, siempre que no sea realizado en el ejercicio de la función; en cambio, si el personal comete un delito doloso en el ejercicio de la función o que tenga pena superior a los 3 años, la falta será sancionada con la destitución.

Se eliminaron faltas definidas de manera imprecisa y se incorporaron nuevas faltas como el incumplimiento de los protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad.

También es de destacar la política de tolerancia cero en relación al alcohol para los integrantes de las fuerzas de seguridad; si existe tolerancia cero para todas las personas en relación al alcohol admitido para conducir un vehículo por las rutas provinciales, estamos convencidos de que debe existir tolerancia cero para aquellas personas a las que hemos confiado el uso de armas de fuego.

Se regulan los principios que regirán el procedimiento de aplicación de sanciones, comenzando con los principios del debido proceso, en sintonía con los lineamientos que marca la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Se define la autoridad de aplicación del régimen para las faltas leves y medias, que serán aplicadas por las propias fuerzas de seguridad según mecanismos internos, mientras que las faltas graves y pasibles de destitución serán investigadas por el Organismo y sancionadas por el Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad.

Otro tema importante es que mientras la mayor parte de los organismos administrativos y judiciales del Estado se encuentran atravesando la transición hacia la desapapelización de los sumarios y la administración inteligente de la información, en este proyecto se prevé que las nuevas instituciones incorporen desde el inicio un

sistema de administración de los sumarios que sea digital, inteligente, dinámico y seguro, a través de la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación.

Otra novedad que incorpora el proyecto es la posibilidad de que las medidas de contenido jurisdiccional sean solicitadas directamente por la Dirección General de Control e Investigación. Por ejemplo, en el caso de ser necesario realizar la intervención de un teléfono de la persona imputada administrativamente, esa medida debe ser solicitada por quien investiga y ordenada por un juez, para cumplir con todas las garantías constitucionales y el resguardo de los derechos.

Se destaca también que los casos de violencia institucional y discriminación deberán ser informados a la Secretaría de Derechos Humanos y los casos de violencia de género al Ministerio de la Mujer, para que en ambos supuestos se instrumenten los servicios de asistencia integral a las víctimas y sus familiares.

Señor presidente: el proyecto de ley de control disciplinario al que me he referido previamente se inscribe en el marco de una profundización de la política de seguridad del Gobierno provincial. Por eso, proponemos también la reforma de la Ley de Seguridad Pública y Ciudadana.

Las modificaciones propuestas buscan lograr una mayor sinergia entre los actores responsables de la gestión de la seguridad provincial, esto es, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y la conducción de las tres fuerzas de seguridad.

El proyecto propone la ampliación de los objetivos del Sistema de Seguridad Pública y Ciudadana, plasmados en el año 2017, avanzando en la democratización, profesionalización y control de las fuerzas de seguridad y aumentando aquí, a través de esta ley, la participación de los gobiernos locales como actores claves en la política de seguridad.

Se incorporan nuevos integrantes al Sistema de Seguridad Pública y Ciudadana, y se crean nuevos espacios institucionales. Se incorporan, por ejemplo, al sistema el Ministerio Público Fiscal, actor clave de la política criminal, cuya función es indispensable para la eficacia de las políticas de seguridad, y también en su calidad de titular de la Fuerza Antinarcóticos. Se suma esta Legislatura provincial, reconociendo su protagonismo en la definición de la política criminal y de seguridad.

Uno de los puntos más importantes de la propuesta de reforma de Ley de Seguridad es la creación del Consejo de Política Criminal y Gestión de las Fuerzas de Seguridad, conformado por los Ministros de Seguridad, de Justicia y Derechos Humanos, y la Fiscalía General. Este consejo será el órgano encargado de conducir los procesos de democratización, modernización y profesionalización de las fuerzas, y de definir las directrices políticas para la coordinación de acciones en materia de política criminal. Sus comisiones de trabajo serán instrumento para llevar adelante procesos de renovación de los modelos, constituyéndose como ejes en la protocolización de actuaciones, la formación, el desarrollo tecnológico y el seguimiento disciplinario, entre otros.

Esta nueva institucionalidad basada en el diálogo y la coordinación propone fortalecer las capacidades del Ejecutivo provincial y generar la coordinación necesaria para que funcionarios y equipos técnicos de diferentes ministerios, representantes de las fuerzas de seguridad, expertos y representantes de la sociedad civil sumen esfuerzos para la mejora de las instituciones y de la política criminal y de seguridad.

Por otro lado, el proyecto propone también la creación de un Sistema de Control Democrático de las Fuerzas de Seguridad; este sistema incorpora el control político ejercido por el Consejo de Política Criminal y Gestión de las Fuerzas de Seguridad, cuyos miembros son los titulares y responsables políticos de las mismas; también el control ciudadano de las fuerzas a través de los espacios de participación ciudadana previstos en el Sistema de Seguridad Pública y Ciudadana, en el Plan de Prevención del Delito y Seguridad Ciudadana y en el Programa de Consulta Ciudadana.

Por último, se propone la creación de la Defensoría de las Fuerzas de Seguridad, órgano externo a estas fuerzas que, además de velar por la promoción y protección de los derechos y garantías del personal de las fuerzas de seguridad, tendrá como misión el relevamiento de opiniones, propuestas e iniciativas de los integrantes de las fuerzas para su profesionalización y la mejora en la formación y en las condiciones de trabajo de las fuerzas de seguridad.

No resulta ninguna novedad que las fuerzas de seguridad son instituciones absolutamente imprescindibles en un Estado de derecho, tanto cuando se las observa desde las instituciones democráticas como desde la propia sociedad civil. Por ello, requieren de un permanente proceso de transformación e innovación para mejorar sus estándares de actuación.

Estos proyectos enviados a la Legislatura por el Poder Ejecutivo provincial son un paradigma de la voluntad de producir cambios profundos que se puedan sostener en el tiempo. No se trata de proyectos coyunturales que busquen réditos a corto plazo, por el contrario, apuestan a normas superadoras que mejoren en profundidad el sistema de seguridad.

Estos proyectos proponen reformas normativas, articuladas a un plan de cambios profundos que ya se vienen realizando en la Policía de Córdoba. El Gobierno ya adoptó medidas concretas cuando dispuso el nuevo protocolo para el uso racional de la fuerza y cuando amplió la formación de los agentes de 14 meses a 3 años, que se implementará a comienzos del ciclo educativo 2021.

También nuestro Gobierno desarrolló un histórico plan de inversión en la incorporación de tecnología, logística y equipamiento para las fuerzas de seguridad en nuestra Provincia.

Estamos convencidos de que acompañar a las fuerzas de seguridad con acciones que integren a distintas áreas de gobierno y la sociedad civil es indispensable para lograr instituciones policiales y penitenciarias que cada día sean mejores.

Debe quedar claro que la responsabilidad de las fuerzas de seguridad debe ser monitoreadas permanentemente, sólo así se genera prevención porque se cuenta con un diagnóstico preciso y actualizado.

No se trata de inhibir el accionar de los integrantes de las fuerzas de seguridad. Que nadie se equivoque; ningún miembro de las fuerzas de seguridad debe sentir temor por la ley que esta Legislatura sancionará, ni de ninguna otra. La ley es el único camino por el que se debe transitar; la tranquilidad y el respaldo sólo lo otorga el cumplimiento de la ley.

Señor presidente y señores legisladores: estamos ante una enorme oportunidad que nadie puede ni debe desaprovechar; frente a un momento relevante del quehacer institucional y social de la Provincia, la sanción de estas dos leyes apunta a fortalecer el sistema de control de las fuerzas de seguridad y el sistema institucional de la política criminal y de seguridad.

Hay sucesos y episodios, señor presidente, como el de Blas Correa y el de Paso Viejo, que causan un enorme dolor y conmoción social. Ellos deben actuar como catalizadores de la necesidad de ahondar en cambios para que no se repitan. Eso es justamente lo que el Gobierno y esta Legislatura se proponen con las leyes que hoy tratamos.

Esta Legislatura, trascendiendo cualquier especulación político-partidaria, debe asumir el desafío de dotar a Córdoba de una ley que acompañe eficazmente el apremiante reclamo de la sociedad por más y mejor seguridad.

Por todo lo expuesto, solicito a los legisladores de los distintos bloques políticos apoyar la iniciativa que impulsamos.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Oscar González.

Tiene la palabra el legislador Dante Rossi.

Sr. Rossi.- Señor presidente: decía un intendente de la ciudad de Córdoba, Ramón Bautista Mestre, como slogan de su gestión, "obras, no palabras". Y lo cierto es que yo lo traduciría aquí en "hechos, no palabras". Porque lo cierto es que nosotros estamos trabajando y discutiendo dos leyes importantes, pero que no le van a modificar la realidad a los cordobeses en materia de seguridad.

Estamos analizando la modificación de la Ley 9235 de Seguridad Pública para la Provincia de Córdoba, y fíjense que en la nota de elevación que envía el Gobernador de la Provincia, dice que la seguridad constituye una de las principales preocupaciones en las demandas sociales del Estado. Y tiene razón, cuando uno analiza los sondeos de opinión, la seguridad está al frente de los reclamos que hace la gente en una Córdoba que se vuelve cada día más insegura.

El proyecto tiene buenas intenciones en muchísimas cuestiones, habla de fortalecer la rehabilitación y reinserción social de las personas condenadas, habla de incorporar desarrollos tecnológicos, habla de fomentar el protagonismo de los

gobiernos locales, en el desarrollo de políticas de la prevención de la violencia, habla de promover procesos de democratización en las fuerzas de seguridad, habla de controlar la presencia de los servicios de seguridad privada.

Pero lo cierto es que lo que se dice en la norma no tiene nada que ver con la realidad, y uno tal vez, si cayera en la realidad de la Provincia de Córdoba sin saber lo que ocurre, pareciera que este Gobierno asumió hace pocos días los destinos políticos de la Provincia y que no tiene ningún tipo de responsabilidad en 21 años de gestión.

Y si uno verifica lo que dice la norma y lo que se le dice a la gente, haciéndole creer que esta ley le va a modificar aspectos sustanciales y que, después de hoy, se va a sentir mucho más segura, lo cierto es que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad.

Miren, Córdoba, tiene cerca de 21.000 agentes policiales, tiene prácticamente uno cada 144 habitantes; el problema no es designar cada vez más policías, el problema es que este Gobierno no tiene una política concreta en materia de seguridad y, lo único que ha hecho, durante estos 21 años de gestión, es marketing y publicidad, como si con ese marketing y con esa publicidad se le pudiera hacer creer a los cordobeses que estamos viviendo una realidad que no es la que siente cada uno de los cordobeses cuando vuelve a su casa, después de trabajar, después de estudiar, después de hacer deportes, porque siente que puede ser asaltado, siente que puede ser sometido a algún delito.

Solamente por citar algunos casos -algunos jocosos, y otros no tanto- que muestran a las claras esa política de buscar el efecto, de buscar que la gente sienta que la seguridad tiene que ver con el marketing, me acuerdo esas motos con sidecar, que se compraron en algún momento de la gestión del peronismo en Córdoba que, evidentemente, no sirvieron para absolutamente nada, solamente para decorar el escenario, hasta tal vez turístico de los lugares donde se utilizaban.

Se mencionó aquí también, grandilocuentemente, que se creó la CAP, como para mostrar que sólo una sigla podía traer más seguridad a los cordobeses. El desfile de autos cada vez que se compraban vehículos y que se los ponía en muchos casos frente a la Policía cortando la calle o en la Avenida Nore Martínez en Barrio Rogelio Martínez o en la ciudad universitaria.

Hace poco, hace un par de años, cuando se anunció un programa que tenía que ver con la compra de chalecos, de balas y una serie de cuestiones que se anunciaban de manera grandilocuente y que, a la postre, no significó nada respecto de la seguridad.

Pero lo cierto es que también cuando uno analiza determinadas cosas se da cuenta por qué no funciona la seguridad en Córdoba. Un policía que tiene entre 12 y 14 años de servicio cobra 50.000 pesos y, evidentemente, por más vocación que tenga respecto a la seguridad, con ese sueldo no puede hacer absolutamente nada. Pero ese policía, que cobra 50.000 pesos, es el que tiene que comprar las balas para hacer los ejercicios, para capacitarse, para su formación; ese policía que gana 50.000 pesos es el que tiene que pagar el arreglo del vehículo cuando choca en servicio, o cuando se produce algún desperfecto en el vehículo ejerciendo su control policial.

Y uno que recorre mucho la Provincia se da cuenta también de que los intendentes comentan que si no le pusieran la nafta al móvil policial no podría salir a patrullar. Muchos municipios han hecho el esfuerzo en la colocación de cámaras, pero la policía, por una cuestión normativa, porque los municipios no pueden intervenir en materia de seguridad, no pueden poner a alguien a controlar esas cámaras.

Y la última ilusión que se le generó a la gente -y, debo admitir, que yo también me sentí ilusionado, en su momento- fue cuando se anunció la policía de proximidad, porque lo que buscaba era generar confianza entre la gente y su policía, tratar de que la gente sepa quién era el policía encargado de la seguridad en el barrio, en su cuadrante, a quién podía recurrir en caso de que tuviera miedo, o que tuviera que hacer una denuncia, a quién podía tranquilamente denunciar por un caso de venta de estupefacientes, o de narcomenudeo en el barrio, a quién podía acudir en el caso de que supiera cuáles eran los vecinos que podían ser conocidos como provocadores de delitos.

Y lo cierto es que fue otro fiasco; recorro habitualmente los barrios de la ciudad de Córdoba y, en la mayoría de los casos, te dicen que no conocen quién es el agente de seguridad que está a cargo del cuadrante, que no saben el nombre y apellido de la policía que está a cargo de ese cuadrante, que no conocen quién es el que vela por su

seguridad, que no saben a quién llegarle para denunciar algunas cuestiones y que, por supuesto -lo dicen en la mayoría de los casos-, no tiene sentido denunciar cuando ha sido sujeto pasivo de un robo en su vivienda, porque sabe que va a tener que estar tres o cuatro horas siendo maltratado en una comisaría esperando que le tomen la denuncia y los mismos policías le dicen que no tiene sentido porque no tienen la más mínima posibilidad de perseguir ese tipo de delitos.

Pero, allí está también la grandilocuencia del Buzón del Ciudadano, de la posibilidad de que los ascensos se hagan también teniendo en cuenta lo que dicen los vecinos. Por supuesto, veía publicado en el Boletín Oficial estas audiencias que se llaman para para los ascensos y pregunté cuántas personas habían participado en los dos últimos, cero, absolutamente ninguno, y los ascensos se hacían como se hacían antes, pero, por supuesto, está publicado en el Boletín Oficial lo del Buzón del Ciudadano.

Y también tiene que ver con la falta de acción durante tanto tiempo. Hoy explota la bomba, hoy cuando la seguridad impacta, por supuesto, en la Argentina, nadie va a decir que es un fenómeno de Córdoba, pero Córdoba tiene responsabilidades en las cosas que dejó de hacer, en las políticas que no generó, en los cambios que no profundizó y en la formación de la policía.

Aquí se ha mencionado el fallo de la Cámara Octava del Crimen, donde, después del tiroteo en Barrio Nueva Córdoba, donde murió el policía Franco Ferrando, la misma Justicia le dijo a la Policía que no estaba capacitada, que faltaba capacitación en la fuerza policial para la investigación de esos delitos. O, por ejemplo, la noticia de estos días, donde por un procedimiento en Río Cuarto, donde se secuestraron 26 paquetes de marihuana que tenía una mujer en la Estación Terminal de Río Cuarto, el fallo de la Sala B de la Cámara Federal de Córdoba le dijo que había sido prácticamente un bochorno ese procedimiento de detención, requisa y secuestro, porque era nulo de nulidad absoluta y que no había capacitación respecto a las fuerzas policiales. Hay llamados de atención de la Justicia, llamados de atención respecto de cómo se tiene que actuar.

Y cuando uno analiza también lo del Tribunal de Conducta Policial, es grandilocuente el anuncio, se habla ahora de siete miembros, de incorporar tres de la Legislatura con uno de la minoría, pero falla la cabeza, hace dos años que no se designa -violando la Constitución provincial- al titular del Ministerio Público Fiscal, hace dos años que no se cumple con la Constitución respecto a estas cuestiones.

Decía el legislador Cossar que ojalá que la gente que está hasta ahora en el Tribunal de Conducta Policial no sea la misma que sea designada por el Ministerio de Seguridad o por el Ministerio de Justicia al frente de este Tribunal de Disciplina porque, evidentemente, falló.

Y vuelvo -y con esto termino- a lo de "hechos, no palabras". La realidad implica que, como como cualquier norma que puede tener buenas intenciones, falla cuando se lo lleva delante por cuestiones políticas.

Cuando salió lo de Blas Correa, cuando la policía de gatillo fácil lo asesinó, allí aparecía uno de los policías que tenía antecedentes y que no tendría que haber estado ejerciendo su función como policía de la Provincia, y por marketing y publicidad también lo que se buscó fue designar a una mujer al frente de la Policía de la Provincia de Córdoba y, ¡oh paradoja!, la titular de la Policía de la Provincia de Córdoba es quien tuvo a su cargo la formación policial durante todos estos años, formación policial que es la que dice la Justicia que fracasó estrepitosamente, formación policial que es a la que, a la vista, se verifica como inequitativa, como errónea. Pero, bueno, el premio es designar al frente a una mujer porque eso es marketing y publicidad.

Ojalá que el Gobierno de la Provincia entienda que le quedan tres años de gestión y que hay que trabajar para que los cordobeses se sientan mucho más seguros y que, como lo dice la exposición de motivos de la ley y el mensaje de elevación, la seguridad es uno de los temas centrales en las políticas públicas de la Provincia de Córdoba.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Rossi.

Tiene la palabra el legislador Orlando Arduh.

Sr. Arduh.- Gracias, presidente.

La verdad es que en esta modificación a la Ley 9235 entendemos que se hace lo que se denomina "gatopardismo", es decir, cuando se cambia algo para que nada cambie.

Me parece que este es un proyecto, por supuesto, con una gran declaración de las famosas buenas intenciones que siempre tiene el Gobierno en lo que respecta al tema seguridad; habla de darle mucha más participación a los gobiernos locales, pero no lo veo muy claro al tema de la instrumentación.

Y les gusta esto de incrementar estos pomposos nombres que siempre le encantan al oficialismo, pero me parece que nunca han sabido qué hacer con estas crisis internas de las fuerzas policiales y de seguridad, ni tampoco con los altísimos índices de inseguridad ciudadana en todo el territorio provincial.

Me acuerdo cuando vinieron varios ministros a esta Legislatura a presentar distintos programas de seguridad. Se van a acordar varios de cuando crearon los famosos observatorios del delito, todavía no sabemos ni qué se observa; después también intentaron aplicar los famosos corredores seguros, pero nunca supimos ni cuáles son; también han tratado de instalar el tema de las cámaras y domos, que creo que por lo menos en la mitad de la Provincia no funcionan; en otro momento vinieron también con los policías barriales, después la verdad es que nunca más vi ningún policía en ningún barrio; desarmaron las cúpulas policiales, cada vez que, por supuesto, tocan fondo.

Como se habrán dado cuenta, nada cambia, incluso, todo se profundiza, y me parece que es momento que admitan que han fracasado.

En seguridad me parece que lo más importante sería educar, profundizar en capacitaciones, fomentar la conciencia cívica y ciudadana, trabajar la concientización y la responsabilidad social.

No hay que trabajar en combatir la inseguridad, sino en prevenirla, presidente. Hay que anticiparse porque en ese combate en el que se plantean las políticas de seguridad es donde se abonan y se facilitan el abuso y la arbitrariedad policial, constituyéndose en una herramienta de disciplinamiento social, sobre todo en los sectores más populares.

Esto no se soluciona con organigramas que siempre traen, se soluciona pura y exclusivamente con acciones concretas.

Acá se han escuchado varias cosas, entre ellas, que los cordobeses quieren reglas claras, quieren salir de su casa y sentir seguridad; quieren volver y dormir con mayor tranquilidad y confiar en las Fuerzas de Seguridad, pero no quieren estas nuevas ramificaciones burocráticas que lo único que hacen es tratar de ralentizar este tema de los proyectos de cambio e innovación que tanto promulgan.

Es por eso que creo que, con este proyecto, no solamente están evadiendo la responsabilidad que les toca por el estado de inseguridad al que actualmente hemos llegado, sino que, además, están tapando la falta de decisión política concreta de reconocer ante los cordobeses tantos años consecutivos de errores en materia de seguridad ciudadana.

Mientras no reconozcan el fracaso de las políticas de seguridad que han venido aplicando a lo largo de los años, manifestado en el aumento de la violencia urbana, en el aumento de los robos domiciliarios, en el aumento de los arrebatos, en el aumento de los robos a mano armada, en el aumento de la tasa de homicidios y del avance del narcotráfico que, incluso, ha cooptado internamente a las Fuerzas de Seguridad, sepan que van a seguir fracasando.

Es por esto, señor presidente, que, desde el bloque de Juntos por el Cambio, en el proyecto de ley 31911 vamos a votar en forma negativa, y en proyecto de ley 31912, por la fundamentación que hizo la legisladora Silvia Paleo, adelantamos nuestro voto positivo de los legisladores Capitani, Paleo, Ronge, Caffaratti, Recalde, Jure y Arduh.

Muchas gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legislador Arduh.

Quedará consignado el voto tal cual usted lo ha planteado.

Tiene la palabra el legislador Francisco Fortuna.

Sr. Fortuna.- Gracias, señor presidente.

Hoy, estamos terminando una sesión en donde hemos puesto en consideración del Cuerpo Legislativo dos proyectos de ley que demuestran, con absoluta contundencia, la voluntad política del Gobernador Juan Schiaretti y de nuestro

Gobierno de Hacemos por Córdoba de promover cambios profundos en el control disciplinario de las tres Fuerzas de Seguridad y, luego, incorporarlos al plexo de la Ley de Seguridad de la Provincia de Córdoba, la 9235.

Esa actitud, señores legisladores y señor presidente, demuestra, una vez más nuestra voluntad política de seguir avanzando en transformaciones que ya habían ocurrido en el sistema de control de las Fuerzas de Seguridad cuando, en su oportunidad, se dio lugar al Tribunal de Conducta Policial, porque ya en esa ocasión habíamos generado un órgano externo en donde había una presencia también civil en su composición, entendiendo que el viejo modelo de los asuntos internos como órgano de contralor de las Fuerzas de Seguridad debía ser superado por mecanismos institucionales que fueran más democráticos, eficaces y transparentes.

Actualmente, las tres Fuerzas de Seguridad: Policía, Servicio Penitenciario y Fuerza Policial Antinarco tráfico, tiene en cada una de ellas un sistema disciplinario que es el que se aplica en cada una de esas Fuerzas.

Una de las modificaciones importantes es que, a partir de la sanción de esta ley, las tres Fuerzas van a ser juzgadas en el marco de un mismo régimen disciplinario con la misma tipificación de las faltas en graves, gravísimas y pasibles de destitución. De esta manera, las tres fuerzas quedan sometidas a un mismo régimen disciplinario; un concepto pragmático, integrador, que busca una respuesta igualitaria para todas las fuerzas.

Además, la ley también plantea la ampliación de los ministerios que participan en su conducción: el Ministerio Público, porque de él depende la Fuerza de la Policía Antinarco tráfico; el Ministerio de Seguridad, porque depende de él la Policía; el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por el Sistema Penitenciario. Pero también se suman el Poder Legislativo, la presencia del Poder Legislativo en el órgano, y la Universidad Nacional de Córdoba, con miembros de la Facultad de Abogacía. Será presidido por un miembro designado por el Ministerio Público, quedando expresamente prohibida la participación de activos y pasivos de la Policía.

Se crea, además, una Dirección General de Investigación y Control, con dos direcciones, una de Investigación y otra de Control y Defensa Institucional, que se ofrece para aquellos pasibles de investigación o investigados que no tengan un abogado particular; así, queda previsto y garantizado por la ley.

Además, señor presidente, se ha realizado una tipificación pormenorizada de las faltas graves, gravísimas y pasibles de destitución, para que no queden ambigüedades y se puedan aplicar con precisión las sanciones previstas en cada caso.

Me he tomado unos minutos para repasar los aspectos más importantes que se pusieron en consideración en el recinto, y que tan bien lo expresara nuestra presidenta de la Comisión de Legislación General y nuestro presidente provisorio, sólo para poner de relevancia el gran trabajo de elaboración, de estudio, de tratamiento que tuvieron estos proyectos de ley, que fueron presentados, en su momento, por los ministros del Poder Ejecutivo y funcionarios, quienes vinieron a explicitar, claramente, los contenidos de estos proyectos de ley.

Luego se dio lugar al trabajo en comisión que, insisto, fue muy fecundo y permitió, desde este Poder Legislativo, garantizar las incorporaciones que sugirieron los distintos legisladores y bloques políticos partidarios, como bien hicieron referencia algunos de sus miembros en las alocuciones que me precedieron en el uso de la palabra.

Eso permitió, como ocurrió muchas otras veces en este Poder Legislativo, señor presidente, revisar proyectos que envía el Poder Ejecutivo y que nosotros abrimos a la discusión con la misma voluntad política que tiene el Poder Ejecutivo de la provincia de Córdoba para que se hagan las modificaciones, cuando éstas vayan en línea con una profundización del espíritu de las leyes que se pretende sancionar para mejorar su calidad legislativa; siempre estamos abiertos para escuchar a la oposición cuando suma ideas constructivas.

En síntesis, se trata de dos leyes que modifican profundamente el régimen de control de las conductas de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana, y se incorporan modificaciones a la Ley 9.235, para compatibilizarlas con este nuevo régimen instituido que estoy mencionando.

Como estamos poniendo en evidencia, frente a la dinámica del delito, la situación de pobreza creciente en nuestro país y en las jurisdicciones que lo integran y el enorme daño que significa el consumo de sustancias psicoactivas en pleno impacto

de la pandemia, no nos detenemos y avanzamos proponiendo soluciones concretas a problemas que ocurren en esta instancia difícil. Insisto, una instancia difícil, que no es solamente de la jurisdicción de la provincia de Córdoba, sino que es abarcativa de nuestro país y, hoy, del mundo, señor presidente.

Todos podemos observar lo que ocurre con las fuerzas de seguridad a nivel internacional, los roles que han tenido que asumir estas fuerzas en estas circunstancias de excepcionalidad.

He venido escuchando críticas de las más variadas, tratado, a veces, de magnificar los hechos que resultan de esta terrible crisis sin precedentes, que nos involucra a todos. Algunos son directamente responsables de algunos de los males que nos aquejan porque tuvieron responsabilidad de gobierno. El hecho de tener responsabilidad de gobierno, y haberse equivocado, no nos exime de las responsabilidades que nos caben. Y eso, -reitero- señor presidente, ocurrió en el orden nacional con el gobierno que concluyó en diciembre del año pasado, y también en el orden municipal de la ciudad más importante de esta Provincia, que es la ciudad de Córdoba. Y hay otros que, sin haber tenido responsabilidad de gobierno, o sin posibilidad de gobernar absolutamente nada, por ahí estiman que es más importante obstruir y tratar de dañar el esfuerzo de muchos que tienen la responsabilidad de ofrecer soluciones.

Señores legisladores y señoras legisladoras: reflexionemos por un instante. Las fuerzas de seguridad, en esta situación de excepcionalidad sin precedente en todos lados, no solamente en nuestra Provincia, se han visto frente a situaciones vinculadas con la aplicación de protocolos sanitarios para prevenir la dispersión de la pandemia, y lo han tenido que hacer también asumiendo la responsabilidad y el conocimiento de la sorpresa que ha significado para todos esta nueva situación sanitaria excepcional que hemos estado y estamos viviendo en nuestro país, en nuestra provincia y en el mundo.

Entonces, el control de la vida cotidiana en la relación de las personas, estrecharon de manera inusual el contacto de las fuerzas de seguridad; en todos lados ha ocurrido esto en función de lo que es preservar las cuestiones que hacen a la prevención en la salud y a la aplicación de los protocolos.

En otro orden de cosas, y en cuestiones diferentes, ocurrió también lo propio con el personal de salud en la contención territorial de los brotes. Hasta ayer se habían realizado 548.642 PCR en personas que habían sido estudiadas hasta el momento en esta provincia de Córdoba; hubo momentos pico donde hubo 1.776 personas internadas en salas de cuidados críticos.

Les quiero comentar, señores legisladores y señoras legisladoras, que nunca hubo una patología que ocupara en forma simultánea, por la misma causa, la misma etiología, tantas camas en el sistema de salud crítico de esta Provincia. A esto lo consiguió el Covid-19, esto fue lo que pasó con el servicio de salud en ese sentido.

También, y no lo vamos a desconocer, señor presidente, porque efectivamente, la Policía de la Provincia de Córdoba, en la aplicación de la ley que sancionó este Poder Legislativo, efectuó más de 40 mil multas, y lo hemos comentado.

Sabemos que también vivimos situaciones donde, obviamente, la pobreza, la pérdida del trabajo y el empleo generó enorme incertidumbre. Todo es caldo propicio para que el delito y el consumo de sustancias psicoactivas genere, por supuesto, un escenario mucho más difícil de poder observar y garantizar en los sistemas que hacen a la salud y, por supuesto, también, a la seguridad pública en todos los lugares del mundo e, insisto, esta situación se repite en todos los lugares del mundo.

Señor presidente: nosotros no les podemos pedir a los legisladores de la oposición que realicen nuestra tarea, porque somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de gobernar, somos los que tenemos la responsabilidad de llevar adelante las propuestas y las soluciones que, en cada circunstancia, nuestra Provincia, fijando un orden de prioridades, necesita para sortear las dificultades que tenemos.

En ese sentido, señor presidente, quiero comentarles que he visto bien la evolución del pensamiento que ha tenido el legislador García Elorrio; frente al discurso que hizo en la última sesión, cuando se trataron los temas de seguridad, veo que ha evolucionado en su manera de mirar la realidad de nuestra Provincia de Córdoba, y hasta pienso que ha creído, por lo menos por la forma en que ha manifestado su voto, que Hacemos por Córdoba y el Gobierno de Córdoba alguna vez tienen razón, y me parece bien que el legislador García Elorrio haya evolucionado en su manera de

expresarse y, además, afirmar esa expresión en un voto positivo aunque sea a una de nuestras leyes.

Eso también pone en evidencia que, en definitiva, cuando se puede abrir el dialogo y reflexionar, y se hace con sensatez de ambas partes, es posible un resultado positivo. Creo que tampoco se quería quedar afuera, el legislador García Elorrio, de un par de leyes que son realmente buenas para el futuro de esta provincia de Córdoba, y ese reconocimiento es bueno para la democracia y para la institucionalidad de nuestra Provincia. Es bueno reflexionar y, a veces, reconocer algún error y cambiar de opinión en forma positiva, y que de este lado nosotros escuchemos atentamente cuando hay una posibilidad de mejorar una ley por aportes que nos hace la oposición.

También creo, señor presidente, que hoy estamos dando un paso muy importante hacia adelante, un paso innovador, porque es una ley de avanzada en esta materia en nuestro país. No nos puede caber ninguna duda en ese sentido.

Por eso, creo que es una muy buena oportunidad para que los legisladores de la oposición nos acompañen con su voto.

Además, quiero agradecerle a Juntos por el Cambio por su voto, también parcial, que habla de que sus inquietudes, como bien lo mencionara la legisladora al hacer uso de la palabra en su discurso, fueron incorporadas en lo que significa, por ejemplo, la ampliación de los miembros de este Poder Legislativo en el Órgano de Control que estamos creando con esta ley.

Quiero decir con todas la letras, señor presidente, que también hay expresiones de algunos legisladores que están reñidas absolutamente con la realidad. He escuchado al legislador Cossar, en nombre de su bloque, seguir reconociendo que no tiene pasado, que no tienen antecedentes. También dice, y en eso lo puedo entender, que tiene miedo de salir a la calle. Claro, icómo no va a tener miedo de salir a la calle, si los cordobeses recuerdan que él no hizo absolutamente nada cuando era Viceintendente de esta Ciudad para cuidar...

Sr. Presidente (Calvo).- Legislador Fortuna, el legislador Cossar le solicita una interrupción, ¿se la concede?

Sr. Fortuna.- No, señor presidente. El legislador habló, yo lo hago a través suyo...

Sr. Presidente (Calvo).- Continúa en el uso de la palabra y le pido que cuando haga alusión a algún legislador se dirija a la presidencia.

Sr. Fortuna.- Perfecto. Yo lo hago a través suyo, señor presidente.

Lo que quiero decir es que el legislador Cossar habla, genera propuestas y cuando a él le tocó cortar los yuyos de la Ciudad, prender las lamparitas, cuidar las calles en los sectores más vulnerables, hacerle un aporte a la seguridad de los vecinos, brillo por su ausencia, y hoy viene a decirnos a nosotros lo que tenemos que hacer respecto de las leyes de seguridad.

Creo que a esto hay que tomarlo con más humildad, y creo que hay que hacer aportes concretos pensando en que si uno aporta puede mejorar. Y -repito- me gustaría que el legislador Cossar asuma esa actitud y, realmente, piense que, cuando venga con alguna idea que sea positiva, se la vamos a atender, como hemos hecho con otros bloques legislativos, lo vamos a atender sin ningún tipo de problemas.

Quiero decirle, señor presidente, que fueron nuestros gobiernos sucesivos los que llevaron adelante las mayores transformaciones institucionales en nuestra Provincia de Córdoba, no cabe ninguna duda de que ha sido así.

El Consejo de la Magistratura, que realmente ha sido y es una garantía de independencia en la selección de jueces y magistrados, fue una ley que preconizamos y sancionamos nosotros en nuestras gestiones de gobierno; antes de eso, señor presidente, había un consejo asesor, elegido por el Gobernador de turno y con el dedo del gobernador se elegían los jueces y magistrados, y eso se terminó en esta Provincia de Córdoba, en función de la voluntad transformadora de nuestros gobiernos.

A través del tiempo; hicimos la Reforma Constitucional del año 2001; creamos los Jurados Populares; creamos una Junta Especial para definir a los jueces de paz; hicimos una transformación muy importante en la legislación del Código Electoral Provincial, incorporamos la boleta única, generamos un financiamiento para los partidos y las campañas electorales, que es un buen ejemplo a nivel nacional. Eso no puede ser desconocido por los legisladores de la oposición que, aun teniendo una buena ley -que ha sido aprobada ampliamente por los bloques que hoy nos estamos

reuniendo aquí-, hay quienes todavía pretenden quedarse afuera de estos cambios por una cuestión de privilegiar falsamente la oposición por la oposición misma.

Señor presidente: creo que esta reforma tiene una envergadura muy importante y se suma a la voluntad transformadora de Hacemos por Córdoba, que hace a un estilo de gestión en nuestra Provincia de Córdoba, un estilo de gestión que nosotros hemos sostenido durante todos estos 20 años en que nos tocó conducir esta Provincia de Córdoba; un estilo de gestión que ha incorporado en forma efectiva a los gobiernos locales a lo largo y ancho de la Provincia de Córdoba; un estilo de gestión que transformó a este Poder Legislativo dándoles garantías a las minorías, primero, para poder tener en un resultado electoral una presencia efectiva en el Poder Legislativo. Somos siete bloques políticos partidarios, precisamente, porque el sistema electoral que sancionamos oportunamente cuando reformamos la Constitución de la Provincia de Córdoba, generó la posibilidad de que esta Unicameral realmente pudiera albergar todas las expresiones territoriales, políticas y partidarias, no teniendo ningún tipo de cláusula de gobernabilidad.

Eso es muy importante, señor presidente; como también creo que es muy importante defender la institucionalidad de este Poder Legislativo, porque el resultado del trabajo legislativo –que lo venimos poniendo de manifiesto durante el transcurso de todo este año– así lo demuestra. Son 54 leyes las que hemos sancionado, y tenemos que sumar las que estamos sancionado en el día de hoy, más las que vamos a sancionar la semana que viene.

De esas leyes, hasta ahora, 10 han sido iniciativas de los legisladores de Hacemos por Córdoba, 7 de los legisladores de otros bloques políticos partidarios; el resto de las leyes, hasta llegar a las 24, que se sancionaron en el Poder Legislativo hasta ahora, han sido proyectos conjuntos, compatibilizados entre los legisladores del oficialismo y de la oposición. El resto de las leyes, que han venido del Poder Ejecutivo, en su gran mayoría tenían origen exclusivo en ese Poder, como, por ejemplo, las leyes que hoy vamos a sancionar, que tienen que ver con la expropiación de algunos lugares para desarrollar rutas que son muy importantes para nuestro futuro en la Provincia de Córdoba.

Por eso, señor presidente, después de haber expresado estas palabras, de reconocer el trabajo de todo el Cuerpo legislativo, de la oposición legislativa también, de los legisladores que se han expresado en un sentido o en el otro, quiero agradecer el gran esfuerzo que hicieron los legisladores de nuestro bloque de Hacemos por Córdoba para escuchar, receptar el trabajo minucioso que se hizo en el monitoreo de cada uno de los artículos y de los incisos de esta ley, a través de nuestra gente que trabaja en las Secretarías de nuestra Cámara.

Agradeciendo todo eso, señor presidente, quiero mocionar el cierre del debate y, por supuesto, solicitarla aprobación de ambos proyectos de ley.

Muchísimas gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Calvo).– Muchas gracias, legislador Francisco Fortuna.

En consideración la moción de cierre del debate formulada por el legislador Fortuna.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).– Aprobada.

En consideración en general y en particular, en una misma votación, el proyecto 31912/E/20, tal como fuera despachado por las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, y de Legislación General, con las modificaciones propuestas por la legisladora Julieta Rinaldi.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).– Aprobado en general y en particular.

Se comunicará al Poder Ejecutivo.

En consideración en general y en particular, en una misma votación, el proyecto 31911/E/20, tal como fuera despachado por las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, y de Legislación General.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).– Aprobado en general y en particular.

Se comunicará al Poder Ejecutivo.

**PROYECTO DE LEY
31911/E/20
MENSAJE**

**Al señor Presidente de la
Legislatura de la Provincia
Cr. Manuel Fernando CALVO
S _____/_____ D**

Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio, a los integrantes del Cuerpo que preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144, inciso 3º, de la Constitución Provincial, a fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el que se propicia la modificación de la Ley N° 9235 de Seguridad Pública para la Provincia de Córdoba.

La seguridad constituye una de las principales preocupaciones en las demandas sociales al Estado. Desde mediados de los años '90 asume una centralidad para pensar la gestión de lo político, naciendo las secretarías y ministerios de seguridad.

Tanto la demanda como la gestión de la seguridad son asuntos dinámicos fuertemente cambiantes que requiere herramientas con las mismas características para su abordaje.

En este contexto se enmarca la reforma, que por el presente se propicia, de la Ley de Seguridad Pública N° 9235, con el fin de crear un Consejo de Política Criminal y Gestión de las Fuerzas de Seguridad, integrado por el Ministerio Público Fiscal y los Ministerios de Seguridad y de Justicia y Derechos Humanos, quienes tienen a su cargo la Fuerza Policial Antinarcotráfico, la Policía y el Servicio Penitenciario, respectivamente.

Cabe referir que se diseñó un Consejo con funciones decisorias en lo que hace a la Política Criminal y a la Gestión de las Fuerzas de Seguridad, para lo cual contará con las Comisiones de Protocolización de las Actuaciones de las Fuerzas de Seguridad; la de Formación y Capacitación de las Fuerzas de Seguridad, la de Desarrollo y Vinculación Tecnológica, la de Seguimiento del Control Disciplinario, la de Coordinación de Acciones de Política Criminal y toda otra que el Consejo determine necesaria.

Se fija así una agenda de trabajo conjunto entre los ministerios y el Ministerio Público Fiscal con el objetivo de profundizar la interinstitucionalidad, en el marco de las recomendaciones internacionales para el abordaje de los conflictos sociales.

Por las razones expuestas, solicito a Usted ponga el presente a consideración de la Legislatura Provincial, para que ésta le preste aprobación si así lo estima oportuno.

Sin otro particular, saludo a Usted con distinguida consideración.

Juan Schiaretti, Alfonso Fernando Mosquera, Julián López, Jorge Eduardo Córdoba

**LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
MODIFICACIONES A LA LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA N° 9235**

Artículo 1º. Modificación del artículo 3 de la Ley N° 9235. Modifícase el artículo 3 de la Ley N° 9235, el que queda redactado de la siguiente forma:

ARTÍCULO 3º.- EL Sistema Provincial de Seguridad Pública y Ciudadana tiene por objetivos:

a) Facilitar las condiciones que posibiliten el pleno ejercicio de las libertades, derechos y garantías constitucionales tendientes a preservar la vida, la integridad física y los bienes de los ciudadanos de la Provincia de Córdoba;

b) Mantener el orden y la tranquilidad pública en todo el territorio de la Provincia de Córdoba, en el marco del respeto irrestricto a los derechos humanos;

c) Favorecer la rehabilitación y reinserción social de las personas condenadas, colaborando en la articulación de los organismos de ejecución de la pena;

d) Desarrollar una política criminal que coordine la prevención y persecución de los delitos, las contravenciones y las faltas mediante desarrollos tecnológicos, la producción y análisis de información y la gestión interinstitucional e interministerial;

e) Promover la participación ciudadana en el desarrollo de estrategias de prevención del delito y las violencias e impulsar la convivencia ciudadana desde una perspectiva interagencial e integral de la gestión de la conflictividad social;

f) Fomentar el protagonismo de los gobiernos locales en el desarrollo de políticas de prevención de las violencias y de seguridad ciudadana y en el establecimiento de mecanismos de participación pública y privada en la gestión de conflictos;

g) Promover procesos de democratización, modernización y profesionalización de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana;

h) Establecer mecanismos de control de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana que aseguren el funcionamiento transparente y conforme al orden constitucional y al sistema democrático;

- i) Determinar los mecanismos de coordinación entre las diversas autoridades para apoyo y auxilio a la población en casos de siniestros o desastres, conforme a la integralidad del sistema;
- j) Controlar la prestación de los servicios de seguridad privada estableciendo modalidades para su articulación con la seguridad pública y ciudadana.

Artículo 2º. Modificación del artículo 4 de la Ley N° 9235. Modifícase el artículo 4 de la Ley N° 9235, el que queda redactado de la siguiente forma:

ARTÍCULO 4º.- El Sistema Provincial de Seguridad Pública y Ciudadana está conformado por:

- a) Los responsables en la planificación, organización y ejecución de políticas de prevención y seguridad pública y ciudadana:
 - i. El Ministerio de Seguridad o el organismo que en el futuro lo sustituya;
 - ii. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos o el organismo que en el futuro lo sustituya;
 - iii. El Ministerio Público Fiscal;
 - iv. La Legislatura de la Provincia de Córdoba;
 - v. Consejo de Política Criminal y Gestión de las fuerzas de Seguridad
 - vi. La Comisión Interministerial de Seguridad Ciudadana;
 - vii. El Consejo Provincial de Seguridad Ciudadana;
 - viii. El Observatorio de Estudios sobre Convivencia y Seguridad Ciudadana, o el organismo que en el futuro lo sustituya; y;
 - ix. Los Consejos Departamentales, Municipales y Barriales de Prevención y Convivencia.
- b) Las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana integradas por:
 - i. La Policía de la Provincia de Córdoba;
 - ii. La Fuerza Policial Antinarcotráfico y;
 - iii. El Servicio Penitenciario Provincial.

ARTÍCULO 3º. Incorporación del Capítulo Cuarto de la Ley N° 9235. Incorpórase como Capítulo Cuarto de la Parte I, Título I, el siguiente:

"Capítulo Cuarto. Consejo de Política Criminal y de Gestión de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana".

ARTÍCULO 4º. Incorporación del artículo 6 bis de la Ley N° 9235. Incorpórase como artículo 6 bis de la Ley N° 9235, el que queda redactado de la siguiente manera:

ARTÍCULO 6º bis. - El Consejo de Política Criminal y de Gestión de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana coordinará los procesos de democratización, modernización y profesionalización de las Fuerzas de Seguridad. Estará integrado por los titulares del Ministerio de Seguridad, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y Fiscalía General de la Provincia.

ARTÍCULO 5º. Incorporación del artículo 6 ter de la Ley N° 9235. Incorpórase como artículo 6 ter de la Ley N° 9235, el que queda redactado de la siguiente manera:

ARTÍCULO 6º ter. - El Consejo de Política Criminal y de Gestión de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana contará para su funcionamiento con las siguientes comisiones de trabajo:

- a) Comisión de Protocolización de las Actuaciones de las Fuerzas de Seguridad;
- b) Comisión de Formación y Capacitación de las Fuerzas de Seguridad;
- c) Comisión de Desarrollo y Vinculación Tecnológica del Sistema Provincial de Seguridad Pública y Ciudadana;
- d) Comisión de Seguimiento del Control Disciplinario;
- e) Comisión de Coordinación de Acciones de Política Criminal;
- f) Toda otra que el Consejo determine necesaria.

Las comisiones serán conformadas por representantes de los Ministerios de Seguridad, de Justicia y Derechos Humanos, del Ministerio Público Fiscal y de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana involucradas. Cuando resulte pertinente y útil, las comisiones podrán convocar, además, a expertos o representantes de organismos, instituciones u organizaciones.

ARTÍCULO 6º. Reemplazo de la Parte II de la Ley N° 9235. Reemplázase como Parte II la siguiente denominación:

"SISTEMA DE CONTROL DEMOCRÁTICO DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD".

ARTÍCULO 7º. Incorporación del artículo 14 bis de la Ley N° 9235. Agréguese como artículo 14 bis de la Ley N° 9235, el siguiente:

ARTÍCULO 14º bis. - El Sistema de Control Democrático de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana tiene la misión de establecer mecanismos que aseguren un funcionamiento transparente y conforme al orden constitucional y al sistema democrático por parte de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana.

El Sistema está conformado por el Consejo de Política Criminal y de Gestión de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana, el Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana, y los mecanismos de participación contemplados en el Plan Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito y en el Programa de Control Ciudadano de la Policía establecido en la Ley N° 10.197.

ARTÍCULO 8º. Incorporación del artículo 14 ter de la Ley N° 9235. Agréguese como artículo 14 ter de la Ley N° 9235, el siguiente:

ARTÍCULO 14º ter. - El control disciplinario implica la prevención, detección, investigación y sanción de faltas disciplinarias del personal de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana. Estará integrado por:

- a) El Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad;
- b) El Organismo de Control e Investigación;
- c) La Defensoría Disciplinaria de las Fuerzas de Seguridad;
- d) Los mecanismos internos de las Fuerzas de Seguridad para prevenir, identificar y sancionar faltas leves y medias.

ARTÍCULO 9º. Incorporación del artículo 14 quater de la Ley Nº 9235. Agréguese como artículo 14 quater de la Ley Nº 9235, el siguiente:

ARTÍCULO 14º quater. - La Defensoría de las Fuerzas de Seguridad podrá, de conformidad a lo que establezca la reglamentación, realizar acciones que promuevan la protección de los derechos del personal de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana amparados en la Constitución Nacional, Tratados Internacionales, Constitución de la Provincia de Córdoba y las leyes y reglamentos vigentes.

ARTÍCULO 10º. Incorporación de la parte III de la Ley Nº 9235. Incorpórase como PARTE III de la Ley Nº 9235 la que se designará con la siguiente denominación: POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.

ARTÍCULO 11º. Incorporación de la parte IV de la Ley Nº 9235. Incorpórase como PARTE IV de la Ley Nº 9235, la que se designará con la siguiente denominación: ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO PENITENCIARIO DE CÓRDOBA.

ARTÍCULO 12. De forma.

Juan Schiaretti, Alfonso Fernando Mosquera, Julián López, Jorge Eduardo Córdoba

DESPACHO DE COMISIÓN

Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 22 de diciembre de 2020

A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:

Las Comisiones de **ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS y de LEGISLACIÓN GENERAL**, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 31911/E/20, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, modificando la Ley Nº 9235 -de Seguridad Pública de la Provincia de Córdoba-, ACONSEJAN, por las razones que en el Plenario dará el señor miembro informante, PRESTARLE APROBACIÓN de la siguiente manera:

**LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
MODIFICACIONES A LA LEY Nº 9235
DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LA PROVINCIA DE CÓRDOBA**

ARTÍCULO 1º.- Modifícase el artículo 3º de la Ley Nº 9235 y sus modificatorias -de Seguridad Pública para la Provincia de Córdoba-, el que queda redactado de la siguiente manera:

"Artículo 3º.- EL Sistema Provincial de Seguridad Pública y Ciudadana tiene por objetivos:

- a) Facilitar las condiciones que posibiliten el pleno ejercicio de las libertades, derechos y garantías constitucionales tendientes a preservar la vida, la integridad física y los bienes de los ciudadanos de la Provincia de Córdoba;
- b) Mantener el orden y la tranquilidad pública en todo el territorio de la Provincia de Córdoba, en el marco del respeto irrestricto a los derechos humanos;
- c) Favorecer la rehabilitación y reinserción social de las personas condenadas, colaborando en la articulación de los organismos de ejecución de la pena;
- d) Desarrollar una política criminal que coordine la prevención y persecución de los delitos, las contravenciones y las faltas mediante desarrollos tecnológicos, la producción y análisis de información y la gestión interinstitucional e interministerial;
- e) Promover la participación ciudadana en el desarrollo de estrategias de prevención del delito y las violencias e impulsar la convivencia ciudadana desde una perspectiva interagencial e integral de la gestión de la conflictividad social;
- f) Fomentar el protagonismo de los gobiernos locales en el desarrollo de políticas de prevención de las violencias y de la seguridad ciudadana y en el establecimiento de mecanismos de participación pública y privada en la gestión de conflictos;
- g) Promover procesos de democratización, modernización y profesionalización de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana;
- h) Establecer mecanismos de control de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana que aseguren el funcionamiento transparente y conforme al orden constitucional y al sistema democrático;
- i) Determinar los mecanismos de coordinación entre las diversas autoridades para

apoyo y auxilio a la población en casos de siniestros o desastres, conforme a la integralidad del sistema, y

j) Controlar la prestación de los servicios de seguridad privada estableciendo normas, protocolos y procedimientos para su articulación con la seguridad pública y ciudadana.”

ARTÍCULO 2º.- Modifícase el artículo 4º de la Ley Nº 9235 y sus modificatorias -de Seguridad Pública para la Provincia de Córdoba-, el que queda redactado de la siguiente manera:

“**Artículo 4º.- EL** Sistema Provincial de Seguridad Pública y Ciudadana está conformado por:

1) Los responsables en la planificación, organización y ejecución de políticas de prevención y seguridad pública y ciudadana:

a) El Ministerio de Seguridad o el organismo que lo sustituyere en sus competencias;

b) El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos o el organismo que lo sustituyere en sus competencias;

c) El Ministerio Público;

d) La Legislatura de la Provincia de Córdoba;

e) El Consejo de Política Criminal y de Gestión de las Fuerzas de Seguridad;

f) La Comisión Interministerial de Seguridad Ciudadana;

g) El Consejo Provincial de Seguridad Ciudadana;

h) El Observatorio de Estudios sobre Convivencia y Seguridad Ciudadana, o el organismo que lo sustituyere en sus competencias, e

i) Los Consejos Departamentales, Municipales y Barriales de Prevención y Convivencia.

2) Las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana integradas por:

a) La Policía de la Provincia de Córdoba;

b) La Fuerza Policial Antinarcotráfico, y

c) El Servicio Penitenciario Provincial.

ARTÍCULO 3º.- Incorpórase, inmediatamente después del artículo 6º, como Capítulo Cuarto del Título I de la Parte I de la Ley Nº 9235 y sus modificatorias -de Seguridad Pública para la Provincia de Córdoba-, que contiene los artículos 6º bis y 6º ter, el siguiente:

“**Capítulo Cuarto**

Consejo de Política Criminal y de Gestión de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana

“**Artículo 6º bis. - EL** Consejo de Política Criminal y de Gestión de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana coordinará los procesos de democratización, modernización y profesionalización de las Fuerzas de Seguridad.

Está integrado por el Ministerio de Seguridad, por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y por el Ministerio Público, o los organismos que los sustituyeren en sus competencias.

Artículo 6º ter. - EL Consejo de Política Criminal y de Gestión de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana contará para su funcionamiento con las siguientes comisiones de trabajo:

a) Comisión de Protocolización de las Actuaciones de las Fuerzas de Seguridad;

b) Comisión de Formación y Capacitación de las Fuerzas de Seguridad;

c) Comisión de Desarrollo y Vinculación Tecnológica del Sistema Provincial de Seguridad Pública y Ciudadana;

d) Comisión de Seguimiento del Control Disciplinario;

e) Comisión de Coordinación de Acciones de Política Criminal, y

f) Toda otra que el Consejo determine necesaria.

Las comisiones serán conformadas por representantes de los Ministerios de Seguridad, de Justicia y Derechos Humanos, del Ministerio Público y de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana involucradas. Cuando resulte pertinente y útil, las comisiones podrán convocar, además, a expertos o representantes de organismos, instituciones u organizaciones.”

ARTÍCULO 4º.- Incorpórase, inmediatamente después del artículo 14, como Parte I Bis, Título Único, Capítulo Único de la Ley Nº 9235 y sus modificatorias -de Seguridad Pública para la Provincia de Córdoba-, que contiene los artículos 14 bis, 14 ter, 14 quáter y 14 quinquies, la siguiente:

“**PARTE I Bis**

SISTEMA DE CONTROL DEMOCRÁTICO DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y CIUDADANA

TÍTULO ÚNICO OBJETIVOS – CONFORMACIÓN

Capítulo Único Integrantes - Estructura Orgánica

Artículo 14 bis. - EL Sistema de Control Democrático de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana tiene como objetivo establecer mecanismos que aseguren un funcionamiento

transparente, conforme al orden constitucional y al sistema democrático por parte de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana.

El Sistema está conformado por:

- a) El Consejo de Política Criminal y de Gestión de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana;
- b) El Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana, y
- c) Los mecanismos de participación contemplados en el Plan Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito y en el Programa de Control Ciudadano de la Policía de la Provincia de Córdoba establecido en la Ley N° 10197.

Artículo 14 ter. - EL control disciplinario implica la prevención, detección, investigación y sanción de faltas disciplinarias del personal de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana.

Está integrado por:

- a) El Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad;
- b) La Dirección General de Control e Investigación de las Fuerzas de Seguridad;
- c) La Asesoría Letrada Disciplinaria de las Fuerzas de Seguridad, y
- d) Los mecanismos internos de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana para prevenir, identificar y sancionar faltas leves y medias.

Artículo 14 quáter. - CRÉASE la Defensoría de las Fuerzas de Seguridad para la promoción y protección de los derechos del personal de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana amparados en la Constitución Nacional, los tratados internacionales, la Constitución de la Provincia de Córdoba y las leyes y reglamentos vigentes.

El titular de la Defensoría de las Fuerzas de Seguridad es designado por el Poder Ejecutivo Provincial.

Artículo 14 quinquies. - LA Defensoría de las Fuerzas de Seguridad tiene, entre otras, las siguientes funciones:

- a) Coordinar las Defensorías Disciplinarias de las Fuerzas de Seguridad;
- b) Releva sugerencias e iniciativas de los integrantes de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana para la modernización de las instituciones, el desarrollo tecnológico y logístico y la profesionalización de sus miembros;
- c) Trabajar con universidades, centros de estudios y organizaciones de la sociedad civil para construir conocimiento e información sobre opiniones y perspectivas de los integrantes de las fuerzas de seguridad, y
- d) Proponer y acompañar iniciativas para proteger los derechos de los integrantes de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana y mejorar su formación y sus condiciones de trabajo.”

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

Leg. CID, Juan Manuel, Leg. BUSSO, María Victoria, Leg. ESLAVA, María Emilia, Leg. LABAT, María Laura, Leg. PETRONE, María Andrea, Leg. ARDUH, Orlando Víctor, Leg. GUDIÑO, Daniela Soledad, Leg. GARADE PANETTA, María, Leg. GARCÍA ELORRIO, Aurelio, Leg. RINALDI, Julieta, Leg. CHAMORRO, Matías, Leg. FERNÁNDEZ, Nadia Vanesa, Leg. AMBROSIO, Alberto Vicente, Leg. JURE, Juan Rubén, Leg. CARRILLO, Marisa Gladys, Leg. IRAZUZTA, Cecilia Cristina

PROYECTO DE LEY – 31911/E/20

TEXTO DEFINITIVO

LA LEGISLATURA DE LA

PROVINCIA DE CÓRDOBA

SANCIONA CON FUERZA DE

LEY: 10732:

**MODIFICACIONES A LA LEY Nº 9235
DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LA PROVINCIA DE CÓRDOBA**

Artículo 1º.- *Modifícase el artículo 3º de la Ley Nº 9235 y sus modificatorias -de Seguridad Pública para la Provincia de Córdoba-, el que queda redactado de la siguiente manera:*

“Artículo 3º.- EL Sistema Provincial de Seguridad Pública y Ciudadana tiene por objetivos:

- a) Facilitar las condiciones que posibiliten el pleno ejercicio de las libertades, derechos y garantías constitucionales tendientes a preservar la vida, la integridad física y los bienes de los ciudadanos de la Provincia de Córdoba;*
- b) Mantener el orden y la tranquilidad pública en todo el territorio de la Provincia de Córdoba, en el marco del respeto irrestricto a los derechos humanos;*
- c) Favorecer la rehabilitación y reinserción social de las personas condenadas, colaborando en la articulación de los organismos de ejecución de la pena;*
- d) Desarrollar una política criminal que coordine la prevención y persecución de los delitos, las contravenciones y las faltas mediante desarrollos tecnológicos, la producción y análisis de información y la gestión interinstitucional e interministerial;*
- e) Promover la participación ciudadana en el desarrollo de estrategias de prevención del delito y las violencias e impulsar la convivencia ciudadana desde una perspectiva interagencial e integral de la gestión de la conflictividad social;*


GUILLERMO ARIAS
SECRETARIO LEGISLATIVO
Legislación de la Provincia de Córdoba

- f) Fomentar el protagonismo de los gobiernos locales en el desarrollo de políticas de prevención de las violencias y de la seguridad ciudadana y en el establecimiento de mecanismos de participación pública y privada en la gestión de conflictos;*
- g) Promover procesos de democratización, modernización y profesionalización de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana;*
- h) Establecer mecanismos de control de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana que aseguren el funcionamiento transparente y conforme al orden constitucional y al sistema democrático;*
- i) Determinar los mecanismos de coordinación entre las diversas autoridades para apoyo y auxilio a la población en casos de siniestros o desastres, conforme a la integralidad del sistema, y*
- j) Controlar la prestación de los servicios de seguridad privada estableciendo normas, protocolos y procedimientos para su articulación con la seguridad pública y ciudadana."*

Artículo 2º.- *Modifícase el artículo 4º de la Ley Nº 9235 y sus modificatorias -de Seguridad Pública para la Provincia de Córdoba-, el que queda redactado de la siguiente manera:*

"Artículo 4º.- *EL Sistema Provincial de Seguridad Pública y Ciudadana está conformado por:*

- 1) Los responsables en la planificación, organización y ejecución de políticas de prevención y seguridad pública y ciudadana:*
 - a) El Ministerio de Seguridad o el organismo que lo sustituyere en sus competencias;*
 - b) El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos o el organismo que lo sustituyere en sus competencias;*
 - c) El Ministerio Público;*


GUILLERMO ARIAS
SECRETARIO LEGISLATIVO
Legislatura de la Provincia de Córdoba

- d) *La Legislatura de la Provincia de Córdoba;*
 - e) *El Consejo de Política Criminal y de Gestión de las Fuerzas de Seguridad;*
 - f) *La Comisión Interministerial de Seguridad Ciudadana;*
 - g) *El Consejo Provincial de Seguridad Ciudadana;*
 - h) *El Observatorio de Estudios sobre Convivencia y Seguridad Ciudadana, o el organismo que lo sustituyere en sus competencias, e*
 - i) *Los Consejos Departamentales, Municipales y Barriales de Prevención y Convivencia.*
- 2) *Las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana integradas por:*
- a) *La Policía de la Provincia de Córdoba;*
 - b) *La Fuerza Policial Antinarcotráfico, y*
 - c) *El Servicio Penitenciario Provincial.*

Artículo 3º.- *Incorpórase, inmediatamente después del artículo 6º, como Capítulo Cuarto del Título I de la Parte I de la Ley Nº 9235 y sus modificatorias -de Seguridad Pública para la Provincia de Córdoba-, que contiene los artículos 6º bis y 6º ter, el siguiente:*

***"Capítulo Cuarto
Consejo de Política Criminal y de Gestión de las Fuerzas de
Seguridad Pública y Ciudadana***

"Artículo 6º bis.- *EL Consejo de Política Criminal y de Gestión de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana coordinará los procesos de democratización, modernización y profesionalización de las Fuerzas de Seguridad.*

Está integrado por el Ministerio de Seguridad, por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y por el Ministerio Público, o los organismos que los sustituyeren en sus competencias.


GUILLERMO A. H. B.
SECRETARIO LEGISLATIVO
Legislatura de la Provincia de Córdoba

Artículo 6º ter.- EL Consejo de Política Criminal y de Gestión de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana contará para su funcionamiento con las siguientes comisiones de trabajo:

- a) Comisión de Protocolización de las Actuaciones de las Fuerzas de Seguridad;
- b) Comisión de Formación y Capacitación de las Fuerzas de Seguridad;
- c) Comisión de Desarrollo y Vinculación Tecnológica del Sistema Provincial de Seguridad Pública y Ciudadana;
- d) Comisión de Seguimiento del Control Disciplinario;
- e) Comisión de Coordinación de Acciones de Política Criminal, y
- f) Toda otra que el Consejo determine necesaria.

Las comisiones serán conformadas por representantes de los Ministerios de Seguridad, de Justicia y Derechos Humanos, del Ministerio Público y de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana involucradas. Cuando resulte pertinente y útil, las comisiones podrán convocar, además, a expertos o representantes de organismos, instituciones u organizaciones."

Artículo 4º.- Incorpórase, inmediatamente después del artículo 14, como Parte I Bis, Título Único, Capítulo Único de la Ley Nº 9235 y sus modificatorias -de Seguridad Pública para la Provincia de Córdoba-, que contiene los artículos 14 bis, 14 ter, 14 cuáter y 14 quinquies, la siguiente:

"PARTE I Bis

**SISTEMA DE CONTROL DEMOCRÁTICO DE LAS
FUERZAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y CIUDADANA**

TÍTULO ÚNICO

OBJETIVOS - CONFORMACIÓN

Capítulo Único

Integrantes - Estructura Orgánica

GUILLERMO ARIAS
SECRETARIO LEGISLATIVO
Legislatura de la Provincia de Córdoba

Artículo 14 bis.- *EL Sistema de Control Democrático de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana tiene como objetivo establecer mecanismos que aseguren un funcionamiento transparente, conforme al orden constitucional y al sistema democrático por parte de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana.*

El Sistema está conformado por:

- a) El Consejo de Política Criminal y de Gestión de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana;*
- b) El Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana, y*
- c) Los mecanismos de participación contemplados en el Plan Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito y en el Programa de Control Ciudadano de la Policía de la Provincia de Córdoba establecido en la Ley N° 10197.*

Artículo 14 ter.- *EL control disciplinario implica la prevención, detección, investigación y sanción de faltas disciplinarias del personal de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana.*

Está integrado por:

- a) El Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad;*
- b) La Dirección General de Control e Investigación de las Fuerzas de Seguridad;*
- c) La Asesoría Letrada Disciplinaria de las Fuerzas de Seguridad, y*
- d) Los mecanismos internos de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana para prevenir, identificar y sancionar faltas leves y medias.*

Artículo 14 cuáter.- *CRÉASE la Defensoría de las Fuerzas de Seguridad para la promoción y protección de los derechos del personal de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana amparados en la Constitución Nacional, los tratados*


GUILLERMO ARIAS
SECRETARIO LEGISLATIVO
Legislatura de la Provincia de Córdoba

internacionales, la Constitución de la Provincia de Córdoba y las leyes y reglamentos vigentes.

El titular de la Defensoría de las Fuerzas de Seguridad es designado por el Poder Ejecutivo Provincial.

Artículo 14 quinquies.- LA Defensoría de las Fuerzas de Seguridad tiene, entre otras, las siguientes funciones:

- a) Coordinar las Defensorías Disciplinarias de las Fuerzas de Seguridad;
- b) Relevar sugerencias e iniciativas de los integrantes de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana para la modernización de las instituciones, el desarrollo tecnológico y logístico y la profesionalización de sus miembros;
- c) Trabajar con universidades, centros de estudios y organizaciones de la sociedad civil para construir conocimiento e información sobre opiniones y perspectivas de los integrantes de las fuerzas de seguridad, y
- d) Proponer y acompañar iniciativas para proteger los derechos de los integrantes de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana y mejorar su formación y sus condiciones de trabajo."

Artículo 5º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

DADA EN CÓRDOBA, A LOS VEINTITRÉS DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE. -----


GUILLERMO CARLOS ARIAS
SECRETARIO LEGISLATIVO
LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA


MANUEL FERNANDO CALVO
VICEGOBERNADOR
PRESIDENTE
LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

**PROYECTO DE LEY
31912/E/20
MENSAJE**

**Al señor Presidente de la
Legislatura de la Provincia
Cr. Manuel Fernando CALVO
S _____/____D**

Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio, a los integrantes del Cuerpo que preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144, inciso 3º, de la Constitución Provincial, a fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el que se propicia la creación de un nuevo Sistema de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad.

El proyecto en cuestión pretende profundizar los controles de las Fuerzas de Seguridad. Así, en cuanto al régimen disciplinario propiamente dicho, se refuerza la independencia del procedimiento administrativo con respecto al del proceso penal, pudiendo sancionarse a los integrantes de las tres Fuerzas de Seguridad, más allá de que esté resuelta o no la causa penal respectiva.

El propósito esencial del proyecto es lograr la modernización y armonización del actual régimen disciplinario; para ello, se mejora la redacción de las faltas, se incorporan nuevas figuras

para casos de corrupción, violencia institucional, violencia de género y discriminación, entre otras disposiciones.

Las sanciones de arresto y de exoneración son eliminadas, creándose la sanción de destitución para los casos más graves, y regulándose en el texto legal las faltas graves y gravísimas, con una descripción taxativa y sin ambigüedades. Adicionalmente, se implementa un procedimiento ágil con la posibilidad de incorporar tecnologías de la información y la comunicación (TICs).

Por otra parte, el control civil y el seguimiento de la actuación de las Fuerzas de Seguridad se fortalecerá con base y apoyo de la incorporación de registros (faltas, disparos de armas y violencia institucional), sumado a la publicidad y transparencia del régimen disciplinario, con la obligación de los órganos actuantes de presentar informes de gestión.

Por las razones expuestas, solicito a Usted ponga el presente a consideración de la Legislatura Provincial, para que ésta le preste aprobación si así lo estima oportuno.

Sin otro particular, saludo a Usted con distinguida consideración.

Juan Schiaretto, Alfonso Fernando Mosquera, Julián López, Jorge Eduardo Córdoba

**LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
CONTROL DISCIPLINARIO DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD**

**TÍTULO PRIMERO.
ÓRGANOS DEL CONTROL DISCIPLINARIO.**

Capítulo 1. Disposiciones Comunes.

ARTÍCULO 1º. BASES.

La presente Ley establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad de la Provincia de Córdoba.

El mismo estará compuesto por los Órganos del Sistema de Control Disciplinario y por el Régimen Disciplinario.

ARTÍCULO 2º. MISIÓN.

El Sistema de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad tiene la misión de instituir un sistema de control externo, civil, democrático, autónomo, transparente y eficaz de la actuación de las Fuerzas de Seguridad de la Provincia de Córdoba a través de la prevención, investigación y eventual sanción de las faltas disciplinarias.

ARTÍCULO 3º. PRINCIPIOS.

El Sistema de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana actuará bajo los siguientes principios:

- a. Legalidad y respeto por los derechos humanos.
- b. Perspectiva de género.
- c. No discriminación.
- d. Prevención y erradicación de la violencia institucional.
- e. Control civil de las fuerzas de seguridad.
- f. Publicidad, acceso a la información y transparencia.
- g. Lenguaje claro.
- h. Independencia del procedimiento disciplinario respecto del proceso penal.

ARTÍCULO 4º. ÁMBITO DE APLICACIÓN.

La presente Ley será de aplicación a todo el personal de las Fuerzas de Seguridad de la Provincia de Córdoba, tanto en actividad como en situación de retiro, y rige sobre conductas que sean cometidas dentro o fuera del territorio de la Provincia.

ARTÍCULO 5º. COMPOSICIÓN.

El Sistema de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad estará integrado por los siguientes órganos, que actuarán con autonomía funcional y se relacionarán con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos:

- a. El Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad, de conformación interinstitucional, tendrá competencia para el conocimiento y la sanción de las faltas disciplinarias graves y gravísimas cometidas por el personal de las Fuerzas de Seguridad de la Provincia de Córdoba.
- b. El Organismo de Control e Investigación de las Fuerzas de Seguridad, tendrá por funciones la prevención y la investigación de las faltas disciplinarias graves y gravísimas cometidas por el personal de las Fuerzas de Seguridad.
- c. La Defensoría Disciplinaria, ejercerá la defensa técnica de las personas que integran las Fuerzas de Seguridad en el marco del régimen disciplinario.

ARTÍCULO 6º. FUNCIONAMIENTO.

La organización, administración, regímenes aplicables y demás aspectos institucionales y de funcionamiento de los Órganos del Sistema de Control Disciplinario de las Fuerzas de

Seguridad, serán establecidos por vía reglamentaria, de conformidad a su desenvolvimiento autónomo y las necesidades de su estructuración y desarrollo de tareas.

ARTÍCULO 7º. INCOMPATIBILIDAD.

El personal en actividad o retirado de Fuerzas Armadas o de Seguridad no podrá ser miembro de los Órganos del Sistema de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad, ni podrá formar parte ni integrarlo de manera permanente ni transitoria bajo cualquier modalidad jurídica, y en cualquiera de sus estamentos o funciones.

Igual incompatibilidad tendrá el personal civil que se haya desempeñado dentro de las Fuerzas Armadas o de Seguridad.

La incompatibilidad establecida en los párrafos anteriores no regirá en el ámbito de la Defensoría Disciplinaria.

Los miembros de los órganos que integran Sistema de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad durarán en sus funciones hasta tanto la autoridad que los designó disponga su reemplazo, a solicitud de su proponente.

Capítulo 2. Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad.

ARTÍCULO 8º. INTEGRACIÓN. COMPOSICIÓN.

El Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad es un organismo autónomo de integración interinstitucional y estará compuesto por cinco (5) miembros titulares -y sus respectivos suplentes- designados por el Poder Ejecutivo.

Dichas designaciones serán realizadas, una (1) a propuesta del/de la titular del Ministerio Público Fiscal, una (1) a propuesta de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, dos (2) a propuesta de los Ministros de Seguridad y de Justicia y Derechos Humanos, respectivamente, y un (1) Legislador a propuesta de la Legislatura Provincial.

ARTÍCULO 9º FUNCIONES DEL TRIBUNAL DE CONDUCTA.

El Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad tiene las siguientes competencias:

- a. Resolver, a requerimiento del Organismo de Control e Investigación de las Fuerzas de Seguridad, los casos por la supuesta comisión de faltas graves y gravísimas.
- b. Disponer las medidas cautelares de oficio o a pedido del Organismo de Control e Investigación de las Fuerzas de Seguridad.
- c. Resolver las impugnaciones y/o recursos que correspondan según la reglamentación.
- d. Controlar el cumplimiento de las sanciones impuestas.
- e. Dictar su reglamento interno de funcionamiento.
- f. Elaborar el informe anual de gestión.

ARTÍCULO 10º. FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL.

Para resolver sobre la aplicación de sanciones de suspensión o cesantía por faltas graves y gravísimas, los recursos contra las resoluciones que las dispongan, y contra las resoluciones que impongan medidas cautelares, el Tribunal de Conducta se constituirá conforme se establezca en la reglamentación.

Para resolver sobre la aplicación de sanción de destitución por faltas gravísimas, y las impugnaciones a estas resoluciones, el Tribunal se integrará en pleno.

En ningún caso el Tribunal de Conducta podrá sancionar cuando el Organismo de Control e Investigación haya solicitado el sobreseimiento ni podrá imponer sanciones más gravosas que las requeridas por este último.

ARTÍCULO 11º. PRESIDENCIA.

El Tribunal de Conducta será presidido por el miembro designado a propuesta del Ministerio Público Fiscal.

ARTÍCULO 12º. INFORME DE GESTIÓN.

El Tribunal de Conducta, deberá remitir anualmente a la Legislatura, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, al Ministerio de Seguridad y a la Fiscalía General de la Provincia el informe de gestión sobre las actividades realizadas.

Capítulo 3. Organismo de Control e Investigación de las Fuerzas de Seguridad

Sección Primera. Disposiciones Generales.

ARTÍCULO 13º. DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL E INVESTIGACIÓN DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD. COMPOSICIÓN DEL ORGANISMO.

El Organismo de Control e Investigación de las Fuerzas de Seguridad estará a cargo de un/a Director/a General designado por el Poder Ejecutivo a propuesta del/de la titular del Ministerio Público, y estará integrado por:

- a. La Dirección de Investigaciones;
- b. La Dirección de Prevención, Evaluación y Seguimiento.

Los titulares de ambas Direcciones serán designados por el Poder Ejecutivo.

ARTÍCULO 14º. FUNCIONES DE ORGANISMO DE CONTROL E INVESTIGACIÓN.

El Organismo de Control e Investigación de las Fuerzas de Seguridad tendrá las siguientes funciones:

a. Identificar, investigar y prevenir las faltas disciplinarias graves y gravísimas cometidas por el personal de las Fuerzas que integran el Sistema Provincial de Seguridad Pública y Ciudadana de la Provincia de Córdoba.

b. Elaborar y proponer lineamientos de prevención, formación y capacitación que tengan vinculación con el régimen disciplinario.

ARTÍCULO 15°. DEBER DE INFORMAR.

Cuando en el marco de un proceso penal se encuentre involucrado algún miembro de las Fuerzas de Seguridad, el/la titular de las oficinas del Ministerio Público Fiscal y/o del órgano jurisdiccional interviniente deberá informar de oficio o a requerimiento del Organismo de Control e Investigación toda la prueba o evidencia pertinente y útil para la investigación disciplinaria, siempre que no comprometa el éxito de la investigación penal.

Cuando en el marco de una investigación disciplinaria se advierta la supuesta comisión de un hecho delictivo o contravencional, el Organismo de Control e Investigación deberá informar y poner toda la evidencia a disposición de la autoridad competente.

Sección Segunda. Dirección General del Organismo de Control e Investigación de las Fuerzas de Seguridad.

ARTÍCULO 16°. REQUISITOS PARA SER DIRECTOR/A GENERAL.

Para ser Director/a General del Organismo de Control e Investigación de las Fuerzas de Seguridad se requiere contar con título de abogado/a, con no menos de ocho (8) años de antigüedad en el título, amplia experiencia en la materia en los términos y condiciones que fije la reglamentación y no tener antecedentes penales.

El cargo de Director/a General implica dedicación exclusiva e incompatibilidad absoluta con el ejercicio privado de la profesión y con toda otra actividad profesional, comercial, laboral o política, con excepción de la actividad docente o de investigación científica.

Queda excluida la actividad comercial que solo importe la tenencia accionaria en sociedades anónimas, sin participación en los órganos de dirección y administración.

ARTÍCULO 17°. FUNCIONES DEL/DE LA DIRECTOR/A GENERAL.

El/la Director/a General del Organismo de Control e Investigación de las Fuerzas de Seguridad tendrá las siguientes funciones:

a. Garantizar, en todas las actividades del organismo a su cargo, la correcta aplicación de las leyes, disposiciones y reglamentos.

b. Planificar, organizar e impartir los criterios y directivas de actuación en todo lo pertinente al funcionamiento del Organismo.

c. Asumir la investigación cuando lo considere necesario y formular, en estos casos, los requerimientos ante el Tribunal de Conducta.

d. Analizar y aprobar las propuestas de estrategias institucionales y/o recomendaciones elaboradas por las Direcciones que componen el Organismo y evaluar el desempeño de las mismas.

e. Contribuir con los Ministerios de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos y la Fiscalía General de la Provincia, elaborando recomendaciones relativas al comportamiento del personal de las Fuerzas que integran el Sistema de Seguridad Pública y Ciudadana.

f. Requerir la colaboración de organismos públicos o privados para la obtención de evidencia para los procedimientos administrativos disciplinarios en los que intervenga.

g. Celebrar, convenios con instituciones públicas y/o privadas, internacionales, nacionales, provinciales y/o municipales, con la finalidad de fortalecer el funcionamiento del Sistema de Control de las Fuerzas de Seguridad.

h. Elaborar el informe anual de gestión.

i. Establecer e implementar junto a los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos, Seguridad y la Fiscalía General de la Provincia, mesas de diálogo con organizaciones de la sociedad civil y universidades públicas o privadas con la finalidad de recibir sugerencias e intercambiar ideas y reflexiones orientadas al mejor progreso de las Fuerzas de Seguridad.

ARTÍCULO 18°. INFORME DE GESTIÓN.

El Organismo de Control e Investigación de las Fuerzas de Seguridad deberá remitir anualmente a la Legislatura, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, al Ministerio de Seguridad y a la Fiscalía General de la Provincia, el informe de gestión sobre las actividades realizadas.

Sección Tercera. Dirección de Investigaciones.

ARTÍCULO 19°. DIRECTOR/A DE INVESTIGACIONES. REQUISITOS.

Para ser Director/a de la Dirección de Investigaciones se requiere contar con título de abogado/a, con no menos de cuatro (4) años de antigüedad en el título, amplia experiencia en la materia en los términos que fije la reglamentación y no tener antecedentes penales.

ARTÍCULO 20°. FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES

La Dirección de Investigaciones tendrá las siguientes funciones para:

a. Receptar denuncias de la ciudadanía por la supuesta comisión de faltas disciplinarias.

b. Iniciar investigaciones de oficio o por remisión de antecedentes de dependencias del Ministerio Público Fiscal, del Poder Judicial u otros organismos públicos, en los casos de supuesta comisión de faltas graves o gravísimas.

- c. Mantener informado al/a Directora/a General de las denuncias que ingresen a la Dirección a su cargo.
- d. Identificar las conductas del personal de las Fuerzas de Seguridad que pudieran configurar faltas disciplinarias graves o gravísimas.
- e. Investigar los hechos, recabar evidencias, individualizar a los/as responsables de las conductas y formular la imputación de las faltas cuando se estime que se hubieren cometido.
- f. Solicitar al Tribunal de Conducta las medidas cautelares necesarias para asegurar la realización del procedimiento.
- g. Ordenar el archivo de las actuaciones cuando estime que corresponde en el marco de una investigación administrativa.
- h. Requerir al Tribunal de Conducta el sobreseimiento cuando resulte procedente.
- i. Requerir la aplicación de penas principales o sustitutivas al Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad.

Sección Cuarta. Dirección de Prevención, Evaluación y Seguimiento.

ARTÍCULO 21°. DIRECTOR/A DE PREVENCIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.

REQUISITOS.

Para ser Director/a de Prevención, Evaluación y Seguimiento se requiere contar con título de grado en derecho, ciencias sociales o humanidades, con no menos de cuatro (4) años de antigüedad en el título, con experiencia en la materia en los términos y condiciones que fije la reglamentación y sin antecedentes penales.

ARTÍCULO 22°. FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

- La Dirección de Prevención, Evaluación y Seguimiento tendrá facultades para:
- a. Realizar investigaciones genéricas en función de las denuncias y/o la información que ingresa a la Dirección de Investigaciones en donde no exista autor determinado.
 - b. Ordenar el archivo de las actuaciones cuando el hecho no configure falta disciplinaria.
 - c. Realizar, previa autorización del Director General del Organismo, inspecciones en dependencias o lugares en los que presten servicios las Fuerzas de Seguridad para recabar información sobre el personal, los recursos materiales y logísticos y la documentación vinculada con los procesos de trabajo, cuando exista denuncia o sospecha fundada sobre la posible comisión de una falta disciplinaria.
 - d. Dirigir los procedimientos administrativos y proponer acciones, mecanismos y procesos de trabajo que permitan mejorar el desempeño del Organismo de Control e Investigación de las Fuerzas de Seguridad.
 - e. Desarrollar, implementar y gestionar los registros establecidos en la normativa vigente y todos aquellos que establezca el Director General del Organismo de Control e Investigación.
 - f. Acceder a los fines del cumplimiento de sus funciones, a las bases de datos informáticas de la Provincia conforme lo regule la reglamentación.

ARTÍCULO 23°. DECLARACIÓN JURADA.

El personal de las Fuerzas de Seguridad deberá presentar anualmente ante el Organismo de Control e Investigación, en los términos y condiciones que fije la reglamentación, una declaración jurada patrimonial en los términos de la Ley N° 8198, sobre sus bienes y las modificaciones que se produzcan en su situación patrimonial, en la de su cónyuge, pareja estable y/o conviviente, ascendientes y/o descendientes a cargo.

La/las declaraciones juradas serán remitidas para su protocolización a la Escribanía General de Gobierno sin perjuicio del registro y seguimiento que de las mismas lleve a cabo el Organismo de Control e Investigación.

El Organismo de Control e Investigación tiene la facultad de requerir informes a los Registros y demás organismos públicos y/o privados relacionados a las investigaciones que lleve a cabo.

Podrá requerir también, por sí o a través de las vías legalmente establecidas, según corresponda, información patrimonial, económica o financiera de los agentes bajo investigación, o de personas vinculadas a ellos.

ARTÍCULO 24°. REGISTROS.

La Dirección de Prevención, Evaluación y Seguimiento deberá crear, gestionar y mantener actualizados los siguientes registros:

- a. Registro Único de Faltas.
 - b. Registro de disparos de arma de fuego realizados por el personal de las Fuerzas de Seguridad.
 - c. Registro de casos de Violencia Institucional.
 - d. Los demás registros que disponga la Dirección General.
- Asimismo, la Dirección de Prevención, Evaluación y Seguimiento tendrá facultades para acceder, supervisar y auditar los registros de armas disponibles en las Fuerzas de Seguridad.

Capítulo 4. Defensoría Disciplinaria.

ARTÍCULO 25°. DEFENSORÍA DISCIPLINARIA.

Los integrantes de las Fuerzas de Seguridad contarán con una Defensoría Disciplinaria, que brindará asistencia técnica gratuita en el marco del régimen disciplinario.

Estará a cargo de un Defensor por cada una de las Fuerzas de Seguridad, designados por el Poder Ejecutivo a propuesta de sus respectivos Jefes, y se integrará por un cuerpo letrado de abogados organizados de acuerdo se establezca reglamentariamente.

La Defensoría Disciplinaria tendrá la función de organizar y coordinar el servicio de defensa técnica en los procedimientos disciplinarios en los que sea obligatoria según la reglamentación, sin perjuicio del derecho de toda persona investigada a designar un/a letrado/a de su elección.

Además, tendrá a su cargo el control deontológico de las defensas técnicas disciplinarias.

ARTÍCULO 26°. DEFENSORÍA DISCIPLINARIA. REQUISITOS.

Para ser Defensor/a Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad se requiere contar con título de abogado/a, con no menos de ocho (8) años de antigüedad en el título, amplia experiencia en la materia en los términos y condiciones que fije la reglamentación y no tener antecedentes penales.

El cargo de Defensor/a implica dedicación exclusiva e incompatibilidad absoluta con el ejercicio privado de la profesión y con toda otra actividad profesional, comercial, laboral o política, con excepción de la actividad docente o de investigación científica.

Queda excluida la actividad comercial que solo importe la tenencia accionaria en sociedades anónimas, sin participación en los órganos de dirección y administración.

ARTÍCULO 27°. INFORME DE GESTIÓN.

La Defensoría Disciplinaria deberá remitir anualmente a la Legislatura, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, al Ministerio de Seguridad y la Fiscalía General el informe de gestión sobre las actividades realizadas.

TÍTULO SEGUNDO.

RÉGIMEN DISCIPLINARIO.

Capítulo 1. Disposiciones Generales.

Sección Primera. Principios de Actuación, Deberes y Reglas Funcionales.

ARTÍCULO 28°. PRINCIPIOS PRIMORDIALES DE ACTUACIÓN.

En el desempeño de sus funciones, el personal de las Fuerzas que integran el Sistema Provincial de Seguridad Pública y Ciudadana debe actuar conforme a las siguientes reglas:

a. **Legalidad:** deberá adecuar en todo momento sus conductas y prácticas a las normas constitucionales, a los tratados internacionales en materia de derechos humanos y a la legislación, reglamentos y protocolos vigentes.

b. **Oportunidad:** procurará evitar todo tipo de actuación innecesaria cuando no medie una situación objetiva de riesgo o peligro que vulnere la vida, la libertad u otros derechos fundamentales de las personas, tal como se determina en la presente Ley, reglamentos y protocolos vigentes o que en su consecuencia se dicten.

c. **Gradualidad:** dará prioridad a las tareas y al proceder preventivo e impeditivo antes que el uso efectivo y reactivo de la fuerza, procurando siempre, y, ante todo, preservar la vida y la libertad de las personas en cumplimiento de lo que prevén los tratados internacionales, la constitución Nacional y Provincial, la presente Ley, los reglamentos y protocolos vigentes al respecto.

d. **Proporcionalidad:** seleccionará los medios y las modalidades de acción adecuadas y necesarias conforme a la situación objetiva de riesgo o peligro existente. Deberá evitar todo tipo de actuación que resulte excesiva, arbitraria o discriminatoria o que entrañe violencia física o moral contra las personas, de conformidad a lo dispuesto en las normativas vigentes.

ARTÍCULO 29°. DEBERES FUNCIONALES.

En función del cumplimiento de los principios primordiales de actuación establecidos en el artículo anterior, el personal de las Fuerzas de Seguridad deberá:

a. Actuar con responsabilidad, respeto a la comunidad y hacia todas las personas, procurando resguardar, en cualquier circunstancia, la integridad física, la dignidad y los derechos humanos.

b. No invocar ilegítimamente una orden superior, circunstancias especiales o situación de emergencia para justificar una actuación contraria a la Constitución, a los Tratados de Derechos humanos, a las leyes y demás normas que establecen sus deberes y obligaciones.

c. Garantizar la plena protección de la integridad física, psíquica y moral de las personas bajo su tutela o custodia.

d. No tolerar ningún acto de corrupción que implique abuso de autoridad o exceso en el desempeño de sus funciones y labores, persiga o no fines lucrativos.

e. Impedir la violación de normas constitucionales, legales y reglamentarias durante el accionar de la fuerza que integra o el de otras fuerzas, organismos o agencias con la que se desarrollen labores conjuntas o combinadas. De igual modo, deberá impedir o evitar cualquier tipo de conducta abusiva desplegada por personas físicas o jurídicas, públicas o

privadas, con las que se relacione o vincule. De la inconducta o del hecho de corrupción deberá dar inmediata noticia a la autoridad competente.

f. Mantener en reserva toda información de carácter confidencial a la que tuviere acceso o tomare conocimiento en razón de su trabajo, particularmente en todo aquello que pueda afectar el honor, la vida y los intereses privados de las personas, salvo causa justificada.

g. Utilizar la fuerza como último recurso. El accionar funcional no debe implicar el uso indebido o excesivo de la fuerza, el abuso verbal o la mera descortesía hacia las personas. Las acciones necesarias que puedan menoscabar la integridad o los derechos de las personas deben efectuarse en forma gradual, evitando siempre causar un mal mayor sobre la persona, sobre sus bienes o sobre terceros.

h. Recurrir al uso de armas de fuego solo en caso de legítima defensa, propia o de terceros o estado de necesidad, procurando reducir al mínimo los daños y lesiones.

i. Anteponer la preservación de la vida y la integridad física de las personas al eventual éxito de la actuación.

j. Identificarse y anunciarse, si las circunstancias lo permiten, antes de hacer uso de la fuerza y de la utilización del arma de fuego.

k. Intervenir para proteger las libertades y derechos de las personas

l. Actuar en el cumplimiento de sus funciones con neutralidad e imparcialidad y sin discriminación.

m. Cumplir las medidas de control patrimonial establecidas por el Organismo de Control e Investigación.

n. Cumplir con la finalidad del Régimen Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad.

o. Cumplir los protocolos de actuación que se establezcan.

p. Adecuar su actuación a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, así como a los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos defendiendo el orden constitucional conforme lo dispuesto en el artículo 36 de la Constitución Nacional y en el artículo 17 de la Constitución Provincial.

ARTÍCULO 30°. EXIMICIÓN DEL DEBER DE OBEDECER.

El personal de las Fuerzas de Seguridad no estará obligado a obedecer cuando:

a. La orden impartida sea manifiestamente ilegal o contraria a los derechos humanos;

b. Su ejecución constituya manifiestamente un delito;

c. La orden proviene de autoridades no constituidas de acuerdo a los principios y normas constitucionales, o en infracción a las disposiciones legales o reglamentarias de aplicación.

Si el contenido de la orden implicase la comisión de una falta disciplinaria leve o media, el personal subordinado deberá formular la objeción siempre que la urgencia de la situación lo permita y dar aviso, posteriormente, a la autoridad competente.

ARTÍCULO 31°. CESE DEL DEBER DE INTERVENCIÓN.

El deber del personal de las Fuerzas de Seguridad de intervenir para evitar cualquier tipo de situaciones riesgosas o de conflictos que pudieran resultar constitutivos de delitos, contravenciones o faltas rige durante su horario de servicio ordinario o complementario.

Cuando el personal se encuentre fuera del horario de servicio y tome conocimiento de situaciones que requieran intervención directa deberá dar aviso a personal de la fuerza en servicio.

El personal que se encuentre en esta situación no estará obligado a identificarse como tal ni a intervenir, pero, si lo hiciera, actuará en calidad de órgano del estado y se regirá según las facultades y obligaciones que como miembro de las Fuerzas de Seguridad le corresponden.

ARTÍCULO 32°. PROHIBICIÓN DE MEDIDAS DE ACCIÓN DIRECTA.

Se prohíbe expresamente al personal de las Fuerzas de Seguridad adoptar medidas de acción directa de cualquier naturaleza que impliquen:

a. Ocupar lugares de trabajo o hacer uso indebido de recursos del Estado a los fines de protestar o reclamar.

b. Negarse a cumplir sus funciones de modo que ello importe dejar de prestar el servicio esencial a su cargo, en forma total o parcial.

c. Cumplir sus funciones bajo cualquier modalidad que impliquen la disminución, paralización o interrupción total o parcial de la prestación del servicio.

d. Movilizarse, manifestar o peticionar.

Sección Segunda. Parte General del Régimen Disciplinario.

ARTÍCULO 33°. RÉGIMEN DISCIPLINARIO. FINALIDAD.

El régimen disciplinario de las Fuerzas de Seguridad tiene por finalidad garantizar la observancia de los principios primordiales de actuación en el desempeño de sus funciones y cumplir con los deberes funcionales conforme lo determinan la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales, la Constitución de la Provincia de Córdoba, las leyes, reglamentos y protocolos, como postulados jurídicos que procuran garantizar el marco ético de actuación de las instituciones y el respeto incondicional a los derechos humanos.

ARTÍCULO 34°. RÉGIMEN DISCIPLINARIO. CONTENIDOS.

El régimen disciplinario contiene el conjunto de faltas disciplinarias que puede cometer el personal de las Fuerzas de Seguridad, las sanciones administrativas correspondientes a dichas

faltas y las facultades disciplinarias de las instancias institucionales encargadas de investigarlas y resolverlas, garantizando los derechos de defensa y el debido proceso.

ARTÍCULO 35°. PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS.

Cuando de la comisión de una falta disciplinaria resulten afectadas una o más personas, se deberá propender a su protección.

En estos supuestos, la víctima o sus herederos forzosos tendrán derecho a ser informados acerca del estado de la investigación, así como de las resoluciones dictadas y de los servicios existentes para la asistencia jurídica, social y psicológica si así fueran necesarios.

ARTÍCULO 36°. REGLA DE INTERPRETACIÓN.

Las normas de esta Ley se interpretarán de conformidad con los principios constitucionales y del derecho internacional consagrados en tratados de igual jerarquía, con especial énfasis en los derechos humanos.

ARTÍCULO 37°. PARTICIPACIÓN.

Cuando en la comisión de la falta interviniere más de un agente, todos quedarán sometidas a la misma escala sancionatoria, sin perjuicio que la sanción aplicada se gradúe con arreglo a la respectiva participación del hecho.

ARTÍCULO 38°. DETERMINACIÓN DE LA SANCIÓN.

A los fines de determinar la cuantificación de la sanción se deberá tener en cuenta:

- a. Los medios empleados para ejecutar la falta;
- b. La extensión del daño producido;
- c. El peligro ocasionado;
- d. Las circunstancias particulares de la persona infractora tales como la jerarquía, la edad, la educación y la conducta precedente, la inexperiencia motivada en la escasa antigüedad y los méritos acreditados durante el servicio;

e. La reiteración de faltas, entendiendo por tal la existencia previa de una o más sanciones disciplinarias de cualquier naturaleza.

ARTÍCULO 39°. AGRAVANTES.

El máximo de la sanción divisible prevista para la falta se duplicará en los siguientes casos:

- a. Cuando la falta fuera cometida con el concurso de tres o más personas pertenecientes a las Fuerzas de Seguridad;
- b. Cuando la falta fuera cometida por un/a jefe/a de dependencia en el ejercicio de sus funciones;
- c. Cuando la falta configure una situación de violencia institucional o violencia de género;
- d. Cuando la falta configure un hecho de corrupción;

ARTÍCULO 40°. DEFINICIONES.

A los fines de esta Ley se considera:

a. **Violencia institucional** a toda acción u omisión que afecte la vida, la libertad, la dignidad, la integridad física, psicológica o sexual de una persona o de grupos de personas, cuando dichos padecimientos sean infligidos de manera intencional por cualquier integrante de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana en el ejercicio de sus funciones.

b. **Violencia de género** a toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, afecte la vida, la libertad, la dignidad, la integridad física, psicológica, sexual o económica de mujeres y/o personas de género u orientación sexual no hegemónicas, basada en una relación desigual de poder o motivadas por actitudes de odio hacia la orientación sexual o la expresión u identidad de género.

c. **Corrupción** a toda acción u omisión ilegal, realizada a sabiendas por parte de un integrante de las Fuerzas de Seguridad abusando de su cargo o función con el objetivo de obtener beneficios para si y/o para terceras personas.

d. **Discriminación** a toda acción u omisión en el ejercicio de sus funciones que implique un trato diferencial y perjudicial a otra persona basado en criterios de nacionalidad, expresión o identidad de género, origen étnico, religión, ideología, edad, sexo, orientación sexual, caracteres físicos, discapacidad o condiciones sociales, laborales o económicas.

ARTÍCULO 41°. CONCURSO IDEAL Y REAL DE FALTAS.

Cuando una conducta se encuadrare total o parcialmente bajo más de una falta, se aplicará solamente la que fijare la sanción más grave.

Cuando concurrieren varios hechos independientes reprimidos con la misma especie de sanción divisible, se deberá imponer la sanción resultante de su suma, la que no podrá exceder el máximo de la especie de sanción de que se trate.

Sección Tercera. De las Sanciones.

ARTÍCULO 42°. SANCIONES PRINCIPALES.

Las sanciones principales son:

- a. Apercibimiento;
- b. Suspensión;
- c. Cesantía y;
- d. Destitución.

ARTÍCULO 43°. APERCIBIMIENTO.

El apercibimiento es el llamado de atención y la advertencia personalizada a un miembro de las Fuerzas de Seguridad. La resolución deberá indicar cuál hubiera sido la forma correcta de actuar.

ARTÍCULO 44°. SUSPENSIÓN.

La suspensión de empleo comprende la privación temporal del ejercicio de las funciones a un miembro de las Fuerzas de Seguridad, incluyendo las tareas de servicio adicional.

El personal sancionado con suspensión de empleo no podrá concurrir a su puesto de trabajo y ello implicará el ajuste proporcional del salario por el tiempo que dure la sanción disciplinaria.

Cuando la sanción de suspensión sea dictada por la comisión de una falta leve o media, el tiempo de duración de la suspensión de empleo no afectará el cómputo de la antigüedad en el servicio y en el grado.

Cuando la sanción de suspensión sea dictada por la comisión de una falta grave o gravísima, el tiempo de duración de la suspensión de empleo afectará el cómputo de la antigüedad en el servicio y en el grado.

En ningún caso la sanción de suspensión podrá superar los cientos veinte (120) días corridos.

ARTÍCULO 45°. CESANTÍA.

La cesantía implica la pérdida del empleo, de los derechos y deberes inherentes al mismo y la inhabilitación perpetua para el reingreso a cualquiera de las Fuerzas de Seguridad.

Las resoluciones firmes de cesantía deberán publicarse en la página web de cada una de las Fuerzas de Seguridad y serán de libre acceso.

ARTÍCULO 46°. DESTITUCIÓN.

La destitución implica la expulsión del empleo y la inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio, sin excepción, de todo empleo o función públicas y como prestador o personal de los servicios de la seguridad privada en la jurisdicción provincial.

La resolución de destitución y la inhabilitación que conlleva, además de su registración en el Organismo, deberá publicarse en la página web de cada una de las Fuerzas de Seguridad.

ARTÍCULO 47°. SANCIONES SUSTITUTIVAS.

Las sanciones principales podrán ser reemplazadas por sanciones sustitutivas.

Estas deberán ser cumplidas fuera del horario en que el personal presta servicios.

Las sanciones sustitutivas son:

Tratamientos terapéuticos;

- a. Deberes especiales de conducta;
- b. Cursos educativos;
- c. Reparación del daño;
- d. Tareas comunitarias.

ARTÍCULO 48°. TRATAMIENTO TERAPÉUTICO.

Se podrá disponer el cumplimiento de un tratamiento terapéutico fundado en las condiciones personales de la persona sancionada y en su conveniencia. Se deberá contar previamente con informe médico o psicológico y con la aceptación expresa de la persona imputada.

El tratamiento podrá ser cumplido en instituciones públicas o privadas.

En ningún caso podrá superar los cientos veinte (120) días corridos sin perjuicio de la continuidad del tratamiento de manera voluntaria por el personal de las Fuerzas de Seguridad.

ARTÍCULO 49°. DEBERES ESPECIALES DE CONDUCTA.

Los deberes especiales de conducta consistirán en la limitación o restricción impuesta para asistir, ingresar o permanecer en un lugar o de acercarse a menos de determinada distancia de lugares o personas por el tiempo que se determine.

En ningún caso podrá superar los cientos veinte (120) días corridos desde que la sanción quede firme.

ARTÍCULO 50°. CURSOS EDUCATIVOS.

Los cursos educativos consistirán en que el personal sancionado realice un curso de capacitación cuya temática y duración deberá estar vinculada y ser proporcional a la falta cometida.

En ningún caso podrá superar los cientos veinte (120) días corridos, sin perjuicio de la continuidad del curso de manera voluntaria por el personal de las Fuerzas de Seguridad.

ARTÍCULO 51°. REPARACIÓN DEL DAÑO CAUSADO.

Cuando por la naturaleza de la falta resulte factible, la autoridad de aplicación podrá disponer que el/la autor/a repare el daño causado o procure la restitución de la situación al estado anterior al hecho, en la medida que sea posible.

ARTÍCULO 52°. TAREAS COMUNITARIAS.

Las tareas comunitarias se cumplirán en dependencias oficiales -nacionales, provinciales, municipales o comunales- u otras instituciones de bien público estatales o privadas, y estarán orientadas a la conservación, la mejora o la ampliación de establecimientos asistenciales, sociales, de enseñanza o espacios públicos.

La resolución sancionatoria deberá indicar en qué consistirán las tareas comunitarias y su término.

En ningún caso podrá su ejecución superar los cientos veinte (120) días corridos.

Sección Cuarta. De las acciones

ARTÍCULO 53°. OBLIGACIÓN DE ACTUAR E INFORMAR.

Deberán iniciarse de oficio todos los procedimientos por faltas disciplinarias. El personal de las Fuerzas de Seguridad con facultades disciplinarias tiene la obligación, de conformidad al procedimiento que al efecto se establezca, de aplicar las sanciones que correspondan ante la constatación de una falta leve o media.

Si careciera de dichas facultades deberá denunciarlo ante la autoridad competente.

ARTÍCULO 54°. PROHIBICIÓN.

Las sanciones firmes aplicadas por faltas disciplinarias no podrán en ningún caso, ser dejadas sin efectos o disminuidas.

ARTÍCULO 55°. EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA.

La acción disciplinaria se extingue:

- a. Por muerte de la persona imputada.
- b. Por prescripción.

ARTÍCULO 56°. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA.

La acción para perseguir infracciones prescribe:

- a. A los tres (3) años en los casos de faltas gravísimas
- b. A los dos (2) años en los casos de faltas graves
- c. Al año (1) cuando se trate de faltas medias.
- d. A los seis (6) meses cuando se trate de faltas leves.

La prescripción de la acción comenzará a correr desde la medianoche del día que se cometió la falta.

ARTÍCULO 57°. COMUNICABILIDAD.

La prescripción de la acción corre, se suspende o se interrumpe separadamente para cada falta y para cada uno/a de sus partícipes.

ARTÍCULO 58°. INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN.

La prescripción de la acción se interrumpe por:

- a. Comisión de una nueva falta.
- b. La notificación fehaciente al agente de la existencia de un procedimiento disciplinario en su contra.

ARTÍCULO 59°. SUSPENSIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN.

La prescripción de la acción se suspende cuando la investigación administrativa se haya iniciado con motivo de la presunta comisión de un delito por parte de personal de las Fuerzas de Seguridad, y se haya ordenado por resolución fundada la suspensión del procedimiento disciplinario por carecer de elementos suficientes para proseguir la investigación. En caso de reanudarse la investigación administrativa, la prescripción continuará su curso.

Capítulo 2. De las Faltas

ARTÍCULO 60°. CLASIFICACIÓN.

Las faltas serán leves, medias, graves y gravísimas. Las faltas graves y gravísimas son las establecidas en la presente Ley, mientras que las faltas leves y medias serán establecidas por vía reglamentaria.

ARTÍCULO 61°. CORRELACIÓN ENTRE FALTA Y SANCIÓN.

Las faltas tendrán las siguientes sanciones:

- a. Las faltas leves serán sancionadas con apercibimiento o suspensión de hasta diez (10) días corridos;
- b. las faltas medias con apercibimiento o suspensión de hasta veinte (20) días corridos;
- c. las faltas graves y gravísimas con la sanción expresamente prevista en la presente Ley.

ARTÍCULO 62°. DELITOS CULPOSOS.

La comisión de delitos culposos ajenos al servicio, no podrán constituir falta disciplinaria ni serán motivo de procedimientos disciplinarios.

ARTÍCULO 63°. FALTAS GRAVES.

Las faltas graves serán sancionadas con suspensión de hasta sesenta días corridos y son las que a continuación se detallan:

- a. Conducir un vehículo perteneciente a la fuerza de seguridad con inobservancia de las normas de tránsito vigentes con suficiente entidad para poner en peligro la vida o integridad de personas o bienes públicos o privados, salvo excepciones extremas del servicio.
- b. Dañar o extraviar, por negligencia, imprudencia o inobservancia de los reglamentos y deberes a su cargo, bienes, valores u objetos en el ejercicio de sus funciones que tengan la entidad y relevancia para producir una afectación patrimonial.
- c. Portar objetos peligrosos para la seguridad del establecimiento o dependencia en los que haya personas privadas de libertad.
- d. Utilizar todo o parte del uniforme oficial en tareas o actividades incompatibles con la función.

- e. Desafiar o efectuar cualquier otra demostración de agresividad hacia sus superiores, iguales o subalternos o hacia el personal del Organismo de Control e Investigación, de la Defensoría de las Fuerzas de Seguridad o del Tribunal de Conducta.
- f. Impartir, a sabiendas, directivas contrarias a lo dispuesto por los protocolos de actuación u órdenes de servicio sin razón justificada y siempre que del incumplimiento no se deriven daños.
- g. Incumplir a sabiendas lo dispuesto por los protocolos de actuación u órdenes de servicio sin razón justificada y siempre que del incumplimiento no se deriven daños.
- h. Utilizar influencias para definir destinos laborales, traslados o ascensos, siempre que no se configure alguna falta más grave;
- i. Exigir o encomendar tareas no autorizadas al personal a su cargo;
- j. Formular por cualquier medio y a sabiendas, afirmaciones o comentarios que deshonen o desacrediten a otro integrante de las Fuerzas de Seguridad o agraven a las Fuerzas de Seguridad.
- k. Tratar de manera incorrecta o descortés por cualquier medio al público, a otros/as integrantes de las Fuerzas de Seguridad o a personas privadas de su libertad.
- l. Prohibir, impedir, obstaculizar o restringir ilegítimamente el registro o filmación de la actuación del personal de las Fuerzas de Seguridad en la vía pública, lugares de acceso público o lugares privados en los que la persona que filma o registra tenga derecho a permanecer.
- m. Omitir requisar a personas privadas de su libertad, hacerlo en lugares no destinados al efecto o sin observar la reglamentación vigente.
- n. Demorar la remisión de una persona privada de libertad a su destino o al lugar que haya dispuesto la autoridad competente, sin causa justificada.
- o. Permitir la entrada de personas detenidas en oficinas o lugares de acceso prohibido sin la autorización pertinente.
- p. Permitir visitas a personas privadas de libertad que no tengan la debida autorización.
- q. No comparecer sin causa debidamente justificada a las citaciones que le formulen el Organismo de Control e Investigación, la Defensoría de las Fuerzas de Seguridad, el Tribunal de Conducta o un organismo judicial.
- r. Negarse a ser requisado, cuando se encuentre obligado en virtud de la reglamentación vigente.
- s. Rendir cuentas con atraso o demorar injustificadamente los trámites de licitaciones, concursos de precios, compras y pagos en general; transferencias, devoluciones de fondos, pedidos de imputaciones y adquisiciones;
- t. Formular reportajes o declaraciones públicas referidas a aspectos funcionales o de carácter político, sin contar con la autorización de la superioridad.
- u. Incurrir en impuntualidad más de diez (10) veces en el año;
- v. No asistir al servicio con aviso más de ocho (8) días en el año.
- w. Abandonar el servicio sin causa justificada cuando del incumplimiento no se derive daño a bienes o integridad física de alguna persona.
- x. Recomendar servicios de terceros por un interés personal o que impliquen un conflicto de intereses o la obtención de una ventaja o provecho indebidos, persiga o no fines lucrativos.
- y. Presentar recursos o reclamos individuales o colectivos en términos falsos, maliciosos, temerarios o irrespetuosos.

ARTÍCULO 64°. FALTAS GRAVÍSIMAS.

Serán sancionadas con suspensión de sesenta (60) días corridos o cesantía las faltas gravísimas que a continuación se detallan:

- a. Dañar o extraviar, a sabiendas, bienes, valores u objetos en el ejercicio de sus funciones que tengan la entidad y relevancia para producir una afectación patrimonial.
- b. Prestar, ceder o vender distintivos, prendas del uniforme, equipos u otros bienes de la Institución a personas ajenas a las fuerzas de seguridad.
- c. Perder o ser desapoderado con o sin violencia del armamento provisto por incumplimiento de las normas que reglan su portación.
- d. Hacer uso o disponer de bienes, valores u objetos secuestrados sin la autorización correspondiente.
- e. Ejercer las atribuciones del cargo con parcialidad manifiesta o abusando de su función.
- f. Requerir los servicios del personal subalterno en horario de servicio o utilizar recursos materiales de la institución en provecho propio o de un tercero.
- g. Incumplir a sabiendas lo dispuesto por los protocolos de actuación u órdenes de servicio sin razón justificada cuando se deriven daños del incumplimiento.
- h. Impartir a sabiendas directivas contrarias a lo dispuesto por los protocolos de actuación u órdenes de servicio sin razón justificada y cuando se deriven daños del incumplimiento.
- i. Transmitir, a sabiendas, información inexacta a otros integrantes de las Fuerzas de Seguridad de modo tal que cause perjuicio.

- j. Formular falsa imputación de un delito o contravención a otro integrante de las Fuerzas de Seguridad.
- k. Intimidar, discriminar, hostigar, acosar o maltratar física, psíquica o económicamente a otro/a integrante de las Fuerzas de Seguridad.
- l. Discriminar por razones de nacionalidad, expresión o identidad de género, origen étnico, religión, ideología, edad, sexo, orientación sexual, caracteres físicos, discapacidad o condiciones sociales, laborales o económicas a otra persona en el ejercicio de sus funciones.
- m. Cometer, provocar o instigar desobediencia ostensiblemente;
- n. Ofrecer destinos, traslados o ascensos o cualquier beneficio laboral a cambio de dinero, dádiva o cualquier otro favor.
- o. Incumplir sin causa justificada una medida cautelar o una sanción principal o sustitutiva impuesta por el Tribunal de Conducta habiendo sido debidamente notificado.
- p. Solicitar o aceptar dádivas o dinero por servicios prestados en el desempeño de sus funciones o a consecuencia de ellos.
- q. Afirmar una falsedad, negar o callar la verdad en todo o en parte respecto de declaraciones, informes, traducciones o interpretaciones que se formulen como testigos, peritos o intérpretes en actuaciones administrativas o judiciales.
- r. Negarse o evadir la obligación de prestar declaración testimonial o patrimonial, emitir informes o aportar pruebas en causas que haya conocido en ejercicio de sus funciones o cuando sean prestadas con reticencia, falsedad u ocultamiento perjudicial para la investigación.
- s. Consumir bebidas alcohólicas y/o estupefacientes en móviles, dependencias, o lugares abiertos al público estando de servicio o vistiendo el uniforme.
- t. Prestar servicio en estado de ebriedad o intoxicación por consumo de estupefacientes.
- u. Utilizar información obtenida en razón de su servicio o función para brindar un servicio profesional ajeno a la institución;
- v. Incurrir en impuntualidad más de quince (15) veces en el año;
- w. No asistir al servicio con aviso más de doce (12) días en el año.
- x. Abandonar el servicio sin causa justificada por más de cuarenta y ocho (48) horas.
- y. Incumplir con el servicio generando una grave afectación a la vida, los bienes o la salud de las personas.
- z. Interrogar a personas privadas de libertad, sospechadas, acusadas o imputadas de un delito o contravención, sin las formalidades establecidas en las normas procesales vigentes.
- aa. Demorar o incumplir el otorgamiento de la libertad de una persona detenida por disposición de la autoridad competente.
- bb. Omitir informar de manera inmediata a la superioridad o a quien corresponda, sobre la enfermedad, lesiones o muerte de una persona privada de la libertad bajo su custodia.
- cc. No procurar la asistencia médica inmediata a una persona que lo requiere en el ejercicio de sus funciones.
- dd. Emplear, abusando del cargo, a personas privadas de libertad para servicios particulares.
- ee. Facilitar, por negligencia e imprudencia, la evasión de alguna persona legalmente privada de su libertad.
- ff. Utilizar ilegalmente la fuerza y el armamento para someter a personas.
- gg. Intervenir o de cualquier forma participar en la gestión u organización de partidos políticos mientras permanezca en actividad.
- hh. Integrar o participar en cooperativas, mutuales, asociaciones o cualquier otra organización destinada a recaudar fondos provenientes de la ciudadanía bajo pretexto de colaboración con la fuerza de seguridad.
- ii. Publicar por cualquier medio mensajes discriminatorios, antidemocráticos o que inciten al odio o a la violencia o que hagan apología de un delito o de una persona condenada por delito.
- jj. Cometer una acción que implique delito doloso cuya pena máxima en abstracto sea igual o inferior a los tres años de prisión o reclusión y el delito no fuera cometido en el ejercicio de sus funciones.

ARTÍCULO 65°. FALTAS GRAVÍSIMAS SANCIONADAS CON DESTITUCIÓN.

Serán sancionadas con la destitución las faltas gravísimas que a continuación se detallan:

- a. No poder justificar la evolución patrimonial.
- b. Efectuar un requerimiento de carácter sexual, para sí o para un/a tercero/a, aprovechándose de su función, de la vulnerabilidad de la víctima o de cualquier otra circunstancia o medio que anule o vulnere la voluntad de la víctima.
- c. Prestar, ceder o vender armamento o equipos de comunicación a personas ajenas a las Fuerzas de Seguridad.
- d. Cometer una acción que implique delito doloso cuya pena máxima en abstracto sea superior a los tres años de prisión o reclusión o el delito fuera cometido en el ejercicio de sus funciones.
- e. Los/as integrantes de las Fuerzas de Seguridad en actividad o en situación de retiro que en un número mayor de dos realicen alguna de las siguientes conductas:

- i. Ocupar lugares de trabajo o hacer uso indebido de recursos del Estado a los fines de protestar o reclamar.
- ii. Negarse a cumplir sus funciones de modo que ello importe dejar de prestar el servicio esencial a su cargo en forma parcial o total.
- iii. Cumplir sus funciones bajo cualquier modalidad que impliquen la disminución, paralización o interrupción total o parcial de la prestación del servicio.
- iv. Movilizarse, o manifestar o peticionar, en estos dos últimos casos en forma pública, desmedida, insubordinada o violenta.
- f. Los/as integrantes de las Fuerzas Seguridad en actividad o en situación de retiro que tuvieran conocimiento de alguna de las acciones enumeradas en el inciso anterior realizadas por otros/as integrantes de la fuerza o por particulares y no lo denunciaron ante la autoridad competente en el término de veinticuatro (24) horas.

ARTÍCULO 66°. RÉGIMEN DISCIPLINARIO PARA PERSONAL RETIRADO.

El personal en situación de retiro no tendrá facultades disciplinarias. Cuando se encuentre prestando servicios de adicional o utilizando el uniforme, le será aplicable el mismo el régimen disciplinario que al personal en actividad. En los demás casos, le serán aplicables las faltas que fije la reglamentación.

Capítulo 3. Procedimiento Disciplinario.

Sección Primera. Disposiciones Generales.

ARTÍCULO 67°. PRINCIPIOS Y GARANTÍAS.

El procedimiento de sustanciación y aplicación de las sanciones al personal de las Fuerzas de Seguridad por la comisión de faltas leves, medias, graves y gravísimas será definido por la reglamentación de conformidad con las siguientes garantías:

- a. **Debido proceso.** Se deberá garantizar a la persona imputada de cometer una falta los derechos a ser oída, a ofrecer y producir prueba y a obtener una decisión fundada en tiempo razonable por parte de la autoridad interviniente.
- b. **Derecho de defensa.** Toda persona investigada por la comisión de una falta disciplinaria tiene derecho a ejercer su defensa material y técnica.
- c. **Derecho a no autoincriminarse.** Ninguna persona puede ser obligada a declarar contra sí mismo/a. El ejercicio de este derecho no puede ser valorado como una admisión de los hechos o indicio de culpabilidad. Toda admisión de los hechos o confesión debe ser libre y bajo expreso consentimiento de la persona imputada.
- d. **Imparcialidad e independencia.** La autoridad de con potestad disciplinaria debe actuar con imparcialidad en sus decisiones e independencia de toda injerencia externa y de los/as demás integrantes del Tribunal de Conducta.
- e. **Simplicidad, celeridad y desformalización.** Los actos del procedimiento se registrarán por escrito, imágenes o sonidos u otro soporte tecnológico equivalente.
- f. **Concentración.** Siempre que sea posible y no se contraponga con el debido proceso, se procurará concentrar la actividad procedimental realizando de manera conjunta todos los actos que lo admitan.

ARTÍCULO 68°. AUTORIDAD DE APLICACIÓN.

La investigación y sanción por faltas leves y medias será competencia de las Fuerzas de Seguridad en los términos y alcances que determine la reglamentación de la presente Ley.

La investigación por las faltas graves y gravísimas será potestad exclusiva del Organismo de Control e Investigación de las Fuerzas de Seguridad.

El dictado de las medidas cautelares, la aplicación de sanciones y la resolución de las impugnaciones por las faltas graves y gravísimas será competencia del Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad.

ARTÍCULO 69°. RECUSACIÓN Y EXCUSACIÓN.

Los/as integrantes del Tribunal de Conducta, así como el/la Director/a General y el/la Director/a de Investigaciones deberán excusarse o podrán ser recusados/as, cuando existan motivos serios y razonables que afecten su imparcialidad. Toda recusación o excusación deberá ser fundada.

No procederá la recusación sin expresión de causa.

La recusación de los/as integrantes del Tribunal de Conducta será resuelta por sus pares en plenario. La recusación del Director/a de Investigaciones será resuelta por el/la Director/a General y el de éste/a por el Tribunal de Conducta.

Planteadas la recusación, previo informe del recusado, ésta será resuelta sin sustanciación, dentro del término de tres (3) días hábiles.

La resolución será irrecurrible.

ARTÍCULO 70°. REGISTRO DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO.

Cuando se utilicen registros de imágenes o sonidos se deberá reservar el original en condiciones que aseguren su inalterabilidad, conforme lo establezca la reglamentación.

ARTÍCULO 71°. NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS.

En el primer llamado a personas investigadas o imputadas, letrados/as y testigos se les exigirá que constituyan domicilio electrónico.

ARTÍCULO 72°. INDEPENDENCIA DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO. EXCEPCIONES.

La sustanciación de los sumarios administrativos por hechos que puedan configurar delitos y la imposición de las sanciones disciplinarias pertinentes en el orden administrativo son independientes del proceso penal, con excepción de las siguientes situaciones:

- a. Cuando se encuentre pendiente el proceso penal, el personal sumariado no podrá ser declarado exento de responsabilidad en sede administrativa.
- b. Cuando la investigación disciplinaria no cuente con elementos suficientes para requerir la aplicación de una sanción o de una medida cautelar, el/la Director/a General del Organismo deberá ordenar, por resolución fundada, la suspensión del procedimiento disciplinario.
- c. La absolución o sobreseimiento en sede penal fundada en la inexistencia del hecho o en la falta de participación de la persona imputada provocará la clausura del procedimiento disciplinario o la revocación de las sanciones impuestas por esos hechos.
- d. Si en el proceso penal hubiere recaído condena, el hecho y la participación de la persona imputada en el mismo deberán darse por acreditados en sede administrativa y continuar con el curso del procedimiento.

ARTÍCULO 73°. PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE FALTAS LEVES Y MEDIAS.

Las faltas disciplinarias leves y medias serán investigadas y sancionadas dentro del ámbito de las Fuerzas de Seguridad. Cuando la sanción se encuentre firme, la Fuerza de Seguridad correspondiente deberá informar en el plazo de 48 horas al Organismo de Control e Investigación para su incorporación al Registro Único de Faltas.

ARTÍCULO 74°. PROCEDIMIENTO ABREVIADO PARA SANCIÓN SUSTITUTIVA.

La persona imputada por una falta disciplinaria que reconociere circunstanciada y llanamente su participación y responsabilidad, podrá ser pasible de una sanción sustitutiva o bien solicitar su aplicación.

En ambos casos podrá proponer la forma de su cumplimiento.

En los casos de faltas graves el Organismo de Control e Investigación de las Fuerzas de Seguridad, mediante resolución fundada en las características del hecho y en la conveniencia de la sanción sustitutiva, requerirá al Tribunal de Conducta su aplicación.

El Tribunal de Conducta deberá resolver y controlar el cumplimiento de la sanción sustitutiva y, una vez cumplida la misma, dictará resolución cerrando el procedimiento.

Quedan excluidos del procedimiento abreviado de sanción sustitutiva los casos de faltas gravísimas.

ARTÍCULO 75°. INCUMPLIMIENTO DE SANCIÓN SUSTITUTIVA.

Si mediare inobservancia o incumplimiento de las condiciones, imposiciones o instrucciones que disponen las sanciones sustitutivas sin la debida justificación, el Tribunal de Conducta podrá revocar la sanción impuesta y aplicar hasta el máximo de la sanción de la falta por el cual se lo condenó o resolver, cuando se considere necesario, la subsistencia de la sanción sustitutiva extendiendo el plazo hasta el máximo que determina la especie de la sanción.

En los casos de incumplimiento o inobservancia de sanción sustitutiva aplicada dentro del ámbito de las Fuerzas de Seguridad, se procederá conforme lo establezca la reglamentación.

El agente que haya incumplido una sanción sustitutiva no podrá acceder a esta posibilidad en los próximos tres (3) años desde su incumplimiento.

ARTÍCULO 76°. REQUERIMIENTO A JUZGADOS.

El Organismo de Control e Investigación podrá solicitar a los Juzgados competentes las medidas de contenido jurisdiccional.

ARTÍCULO 77°. CASOS DE VIOLENCIA INSTITUCIONAL Y DISCRIMINACIÓN.

El Organismo de Control e Investigación y el Tribunal de Conducta deberán comunicar a la Secretaría de Derechos Humanos o al organismo que en su futuro lo reemplace las actuaciones administrativas y las resoluciones de los casos que constituyan hechos de violencia institucional y discriminación para que se instrumenten los servicios de asistencia integral a las víctimas y familiares.

ARTÍCULO 78°. CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO.

El Organismo de Control e Investigación y el Tribunal de Conducta deberán comunicar al Ministerio de la Mujer o al organismo que en su futuro lo reemplace las actuaciones administrativas y las resoluciones de los casos que constituyan hechos de violencia de género para que se instrumenten los servicios de asistencia integral a las víctimas y familiares.

Sección Segunda. Medidas Cautelares

ARTÍCULO 79°. EXCEPCIONALIDAD Y APLICACIÓN RESTRICTIVA.

Las medidas cautelares son de carácter excepcional y se aplicarán restrictivamente en los casos y con los efectos que el decreto reglamentario establezca.

Durante la sustanciación del procedimiento para la determinación de la posible comisión de faltas graves y gravísimas y solo a los fines de garantizar su realización y el efectivo cumplimiento de lo que se resuelva, el Tribunal de Conducta, de oficio o a requerimiento del Organismo de Control e Investigación podrá disponer medidas cautelares.

ARTÍCULO 80°. MEDIDAS CAUTELARES.

Las medidas cautelares son:

- a. La suspensión preventiva;
- b. El retiro preventivo del armamento y;

c. Pase a situación pasiva.

ARTÍCULO 81°. CÓMPUTO Y ALCANCES.

La reglamentación establecerá el cómputo para la equivalencia de las medidas cautelares con las sanciones en caso de recaer resolución condenatoria.

También establecerá la duración y el alcance de cada medida cautelar.

Sección Tercera. Impugnación

ARTÍCULO 82°. VÍAS IMPUGNATIVAS.

Contra las resoluciones que impongan medidas cautelares y demás actos del procedimiento que expresamente así lo prevean, procederán los recursos que fije la reglamentación.

Contra las resoluciones que impongan las sanciones disciplinarias procederán los recursos de reconsideración y revisión.

En ambos casos, la interposición de recursos no tiene efecto suspensivo.

ARTÍCULO 83°. RECURSO DE RECONSIDERACIÓN.

El recurso de reconsideración deberá ser fundado y agota la vía administrativa.

ARTÍCULO 84°. RECURSO DE REVISIÓN.

El recurso de revisión se interpondrá en los siguientes casos:

- a. Cuando la resolución resultare contradictoria.
- b. Cuando aparezcan documentos o testimonios relevantes para la resolución ignorados al imponerse la sanción.
- c. Cuando se hubiere impuesto la medida disciplinaria por resolución fundada en documentos o circunstancias cuya declaración de falsedad se desconocía o se hubiere dictado luego de producida tal resolución.
- d. Cuando hubiere sido dictada mediante cohecho, prevaricato, violencia o cualquier otra maquinación fraudulenta o grave irregularidad comprobada.
- e. Cuando la sanción disciplinaria haya sido impuesta por un hecho de carácter delictivo y una sentencia judicial posterior declare la absolución o sobreseimiento fundada en la inexistencia del hecho o en la no participación de la persona imputada en el mismo.

TÍTULO TERCERO.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ARTÍCULO 85°. VIGENCIA DE LA LEY.

La presente Ley comenzará a regir en la fecha que establezca su Decreto Reglamentario, y sólo será aplicable a las conductas realizadas, hechos ejecutados y/o faltas cometidas a partir de la fecha de su entrada en vigencia.

ARTÍCULO 86°. VIGENCIA PROVISORIA.

Las disposiciones de los artículos 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 y 108 de la Ley Nro. 8231; los artículos 15 inc. d, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 y 106 de la Ley Nro. 9728, reglamentaos por el Decreto N° 1753/03, los artículos 4, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 y 68 de la Ley Nro. 10.227, y la Ley N° 9120, mantendrán su vigencia al sólo efecto de su aplicación a las conductas realizadas, hechos ejecutados y/o faltas cometidas con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente Ley, en tanto no resulten incompatibles o contradictorias con sus previsiones.

ARTÍCULO 87°. PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS Y MEDIDAS CAUTELARES.

Los procedimientos disciplinarios iniciados y las medidas cautelares, situación pasiva u otras medidas provisorias tomadas durante su sustanciación, se regirán por la normativa vigente al momento de su iniciación y serán resueltas por los órganos por ella establecida.

ARTÍCULO 88°. OPCIÓN.

Los agentes sometidos a procesos disciplinarios al momento de entrada en vigencia de esta Ley, podrán optar por su aplicación y la intervención de los órganos en ella previstos.

ARTÍCULO 89°. CONFLICTO NORMATIVO.

Todo conflicto de interpretación normativa se resolverá en beneficio de las disposiciones y principios de la presente Ley.

ARTÍCULO 90°. DE FORMA.

Juan Schiaretti, Alfonso Fernando Mosquera, Julián López, Jorge Eduardo Córdoba

DESPACHO DE COMISIÓN

Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 22 de diciembre de 2020

A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:

Las Comisiones de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS y de LEGISLACIÓN GENERAL, al dictaminar acerca del **Proyecto de Ley N° 31912/E/20**, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, estableciendo el Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad, ACONSEJAN, por las razones que en el Plenario dará el señor miembro informante, PRESTARLE APROBACIÓN de la siguiente manera:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

**SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:**

**CONTROL DISCIPLINARIO DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y
CIUDADANA
TÍTULO PRIMERO ORGANISMOS DE CONTROL DISCIPLINARIO**

Capítulo 1 Disposiciones Comunes

ARTÍCULO 1º.- Bases. La presente Ley establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana de la Provincia de Córdoba.

El mismo está compuesto por los Organismos del Sistema de Control Disciplinario y por el Régimen Disciplinario.

ARTÍCULO 2º.- Objeto. El Sistema de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana tiene por objeto instituir un mecanismo de control externo, civil, democrático, autónomo, transparente y eficaz de la actuación de las Fuerzas de Seguridad de la Provincia de Córdoba mediante la prevención, investigación y eventual sanción de las faltas disciplinarias, a fin de resguardar el correcto e integral funcionamiento del servicio de seguridad pública.

ARTÍCULO 3º.- Principios. El Sistema de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana actúa bajo los siguientes principios:

- a) Legalidad y respeto por los derechos humanos;
- b) Perspectiva de género;
- c) No discriminación;
- d) Prevención y erradicación de la violencia institucional;
- e) Control civil de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana;
- f) Acceso a la información por parte de la ciudadanía;
- g) Políticas de transparencia y prevención de la corrupción;
- h) Lenguaje claro, e
- i) Independencia del procedimiento disciplinario respecto del proceso penal.

ARTÍCULO 4º.- Ámbito de aplicación. La presente Ley es de aplicación a todo el personal de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana de la Provincia de Córdoba, tanto en actividad como en situación de retiro, y rige sobre conductas reprochables que sean cometidas dentro o fuera del territorio provincial.

ARTÍCULO 5º.- Composición. El Sistema de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana está integrado por los siguientes organismos, que actuarán con autonomía funcional y se relacionarán con el Poder Ejecutivo Provincial por intermedio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos o del organismo que lo sustituyere en sus competencias:

a) El Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad, de conformación interinstitucional, tiene competencia para el conocimiento y la sanción de las faltas disciplinarias graves, gravísimas y pasibles de destitución cometidas por el personal de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana de la Provincia de Córdoba;

b) La Dirección General de Control e Investigación de las Fuerzas de Seguridad tiene por funciones la prevención y la investigación de las faltas disciplinarias graves, gravísimas y pasibles de destitución cometidas por el personal de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana de la Provincia de Córdoba; y

c) La Asesoría Letrada Disciplinaria ejerce la defensa técnica de las personas que integran las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana de la Provincia de Córdoba sometidas a investigación en el marco del régimen disciplinario.

ARTÍCULO 6º.- Funcionamiento. La organización, administración, regímenes aplicables y demás aspectos institucionales y de funcionamiento de los Organismos del Sistema de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana serán establecidos por vía reglamentaria, de conformidad a su desenvolvimiento autónomo y a las necesidades de su estructuración y desarrollo de tareas.

ARTÍCULO 7º.- Incompatibilidad. El personal en actividad o en situación de retiro de las Fuerzas Armadas o de Seguridad no puede ser miembro del Tribunal de Conducta ni de la Dirección General de Control e Investigación de las Fuerzas de Seguridad de manera permanente ni transitoria bajo cualquier modalidad jurídica y en cualquiera de sus estamentos o funciones. Igual incompatibilidad tiene el personal civil que se haya desempeñado dentro de las Fuerzas Armadas o de Seguridad.

Los miembros de los organismos que integran el Sistema de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana duran en sus funciones hasta tanto la autoridad que los designó disponga su reemplazo, a solicitud de su proponente.

**Capítulo 2
Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad**

ARTÍCULO 8º.- Integración. Composición. El Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad es un organismo autónomo de integración interinstitucional y está compuesto por cinco (5) miembros titulares -y sus respectivos suplentes- designados por el Poder Ejecutivo Provincial.

Dichas designaciones serán realizadas de la siguiente manera:

- a) Una (1) a propuesta del Ministerio Público;
- b) Una (1) a propuesta de la Universidad Nacional de Córdoba;
- c) Una (1) a propuesta del Ministerio de Seguridad;
- d) Una (1) a propuesta del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y
- e) Un (1) Legislador designado por la Legislatura Provincial.

ARTÍCULO 9º.- Funciones. El Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad tiene, entre otras, las siguientes funciones:

- a) Resolver, a requerimiento de la Dirección General de Control e Investigación de las Fuerzas de Seguridad, los casos por la supuesta comisión de faltas graves, gravísimas y pasibles de destitución;
- b) Disponer las medidas cautelares de oficio o a pedido de la Dirección General de Control e Investigación de las Fuerzas de Seguridad;
- c) Resolver las impugnaciones y recursos que correspondan según la reglamentación;
- d) Controlar el cumplimiento de las sanciones impuestas;
- e) Dictar su reglamento interno de funcionamiento, y
- f) Elaborar el informe anual de gestión.

ARTÍCULO 10.- Funcionamiento. Para resolver sobre la aplicación de sanciones de suspensión o cesantía por faltas graves, gravísimas, los recursos contra las resoluciones que las dispongan y contra las resoluciones que impongan medidas cautelares, el Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad se integrará parcialmente, conforme se establezca en la reglamentación.

Para resolver sobre la aplicación de sanciones de destitución y las impugnaciones a estas resoluciones, el Tribunal se integrará en pleno. En ningún caso el Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad puede sancionar cuando la Dirección General de Control e Investigación de las Fuerzas de Seguridad haya solicitado el sobreseimiento, ni puede imponer sanciones más gravosas que las requeridas por este último.

ARTÍCULO 11.- Presidencia. El Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad es presidido por el miembro que representa al Ministerio Público.

ARTÍCULO 12.- Informe de gestión. El Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad debe remitir anualmente a la Legislatura, al Ministerio de Seguridad, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y al Ministerio Público el informe de gestión sobre las actividades realizadas.

Capítulo 3

Dirección General de Control e Investigación de las Fuerzas de Seguridad

Sección Primera Disposiciones Generales

ARTÍCULO 13.- Composición. La Dirección General de Control e Investigación de las Fuerzas de Seguridad está a cargo de un Director General designado por el Poder Ejecutivo Provincial a propuesta del Ministerio Público, y está integrado por:

- a) La Dirección de Investigaciones, y
- b) La Dirección de Prevención, Evaluación y Seguimiento.

Los titulares de ambas Direcciones son designados por el Poder Ejecutivo Provincial.

ARTÍCULO 14.- Funciones. La Dirección General de Control e Investigación de las Fuerzas de Seguridad tiene, entre otras, las siguientes funciones:

- a) Identificar, investigar y prevenir las faltas disciplinarias graves, gravísimas y pasibles de destitución cometidas por el personal de las Fuerzas que integran el Sistema Provincial de Seguridad Pública y Ciudadana de la Provincia de Córdoba, y
- b) Elaborar y proponer lineamientos de prevención, formación y capacitación que tengan vinculación con el régimen disciplinario.

ARTÍCULO 15.- Deber de informar. Cuando en el marco de un proceso penal se encuentre involucrado algún miembro de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana, el Ministerio Público o el organismo jurisdiccional interviniente debe informar de oficio o a requerimiento de la Dirección General de Control e Investigación de las Fuerzas de Seguridad toda la prueba o evidencia pertinente y útil para la investigación disciplinaria, siempre que no comprometa el éxito de la investigación penal.

Cuando en el marco de una investigación disciplinaria se advierta la supuesta comisión de un hecho delictivo o contravencional, la Dirección General de Control e Investigación de las Fuerzas de

Seguridad debe informar y poner a disposición de la autoridad competente toda la evidencia.

Sección Segunda

Dirección General de Control e Investigación de la Fuerzas de Seguridad

ARTÍCULO 16.- Requisitos. Para ser Director General de Control e Investigación de las Fuerzas de Seguridad se requiere contar con título de abogado con no menos de ocho (8) años de antigüedad, amplia experiencia en la materia en los términos y condiciones que fije la reglamentación y no tener antecedentes penales.

El cargo de Director General implica dedicación exclusiva e incompatibilidad absoluta con el ejercicio privado de la profesión y con toda otra actividad profesional, comercial, laboral o política, con excepción de la actividad docente o de investigación científica.

No resulta incompatible la participación en sociedades comerciales en tanto no forme parte de los órganos de dirección y administración.

ARTÍCULO 17.- Funciones. El Director General de Control e Investigación de las Fuerzas de Seguridad tiene, entre otras, las siguientes funciones:

a) Garantizar la correcta aplicación de las leyes, disposiciones y reglamentos en todas las actividades del organismo a su cargo;

b) Planificar, organizar e impartir los criterios y directivas de actuación en todo lo pertinente al funcionamiento del organismo;

c) Asumir la investigación cuando lo considere necesario y formular, en estos casos, los requerimientos ante el Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad;

d) Analizar y aprobar las propuestas de estrategias institucionales o recomendaciones elaboradas por las Direcciones que componen el organismo y evaluar el desempeño de las mismas;

e) Contribuir con los Ministerios de Seguridad, de Justicia y Derechos Humanos y con el Ministerio Público elaborando recomendaciones relativas al comportamiento del personal de las Fuerzas que integran el Sistema de Seguridad Pública y Ciudadana;

f) Requerir la colaboración de organismos públicos o privados para la obtención de evidencia en los procedimientos administrativos disciplinarios en los que intervenga;

g) Celebrar convenios con instituciones públicas o privadas, internacionales, nacionales, provinciales o municipales con la finalidad de fortalecer el funcionamiento del Sistema de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana;

h) Elaborar el informe anual de gestión, e

i) Establecer e implementar junto a los Ministerios de Seguridad, de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio Público mesas de diálogo con organizaciones de la sociedad civil y universidades públicas o privadas con la finalidad de recibir sugerencias e intercambiar ideas y reflexiones orientadas al mejor progreso de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana.

ARTÍCULO 18.- Informe de gestión. La Dirección General de Control e Investigación de las Fuerzas de Seguridad debe remitir anualmente a la Legislatura, al Ministerio de Seguridad, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y al Ministerio Público el informe de gestión sobre las actividades realizadas.

Sección Tercera Dirección de Investigaciones

ARTÍCULO 19.- Requisitos. Para ser Director de la Dirección de Investigaciones se requiere contar con título de abogado con no menos de cuatro

(4) años de antigüedad, experiencia en la materia en los términos que fije la reglamentación y no tener antecedentes penales.

ARTÍCULO 20.- Funciones. La Dirección de Investigaciones tiene, entre otras, las siguientes funciones:

a) Receptar denuncias de la ciudadanía por la supuesta comisión de faltas disciplinarias;

b) Iniciar investigaciones de oficio o por remisión de antecedentes de dependencias del Ministerio Público, del Poder Judicial o de otros organismos públicos en los casos de supuesta comisión de faltas graves, gravísimas o pasibles de destitución;

c) Mantener informado al Director General de las denuncias que ingresen a la Dirección a su cargo;

d) Identificar las conductas del personal de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana que pudieran configurar faltas disciplinarias graves, gravísimas o pasibles de destitución;

e) Investigar los hechos, recabar evidencias, individualizar a los responsables de las conductas y formular la imputación de las faltas cuando se estime que se hubieren cometido;

f) Solicitar al Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad las medidas cautelares necesarias para asegurar la realización del procedimiento;

g) Ordenar el archivo de las actuaciones cuando estime que corresponde, en el marco de una investigación administrativa;

h) Requerir al Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad el sobreseimiento cuando resulte procedente, e

i) Requerir la aplicación de penas principales, sustitutivas o accesorias al Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad.

Sección Cuarta

Dirección de Prevención, Evaluación y Seguimiento

ARTÍCULO 21.- Requisitos. Para ser Director de Prevención, Evaluación y Seguimiento se requiere contar con título de grado en derecho, ciencias sociales o humanidades con no menos de cuatro (4) años de antigüedad, experiencia en la materia en los términos y condiciones que fije la reglamentación y no tener antecedentes penales.

ARTÍCULO 22.- Funciones. La Dirección de Prevención, Evaluación y Seguimiento tiene, entre otras, las siguientes funciones:

a) Realizar investigaciones genéricas conforme a las denuncias o a la información que ingresa a la Dirección de Investigaciones en donde no exista autor determinado;

b) Ordenar el archivo de las actuaciones cuando el hecho no configure falta disciplinaria;

c) Realizar, previa autorización del Director General, inspecciones en dependencias o lugares en los que presten servicios las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana para recabar información sobre el personal, los recursos materiales y logísticos y la documentación vinculada con los procesos de trabajo, cuando exista denuncia o sospecha fundada sobre la posible comisión de una falta disciplinaria;

d) Dirigir los procedimientos administrativos y proponer acciones, mecanismos y procesos de trabajo que permitan mejorar el desempeño de la Dirección General de Control e Investigación de las Fuerzas de Seguridad;

e) Desarrollar, implementar y gestionar los registros establecidos en la normativa vigente y todos aquellos que disponga el Director General del organismo, y

f) Acceder, a los fines del cumplimiento de sus funciones, a las bases de datos informáticas de la Provincia conforme lo regule la reglamentación.

ARTÍCULO 23.- Declaración jurada patrimonial. El personal de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana debe presentar anualmente ante la Dirección General de Control e Investigación, en los términos y condiciones que fije la reglamentación, una declaración jurada patrimonial según lo establecido en la Ley Nº 8198, sobre sus bienes y las modificaciones que se produzcan en su situación patrimonial, en la de su cónyuge, pareja estable o conviviente, ascendientes o descendientes a cargo.

Las declaraciones juradas son remitidas para su protocolización a la Escribanía General de Gobierno, sin perjuicio del registro y seguimiento que de las mismas realice la Dirección General de Control e Investigación de las Fuerzas de Seguridad.

La Dirección General de Control e Investigación tiene la facultad de requerir informes a los Registros y demás organismos públicos o privados relacionados a las investigaciones que lleve a cabo.

Asimismo, puede requerir, por sí o a través de las vías legalmente establecidas, según corresponda, información patrimonial, económica o financiera de los agentes bajo investigación o de personas vinculadas a ellos.

ARTÍCULO 24.- Registros. La Dirección de Prevención, Evaluación y Seguimiento debe crear, gestionar y mantener actualizados los siguientes registros:

a) Registro Único de Faltas;

b) Registro de Disparos de Arma de Fuego realizados por el personal de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana;

c) Registro de Casos de Violencia Institucional y de Género;

d) Registro de Discriminación y Corrupción, y

e) Demás registros que disponga la Dirección General de Control e Investigación de las Fuerzas de Seguridad.

Asimismo, la Dirección de Prevención, Evaluación y Seguimiento tiene facultades para acceder, supervisar y auditar los registros de armas disponibles en las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana.

Capítulo 4

Asesoría Letrada Disciplinaria de las Fuerzas de Seguridad

ARTÍCULO 25.- Composición. Los integrantes de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana contarán con una Asesoría Letrada Disciplinaria que brindará asistencia técnica gratuita en el marco del régimen disciplinario.

Está a cargo de un Asesor Letrado Disciplinario propuesto por cada una de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana, designados por el Poder Ejecutivo Provincial a propuesta de sus respectivos Jefes, y se integrará por un cuerpo letrado de abogados organizados de acuerdo se establezca reglamentariamente.

ARTÍCULO 26.- Requisitos. Para ser Asesor Letrado Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad se requiere contar con título de abogado con no menos de ocho (8) años de antigüedad, experiencia en la materia en los términos y condiciones que fije la reglamentación y no tener antecedentes penales.

El cargo de Asesor Letrado Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad es incompatible con el ejercicio privado de la profesión y con toda otra actividad profesional, comercial, laboral o política, con excepción de la actividad docente o de investigación científica.

No resulta incompatible la participación en sociedades comerciales en tanto no forme parte de los órganos de dirección y administración.

ARTÍCULO 27.- Funciones. La Asesoría Letrada Disciplinaria de las Fuerzas de Seguridad tiene la función de organizar y coordinar el servicio de defensa técnica en los procedimientos disciplinarios en los que sea obligatoria según la reglamentación, sin perjuicio del derecho de toda persona investigada a designar un letrado de su elección.

Además, tiene a su cargo el control deontológico de las defensas técnicas disciplinarias.

ARTÍCULO 28.- Informe de gestión. La Asesoría Letrada Disciplinaria de las Fuerzas de Seguridad debe remitir anualmente a la Legislatura, al Ministerio de Seguridad, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y al Ministerio Público el informe de gestión sobre las actividades realizadas.

TÍTULO SEGUNDO RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Capítulo 1 Disposiciones Generales

Sección Primera

Principios de Actuación, Deberes y Reglas Funcionales

ARTÍCULO 29.- Principios esenciales de actuación. En el desempeño de sus funciones el personal de las fuerzas que integran el Sistema Provincial de Seguridad Pública y Ciudadana debe actuar conforme a las siguientes reglas:

a) Legalidad: adecuar en todo momento sus conductas y prácticas a las normas constitucionales, a los tratados internacionales en materia de derechos humanos y a la legislación, reglamentos y protocolos vigentes;

b) Oportunidad: evitar todo tipo de actuación extrema cuando no medie una situación objetiva de riesgo o peligro capaz de vulnerar la vida, la libertad u otros derechos fundamentales de las personas, tal como se determina en la presente Ley, reglamentos y protocolos vigentes o que en su consecuencia se dicten;

c) Gradualidad: priorizar las tareas y el proceder preventivo y disuasivo antes que el uso efectivo y reactivo de la fuerza, procurando siempre y, ante todo, preservar la vida y la libertad de las personas en cumplimiento de lo que prevén los tratados internacionales, la Constitución Nacional y Provincial, la presente Ley y los reglamentos y protocolos vigentes al respecto, y

d) Proporcionalidad: utilizar los medios y modalidades de acción conforme lo exija, aconseje o amerite la situación objetiva de riesgo o peligro existente, evitando todo tipo de actuación que resulte excesiva, arbitraria o discriminatoria o que entrañe violencia física o psicológica contra las personas, de conformidad a lo dispuesto en las normativas vigentes.

ARTÍCULO 30.- Deberes funcionales. En función del cumplimiento de los principios esenciales de actuación establecidos en el artículo 29 de esta Ley, el personal de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana debe:

a) Actuar con responsabilidad y respeto hacia la comunidad y las personas, procurando resguardar, en cualquier circunstancia, la integridad física, la dignidad y los derechos humanos;

b) No invocar falazmente una orden superior, circunstancias especiales o situaciones de emergencia para justificar una actuación contraria a la Constitución, a los Tratados de Derechos Humanos, a las leyes y demás normas que establecen sus deberes y obligaciones;

c) Garantizar la plena protección de la integridad física, psíquica y moral de las personas bajo su tutela o custodia;

d) No tolerar ningún acto de corrupción, persiga o no fines lucrativos;

e) Impedir el abuso de autoridad o el exceso en el desempeño de sus funciones y labores;

f) Impedir la violación de normas constitucionales, legales y reglamentarias durante el accionar de la fuerza que integra o el de otras fuerzas, organismos o agencias con las que desarrollen labores conjuntas o combinadas;

g) Impedir o denunciar cualquier hecho de corrupción o conducta abusiva desplegada por personas humanas o jurídicas, públicas o privadas, con las que se relacione o vincule;

h) Mantener en reserva toda información de carácter confidencial a la que tuviere acceso o tomare conocimiento en razón de su actividad laboral, cargo o jerarquía, especialmente en todo aquello que pueda afectar el honor, la vida y los intereses privados de las personas, salvo causa debidamente justificada;

i) Utilizar la fuerza como último recurso. El accionar funcional no debe implicar el uso indebido o excesivo de la fuerza, el abuso verbal o la mera descortesía hacia las personas. Las acciones o medios que puedan menoscabar la integridad o los derechos de las personas deben utilizarse en forma gradual, evitando causar un mal mayor sobre la persona, sobre sus bienes o sobre terceros;

j) Recurrir al uso de armas de fuego solo en casos de legítima defensa o en defensa de

terceros o estado de necesidad, procurando reducir eventuales daños y lesiones;

k) Anteponer la preservación de la vida y la integridad física de las personas al eventual éxito de la actuación;

l) Identificarse y anunciarse cuando las circunstancias lo permiten, antes de hacer uso de la fuerza y del arma de fuego;

m) Intervenir para proteger las libertades y derechos de las personas;

n) Actuar en el cumplimiento de sus funciones con neutralidad e imparcialidad, perspectiva de género y sin discriminación;

ñ) Cumplir las medidas de control patrimonial establecidas por la Dirección General de Control e Investigación de las Fuerzas de Seguridad;

o) Cumplir con la finalidad del Régimen Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana;

p) Cumplir los protocolos de actuación que se establezcan, y

q) Adecuar su actuación a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, así como a los tratados internacionales de derechos humanos defendiendo el orden constitucional conforme lo dispuesto en el artículo 36 de la Constitución Nacional y en el artículo 17 de la Constitución Provincial.

ARTÍCULO 31.- Eximición del deber de obedecer. El personal de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana no está obligado a obedecer cuando:

a) La orden impartida sea ilegal o contraria a los derechos humanos;

b) Su ejecución constituya un delito, o

c) La orden provenga de autoridades no constituidas de acuerdo a los principios y normas constitucionales, o en infracción a las disposiciones legales o reglamentarias de aplicación.

Si el contenido de la orden implicase la comisión de una falta disciplinaria leve o media, el personal subordinado debe formular la objeción siempre que la urgencia de la situación lo permita; de lo contrario, posteriormente, debe avisar a la autoridad competente.

ARTÍCULO 32.- Cese del deber de intervención. El deber del personal de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana de intervenir para evitar cualquier tipo de situaciones riesgosas o de conflictos que pudieran resultar constitutivos de delitos, contravenciones o faltas rige durante su horario de servicio ordinario o complementario.

Cuando el personal se encuentre fuera del horario de servicio y tome conocimiento de situaciones que requieran intervención directa debe dar aviso al personal de la Fuerza en servicio.

El personal que se encuentre en esta situación no está obligado a identificarse como tal ni a intervenir, pero si lo hiciera, actuará en calidad de funcionario público del Estado y se registrará según las facultades y obligaciones que como miembro de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana le corresponden.

ARTÍCULO 33.- Prohibición de medidas de acción directa. Se prohíbe expresamente al personal de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana adoptar medidas de acción directa de cualquier naturaleza que impliquen:

a) Ocupar lugares de trabajo o hacer uso indebido de recursos del Estado a los fines de protestar o reclamar;

b) Negarse a cumplir sus funciones de modo que ello importe dejar de prestar el servicio esencial a su cargo, en forma total o parcial;

c) Cumplir sus funciones bajo cualquier modalidad que implique la disminución, paralización o interrupción total o parcial de la prestación del servicio, y

d) Movilizarse, manifestar o peticionar, en estos dos últimos casos en forma pública, desmedida, insubordinada o violenta.

e)

Sección Segunda

Parte General del Régimen Disciplinario

ARTÍCULO 34.- Finalidad. El régimen disciplinario de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana tiene por finalidad garantizar la observancia de los principios esenciales de actuación en el desempeño de su actividad laboral y cumplir con los deberes funcionales conforme lo determinan la Constitución Nacional, los tratados internacionales, la Constitución de la Provincia de Córdoba, las leyes, reglamentos y protocolos como postulados jurídicos que procuran garantizar el marco ético de actuación de las instituciones y el respeto incondicional a los derechos humanos.

ARTÍCULO 35.- Contenidos. El régimen disciplinario contiene el conjunto de faltas disciplinarias que puede cometer el personal de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana, las sanciones administrativas correspondientes a dichas faltas y las facultades disciplinarias de las instancias institucionales encargadas de investigarlas y resolverlas, garantizando los derechos de defensa y de debido proceso.

ARTÍCULO 36.- Protección a las víctimas. Cuando de la comisión de una falta disciplinaria resulten afectadas una o más personas, se debe propender a su protección.

En estos supuestos, la víctima o sus herederos forzosos tienen derecho a ser informados acerca del estado de la investigación, así como de las resoluciones dictadas y de los servicios existentes para la asistencia jurídica, social y psicológica si fueran necesarios.

ARTÍCULO 37.- Regla de interpretación. Las normas de esta Ley se interpretarán de conformidad con los principios constitucionales y del derecho internacional consagrados en tratados de igual jerarquía, con especial énfasis en los derechos humanos.

ARTÍCULO 38.- Participación. Cuando en la comisión de la falta interviniere más de un agente, todos quedan sometidos a la misma escala sancionatoria, sin perjuicio que la sanción aplicada se gradúe con arreglo a la respectiva participación en el hecho.

ARTÍCULO 39.- Determinación de la sanción. A los fines de determinar la cuantificación de la sanción se debe tener en cuenta:

- a) Los medios empleados para ejecutar la falta;
- b) La extensión del daño producido;
- c) El peligro ocasionado;
- d) Las circunstancias particulares de la persona infractora tales como la jerarquía, la edad, la aptitud psicológica, la educación y la conducta precedente, la inexperiencia motivada en la antigüedad y los méritos acreditados durante el servicio, y
- e) La reiteración de faltas, entendiéndose por tal la existencia previa de una o más sanciones disciplinarias de cualquier naturaleza.

ARTÍCULO 40.- Agravantes. El máximo de la sanción divisible prevista para la falta se duplicará cuando la misma:

- a) Fuera cometida con el concurso de tres (3) o más personas pertenecientes a las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana;
- b) Fuera cometida por un jefe de dependencia en el ejercicio de sus funciones; Configure una situación de violencia institucional;
- c) Configure una situación de violencia de género;
- d) Configure una situación de discriminación, o
- e) Configure un hecho de corrupción.

ARTÍCULO 41.- Definiciones. A los fines de esta Ley se considera:

a) Violencia institucional: a toda acción u omisión que afecte la vida, la libertad, la dignidad, la integridad física, psicológica o sexual de una persona o de grupos de personas cuando dichos padecimientos sean infligidos por cualquier integrante de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana en el ejercicio de sus funciones;

b) Violencia de género: a toda conducta, acción u omisión que, de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, afecte la vida, la libertad, la dignidad, la integridad física, psicológica, sexual o económica de mujeres o personas de género u orientación sexual no hegemónicas, basada en una relación desigual de poder o motivadas por actitudes de odio hacia la orientación sexual, la expresión o la identidad de género;

c) Corrupción: a toda acción u omisión ilegal realizada por parte de un integrante de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana en uso de su cargo o función con el objetivo de obtener beneficios para sí o para terceras personas, y

d) Discriminación: a toda acción u omisión en el ejercicio de sus funciones que implique un trato diferencial y perjudicial a otra persona basado en criterios de nacionalidad, expresión o identidad de género, origen étnico, religión, ideología, edad, sexo, orientación sexual, caracteres físicos, discapacidad o condiciones sociales, laborales o económicas.

ARTÍCULO 42.- Concurso ideal y real de faltas. Cuando una conducta se encuadrare total o parcialmente bajo más de una falta se aplicará solamente la que fijare la sanción más grave.

Quando concurrieren varios hechos independientes reprimidos con la misma especie de sanción divisible se debe imponer la sanción resultante de su suma, la que no puede exceder el máximo de la especie de sanción de que se trate.

Sección Tercera Sanciones

ARTÍCULO 43.- Sanciones principales. Las sanciones principales son:

- a) Apercibimiento;
- b) Suspensión;
- c) Cesantía, y
- d) Destitución.

ARTÍCULO 44.- Apercibimiento. El apercibimiento es el llamado de atención y la advertencia personalizada a un miembro de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana. La resolución debe indicar cuál hubiera sido la forma correcta de actuar.

ARTÍCULO 45.- Suspensión. La suspensión de la actividad laboral comprende la privación temporal del ejercicio de las funciones a un miembro de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana, incluyendo las tareas de servicio adicional.

El personal sancionado con suspensión de actividad laboral no puede concurrir a su puesto de trabajo y ello conlleva la reducción proporcional del salario por el tiempo que dure la sanción disciplinaria.

Quando la sanción de suspensión sea dictada por la comisión de una falta leve o media el tiempo de duración de la suspensión de actividad laboral no afectará el cómputo de la antigüedad en el servicio y en el grado.

Cuando la sanción de suspensión sea dictada por la comisión de una falta grave o gravísima el tiempo de duración de la suspensión de la actividad laboral afectará el cómputo de la antigüedad en el servicio y en el grado.

En ningún caso la sanción de suspensión puede superar los cientos veinte (120) días corridos.

ARTÍCULO 46.- Cesantía. La cesantía implica la pérdida de la actividad laboral, de los derechos y deberes inherentes al mismo y la inhabilitación perpetua para el reingreso a cualquiera de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana.

Las resoluciones firmes de cesantía deben publicarse en la página web de cada una de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana y son de libre acceso.

ARTÍCULO 47.- Destitución. La destitución implica la expulsión de la actividad laboral y la inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio, sin excepción, de todo empleo o función públicas y como prestador o personal de los servicios de seguridad privada en la jurisdicción provincial.

Las resoluciones firmes de destitución y la inhabilitación que conlleva deben publicarse en la página web de cada una de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana y son de libre acceso.

ARTÍCULO 48.- Sanciones sustitutivas y accesorias. Las sanciones principales de apercibimiento y de suspensión pueden ser reemplazadas por sanciones sustitutivas o complementadas por sanciones accesorias. En ambos casos deben ser cumplidas fuera del horario en que el personal presta servicios.

La imposición de sanciones sustitutivas no genera antecedentes negativos computables a los fines de establecer el orden de mérito para los ascensos.

Las sanciones sustitutivas o accesorias son:

- a) Tratamientos terapéuticos;
- b) Deberes especiales de conducta;
- c) Cursos educativos;
- d) Reparación del daño, y
- e) Tareas comunitarias.

ARTÍCULO 49.- Tratamiento terapéutico. Consiste en el cumplimiento de un tratamiento terapéutico fundado en las condiciones personales del sancionado y en su conveniencia. Se debe contar previamente con un informe médico o psicológico y con la aceptación expresa de la persona de que se trate.

El tratamiento puede ser cumplido en instituciones públicas o privadas.

En ningún caso puede superar los cientos veinte (120) días corridos sin perjuicio de la continuidad del tratamiento de manera voluntaria por el personal de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana de que se trate.

ARTÍCULO 50.- Deberes especiales de conducta. Los deberes especiales de conducta consisten en la limitación o restricción impuesta para asistir, ingresar o permanecer en un lugar o de acercarse a menos de determinada distancia de lugares o personas por el tiempo que se determine. En ningún caso puede superar los cientos veinte (120) días corridos desde que la sanción quede firme.

ARTÍCULO 51.- Cursos educativos. Los cursos educativos consisten en que el personal sancionado realice, dentro de los treinta (30) días corridos desde que la sanción quede firme, un curso de capacitación cuya temática y duración debe estar vinculada y ser proporcional a la falta cometida.

En ningún caso puede superar los cientos veinte (120) días corridos, sin perjuicio de la continuidad del curso de manera voluntaria por parte del personal de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana de que se trate.

ARTÍCULO 52.- Reparación del daño causado. Consiste en que el autor sancionado repare económicamente el daño causado o procure la restitución de la situación al estado anterior al hecho, en la medida que sea posible.

ARTÍCULO 53.- Tareas comunitarias. Las tareas comunitarias se cumplirán en dependencias oficiales -nacionales, provinciales, municipales o comunales- u otras instituciones de bien público estatales o privadas, y están orientadas a la conservación, la mejora o la ampliación de establecimientos asistenciales, sociales, de enseñanza o espacios públicos.

La resolución sancionatoria debe indicar las tareas comunitarias y su término.

En ningún caso su ejecución puede superar los cientos veinte (120) días corridos.

Sección Cuarta Acciones

ARTÍCULO 54.- Obligación de actuar e informar. Deben iniciarse de oficio todos los procedimientos por faltas disciplinarias. El personal de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana con facultades disciplinarias tiene la obligación, de conformidad al procedimiento que al efecto se establezca, de aplicar las sanciones que correspondan ante la constatación de una falta leve o media.

El personal en actividad que carezca de dichas facultades, al igual que el personal en situación de retiro, debe denunciarlo ante la autoridad competente.

ARTÍCULO 55.- Prohibición. Las sanciones firmes aplicadas por faltas disciplinarias no pueden, en ningún caso, ser dejadas sin efecto o disminuidas.

ARTÍCULO 56.- Extinción de la acción disciplinaria. La acción disciplinaria se extingue:

- a) Por muerte de la persona imputada, o
- b) Por prescripción.

ARTÍCULO 57.- Prescripción de la acción disciplinaria. La acción para perseguir infracciones prescribe:

- a) A los cinco (5) años en los casos de faltas pasibles de destitución;
- b) A los tres (3) años en los casos de faltas gravísimas;
- c) A los dos (2) años en los casos de faltas graves;
- d) Al año (1) cuando se trate de faltas medias, y
- e) A los seis (6) meses cuando se trate de faltas leves.

La prescripción de la acción comienza a correr desde la primera hora del día siguiente al que se cometió la falta.

ARTÍCULO 58.- Cómputo. La prescripción de la acción corre, se suspende o se interrumpe separadamente para cada falta y para cada uno de sus partícipes.

ARTÍCULO 59.- Interrupción de la prescripción. La prescripción de la acción se interrumpe por:

- a) Comisión de una nueva falta, o
- b) La notificación fehaciente al agente de la existencia de un procedimiento disciplinario en su contra.

ARTÍCULO 60.- Suspensión de la prescripción. La prescripción de la acción se suspende cuando la investigación administrativa se haya iniciado con motivo de la presunta comisión de un delito por parte del personal de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana, y se haya ordenado por resolución fundada la suspensión del procedimiento disciplinario por carecer de elementos suficientes para proseguir la investigación. En caso de reanudarse la investigación administrativa, la prescripción continuará su curso.

Capítulo 2 Faltas

ARTÍCULO 61.- Clasificación. Las faltas son leves, medias, graves, gravísimas y pasibles de destitución. Las faltas graves, gravísimas y pasibles de destitución son las establecidas en la presente Ley, mientras que las faltas leves y medias serán establecidas por vía reglamentaria.

ARTÍCULO 62.- Correlación entre falta y sanción. Las faltas tienen las siguientes sanciones:

- a) Las leves con apercibimiento o suspensión de hasta diez (10) días corridos;
- b) Las medias con apercibimiento o suspensión de once (11) y hasta veinte (20) días corridos, y
- c) Las graves, gravísimas y pasibles de destitución con la sanción expresamente prevista en la presente Ley.

ARTÍCULO 63.- Delitos culposos. La comisión de delitos culposos ajenos al servicio no puede constituir falta disciplinaria ni es motivo de procedimientos disciplinarios.

ARTÍCULO 64.- Faltas graves. Las faltas graves son sancionadas con suspensión de veintidós (21) y hasta sesenta (60) días corridos y son las que a continuación se detallan:

- 1) Conducir un vehículo perteneciente a las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana con inobservancia de las normas de tránsito vigentes con suficiente entidad para crear una situación de peligro para la vida o la integridad física de las personas, salvo excepciones extremas del servicio;
- 2) Dañar o extraviar, por negligencia, imprudencia o inobservancia de los reglamentos y deberes a su cargo, bienes, valores u objetos en el ejercicio de sus funciones que tengan la entidad y relevancia para producir una afectación patrimonial;
- 3) Portar objetos peligrosos para la seguridad del establecimiento o dependencia en los que haya personas privadas de libertad;
- 4) Utilizar todo o parte del uniforme oficial en tareas o actividades incompatibles con la función;
- 5) Tener una actitud desafiante o agresiva hacia sus superiores, iguales o subalternos o hacia el personal de la Dirección General de Control e Investigación, de la Asesoría Letrada Disciplinaria de las Fuerzas de Seguridad o del Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad;
- 6) Impartir directivas contrarias a lo dispuesto por los protocolos de actuación u órdenes de servicio sin razón justificada y siempre que de éstas no se deriven daños;
- 7) Incumplir lo dispuesto por los protocolos de actuación u órdenes de servicio sin razón justificada y siempre que del incumplimiento no se deriven daños;
- 8) Utilizar influencias para definir destinos laborales, traslados o ascensos, siempre que no se configure alguna falta más grave;

- 9)** Exigir o encomendar tareas ajenas al servicio al personal a su cargo;
- 10)** Formular por cualquier medio afirmaciones o comentarios falsos que deshonren o desacrediten a otro integrante de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana o agraven a la misma Fuerza;
- 11)** Tratar, por cualquier medio, de manera incorrecta o descortés a las personas, a otros integrantes de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana o a quienes se encuentren privados de su libertad;
- 12)** Prohibir, impedir, obstaculizar o restringir ilegítimamente el registro o filmación de la actuación del personal de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana en la vía pública, lugares de acceso público o lugares privados en los que la persona que filma o registra tenga derecho a permanecer;
- 13)** Omitir la obligación de requisar a personas privadas de su libertad, hacerlo en lugares no destinados al efecto o sin observar la normativa vigente;
- 14)** Demorar, sin causa justificada, el traslado de una persona privada de libertad al lugar que haya dispuesto la autoridad competente;
- 15)** Permitir el acceso de personas detenidas a oficinas o lugares prohibidos, sin orden expresa de la autoridad pertinente;
- 16)** Permitir la visita a personas privadas de libertad que no tengan la debida autorización;
- 17)** Incumplir a la citación de comparencia formulada por la Dirección General de Control e Investigación, por el Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad, por la Asesoría Letrada Disciplinaria de las Fuerzas de Seguridad o por un organismo judicial, sin causa debidamente justificada;
- 18)** Negarse a ser requisado cuando se encuentre obligado en virtud de la normativa vigente;
- 19)** Demorar injustificadamente los trámites de licitaciones, concursos de precios, compras y pagos en general, transferencias, devoluciones de fondos, pedidos de imputaciones y adquisiciones, o rendir cuentas fuera de los plazos exigidos por la normativa vigente;
- 20)** Brindar o conceder reportajes o declaraciones públicas referidas a aspectos funcionales o de carácter político, sin contar con la expresa autorización de la superioridad;
- 21)** Asistir al servicio de manera impuntual por más de diez (10) y hasta quince (15) veces en el año;
- 22)** No asistir al servicio, de manera injustificada, por más de ocho (8) y hasta doce (12) veces en el año;
- 23)** Abandonar el servicio sin causa justificada por menos de cuarenta y ocho (48) horas;
- 24)** Recomendar servicios de terceros que impliquen un conflicto de intereses, persigan o no fines lucrativos, y
- 25)** Presentar reclamos o peticiones individuales o colectivas en términos falsos, maliciosos, temerarios o irrespetuosos.
- ARTÍCULO 65.- Faltas gravísimas.** Serán sancionadas con suspensión de sesenta y un (61) y hasta ciento veinte (120) días corridos o cesantía las faltas gravísimas que a continuación se detallan:
- 1)** Dañar o extraviar, a sabiendas, bienes, valores u objetos en el ejercicio de sus funciones que tengan la entidad y relevancia para producir una afectación patrimonial;
- 2)** Prestar, ceder o vender distintivos, prendas del uniforme, equipos u otros bienes de la Institución a personas ajenas a las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana;
- 3)** Perder o ser desposeído con o sin violencia del armamento provisto por incumplimiento de las normas que reglan su portación;
- 4)** Hacer uso o disponer de bienes, valores u objetos secuestrados sin la autorización correspondiente;
- 5)** Ejercer las atribuciones del cargo con parcialidad manifiesta o abusando de su función;
- 6)** Requerir los servicios del personal subalterno en horario de servicio o utilizar recursos materiales de la Institución en provecho propio o de un tercero;
- 7)** Incumplir lo dispuesto por los protocolos de actuación u órdenes de servicio sin razón justificada cuando del incumplimiento se deriven daños;
- 8)** Impartir directivas contrarias a lo dispuesto por los protocolos de actuación u órdenes de servicio sin razón justificada y cuando de éstas se deriven daños;
- 9)** Transmitir información inexacta a otros integrantes de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana de modo tal que cause perjuicio;
- 10)** Formular falsa imputación de un delito o contravención a otro integrante de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana;
- 11)** Intimidar, discriminar, hostigar, acosar o maltratar física, psíquica o económicamente a otro integrante de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana;
- 12)** Discriminar por razones de nacionalidad, expresión o identidad de género, origen

étnico, religión, ideología, edad, sexo, orientación sexual, caracteres físicos, discapacidad o condiciones sociales, laborales o económicas a otra persona en el ejercicio de sus funciones;

13) Cometer, provocar o instigar desobediencia ostensiblemente;

14) Ofrecer destinos, traslados o ascensos o cualquier beneficio laboral a cambio de dinero, dádiva o cualquier otro favor;

15) Incumplir, sin causa justificada, una medida cautelar o una sanción principal, sustitutiva o accesoria impuesta por el Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad habiendo sido debidamente notificado;

16) Solicitar o aceptar dádivas o dinero por servicios prestados en el desempeño de sus funciones o a consecuencia de ellos;

17) Afirmar una falsedad, negar o callar la verdad en todo o en parte respecto de declaraciones, informes, traducciones o interpretaciones que se formulen como testigos, peritos o intérpretes en actuaciones administrativas o judiciales;

18) Negarse o evadir la obligación de prestar declaración testimonial o patrimonial, emitir informes o aportar pruebas en causas que haya conocido en ejercicio de sus funciones o cuando sean prestadas con reticencia, falsedad u ocultamiento perjudicial para la investigación;

19) Consumir bebidas alcohólicas, estupefacientes o sustancias prohibidas;

20) Utilizar información obtenida en razón de su servicio o función para brindar una actividad profesional ajena a la institución;

21) Asistir al servicio de manera impuntual por más de quince

(15) veces en el año;

22) No asistir al servicio, de manera injustificada, por más de doce (12) veces en el año;

23) Abandonar el servicio sin causa justificada por más de cuarenta y ocho (48) horas;

24) Incumplir con el servicio generando una grave afectación a la vida, los bienes o la salud de las personas;

25) Interrogar a personas privadas de libertad, sospechadas, acusadas o imputadas de un delito o contravención, sin las formalidades establecidas en las normas procesales vigentes;

26) Demorar o incumplir el otorgamiento de la libertad de una persona detenida, que hubiere dispuesto la autoridad competente;

27) Omitir informar de manera inmediata a la superioridad o a quien corresponda, sobre la enfermedad, lesiones o muerte de una persona privada de la libertad bajo su custodia;

28) No procurar la asistencia médica inmediata a una persona que lo requiere en el ejercicio de sus funciones;

29) Ordenar, abusando del cargo, la realización de servicios particulares a personas privadas de libertad;

30) Facilitar la fuga o evasión de alguna persona legalmente privada de su libertad;

31) Utilizar ilegalmente la fuerza y el armamento para someter a personas; Intervenir o de cualquier forma participar en la gestión u organización de partidos políticos mientras permanezca en actividad;

32) Integrar o participar en cooperativas, mutuales, asociaciones o cualquier otra organización destinada a recaudar fondos provenientes de la ciudadanía bajo pretexto de colaboración con las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana;

33) Publicar por cualquier medio mensajes discriminatorios, antidemocráticos o que inciten al odio o a la violencia o que hagan apología de un delito o de una persona condenada por delito, y

34) Cometer una acción que implique delito doloso cuya pena máxima conminada en abstracto sea igual o inferior a los tres (3) años de prisión o reclusión.

ARTÍCULO 66.- Sanciones accesorias. Cuando la sanción fuere de suspensión por faltas establecidas en los incisos 1), 2), 6), 7), 10) y 11) del artículo 64 y en los incisos 1), 2), 3), 4), 5), 7), 8), 9), 11), 12), 19), 31) y 34) del artículo 65 -ambos de esta Ley-, el Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad puede, a requerimiento de la Dirección General de Control e Investigación de las Fuerzas de Seguridad y atendiendo a la naturaleza del hecho, imponer una sanción accesoria -de las previstas en el artículo 48 de esta norma- conjuntamente con la sanción principal.

ARTÍCULO 67.- Faltas pasibles de destitución. Serán sancionadas con destitución las faltas que a continuación se detallan:

1) No poder justificar la evolución patrimonial;

2) Efectuar un requerimiento de carácter sexual, para sí o para un tercero, aprovechándose de su función, de la vulnerabilidad de la víctima o de cualquier otra circunstancia o medio que anule o vulnere su voluntad;

3) Prestar, ceder o vender armamento o equipos de comunicación a personas ajenas a las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana;

4) Cometer una acción que implique delito doloso cuya pena máxima conminada en abstracto sea superior a los tres (3) años de prisión o reclusión o el delito fuera cometido en el ejercicio de sus funciones;

5) Los integrantes de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana en actividad o en situación de retiro que en un número mayor de dos (2) realicen alguna de las siguientes conductas:

a) Ocupar lugares de trabajo o hacer uso indebido de recursos del Estado a los fines de protestar o reclamar;

b) Negarse a cumplir sus funciones de modo que ello importe dejar de prestar el servicio esencial a su cargo en forma parcial o total;

c) Cumplir sus funciones bajo cualquier modalidad que implique la disminución, paralización o interrupción total o parcial de la prestación del servicio;

d) Movilizarse, manifestar o peticionar, en estos dos últimos casos en forma pública, desmedida, insubordinada o violenta.

6) Los integrantes de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana en actividad o en situación de retiro que tuvieran conocimiento de alguna de las acciones enumeradas en el inciso 5) de este artículo realizadas por otros integrantes de la fuerza o por particulares y no lo denunciaron ante la autoridad competente en el término de veinticuatro (24) horas, y

7) Prestar servicio en estado de intoxicación por ingesta de alcohol, estupefacientes o cualquier sustancia prohibida.

ARTÍCULO 68.- Régimen disciplinario para personal retirado. El personal en situación de retiro no tiene facultades disciplinarias, pero sí la obligación de denunciar las faltas al régimen disciplinario de las que tenga conocimiento.

Cuando se encuentre prestando servicios de adicional o utilizando el uniforme, le será aplicable el mismo régimen disciplinario que al personal en actividad. En los demás casos le serán aplicables las faltas que fije la reglamentación.

Capítulo 3 Procedimiento Disciplinario

Sección Primera Disposiciones Generales

ARTÍCULO 69.- Principios y garantías. El procedimiento de sustanciación y aplicación de las sanciones al personal de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana por la comisión de faltas leves, medias, graves, gravísimas y pasibles de destitución será definido por la reglamentación de conformidad con las siguientes garantías:

a) Debido proceso: se debe garantizar a la persona imputada de cometer una falta los derechos a ser oída, a ofrecer y producir prueba y a obtener una resolución fundada en tiempo razonable por parte de la autoridad interviniente;

b) Derecho de defensa: toda persona investigada por la comisión de una falta disciplinaria tiene derecho a patrocinio letrado para ejercer su defensa material y técnica;

c) Derecho a no autoincriminarse: ninguna persona puede ser obligada a declarar contra sí misma. El ejercicio de este derecho no puede ser valorado como una admisión de los hechos o indicio de culpabilidad. Toda admisión de los hechos o confesión debe ser libre, bajo expreso consentimiento de la persona imputada y formulada en presencia de patrocinio letrado, bajo pena de nulidad;

d) Imparcialidad e independencia: la autoridad con potestad disciplinaria debe actuar con imparcialidad en sus decisiones e independencia de toda injerencia externa y de los demás integrantes del Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad;

e) Simplicidad, celeridad y modernización: los actos del procedimiento se registrarán por escrito, imágenes o sonidos u otro soporte tecnológico o digital equivalente, y

f) Concentración: siempre que sea posible y no se contraponga con el debido proceso, se procurará concentrar la actividad procedimental realizando de manera conjunta todos los actos que lo admitan.

ARTÍCULO 70.- Competencia. La investigación y sanción por faltas leves y medias es competencia de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana en los términos y alcances que determine la reglamentación de la presente Ley.

La investigación por las faltas graves, gravísimas y pasibles de destitución es potestad exclusiva de la Dirección General de Control e Investigación de las Fuerzas de Seguridad.

El dictado de las medidas cautelares, la aplicación de sanciones y la resolución de las impugnaciones por las faltas graves, gravísimas y pasibles de destitución es competencia del Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad.

ARTÍCULO 71.- Recusación y excusación. Los integrantes del Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad, así como el Director General y el Director de Investigaciones deben excusarse o pueden ser recusados, cuando existan motivos serios y razonables que afecten su imparcialidad. Toda recusación o excusación debe ser fundada.

No procede la recusación sin expresión de causa.

La recusación de los integrantes del Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad será resuelta por sus pares en plenario. La recusación del Director de Investigaciones será resuelta por el Director General de Control e Investigación de las Fuerzas de Seguridad y el de éste por el Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad.

Planteada la recusación, previo informe del recusado, ésta será resuelta sin sustanciación, dentro del término de tres (3) días hábiles.

La resolución es irrecurrible.

ARTÍCULO 72.- Registro de los actos del procedimiento. Cuando se utilicen registros de imágenes, sonidos u otros medios digitales o tecnológicos se debe reservar el original en condiciones que aseguren su inalterabilidad, conforme lo establezca la reglamentación.

ARTÍCULO 73.- Notificaciones electrónicas. En el primer llamado a personas investigadas o imputadas, letrados y testigos se les exigirá que constituyan domicilio electrónico, donde le serán remitidas las notificaciones, citaciones o emplazamientos vinculados con la sustanciación del proceso.

ARTÍCULO 74.- Independencia del régimen disciplinario. Excepciones. La sustanciación de los sumarios administrativos por hechos que puedan configurar delitos y la imposición de las sanciones disciplinarias pertinentes en el orden administrativo son independientes del proceso penal, con excepción de las siguientes situaciones:

a) Cuando se encuentre pendiente el proceso penal y el personal sumariado no pueda ser declarado exento de responsabilidad en sede administrativa;

b) Cuando la investigación disciplinaria no cuente con elementos suficientes para requerir la aplicación de una sanción o de una medida cautelar, el Director General de Control e Investigación de las Fuerzas de Seguridad debe ordenar, por resolución fundada, la suspensión del procedimiento disciplinario;

c) La absolución o sobreseimiento en sede penal fundada en la inexistencia del hecho o en la falta de participación de la persona imputada provocará la clausura del procedimiento disciplinario o la revocación de las sanciones impuestas por esos hechos, y

d) Si en el proceso penal hubiere recaído condena, el hecho y la participación de la persona imputada en el mismo deben darse por acreditados en sede administrativa y continuar con el curso del procedimiento.

ARTÍCULO 75.- Procedimiento para aplicación de faltas leves y medias. Las faltas disciplinarias leves y medias serán investigadas y sancionadas dentro del ámbito de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana. Cuando la sanción se encuentre firme la Fuerza de Seguridad Pública y Ciudadana correspondiente debe informar en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas a la Dirección General de Control e Investigación de las Fuerzas de Seguridad para su incorporación al Registro Único de Faltas.

ARTÍCULO 76.- Sanción sustitutiva. Procedimiento abreviado. La persona imputada por una falta disciplinaria que reconociere circunstanciada y llanamente su participación y responsabilidad, puede solicitar la aplicación de una sanción sustitutiva, proponiendo la forma de su cumplimiento.

En los casos de faltas graves la Dirección General de Control e Investigación de las Fuerzas de Seguridad, mediante resolución fundada en las características del hecho y en la conveniencia de la sanción sustitutiva, requerirá al Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad su aplicación.

El Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad debe resolver y controlar el cumplimiento de la sanción sustitutiva y, una vez cumplida la misma, dictará resolución cerrando el procedimiento.

Quedan excluidos del procedimiento abreviado de sanción sustitutiva los casos de faltas gravísimas y faltas pasibles de destitución.

ARTÍCULO 77.- Sanción sustitutiva. Incumplimiento. Si mediare inobservancia o incumplimiento de las condiciones, imposiciones o instrucciones que disponen las sanciones sustitutivas sin la debida justificación, el Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad puede revocar la sanción impuesta y aplicar hasta el máximo de la sanción de la falta por la cual se lo condenó, o resolver, cuando se considere necesario, la subsistencia de la sanción sustitutiva extendiendo el plazo hasta el máximo que determina la especie de la sanción.

En los casos de incumplimiento o inobservancia de sanción sustitutiva aplicada dentro del ámbito de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana, se procederá conforme lo establezca la reglamentación.

El agente que haya incumplido una sanción sustitutiva no puede acceder a esta posibilidad durante los próximos tres (3) años a contar desde la fecha de su incumplimiento.

ARTÍCULO 78.- Sanción accesoria. Control e incumplimiento. El Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad debe controlar el cumplimiento de la sanción accesoria impuesta.

Ante el incumplimiento de la misma, sin causa debidamente justificada, el Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad impondrá:

a) El máximo de la sanción de suspensión, si la principal hubiera sido de apercibimiento, y

b) El máximo de la sanción de suspensión o cesantía, si la principal hubiera sido de suspensión.

ARTÍCULO 79.- Requerimiento a Juzgados. La Dirección General de Control e Investigación de las Fuerzas de Seguridad puede solicitar a los Juzgados competentes las medidas de contenido jurisdiccional.

ARTÍCULO 80.- Casos de violencia institucional y discriminación. La Dirección General de Control e Investigación de las Fuerzas de Seguridad y el Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad deben remitir a la Secretaría de Derechos Humanos o al organismo que lo sustituyere en sus competencias, las actuaciones administrativas y las resoluciones de los casos que constituyan hechos de violencia institucional y discriminación para que se instrumenten los servicios de asistencia integral a las víctimas y familiares.

ARTÍCULO 81.- Casos de violencia de género. La Dirección General de Control e Investigación de las Fuerzas de Seguridad y el Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad deben remitir al Ministerio de la Mujer o al organismo que lo sustituyere en sus competencias, las actuaciones administrativas y las resoluciones de los casos que constituyan hechos de violencia de género para que se instrumenten los servicios de asistencia integral a las víctimas y familiares.

Sección Segunda Medidas Cautelares

ARTÍCULO 82.- Excepcionalidad y aplicación restrictiva. Las medidas cautelares son de carácter excepcional y se aplicarán restrictivamente en los casos y con los efectos que el decreto reglamentario establezca.

Durante la sustanciación del procedimiento para la determinación de la posible comisión de faltas graves, gravísimas y pasibles de destitución y solo a los fines de garantizar el normal desarrollo del proceso y el efectivo cumplimiento de lo que se resuelva, el Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad, de oficio o a requerimiento de la Dirección General de Control e Investigación de las Fuerzas de Seguridad, puede disponer medidas cautelares.

ARTÍCULO 83.- Medidas cautelares. Las medidas cautelares son:

- a) Suspensión preventiva;
- b) Retiro preventivo del armamento, y
- c) Pase a situación pasiva.

ARTÍCULO 84.- Cómputo y alcances. La reglamentación establecerá el cómputo para la equivalencia de las medidas cautelares con las sanciones en caso de recaer resolución condenatoria.

También establecerá la duración y el alcance de cada medida cautelar.

Sección Tercera

Impugnación

ARTÍCULO 85.- Vías impugnativas. Contra las resoluciones que impongan medidas cautelares y demás actos del procedimiento que expresamente así lo prevean, procederán los recursos que fije la reglamentación.

Contra las resoluciones que impongan las sanciones disciplinarias procederán los recursos de reconsideración y revisión.

En ambos casos la interposición de recursos no tiene efecto suspensivo.

ARTÍCULO 86.- Recurso de reconsideración. El recurso de reconsideración debe ser fundado y agota la vía administrativa.

ARTÍCULO 87.- Recurso de revisión. El recurso de revisión se interpondrá cuando:

- a) La resolución resultare contradictoria;
- b) Aparezcan documentos o testimonios relevantes para la resolución ignorados al imponerse la sanción;
- c) Se hubiere impuesto la medida disciplinaria por resolución fundada en documentos o circunstancias cuya declaración de falsedad se desconocía o se hubiere dictado luego de producida tal resolución;
- d) Hubiere sido dictada mediante cohecho, prevaricato, violencia o cualquier otra maquinación fraudulenta o grave irregularidad comprobada, o
- e) La sanción disciplinaria haya sido impuesta por un hecho de carácter delictivo y una sentencia judicial posterior declare la absolución o sobreseimiento fundada en la inexistencia del hecho o en la no participación de la persona imputada en el mismo.

TÍTULO TERCERO DISPOSICIONES FINALES

Capítulo 1 Disposiciones Complementarias

ARTÍCULO 88.- Vigencia de la ley. La presente Ley comenzará a regir a partir del día 1 de julio de 2021, prorrogable por hasta ciento ochenta (180) días más por decreto del Poder Ejecutivo Provincial.

ARTÍCULO 89.- Derogación expresa. Deróganse expresamente:

- a) Los artículos 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 y 108 de la Ley N° 8231;
- b) La Ley N° 9120;
- c) Los artículos 15 -inciso d)-, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 y 106 de la Ley N° 9728, y
- d) Los artículos: 4º, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 y 68 de la Ley N° 10227.

ARTÍCULO 90.- Conflicto normativo. Todo conflicto de interpretación normativa se resolverá en beneficio de las disposiciones y principios de la presente Ley.

Capítulo 2 Disposiciones Transitorias

ARTÍCULO 91.- Causas en trámite. A los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigencia de la presente Ley le serán aplicadas todas las normas de forma y de fondo vigentes al momento de la comisión del hecho, con excepción de la normativa de fondo que resulte más beneficiosa a la persona imputada.

ARTÍCULO 92.- De forma. Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial

Leg. CID, Juan Manuel, Leg. BUSO, María Victoria, Leg. ESLAVA, María Emilia, Leg. LABAT, María Laura, Leg. PETRONE, María Andrea, Leg. ARDUH, Orlando Víctor, Leg. GUDIÑO, Daniela Soledad, Leg. GARADE PANETTA, María, Leg. GARCÍA ELORRIO, Aurelio, Leg. RINALDI, Julieta, Leg. CHAMORRO, Matías, Leg. FERNÁNDEZ, Nadia Vanesa, Leg. AMBROSIO, Alberto Vicente, Leg. JURE, Juan Rubén, Leg. CARRILLO, Marisa Gladys, Leg. IRAZUZTA, Cecilia Cristina

PROYECTO DE LEY – 31912/E/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10731:

*CONTROL DISCIPLINARIO DE LAS FUERZAS
DE SEGURIDAD PÚBLICA Y CIUDADANA*

*TÍTULO PRIMERO
ORGANISMOS DE CONTROL DISCIPLINARIO*

*Capítulo I
Disposiciones Comunes*

Artículo 1º.- Bases. La presente Ley establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana de la Provincia de Córdoba.

El mismo está compuesto por los Organismos del Sistema de Control Disciplinario y por el Régimen Disciplinario.

Artículo 2º.- Objeto. El Sistema de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana tiene por objeto instituir un mecanismo de control externo, civil, democrático, autónomo, transparente y eficaz de la actuación de las Fuerzas de Seguridad de la Provincia de Córdoba mediante la prevención, investigación y eventual sanción de las faltas disciplinarias, a fin de resguardar el correcto e integral funcionamiento del servicio de seguridad pública.

Artículo 3º.- Principios. El Sistema de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana actúa bajo los siguientes principios:


GUILLERMO ARIAS
SECRETARIO LEGISLATIVO
Legislatura de la Provincia de Córdoba

- a) Legalidad y respeto por los derechos humanos;
- b) Perspectiva de género;
- c) No discriminación;
- d) Prevención y erradicación de la violencia institucional;
- e) Control civil de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana;
- f) Acceso a la información por parte de la ciudadanía;
- g) Políticas de transparencia y prevención de la corrupción;
- h) Lenguaje claro, e
- i) Independencia del procedimiento disciplinario respecto del proceso penal.

Artículo 4º.- *Ámbito de aplicación.* La presente Ley es de aplicación a todo el personal de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana de la Provincia de Córdoba, tanto en actividad como en situación de retiro, y rige sobre conductas reprochables que sean cometidas dentro o fuera del territorio provincial.

Artículo 5º.- *Composición.* El Sistema de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana está integrado por los siguientes organismos, que actuarán con autonomía funcional y se relacionarán con el Poder Ejecutivo Provincial por intermedio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos o del organismo que lo sustituyere en sus competencias:

- a) El Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad, de conformación interinstitucional, tiene competencia para el conocimiento y la sanción de las faltas disciplinarias graves, gravísimas y pasibles de destitución cometidas por el personal de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana de la Provincia de Córdoba;
- b) La Dirección General de Control e Investigación de las Fuerzas de Seguridad tiene por funciones la prevención y la investigación de las faltas disciplinarias graves, gravísimas y pasibles de destitución cometidas por el personal de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana de la Provincia de Córdoba; y

GUILLELMO ARIAS
SECRETARIO LEGISLATIVO
Legisladores de la Provincia de Córdoba

- c) *La Asesoría Letrada Disciplinaria ejerce la defensa técnica de las personas que integran las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana de la Provincia de Córdoba sometidas a investigación en el marco del régimen disciplinario.*

Artículo 6º.- *Funcionamiento. La organización, administración, regímenes aplicables y demás aspectos institucionales y de funcionamiento de los Organismos del Sistema de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana serán establecidos por vía reglamentaria, de conformidad a su desenvolvimiento autónomo y a las necesidades de su estructuración y desarrollo de tareas.*

Artículo 7º.- *Incompatibilidad. El personal en actividad o en situación de retiro de las Fuerzas Armadas o de Seguridad no puede ser miembro del Tribunal de Conducta ni de la Dirección General de Control e Investigación de las Fuerzas de Seguridad de manera permanente ni transitoria bajo cualquier modalidad jurídica y en cualquiera de sus estamentos o funciones. Igual incompatibilidad tiene el personal civil que se haya desempeñado dentro de las Fuerzas Armadas o de Seguridad.*

Los miembros de los organismos que integran el Sistema de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana duran en sus funciones hasta tanto la autoridad que los designó disponga su reemplazo, a solicitud de su proponente.

Capítulo 2

Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad

Artículo 8º.- *Integración. Composición. El Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad es un organismo autónomo de integración interinstitucional y está compuesto por siete (7) miembros titulares -y sus respectivos suplentes- designados por el Poder Ejecutivo Provincial.*

Dichas designaciones serán realizadas de la siguiente manera:

- a) *Una (1) a propuesta del Ministerio Público;*


GUILLERMO ARIAS
SECRETARIO LEGISLATIVO
Legislatura de la Provincia de Córdoba

- b) Una (1) a propuesta de la Universidad Nacional de Córdoba;
- c) Una (1) a propuesta del Ministerio de Seguridad;
- d) Una (1) a propuesta del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y
- e) Tres (3) Legisladores designados por la Legislatura Provincial, dos (2) en representación de la mayoría y uno (1) por la primera minoría.

Artículo 9º.- Funciones. El Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad tiene, entre otras, las siguientes funciones:

- a) Resolver, a requerimiento de la Dirección General de Control e Investigación de las Fuerzas de Seguridad, los casos por la supuesta comisión de faltas graves, gravísimas y posibles de destitución;
- b) Disponer las medidas cautelares de oficio o a pedido de la Dirección General de Control e Investigación de las Fuerzas de Seguridad;
- c) Resolver las impugnaciones y recursos que correspondan según la reglamentación;
- d) Controlar el cumplimiento de las sanciones impuestas;
- e) Dictar su reglamento interno de funcionamiento, y
- f) Elaborar el informe anual de gestión.

Artículo 10.- Funcionamiento. Para resolver sobre la aplicación de sanciones de suspensión o cesantía por faltas graves y gravísimas, los recursos contra las resoluciones que las dispongan y contra las resoluciones que impongan medidas cautelares, el Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad se integrará parcialmente, conforme se establezca en la reglamentación.

Para resolver sobre la aplicación de sanciones de destitución y las impugnaciones a estas resoluciones, el Tribunal se integrará en pleno. En ningún caso el Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad puede sancionar cuando la Dirección General de Control e Investigación de las Fuerzas de Seguridad haya solicitado el sobreseimiento, ni puede imponer sanciones más gravosas que las requeridas por este último.


GUILLERMO ARIAS
SECRETARIO LEGISLATIVO
Legislatura de la Provincia de Córdoba

Artículo 11.- *Presidencia.* El Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad es presidido por el miembro que representa al Ministerio Público.

Artículo 12.- *Informe de gestión.* El Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad debe remitir anualmente a la Legislatura, al Ministerio de Seguridad, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y al Ministerio Público el informe de gestión sobre las actividades realizadas.

Capítulo 3

Dirección General de Control e Investigación de las Fuerzas de Seguridad

Sección Primera

Disposiciones Generales

Artículo 13.- *Composición.* La Dirección General de Control e Investigación de las Fuerzas de Seguridad está a cargo de un Director General designado por el Poder Ejecutivo Provincial a propuesta del Ministerio Público, y está integrado por:

- a) La Dirección de Investigaciones, y
- b) La Dirección de Prevención, Evaluación y Seguimiento.

Los titulares de ambas Direcciones son designados por el Poder Ejecutivo Provincial.

Artículo 14.- *Funciones.* La Dirección General de Control e Investigación de las Fuerzas de Seguridad tiene, entre otras, las siguientes funciones:

- a) Identificar, investigar y prevenir las faltas disciplinarias graves, gravísimas y pasibles de destitución cometidas por el personal de las Fuerzas que integran el Sistema Provincial de Seguridad Pública y Ciudadana de la Provincia de Córdoba, y
- b) Elaborar y proponer lineamientos de prevención, formación y capacitación que tengan vinculación con el régimen disciplinario.


GUILLERMO ARIAS
SECRETARIO LEGISLATIVO
Legislatura de la Provincia de Córdoba

Artículo 15.- *Deber de informar.* Cuando en el marco de un proceso penal se encuentre involucrado algún miembro de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana, el Ministerio Público o el organismo jurisdiccional interviniente debe informar de oficio o a requerimiento de la Dirección General de Control e Investigación de las Fuerzas de Seguridad toda la prueba o evidencia pertinente y útil para la investigación disciplinaria, siempre que no comprometa el éxito de la investigación penal.

Cuando en el marco de una investigación disciplinaria se advierta la supuesta comisión de un hecho delictivo o contravencional, la Dirección General de Control e Investigación de las Fuerzas de Seguridad debe informar y poner a disposición de la autoridad competente toda la evidencia.

Sección Segunda
Dirección General de Control e Investigación
de las Fuerzas de Seguridad

Artículo 16.- *Requisitos.* Para ser Director General de Control e Investigación de las Fuerzas de Seguridad se requiere contar con título de abogado con no menos de ocho (8) años de antigüedad, amplia experiencia en la materia en los términos y condiciones que fije la reglamentación y no tener antecedentes penales.

El cargo de Director General implica dedicación exclusiva e incompatibilidad absoluta con el ejercicio privado de la profesión y con toda otra actividad profesional, comercial, laboral o política, con excepción de la actividad docente o de investigación científica.

No resulta incompatible la participación en sociedades comerciales en tanto no forme parte de los órganos de dirección y administración.

Artículo 17.- *Funciones.* El Director General de Control e Investigación de las Fuerzas de Seguridad tiene, entre otras, las siguientes funciones:



GUILLERMO ARIAS
SECRETARIO LEGISLATIVO
Legislador de la Partido de Unidad

- a) Garantizar la correcta aplicación de las leyes, disposiciones y reglamentos en todas las actividades del organismo a su cargo;*
- b) Planificar, organizar e impartir los criterios y directivas de actuación en todo lo pertinente al funcionamiento del organismo;*
- c) Asumir la investigación cuando lo considere necesario y formular, en estos casos, los requerimientos ante el Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad;*
- d) Analizar y aprobar las propuestas de estrategias institucionales o recomendaciones elaboradas por las Direcciones que componen el organismo y evaluar el desempeño de las mismas;*
- e) Contribuir con los Ministerios de Seguridad, de Justicia y Derechos Humanos y con el Ministerio Público elaborando recomendaciones relativas al comportamiento del personal de las Fuerzas que integran el Sistema de Seguridad Pública y Ciudadana;*
- f) Requerir la colaboración de organismos públicos o privados para la obtención de evidencia en los procedimientos administrativos disciplinarios en los que intervenga;*
- g) Celebrar convenios con instituciones públicas o privadas, internacionales, nacionales, provinciales o municipales con la finalidad de fortalecer el funcionamiento del Sistema de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana;*
- h) Elaborar el informe anual de gestión, e*
- i) Establecer e implementar junto a los Ministerios de Seguridad, de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio Público mesas de diálogo con organizaciones de la sociedad civil y universidades públicas o privadas con la finalidad de recibir sugerencias e intercambiar ideas y reflexiones orientadas al mejor progreso de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana.*

Artículo 18.- *Informe de gestión. La Dirección General de Control e Investigación de las Fuerzas de Seguridad debe remitir*


GUILLERMO ARIAS
SECRETARIO LEGISLATIVO
Legislatura de la Provincia de Córdoba

anualmente a la Legislatura, al Ministerio de Seguridad, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y al Ministerio Público el Informe de gestión sobre las actividades realizadas.

Sección Tercera
Dirección de Investigaciones

Artículo 19.- *Requisitos. Para ser Director de la Dirección de Investigaciones se requiere contar con título de abogado con no menos de cuatro (4) años de antigüedad, experiencia en la materia en los términos que fije la reglamentación y no tener antecedentes penales.*

Artículo 20.- *Funciones. La Dirección de Investigaciones tiene, entre otras, las siguientes funciones:*

- a) Recepcionar denuncias de la ciudadanía por la supuesta comisión de faltas disciplinarias;*
- b) Iniciar investigaciones de oficio o por remisión de antecedentes de dependencias del Ministerio Público, del Poder Judicial o de otros organismos públicos en los casos de supuesta comisión de faltas graves, gravísimas o posibles de destitución;*
- c) Mantener informado al Director General de las denuncias que ingresen a la Dirección a su cargo;*
- d) Identificar las conductas del personal de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana que pudieran configurar faltas disciplinarias graves, gravísimas o posibles de destitución;*
- e) Investigar los hechos, recabar evidencias, individualizar a los responsables de las conductas y formular la imputación de las faltas cuando se estime que se hubieren cometido;*
- f) Solicitar al Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad las medidas cautelares necesarias para asegurar la realización del procedimiento;*
- g) Ordenar el archivo de las actuaciones cuando estime que corresponde, en el marco de una investigación administrativa;*
- h) Requerir al Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad el sobreseimiento cuando resulte procedente, e*


GUILLERMO ARIAS
SECRETARIO LEGISLATIVO
Legislatura de la Provincia de Córdoba

- i) *Requerir la aplicación de penas principales, sustitutivas o accesorias al Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad.*

Sección Cuarta

Dirección de Prevención, Evaluación y Seguimiento

Artículo 21.- *Requisitos. Para ser Director de Prevención, Evaluación y Seguimiento se requiere contar con título de grado en derecho, ciencias sociales o humanidades con no menos de cuatro (4) años de antigüedad, experiencia en la materia en los términos y condiciones que fije la reglamentación y no tener antecedentes penales.*

Artículo 22.- *Funciones. La Dirección de Prevención, Evaluación y Seguimiento tiene, entre otras, las siguientes funciones:*

- a) Realizar investigaciones genéricas conforme a las denuncias o a la información que ingresa a la Dirección de Investigaciones en donde no exista autor determinado;*
- b) Ordenar el archivo de las actuaciones cuando el hecho no configure falta disciplinaria;*
- c) Realizar, previa autorización del Director General, inspecciones en dependencias o lugares en los que presten servicios las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana para recabar información sobre el personal, los recursos materiales y logísticos y la documentación vinculada con los procesos de trabajo, cuando exista denuncia o sospecha fundada sobre la posible comisión de una falta disciplinaria;*
- d) Dirigir los procedimientos administrativos y proponer acciones, mecanismos y procesos de trabajo que permitan mejorar el desempeño de la Dirección General de Control e Investigación de las Fuerzas de Seguridad;*
- e) Desarrollar, implementar y gestionar los registros establecidos en la normativa vigente y todos aquellos que disponga el Director General del organismo, y*
- f) Acceder, a los fines del cumplimiento de sus funciones, a las bases de datos informáticas de la Provincia conforme lo regule la reglamentación.*

GUILLERMO J. ARIAS
SECRETARIO LEGISLATIVO
Legislatura de la Provincia de Córdoba

Artículo 23.- *Declaración jurada patrimonial.* El personal de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana debe presentar anualmente ante la Dirección General de Control e Investigación, en los términos y condiciones que fije la reglamentación, una declaración jurada patrimonial según lo establecido en la Ley N° 8198, sobre sus bienes y las modificaciones que se produzcan en su situación patrimonial, en la de su cónyuge, pareja estable o conviviente, ascendientes o descendientes a cargo.

Las declaraciones juradas son remitidas para su protocolización a la Escribanía General de Gobierno, sin perjuicio del registro y seguimiento que de las mismas realice la Dirección General de Control e Investigación de las Fuerzas de Seguridad.

La Dirección General de Control e Investigación tiene la facultad de requerir informes a los Registros y demás organismos públicos o privados relacionados a las investigaciones que lleve a cabo.

Asimismo puede requerir, por sí o a través de las vías legalmente establecidas, según corresponda, información patrimonial, económica o financiera de los agentes bajo investigación o de personas vinculadas a ellos.

Artículo 24.- *Registros.* La Dirección de Prevención, Evaluación y Seguimiento debe crear, gestionar y mantener actualizados los siguientes registros:

- a) Registro Único de Faltas;
- b) Registro de Disparos de Arma de Fuego realizados por el personal de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana;
- c) Registro de Casos de Violencia Institucional y de Género;
- d) Registro de Discriminación y Corrupción, y
- e) Demás registros que disponga la Dirección General de Control e Investigación de las Fuerzas de Seguridad.

Asimismo, la Dirección de Prevención, Evaluación y Seguimiento tiene facultades para acceder, supervisar y auditar los registros de armas disponibles en las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana.


GUILLERMO ARIAS
SECRETARIO LEGISLATIVO
Legislatura del Poder Judicial de la Nación

Capítulo 4

Asesoría Letrada Disciplinaria de las Fuerzas de Seguridad

Artículo 25.- Composición. *Los integrantes de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana contarán con una Asesoría Letrada Disciplinaria que brindará asistencia técnica gratuita en el marco del régimen disciplinario.*

Está a cargo de un Asesor Letrado Disciplinario propuesto por cada una de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana, designados por el Poder Ejecutivo Provincial a propuesta de sus respectivos Jefes, y se integrará por un cuerpo letrado de abogados organizados de acuerdo se establezca reglamentariamente.

Artículo 26.- Requisitos. *Para ser Asesor Letrado Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad se requiere contar con título de abogado con no menos de ocho (8) años de antigüedad, experiencia en la materia en los términos y condiciones que fije la reglamentación y no tener antecedentes penales.*

El cargo de Asesor Letrado Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad es incompatible con el ejercicio privado de la profesión y con toda otra actividad profesional, comercial, laboral o política, con excepción de la actividad docente o de investigación científica.

No resulta incompatible la participación en sociedades comerciales en tanto no forme parte de los órganos de dirección y administración.

Artículo 27.- Funciones. *La Asesoría Letrada Disciplinaria de las Fuerzas de Seguridad tiene la función de organizar y coordinar el servicio de defensa técnica en los procedimientos disciplinarios en los que sea obligatoria según la reglamentación, sin perjuicio del derecho de toda persona investigada a designar un letrado de su elección.*

Además, tiene a su cargo el control deontológico de las defensas técnicas disciplinarias.


GUILLERMO ARIAS
SECRETARIO LEGISLATIVO
Legislatura de la Provincia de Córdoba

Artículo 28.- *Informe de gestión. La Asesoría Letrada Disciplinaria de las Fuerzas de Seguridad debe remitir anualmente a la Legislatura, al Ministerio de Seguridad, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y al Ministerio Público el informe de gestión sobre las actividades realizadas.*

TÍTULO SEGUNDO

RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Capítulo 1

Disposiciones Generales

Sección Primera

Principios de Actuación, Deberes y Reglas Funcionales

Artículo 29.- *Principios esenciales de actuación. En el desempeño de sus funciones el personal de las fuerzas que integran el Sistema Provincial de Seguridad Pública y Ciudadana debe actuar conforme a las siguientes reglas:*

- a) Legalidad: adecuar en todo momento sus conductas y prácticas a las normas constitucionales, a los tratados internacionales en materia de derechos humanos y a la legislación, reglamentos y protocolos vigentes;*
- b) Oportunidad: evitar todo tipo de actuación extrema cuando no medie una situación objetiva de riesgo o peligro capaz de vulnerar la vida, la libertad u otros derechos fundamentales de las personas, tal como se determina en la presente Ley, reglamentos y protocolos vigentes o que en su consecuencia se dicten;*
- c) Gradualidad: priorizar las tareas y el proceder preventivo y disuasivo antes que el uso efectivo y reactivo de la fuerza, procurando siempre y, ante todo, preservar la vida y la libertad de las personas en cumplimiento de lo que prevén los tratados internacionales, la Constitución Nacional y Provincial, la presente Ley y los reglamentos y protocolos vigentes al respecto, y*


GUILLERMO ARIAS
SECRETARIO LEGISLATIVO
Legislatura de la Provincia de Córdoba

- d) Proporcionalidad: utilizar los medios y modalidades de acción conforme lo exija, aconseje o amerite la situación objetiva de riesgo o peligro existente, evitando todo tipo de actuación que resulte excesiva, arbitraria o discriminatoria o que entrañe violencia física o psicológica contra las personas, de conformidad a lo dispuesto en las normativas vigentes.*

Artículo 30.- Deberes funcionales. En función del cumplimiento de los principios esenciales de actuación establecidos en el artículo 29 de esta Ley, el personal de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana debe:

- a) Actuar con responsabilidad y respeto hacia la comunidad y las personas, procurando resguardar, en cualquier circunstancia, la integridad física, la dignidad y los derechos humanos;*
- b) No invocar falazmente una orden superior, circunstancias especiales o situaciones de emergencia para justificar una actuación contraria a la Constitución, a los Tratados de Derechos Humanos, a las leyes y demás normas que establecen sus deberes y obligaciones;*
- c) Garantizar la plena protección de la integridad física, psíquica y moral de las personas bajo su tutela o custodia;*
- d) No tolerar ningún acto de corrupción, persiga o no fines lucrativos;*
- e) Impedir el abuso de autoridad o el exceso en el desempeño de sus funciones y labores;*
- f) Impedir la violación de normas constitucionales, legales y reglamentarias durante el accionar de la fuerza que integra o el de otras fuerzas, organismos o agencias con las que desarrollen labores conjuntas o combinadas;*
- g) Impedir o denunciar cualquier hecho de corrupción o conducta abusiva desplegada por personas humanas o jurídicas, públicas o privadas, con las que se relacione o vincule;*
- h) Mantener en reserva toda información de carácter confidencial a la que tuviere acceso o tomare conocimiento en razón de su actividad laboral, cargo o jerarquía, especialmente en todo aquello que pueda afectar el honor, la*

GUILLERMO ARIAS
SECRETARIO LEGISLATIVO
Legislatura de la Provincia de Córdoba

vida y los intereses privados de las personas, salvo causa debidamente justificada;

- i) Utilizar la fuerza como último recurso. El accionar funcional no debe implicar el uso indebido o excesivo de la fuerza, el abuso verbal o la mera descortesía hacia las personas. Las acciones o medios que puedan menoscabar la integridad o los derechos de las personas deben utilizarse en forma gradual, evitando causar un mal mayor sobre la persona, sobre sus bienes o sobre terceros;*
- j) Recurrir al uso de armas de fuego solo en casos de legítima defensa o en defensa de terceros o estado de necesidad, procurando reducir eventuales daños y lesiones;*
- k) Anteponer la preservación de la vida y la integridad física de las personas al eventual éxito de la actuación;*
- l) Identificarse y anunciarse cuando las circunstancias lo permiten, antes de hacer uso de la fuerza y del arma de fuego;*
- m) Intervenir para proteger las libertades y derechos de las personas;*
- n) Actuar en el cumplimiento de sus funciones con neutralidad e imparcialidad, perspectiva de género y sin discriminación;*
- ñ) Cumplir las medidas de control patrimonial establecidas por la Dirección General de Control e Investigación de las Fuerzas de Seguridad;*
- o) Cumplir con la finalidad del Régimen Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana;*
- p) Cumplir los protocolos de actuación que se establezcan, y*
- q) Adecuar su actuación a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, así como a los tratados internacionales de derechos humanos defendiendo el orden constitucional conforme lo dispuesto en el artículo 36 de la Constitución Nacional y en el artículo 17 de la Constitución Provincial.*

Artículo 31.- *Eximición del deber de obedecer. El personal de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana no está obligado a obedecer cuando:*


GUILLERMO ARIAS
SECRETARIO LEGISLATIVO
Legislatura de la Provincia de Córdoba

- a) La orden impartida sea ilegal o contraria a los derechos humanos;
- b) Su ejecución constituya un delito, o
- c) La orden provenga de autoridades no constituidas de acuerdo a los principios y normas constitucionales, o en infracción a las disposiciones legales o reglamentarias de aplicación.

Si el contenido de la orden implicase la comisión de una falta disciplinaria leve o media, el personal subordinado debe formular la objeción siempre que la urgencia de la situación lo permita; de lo contrario, posteriormente, debe avisar a la autoridad competente.

Artículo 32.- Cese del deber de intervención. *El deber del personal de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana de intervenir para evitar cualquier tipo de situaciones riesgosas o de conflictos que pudieran resultar constitutivos de delitos, contravenciones o faltas rige durante su horario de servicio ordinario o complementario.*

Cuando el personal se encuentre fuera del horario de servicio y tome conocimiento de situaciones que requieran intervención directa debe dar aviso al personal de la Fuerza en servicio.

El personal que se encuentre en esta situación no está obligado a identificarse como tal ni a intervenir, pero si lo hiciera, actuará en calidad de funcionario público del Estado y se regirá según las facultades y obligaciones que como miembro de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana le corresponden.

Artículo 33.- Prohibición de medidas de acción directa. *Se prohíbe expresamente al personal de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana adoptar medidas de acción directa de cualquier naturaleza que impliquen:*

- a) Ocupar lugares de trabajo o hacer uso indebido de recursos del Estado a los fines de protestar o reclamar;
- b) Negarse a cumplir sus funciones de modo que ello importe dejar de prestar el servicio esencial a su cargo, en forma total o parcial;


GUILLERMO ARIAS
SECRETARIO LEGISLATIVO
Legislatura de la Provincia de Córdoba

- c) *Cumplir sus funciones bajo cualquier modalidad que implique la disminución, paralización o interrupción total o parcial de la prestación del servicio, y*
- d) *Movilizarse, manifestar o peticionar, en estos dos últimos casos en forma pública, desmedida, insubordinada o violenta.*

Sección Segunda

Parte General del Régimen Disciplinario

Artículo 34.- *Finalidad. El régimen disciplinario de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana tiene por finalidad garantizar la observancia de los principios esenciales de actuación en el desempeño de su actividad laboral y cumplir con los deberes funcionales conforme lo determinan la Constitución Nacional, los tratados internacionales, la Constitución de la Provincia de Córdoba, las leyes, reglamentos y protocolos como postulados jurídicos que procuran garantizar el marco ético de actuación de las instituciones y el respeto incondicional a los derechos humanos.*

Artículo 35.- *Contenidos. El régimen disciplinario contiene el conjunto de faltas disciplinarias que puede cometer el personal de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana, las sanciones administrativas correspondientes a dichas faltas y las facultades disciplinarias de las instancias institucionales encargadas de investigarlas y resolverlas, garantizando los derechos de defensa y de debido proceso.*

Artículo 36.- *Protección a las víctimas. Cuando de la comisión de una falta disciplinaria resulten afectadas una o más personas, se debe propender a su protección.*

En estos supuestos, la víctima o sus herederos forzosos tienen derecho a ser informados acerca del estado de la investigación, así como de las resoluciones dictadas y de los servicios existentes para la asistencia jurídica, social y psicológica si fueran necesarios.


GUILLERMO ARIAS
SECRETARIO LEGISLATIVO
Legislatura de la Provincia de Córdoba

Artículo 37.- *Regla de interpretación.* Las normas de esta Ley se interpretarán de conformidad con los principios constitucionales y del derecho internacional consagrados en tratados de igual jerarquía, con especial énfasis en los derechos humanos.

Artículo 38.- *Participación.* Cuando en la comisión de la falta interviniera más de un agente, todos quedan sometidos a la misma escala sancionatoria, sin perjuicio que la sanción aplicada se gradúe con arreglo a la respectiva participación en el hecho.

Artículo 39.- *Determinación de la sanción.* A los fines de determinar la cuantificación de la sanción se debe tener en cuenta:

- a) Los medios empleados para ejecutar la falta;
- b) La extensión del daño producido;
- c) El peligro ocasionado;
- d) Las circunstancias particulares de la persona infractora tales como la jerarquía, la edad, la aptitud psicológica, la educación y la conducta precedente, la inexperiencia motivada en la antigüedad y los méritos acreditados durante el servicio, y
- e) La reiteración de faltas, entendiendo por tal la existencia previa de una o más sanciones disciplinarias de cualquier naturaleza.

Artículo 40.- *Agravantes.* El máximo de la sanción divisible prevista para la falta se duplicará cuando la misma:

- a) Fuera cometida con el concurso de tres (3) o más personas pertenecientes a las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana;
- b) Fuera cometida por un jefe de dependencia en el ejercicio de sus funciones;
- c) Configure una situación de violencia institucional;
- d) Configure una situación de violencia de género;
- e) Configure una situación de discriminación, o
- f) Configure un hecho de corrupción.



GUILLERMO ARIAS
SECRETARIO LEGISLATIVO
Presidencia de la Corte de Justicia

Artículo 41.- *Definiciones. A los fines de esta Ley se considera:*

- a) *Violencia institucional: a toda acción u omisión que afecte la vida, la libertad, la dignidad, la integridad física, psicológica o sexual de una persona o de grupos de personas cuando dichos padecimientos sean infligidos por cualquier integrante de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana en el ejercicio de sus funciones;*
- b) *Violencia de género: a toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, afecte la vida, la libertad, la dignidad, la integridad física, psicológica, sexual o económica de mujeres o personas de género u orientación sexual no hegemónicas, basada en una relación desigual de poder o motivadas por actitudes de odio hacia la orientación sexual, la expresión o la identidad de género;*
- c) *Corrupción: a toda acción u omisión ilegal realizada por parte de un integrante de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana en uso de su cargo o función con el objetivo de obtener beneficios para sí o para terceras personas, y*
- d) *Discriminación: a toda acción u omisión en el ejercicio de sus funciones que implique un trato diferencial y perjudicial a otra persona basado en criterios de nacionalidad, expresión o identidad de género, origen étnico, religión, ideología, edad, sexo, orientación sexual, caracteres físicos, discapacidad o condiciones sociales, laborales o económicas.*

Artículo 42.- *Concurso ideal y real de faltas. Cuando una conducta se encuadrare total o parcialmente bajo más de una falta se aplicará solamente la que fijare la sanción más grave.*

Cuando concurrieren varios hechos independientes reprimidos con la misma especie de sanción divisible se debe imponer la sanción resultante de su suma, la que no puede exceder el máximo de la especie de sanción de que se trate.


GUILLERMO ARIAS
SECRETARIO LEGISLATIVO
Legislación y la Presidencia de Ciudad

Sección Tercera
Sanciones

Artículo 43.- Sanciones principales. *Las sanciones principales son:*

- a) Apercibimiento;*
- b) Suspensión;*
- c) Cesantía, y*
- d) Destitución.*

Artículo 44.- Apercibimiento. *El apercibimiento es el llamado de atención y la advertencia personalizada a un miembro de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana. La resolución debe indicar cuál hubiera sido la forma correcta de actuar.*

Artículo 45.- Suspensión. *La suspensión de la actividad laboral comprende la privación temporal del ejercicio de las funciones a un miembro de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana, incluyendo las tareas de servicio adicional.*

El personal sancionado con suspensión de actividad laboral no puede concurrir a su puesto de trabajo y ello conlleva la reducción proporcional del salario por el tiempo que dure la sanción disciplinaria.

Cuando la sanción de suspensión sea dictada por la comisión de una falta leve o media el tiempo de duración de la suspensión de actividad laboral no afectará el cómputo de la antigüedad en el servicio y en el grado.

Cuando la sanción de suspensión sea dictada por la comisión de una falta grave o gravísima el tiempo de duración de la suspensión de la actividad laboral afectará el cómputo de la antigüedad en el servicio y en el grado.

En ningún caso la sanción de suspensión puede superar los ciento veinte (120) días corridos.


GUILLERMO ARIAS
SECRETARIO LEGISLATIVO
Legislatura de la Federación de México

Artículo 46.- Cesantía. *La cesantía implica la pérdida de la actividad laboral, de los derechos y deberes inherentes al mismo y la inhabilitación perpetua para el reingreso a cualquiera de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana.*

Las resoluciones firmes de cesantía deben publicarse en la página web de cada una de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana y son de libre acceso.

Artículo 47.- Destitución. *La destitución implica la expulsión de la actividad laboral y la inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio, sin excepción, de todo empleo o función públicas y como prestador o personal de los servicios de seguridad privada en la jurisdicción provincial.*

Las resoluciones firmes de destitución y la inhabilitación que conlleva deben publicarse en la página web de cada una de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana y son de libre acceso.


Artículo 48.- Sanciones sustitutivas y accesorias. *Las sanciones principales de apercibimiento y de suspensión pueden ser reemplazadas por sanciones sustitutivas o complementadas por sanciones accesorias. En ambos casos deben ser cumplidas fuera del horario en que el personal presta servicios.*

La imposición de sanciones sustitutivas no genera antecedentes negativos computables a los fines de establecer el orden de mérito para los ascensos.

Las sanciones sustitutivas o accesorias son:

- a) Tratamientos terapéuticos;*
- b) Deberes especiales de conducta;*
- c) Cursos educativos;*
- d) Reparación del daño, y*
- e) Tareas comunitarias.*

Artículo 49.- Tratamiento terapéutico. *Consiste en el cumplimiento de un tratamiento terapéutico fundado en las condiciones personales del sancionado y en su conveniencia. Se debe contar previamente con*


GUILLERMO ARIAS
SECRETARIO LEGISLATIVO
Legislatura de la Provincia de Córdoba

un informe médico o psicológico y con la aceptación expresa de la persona de que se trate.

El tratamiento puede ser cumplido en instituciones públicas o privadas.

En ningún caso puede superar los ciento veinte (120) días corridos sin perjuicio de la continuidad del tratamiento de manera voluntaria por el personal de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana de que se trate.

Artículo 50.- Deberes especiales de conducta. *Los deberes especiales de conducta consisten en la limitación o restricción impuesta para asistir, ingresar o permanecer en un lugar o de acercarse a menos de determinada distancia de lugares o personas por el tiempo que se determine. En ningún caso puede superar los ciento veinte (120) días corridos desde que la sanción quede firme.*

Artículo 51.- Cursos educativos. *Los cursos educativos consisten en que el personal sancionado realice, dentro de los treinta (30) días corridos desde que la sanción quede firme, un curso de capacitación cuya temática y duración debe estar vinculada y ser proporcional a la falta cometida.*

En ningún caso puede superar los ciento veinte (120) días corridos, sin perjuicio de la continuidad del curso de manera voluntaria por parte del personal de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana de que se trate.

Artículo 52.- Reparación del daño causado. *Consiste en que el autor sancionado repare económicamente el daño causado o procure la restitución de la situación al estado anterior al hecho, en la medida que sea posible.*

Artículo 53.- Tareas comunitarias. *Las tareas comunitarias se cumplirán en dependencias oficiales -nacionales, provinciales, municipales o comunales- u otras instituciones de bien público estatales o privadas, y están orientadas a la conservación, la mejora o la ampliación de establecimientos asistenciales, sociales, de enseñanza o espacios públicos.*


GUILLERMO ARIAS
SECRETARIO LEGISLATIVO
Legislación de la Provincia de Córdoba

La resolución sancionatoria debe indicar las tareas comunitarias y su término.

En ningún caso su ejecución puede superar los ciento veinte (120) días corridos.

Sección Cuarta

Acciones

Artículo 54.- *Obligación de actuar e informar. Deben iniciarse de oficio todos los procedimientos por faltas disciplinarias. El personal de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana con facultades disciplinarias tiene la obligación, de conformidad al procedimiento que al efecto se establezca, de aplicar las sanciones que correspondan ante la constatación de una falta leve o media.*

El personal en actividad que carezca de dichas facultades, al igual que el personal en situación de retiro, debe denunciarlo ante la autoridad competente.

Artículo 55.- *Prohibición. Las sanciones firmes aplicadas por faltas disciplinarias no pueden, en ningún caso, ser dejadas sin efecto o disminuidas.*

Artículo 56.- *Extinción de la acción disciplinaria. La acción disciplinaria se extingue:*

- a) Por muerte de la persona imputada, o*
- b) Por prescripción.*

Artículo 57.- *Prescripción de la acción disciplinaria. La acción para perseguir infracciones prescribe:*

- a) A los cinco (5) años en los casos de faltas posibles de destitución;*
- b) A los tres (3) años en los casos de faltas gravísimas;*
- c) A los dos (2) años en los casos de faltas graves;*
- d) Al año (1) cuando se trate de faltas medias, y*
- e) A los seis (6) meses cuando se trate de faltas leves.*

La prescripción de la acción comienza a correr desde la primera hora del día siguiente al que se cometió la falta.


GUILLERMO ARIAS
SECRETARIO LEGISLATIVO
Legislatura de la Provincia de Córdoba

Artículo 58.- *Cómputo. La prescripción de la acción corre, se suspende o se interrumpe separadamente para cada falta y para cada uno de sus partícipes.*

Artículo 59.- *Interrupción de la prescripción. La prescripción de la acción se interrumpe por:*

- a) Comisión de una nueva falta, o*
- b) La notificación fehaciente al agente de la existencia de un procedimiento disciplinario en su contra.*

Artículo 60.- *Suspensión de la prescripción. La prescripción de la acción se suspende cuando la investigación administrativa se haya iniciado con motivo de la presunta comisión de un delito por parte del personal de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana, y se haya ordenado por resolución fundada la suspensión del procedimiento disciplinario por carecer de elementos suficientes para proseguir la investigación. En caso de reanudarse la investigación administrativa, la prescripción continuará su curso.*

Capítulo 2

Faltas

Artículo 61.- *Clasificación. Las faltas son leves, medias, graves, gravísimas y pasibles de destitución. Las faltas graves, gravísimas y pasibles de destitución son las establecidas en la presente Ley, mientras que las faltas leves y medias serán establecidas por vía reglamentaria.*

Artículo 62.- *Correlación entre falta y sanción. Las faltas tienen las siguientes sanciones:*

- a) Las leves con apercibimiento o suspensión de hasta diez (10) días corridos;*
- b) Las medias con apercibimiento o suspensión de once (11) y hasta veinte (20) días corridos, y*
- c) Las graves, gravísimas y pasibles de destitución con la sanción expresamente prevista en la presente Ley.*


GUILLERMO ARIAS
SECRETARIO LEGISLATIVO
Legislatura de la Asamblea de Ciudad

Artículo 63.- Delitos culposos. *La comisión de delitos culposos ajenos al servicio no puede constituir falta disciplinaria ni es motivo de procedimientos disciplinarios.*

Artículo 64.- Faltas graves. *Las faltas graves son sancionadas con suspensión de veintún (21) y hasta sesenta (60) días corridos y son las que a continuación se detallan:*

- 1) Conducir un vehículo perteneciente a las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana con inobservancia de las normas de tránsito vigentes con suficiente entidad para crear una situación de peligro para la vida o la integridad física de las personas, salvo excepciones extremas del servicio;*
- 2) Dañar o extraviar, por negligencia, imprudencia o inobservancia de los reglamentos y deberes a su cargo, bienes, valores u objetos en el ejercicio de sus funciones que tengan la entidad y relevancia para producir una afectación patrimonial;*
- 3) Portar objetos peligrosos para la seguridad del establecimiento o dependencia en los que haya personas privadas de libertad;*
- 4) Utilizar todo o parte del uniforme oficial en tareas o actividades incompatibles con la función;*
- 5) Tener una actitud desafiante o agresiva hacia sus superiores, iguales o subalternos o hacia el personal de la Dirección General de Control e Investigación, de la Asesoría Letrada Disciplinaria de las Fuerzas de Seguridad o del Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad;*
- 6) Impartir directivas contrarias a lo dispuesto por los protocolos de actuación u órdenes de servicio sin razón justificada y siempre que de éstas no se deriven daños;*
- 7) Incumplir lo dispuesto por los protocolos de actuación u órdenes de servicio sin razón justificada y siempre que del incumplimiento no se deriven daños;*
- 8) Utilizar influencias para definir destinos laborales, traslados o ascensos, siempre que no se configure alguna falta más grave;*


GUILLERMO ARIAS
SECRETARIO LEGISLATIVO
Legislatura de la Puntilla de Galdakos


- 9) *Exigir o encomendar tareas ajenas al servicio al personal a su cargo;*
- 10) *Formular por cualquier medio afirmaciones o comentarios falsos que deshonren o desacrediten a otro integrante de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana o agraven a la misma Fuerza;*
- 11) *Tratar, por cualquier medio, de manera incorrecta o descortés a las personas, a otros integrantes de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana o a quienes se encuentren privados de su libertad;*
- 12) *Prohibir, impedir, obstaculizar o restringir ilegítimamente el registro o filmación de la actuación del personal de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana en la vía pública, lugares de acceso público o lugares privados en los que la persona que filma o registra tenga derecho a permanecer;*
- 13) *Omitir la obligación de requisar a personas privadas de su libertad, hacerlo en lugares no destinados al efecto o sin observar la normativa vigente;*
- 14) *Demorar, sin causa justificada, el traslado de una persona privada de libertad al lugar que haya dispuesto la autoridad competente;*
- 15) *Permitir el acceso de personas detenidas a oficinas o lugares prohibidos, sin orden expresa de la autoridad pertinente;*
- 16) *Permitir la visita a personas privadas de libertad que no tengan la debida autorización;*
- 17) *Incumplir a la citación de comparecencia formulada por la Dirección General de Control e Investigación, por el Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad, por la Asesoría Letrada Disciplinaria de las Fuerzas de Seguridad o por un organismo judicial, sin causa debidamente justificada;*
- 18) *Negarse a ser requisado cuando se encuentre obligado en virtud de la normativa vigente;*
- 19) *Demorar injustificadamente los trámites de licitaciones, concursos de precios, compras y pagos en general, transferencias, devoluciones de fondos, pedidos de imputaciones y adquisiciones, o rendir cuentas fuera de los plazos exigidos por la normativa vigente;*


GUILLERMO PRIAS
SECRETARIO LEGISLATIVO
Legislatura de la Provincia de Córdoba

- 20) Brindar o conceder reportajes o declaraciones públicas referidas a aspectos funcionales o de carácter político, sin contar con la expresa autorización de la superioridad;
- 21) Asistir al servicio de manera impuntual por más de diez (10) y hasta quince (15) veces en el año;
- 22) No asistir al servicio, de manera injustificada, por más de ocho (8) y hasta doce (12) veces en el año;
- 23) Abandonar el servicio sin causa justificada por menos de cuarenta y ocho (48) horas;
- 24) Recomendar servicios de terceros que impliquen un conflicto de intereses, persigan o no fines lucrativos, y
- 25) Presentar reclamos o peticiones individuales o colectivas en términos falsos, maliciosos, temerarios o irrespetuosos.

Artículo 65.- Faltas gravísimas. Serán sancionadas con suspensión de sesenta y un (61) y hasta ciento veinte (120) días corridos o cesantía las faltas gravísimas que a continuación se detallan:

- 1) Dañar o extraviar, a sabiendas, bienes, valores u objetos en el ejercicio de sus funciones que tengan la entidad y relevancia para producir una afectación patrimonial;
- 2) Prestar, ceder o vender distintivos, prendas del uniforme, equipos u otros bienes de la Institución a personas ajenas a las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana;
- 3) Perder o ser desposeído con o sin violencia del armamento provisto por incumplimiento de las normas que reglan su portación;
- 4) Hacer uso o disponer de bienes, valores u objetos secuestrados sin la autorización correspondiente;
- 5) Ejercer las atribuciones del cargo con parcialidad manifiesta o abusando de su función;
- 6) Requerir los servicios del personal subalterno en horario de servicio o utilizar recursos materiales de la Institución en provecho propio o de un tercero;
- 7) Incumplir lo dispuesto por los protocolos de actuación u órdenes de servicio sin razón justificada cuando del incumplimiento se deriven daños;


GUILLERMO ARIAS
SECRETARIO LEGISLATIVO
Legislatura de la Provincia de Córdoba

- 8) *Impartir directivas contrarias a lo dispuesto por los protocolos de actuación u órdenes de servicio sin razón justificada y cuando de éstas se deriven daños;*
- 9) *Transmitir información inexacta a otros integrantes de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana de modo tal que cause perjuicio;*
- 10) *Formular falsa imputación de un delito o contravención a otro integrante de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana;*
- 11) *Intimidar, discriminar, hostigar, acosar o maltratar física, psíquica o económicamente a otro integrante de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana;*
- 12) *Discriminar por razones de nacionalidad, expresión o identidad de género, origen étnico, religión, ideología, edad, sexo, orientación sexual, caracteres físicos, discapacidad o condiciones sociales, laborales o económicas a otra persona en el ejercicio de sus funciones;*
- 13) *Cometer, provocar o instigar desobediencia ostensiblemente;*
- 14) *Ofrecer destinos, traslados o ascensos o cualquier beneficio laboral a cambio de dinero, dádiva o cualquier otro favor;*
- 15) *Incumplir, sin causa justificada, una medida cautelar o una sanción principal, sustitutiva o accesoria impuesta por el Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad habiendo sido debidamente notificado;*
- 16) *Solicitar o aceptar dádivas o dinero por servicios prestados en el desempeño de sus funciones o a consecuencia de ellos;*
- 17) *Afirmar una falsedad, negar o callar la verdad en todo o en parte respecto de declaraciones, informes, traducciones o interpretaciones que se formulen como testigos, peritos o intérpretes en actuaciones administrativas o judiciales;*
- 18) *Negarse o evadir la obligación de prestar declaración testimonial o patrimonial, emitir informes o aportar pruebas en causas que haya conocido en ejercicio de sus funciones o cuando sean prestadas con reticencia, falsedad u ocultamiento perjudicial para la investigación;*
- 19) *Consumir bebidas alcohólicas, estupefacientes o sustancias prohibidas;*


GUILLERMO ARIAS
SECRETARIO LEGISLATIVO
Legislatura de la Provincia de Córdoba

- 20) *Utilizar información obtenida en razón de su servicio o función para brindar una actividad profesional ajena a la institución;*
- 21) *Asistir al servicio de manera impuntual por más de quince (15) veces en el año;*
- 22) *No asistir al servicio, de manera injustificada, por más de doce (12) veces en el año;*
- 23) *Abandonar el servicio sin causa justificada por más de cuarenta y ocho (48) horas;*
- 24) *Incumplir con el servicio generando una grave afectación a la vida, los bienes o la salud de las personas;*
- 25) *Interrogar a personas privadas de libertad, sospechadas, acusadas o imputadas de un delito o contravención, sin las formalidades establecidas en las normas procesales vigentes;*
- 26) *Demorar o incumplir el otorgamiento de la libertad de una persona detenida, que hubiere dispuesto la autoridad competente;*
- 27) *Omitir informar de manera inmediata a la superioridad o a quien corresponda, sobre la enfermedad, lesiones o muerte de una persona privada de la libertad bajo su custodia;*
- 28) *No procurar la asistencia médica inmediata a una persona que lo requiere en el ejercicio de sus funciones;*
- 29) *Ordenar, abusando del cargo, la realización de servicios particulares a personas privadas de libertad;*
- 30) *Facilitar la fuga o evasión de alguna persona legalmente privada de su libertad;*
- 31) *Utilizar ilegalmente la fuerza y el armamento para someter a personas;*
- 32) *Intervenir o de cualquier forma participar en la gestión u organización de partidos políticos mientras permanezca en actividad;*
- 33) *Integrar o participar en cooperativas, mutuales, asociaciones o cualquier otra organización destinada a recaudar fondos provenientes de la ciudadanía bajo pretexto de colaboración con las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana;*
- 34) *Publicar por cualquier medio mensajes discriminatorios, antidemocráticos o que inciten al odio o a la violencia o que*


GUILLERMO ARIAS
SECRETARIO LEGISLATIVO
Legislatura de la Provincia de Córdoba

hagan apología de un delito o de una persona condenada por delito, y

- 35) Cometer una acción que implique delito doloso cuya pena máxima conminada en abstracto sea igual o inferior a los tres (3) años de prisión o reclusión.*

Artículo 66.- Sanciones accesorias. *Cuando la sanción fuere de suspensión por faltas establecidas en los incisos 1), 2), 6), 7), 10) y 11) del artículo 64 y en los incisos 1), 2), 3), 4), 5), 7), 8), 9), 11), 12), 19), 31) y 34) del artículo 65 -ambos de esta Ley-, el Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad puede, a requerimiento de la Dirección General de Control e Investigación de las Fuerzas de Seguridad y atendiendo a la naturaleza del hecho, imponer una sanción accesoria -de las previstas en el artículo 48 de esta norma- conjuntamente con la sanción principal.*

Artículo 67.- Faltas pasibles de destitución. *Serán sancionadas con destitución las faltas que a continuación se detallan:*

- 1) No poder justificar la evolución patrimonial;*
- 2) Efectuar un requerimiento de carácter sexual, para sí o para un tercero, aprovechándose de su función, de la vulnerabilidad de la víctima o de cualquier otra circunstancia o medio que amule o vulnere su voluntad;*
- 3) Prestar, ceder o vender armamento o equipos de comunicación a personas ajenas a las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana;*
- 4) Cometer una acción que implique delito doloso cuya pena máxima conminada en abstracto sea superior a los tres (3) años de prisión o reclusión o el delito fuera cometido en el ejercicio de sus funciones;*
- 5) Los integrantes de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana en actividad o en situación de retiro que en un número mayor de dos (2) realicen alguna de las siguientes conductas:*
 - a) Ocupar lugares de trabajo o hacer uso indebido de recursos del Estado a los fines de protestar o reclamar;*


GUILLERMO ARIAS
SECRETARIO LEGISLATIVO
Legislatura de la Provincia de Córdoba

- b) *Negarse a cumplir sus funciones de modo que ello importe dejar de prestar el servicio esencial a su cargo en forma parcial o total;*
 - c) *Cumplir sus funciones bajo cualquier modalidad que implique la disminución, paralización o interrupción total o parcial de la prestación del servicio;*
 - d) *Movilizarse, manifestar o peticionar, en estos dos últimos casos en forma pública, desmedida, insubordinada o violenta.*
- 6) *Los integrantes de las Fuerzas Seguridad Pública y Ciudadana en actividad o en situación de retiro que tuvieran conocimiento de alguna de las acciones enumeradas en el inciso 5) de este artículo realizadas por otros integrantes de la fuerza o por particulares y no lo denunciaron ante la autoridad competente en el término de veinticuatro (24) horas,*
y
- 7) *Prestar servicio en estado de intoxicación por ingesta de alcohol, estupefacientes o cualquier sustancia prohibida.*

Artículo 68.- *Régimen disciplinario para personal retirado. El personal en situación de retiro no tiene facultades disciplinarias, pero sí la obligación de denunciar las faltas al régimen disciplinario de las que tenga conocimiento.*

Cuando se encuentre prestando servicios de adicional o utilizando el uniforme, le será aplicable el mismo régimen disciplinario que al personal en actividad. En los demás casos le serán aplicables las faltas que fije la reglamentación.

Capítulo 3

Procedimiento Disciplinario

Sección Primera

Disposiciones Generales

Artículo 69.- *Principios y garantías. El procedimiento de sustanciación y aplicación de las sanciones al personal de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana por la comisión de faltas leves, medias, graves, gravísimas y pasibles de destitución será definido*


GUILLERMO ARIAS
SECRETARIO LEGISLATIVO
Legislatura de la Provincia de Córdoba

por la reglamentación de conformidad con las siguientes garantías:

- a) Debido proceso: se debe garantizar a la persona imputada de cometer una falta los derechos a ser oída, a ofrecer y producir prueba y a obtener una resolución fundada en tiempo razonable por parte de la autoridad interviniente;*
- b) Derecho de defensa: toda persona investigada por la comisión de una falta disciplinaria tiene derecho a patrocinio letrado para ejercer su defensa material y técnica;*
- c) Derecho a no autoincriminarse: ninguna persona puede ser obligada a declarar contra sí misma. El ejercicio de este derecho no puede ser valorado como una admisión de los hechos o indicio de culpabilidad. Toda admisión de los hechos o confesión debe ser libre, bajo expreso consentimiento de la persona imputada y formulada en presencia de patrocinio letrado, bajo pena de nulidad;*
- d) Imparcialidad e independencia: la autoridad con potestad disciplinaria debe actuar con imparcialidad en sus decisiones e independencia de toda injerencia externa y de los demás integrantes del Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad;*
- e) Simplicidad, celeridad y modernización: los actos del procedimiento se registrarán por escrito, imágenes o sonidos u otro soporte tecnológico o digital equivalente, y*
- f) Concentración: siempre que sea posible y no se contraponga con el debido proceso, se procurará concentrar la actividad procedimental realizando de manera conjunta todos los actos que lo admitan.*

Artículo 70.- Competencia. *La investigación y sanción por faltas leves y medias es competencia de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana en los términos y alcances que determine la reglamentación de la presente Ley.*

La investigación por las faltas graves, gravísimas y pasibles de destitución es potestad exclusiva de la Dirección General de Control e Investigación de las Fuerzas de Seguridad.


GUILLERMO ARIAS
SECRETARIO LEGISLATIVO
Legislatura de la Fuerza de Ciudad

El dictado de las medidas cautelares, la aplicación de sanciones y la resolución de las impugnaciones por las faltas graves, gravísimas y pasibles de destitución es competencia del Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad.

Artículo 71.- *Recusación y excusación. Los integrantes del Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad, así como el Director General y el Director de Investigaciones deben excusarse o pueden ser recusados, cuando existan motivos serios y razonables que afecten su imparcialidad. Toda recusación o excusación debe ser fundada.*

No procede la recusación sin expresión de causa.

La recusación de los integrantes del Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad será resuelta por sus pares en plenario. La recusación del Director de Investigaciones será resuelta por el Director General de Control e Investigación de las Fuerzas de Seguridad y el de éste por el Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad.

Planteada la recusación, previo informe del recusado, la misma será resuelta sin sustanciación, dentro del término de tres (3) días hábiles.

La resolución es irrecurrible.

Artículo 72.- *Registro de los actos del procedimiento. Cuando se utilicen registros de imágenes, sonidos u otros medios digitales o tecnológicos se debe reservar el original en condiciones que aseguren su inalterabilidad, conforme lo establezca la reglamentación.*

Artículo 73.- *Notificaciones electrónicas. En el primer llamado a personas investigadas o imputadas, letrados y testigos se les exigirá que constituyan domicilio electrónico, donde le serán remitidas las notificaciones, citaciones o emplazamientos vinculados con la sustanciación del proceso.*

al

GUILLERMO ARIAS
SECRETARIO LEGISLATIVO
Legislatura de la Provincia de Córdoba

Artículo 74.- Independencia del régimen disciplinario. Excepciones. *La sustanciación de los sumarios administrativos por hechos que puedan configurar delitos y la imposición de las sanciones disciplinarias pertinentes en el orden administrativo son independientes del proceso penal, con excepción de las siguientes situaciones:*

- a) Cuando se encuentre pendiente el proceso penal y el personal sumariado no pueda ser declarado exento de responsabilidad en sede administrativa;*
- b) Cuando la investigación disciplinaria no cuente con elementos suficientes para requerir la aplicación de una sanción o de una medida cautelar, el Director General de Control e Investigación de las Fuerzas de Seguridad debe ordenar, por resolución fundada, la suspensión del procedimiento disciplinario;*
- c) La absolución o sobreseimiento en sede penal fundada en la inexistencia del hecho o en la falta de participación de la persona imputada provocará la clausura del procedimiento disciplinario o la revocación de las sanciones impuestas por esos hechos, y*
- d) Si en el proceso penal hubiere recaído condena, el hecho y la participación de la persona imputada en el mismo deben darse por acreditados en sede administrativa y continuar con el curso del procedimiento.*

Artículo 75.- Procedimiento para aplicación de faltas leves y medias. *Las faltas disciplinarias leves y medias serán investigadas y sancionadas dentro del ámbito de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana. Cuando la sanción se encuentre firme la Fuerza de Seguridad Pública y Ciudadana correspondiente debe informar en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas a la Dirección General de Control e Investigación de las Fuerzas de Seguridad para su incorporación al Registro Único de Faltas.*

Artículo 76.- Sanción sustitutiva. Procedimiento abreviado. *La persona imputada por una falta disciplinaria que reconozciere circunstanciada y llanamente su participación y responsabilidad,*


GUILLERMO ARIAS
SECRETARIO LEGISLATIVO
Legislatura de la Ciudad de Chihuahua

puede solicitar la aplicación de una sanción sustitutiva, proponiendo la forma de su cumplimiento.

En los casos de faltas graves la Dirección General de Control e Investigación de las Fuerzas de Seguridad, mediante resolución fundada en las características del hecho y en la conveniencia de la sanción sustitutiva, requerirá al Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad su aplicación.

El Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad debe resolver y controlar el cumplimiento de la sanción sustitutiva y, una vez cumplida la misma, dictará resolución cerrando el procedimiento.

Quedan excluidos del procedimiento abreviado de sanción sustitutiva los casos de faltas gravísimas y faltas pasibles de destitución.

Artículo 77.- Sanción sustitutiva. Incumplimiento. *Si mediare inobservancia o incumplimiento de las condiciones, imposiciones o instrucciones que disponen las sanciones sustitutivas sin la debida justificación, el Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad puede revocar la sanción impuesta y aplicar hasta el máximo de la sanción de la falta por la cual se lo condenó, o resolver, cuando se considere necesario, la subsistencia de la sanción sustitutiva extendiendo el plazo hasta el máximo que determina la especie de la sanción.*

En los casos de incumplimiento o inobservancia de sanción sustitutiva aplicada dentro del ámbito de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana, se procederá conforme lo establezca la reglamentación.

El agente que haya incumplido una sanción sustitutiva no puede acceder a esta posibilidad durante los próximos tres (3) años a contar desde la fecha de su incumplimiento.

Artículo 78.- Sanción accesoria. Control e incumplimiento. *El Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad debe controlar el cumplimiento de la sanción accesoria impuesta.*



Poder Legislativo

Provincia de Córdoba

Ante el incumplimiento de la misma, sin causa debidamente justificada, el Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad impondrá:

- a) El máximo de la sanción de suspensión, si la principal hubiera sido de apercibimiento, y*
- b) El máximo de la sanción de suspensión o cesantía, si la principal hubiera sido de suspensión.*

Artículo 79.- *Requerimiento a Juzgados. La Dirección General de Control e Investigación de las Fuerzas de Seguridad puede solicitar a los Juzgados competentes las medidas de contenido jurisdiccional.*


Artículo 80.- *Casos de violencia institucional y discriminación. La Dirección General de Control e Investigación de las Fuerzas de Seguridad y el Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad deben remitir a la Secretaría de Derechos Humanos o al organismo que lo sustituyere en sus competencias, las actuaciones administrativas y las resoluciones de los casos que constituyan hechos de violencia institucional y discriminación para que se instrumenten los servicios de asistencia integral a las víctimas y familiares.*

Artículo 81.- *Casos de violencia de género. La Dirección General de Control e Investigación de las Fuerzas de Seguridad y el Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad deben remitir al Ministerio de la Mujer o al organismo que lo sustituyere en sus competencias, las actuaciones administrativas y las resoluciones de los casos que constituyan hechos de violencia de género para que se instrumenten los servicios de asistencia integral a las víctimas y familiares.*

Sección Segunda

Medidas Cautelares

Artículo 82.- *Excepcionalidad y aplicación restrictiva. Las medidas cautelares son de carácter excepcional y se aplicarán restrictivamente en los casos y con los efectos que el decreto reglamentario establezca.*


QUILLERMO ARIAS
SECRETARIO LEGISLATIVO
Legislatura de la Provincia de Córdoba

Durante la sustanciación del procedimiento para la determinación de la posible comisión de faltas graves, gravísimas y pasibles de destitución y solo a los fines de garantizar el normal desarrollo del proceso y el efectivo cumplimiento de lo que se resuelva, el Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad, de oficio o a requerimiento de la Dirección General de Control e Investigación de las Fuerzas de Seguridad, puede disponer medidas cautelares.

Artículo 83.- *Medidas cautelares. Las medidas cautelares son:*

- a) Suspensión preventiva;*
- b) Retiro preventivo del armamento, y*
- c) Pase a situación pasiva.*

Artículo 84.- *Cómputo y alcances. La reglamentación establecerá el cómputo para la equivalencia de las medidas cautelares con las sanciones en caso de recaer resolución condenatoria.*

También establecerá la duración y el alcance de cada medida cautelar.

Sección Tercera

Impugnación

Artículo 85.- *Vías impugnativas. Contra las resoluciones que impongan medidas cautelares y demás actos del procedimiento que expresamente así lo prevean, procederán los recursos que fije la reglamentación.*

Contra las resoluciones que impongan las sanciones disciplinarias procederán los recursos de reconsideración y revisión.

En ambos casos la interposición de recursos no tiene efecto suspensivo.

Artículo 86.- *Recurso de reconsideración. El recurso de reconsideración debe ser fundado y agota la vía administrativa.*

Artículo 87.- *Recurso de revisión. El recurso de revisión se interpondrá cuando:*


GUILLERMO ARIAS
SECRETARIO LEGISLATIVO
Legislador de la Presidencia de Quito

- a) *La resolución resultare contradictoria;*
- b) *Aparezcan documentos o testimonios relevantes para la resolución ignorados al imponerse la sanción;*
- c) *Se hubiere impuesto la medida disciplinaria por resolución fundada en documentos o circunstancias cuya declaración de falsedad se desconocía o se hubiere dictado luego de producida tal resolución;*
- d) *Hubiere sido dictada mediante cohecho, prevaricato, violencia o cualquier otra maquinación fraudulenta o grave irregularidad comprobada, o*
- e) *La sanción disciplinaria haya sido impuesta por un hecho de carácter delictivo y una sentencia judicial posterior declare la absolución o sobreseimiento fundada en la inexistencia del hecho o en la no participación de la persona imputada en el mismo.*

TÍTULO TERCERO

DISPOSICIONES FINALES


Capítulo I

Disposiciones Complementarias

Artículo 88.- Vigencia de la ley. *La presente Ley comenzará a regir a partir del día 1 de julio de 2021, prorrogable por hasta ciento ochenta (180) días más por decreto del Poder Ejecutivo Provincial.*

Artículo 89.- Derogación expresa. *Deróganse expresamente:*

- a) *Los artículos 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 y 108 de la Ley Nº 8231;*
- b) *La Ley Nº 9120;*
- c) *Los artículos 15 -inciso d)-, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 y 106 de la Ley Nº 9728, y*
- d) *Los artículos 4º, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 y 68 de la Ley Nº 10227.*


GUILLERMO ARIAS
SECRETARIO LEGISLATIVO
Secretaría de la Presidencia del Poder

Artículo 90.- Conflicto normativo. Todo conflicto de interpretación normativa se resolverá en beneficio de las disposiciones y principios de la presente Ley.

Capítulo 2
Disposiciones Transitorias

Artículo 91.- Causas en trámite. A los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigencia de la presente Ley le serán aplicadas todas las normas de forma y de fondo vigentes al momento de la comisión del hecho, con excepción de la normativa de fondo que resulte más beneficiosa a la persona imputada.

Artículo 92.- De forma. Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

DADA EN CÓRDOBA, A LOS VEINTITRÉS DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE. -----


GUILLERMO CARLOS ARIAS
SECRETARIO LEGISLATIVO
LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA


MANUEL FERNANDO CALVO
VICEGOBERNADOR
PRESIDENTE
LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

-7-

A) OBRAS: "RUTA ALTERNATIVA A RUTA NACIONAL N° 38 – TRAMO 1: VARIANTE COSTA AZUL – LA CUMBRE EN LA SECCIÓN COMPRENDIDA ENTRE VARIANTE COSTA AZUL (PR. 0+000) Y EL ACCESO A LA LOCALIDAD DE MOLINARI (PR. 21+500)". INMUEBLES NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN. DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETO A EXPROPIACIÓN.

B) OBRAS: "VARIANTE RUTA PROVINCIAL N° 5 – TRAMO: ROTONDA RUTA PROVINCIAL N° 5 (KM. 25,5) Y EL ACCESO A LA LOCALIDAD DE VILLA LOS AROMOS (KM. 45,2)". INMUEBLES NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN. DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETO A EXPROPIACIÓN.

Tratamiento sobre tablas

Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota con la que se mociona el tratamiento sobre tablas de los proyectos 31990/E/20 y 31991/E/20, que se leerá a continuación.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Córdoba, 23 de diciembre de 2020.

**Señor Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
S. / D.**

De mi mayor consideración:

Por la presente, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas, en la sesión del día de la fecha, de manera conjunta y con votación por separado, de los despachos de comisión correspondientes a los proyectos de ley 31990/E/20 y 31991/E/20, por los cuales se declaran de utilidad pública y sujetos a expropiación inmuebles destinados a las obras en la Ruta alternativa a la Ruta Nacional Nº 38, Variante Costa Azul y acceso a Molinari, y variante Ruta Provincial Nº 5, rotonda y acceso a Los Aromos.

Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

Francisco Fortuna
Legislador provincial

Sr. Presidente (Calvo).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas que acaba de ser leída.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.

Para dar comienzo al debate, tiene la palabra el señor legislador Raúl Latimori.

Sr. Latimori.- Gracias, señor presidente.

Hoy tenemos en tratamiento los proyectos de ley 31990/E/20 y 31991/E/20, los cuales, por decisión tomada en la Comisión de Labor Parlamentaria, van a ser tratados en forma conjunta y debatidos de igual manera, dado que se trata de dos expropiaciones genéricas, en el marco de la Ley 6394, y se trata, a su vez, de dos obras viales de gran trascendencia para los Departamentos Punilla y Santa María.

Comienzo con el proyecto de ley 31990/E/20, que propicia declarar de utilidad pública y sujetos a expropiación los bienes necesarios para la ejecución de la obra Ruta alternativa a Ruta Nacional Nº 38, Variante Costa Azul-La Cumbre.

Este proyecto, que fuera tratado y despachado por la Comisión de Obras Públicas, así como por la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación, cuenta, con tres artículos. En el artículo 1º, se propicia la declaración de utilidad y pública de los terrenos necesarios para la ejecución de la obra y remite al croquis y anexos que acompañan al presente proyecto, consistiendo en una expropiación genérica, de acuerdo a lo previsto en la Ley 6394, Régimen de Expropiaciones de la Provincia, de manera tal de realizar la liberación completa de la traza a ocupar.

En el artículo 2º, se establece la disposición de fondos, por parte del Ministerio de Finanzas, para la realización de la obra, cuestión que se encuentra reflejada en el Plan de Obras Públicas que acompaña el Presupuesto que aprobamos el día 9 de diciembre en este recinto.

El artículo 3º es de forma.

Yendo a los anexos del proyecto, tenemos que acompañan a este proyecto el Dictamen 266/2020, de la Dirección General de Asuntos Legales de la Provincia, en el cual se trata el expediente 0451-00866-2020, iniciado por el Ministerio de Obras Públicas, donde se determina la necesidad de declaración de utilidad pública de los terrenos y se expide favorablemente, así como el Dictamen de Fiscalía de Estado Nº 577, en el cual se expide en igual sentido, así como los croquis y planos de la traza completa del proyecto, la cual se pretende liberar mediante la expropiación que se realizará con el presente proyecto, con una extensión total de 42 kilómetros 500 metros.

Esta obra, que en su primer tramo contará con una extensión de 21 kilómetros y medio, entre la Variante Costa Azul y la localidad de Molinari, estará a cargo de Caminos de las Sierras, empresa que tiene, dentro de los atributos de su concesión con la Provincia, la realización de este tipo de obras viales en lo que hace a caminos y rutas de acceso a la ciudad de Córdoba.

También contamos con la nota remitida por el presidente de Caminos de las Sierras, contador Jorge Alves, quien expresa la necesidad de expropiar los terrenos

para la realización de esta obra, que es necesaria para dotar de una opción a la ruta actual, en función de la fuerte demanda que posee la misma a lo largo de todo el año.

Este es un proyecto en el cual se viene trabajando desde hace muchos años, señor presidente; tuvo una traza original que fue sujeta a modificaciones de acuerdo a lo solicitado por distintos grupos ambientalistas y, finalmente, receptando todos estos requisitos y argumentos, se llegó a la traza actual, con el consenso y acompañamiento de todos los intendentes y jefes comunales de la zona, los cuales nos vienen solicitando, de manera imperiosa, la realización de la obra debido a la necesidad de comunicación y de tránsito en esta zona turística tan importante de nuestra Provincia.

En segundo lugar, tenemos el proyecto de ley 31991/E/20, obra: Variante Ruta Provincial Nº 5 - Tramo: Rotonda Ruta Provincial Nº 5 (kilómetro 25,5) y el Acceso a la localidad de Villa Los Aromos (kilómetro 45,2).

Este proyecto declara de utilidad pública y sujetos a expropiación los bienes necesarios para la ejecución de la obra Variante Ruta Provincial Nº 5, Tramo Alta Gracia, intersección Ruta S-495, del Departamento Santa María, tal como fuera despachado en su versión definitiva.

De esta manera, cuenta con despacho de la Comisión madre, de Obras Públicas, así como de la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación. Cuenta con tres artículos y un anexo compuesto de 8 fojas, entre las cuales tenemos la nota enviada por Caminos de las Sierras planteando la necesidad de la expropiación para la realización de la obra, los croquis y los planos correspondientes, así como los dictámenes de la Dirección General de Asuntos Legales de la Provincia y de Fiscalía de Estado, los cuales se expiden favorablemente sobre lo solicitado.

Esta obra, también a cargo de Caminos de las Sierras, consiste en la construcción de un tramo nuevo entre la Rotonda de la Ruta Provincial Nº 5, kilómetro 25,5, y la intersección con la Ruta S-495, pasando por la localidad de Villa de La Serranita, con una extensión de total de 27 kilómetros 500 metros, para completar la ruta a realizar, de manera tal que mediante el presente proyecto de ley se plantea la liberación de dicha traza en su totalidad, consistiendo la misma en una expropiación genérica, como lo decía anteriormente, la cual podrá ser definida y ejecutada por el Poder Ejecutivo al momento de la individualización de las parcelas necesarias.

-Ocupa la Presidencia la Vicepresidenta, legisladora Natalia De la Sota.

A su vez, lo planteado en el proyecto, la construcción de esta primera etapa, entre la Rotonda de la localidad de Alta Gracia y el desvío del acceso hasta la localidad de Los Aromos, consiste en una calzada de 7 metros con 30 centímetros de ancho, con 3 metros de banquina de cada lado, consistiendo de esta manera en una nueva vía que transcurrirá paralela a la actual Ruta 5 y posterior Ruta S-495.

En el dictamen de la Dirección General de Asuntos Legales de la Provincia Nº 267/2020, en el cual se trata el expediente 0451-008687-2020, iniciado por el Ministerio de Obras Públicas, se determina la necesidad de la declaración de utilidad pública de los terrenos y se expide favorablemente, así como dictamen de la Fiscalía de Estado Nº 578, que se expide en el mismo sentido.

Así como con el anterior proyecto de expropiación presentado, esta obra es de suma importancia para el Departamento Santa María, constituyendo una vía de acceso a todo el valle de Paravachasca y de descongestionamiento del tránsito en dicha zona, el cual en épocas de verano se intensifica debido a la gran afluencia de turistas en la zona.

Por ello consideramos de vital importancia avanzar con ambos proyectos en cuestión, que implican el inicio de este proceso de obras que traerán grandes beneficios para los pobladores de la zona, así como para la industria turística de la Provincia.

De este modo, señor presidente, y de acuerdo a los argumentos planteados, adelanto el voto positivo de nuestro bloque de Hacemos por Córdoba y solicito el acompañamiento del resto de los legisladores, en virtud de lo importante que resultan estas obras para nuestra Provincia.

Muchas gracias, presidente.

Sra. Presidenta (De la Sota).- Gracias, legislador Latimori.

Tiene la palabra el legislador Arduh.

Sr. Arduh.- Presidenta: sabemos que el proyecto del Gobierno provincial para construir autovías de montaña atravesando el valle de Punilla es una de las obras que, por diversas razones, vienen siendo bastante postergadas.

Sabemos, también, de la necesidad de un nuevo trazado que le aporte a nuestra Provincia más seguridad vial y más eficiencia en la movilidad, sobre todo teniendo en cuenta que esta Ruta 38 atraviesa muchas localidades turísticas.

Hace dos años, la principal discusión se dio entre los sectores de perfil ambientalista y el Gobierno, que sostenía el proyecto en un trazado por el Este de la actual Ruta Nacional 38 que, finalmente, archivó ante un escenario de conflictividad.

Sin embargo, ante la presentación de un nuevo trazado, es necesario evaluar cuál será el impacto ambiental y geográfico que tendría, aun cuando se nos asegura que en su diseño se contemplaron los principales reclamos de esos sectores ambientalistas que habían expuesto en el 2018.

Entendemos que el apuro para concretar este paso viene dado por la necesidad de cumplimentar pasos en la ejecución de la obra, a solicitud de quienes están financiando el proyecto.

Probablemente, hoy declaremos de utilidad pública estos terrenos, por donde pasa la nueva traza, pero le pedimos al Gobierno de la Provincia que se abra a la posibilidad de llegar acuerdos, de transparentar todo el proceso; una obra de tal magnitud, que seguramente aportará progresos a las localidades, debe ser consensuada.

Además, es fundamental que todos los que formamos parte de esta Cámara también tengamos a disposición la información necesaria para saber qué estamos por hacer.

Sin entrar en la discusión sobre las prioridades del manejo de los recursos públicos, porque quienes están decidiendo esto son realmente ustedes -como les gusta decir, por la voluntad de la mayoría de los cordobeses, a quienes oportunamente les tendrán que rendir cuentas-, vamos a hacer mucho hincapié en la transparencia de la información que se brinde.

No es menor que el dato más relevante y más conflictivo de este proyecto esté asociado a un problema de impacto ambiental; ya lo tuvimos, lamentablemente, en la experiencia del Camino al Cuadrado, con un daño ambiental generado en la reserva natural Vaquerías.

Este año, hemos sufrido una de las peores catástrofes ambientales de nuestra historia, con miles de hectáreas arrasadas por el fuego; un daño que no solo es producto de los efectos del cambio climático, sino de años y años de imprevisión e impericia en el área de gestión.

Este Gobierno, y las gestiones que vienen desarrollando desde hace más de 20 años, claramente, no tienen como una de sus prioridades las políticas públicas en la cuestión ambiental.

Decir que la gestión debe enfocarse en la educación, en la salud y en programas de incentivos para la pequeña y mediana industria, es una verdad que se cae de maduro; pero, serán ustedes quienes tendrán que decirles a los cordobeses por qué es necesario endeudarse para la construcción de esta obra monumental, en medio de un contexto de pobreza, de desocupación y de desigualdad único en la historia de nuestro país.

Es una cuestión de oportunismo, dado que se avecina, seguramente este año electoral, y una cuestión de contexto de crisis realmente generalizada.

También, deberán ser claros con los cordobeses y decir si por este aval que está dando el Gobierno nacional existe algún tipo de retribución política. Ya sabemos cuál es el concepto de federalismo que proclaman y nuestra Provincia no puede ni debe estar sujeta a este tipo de intercambios poco claros que, últimamente, venimos padeciendo todos los cordobeses.

-Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio, legislador Oscar González.

El Gobierno provincial debe generar instancias de información y de participación para que estos proyectos, que afectan los recursos -que son de todos-, cuente con el consenso necesario para llevarse a cabo, sobre todo, porque se trata de una cuestión de ordenamiento territorial y seguramente de nuevas deudas.

Garantizar el cumplimiento de la Ley de Ambiente no es para convalidar, sino para permitir la participación durante la elaboración del proyecto.

Sabemos, como ya dijimos, que esta propuesta puede mejorar sustancialmente la movilidad y la promoción turística, y esto traer aparejado un impulso para un sector que ha sufrido intensamente las consecuencias de la pandemia.

Es por eso, señor presidente, que desde el bloque Juntos por el Cambio vamos a acompañar estas dos leyes en general, y no así en particular.

Muchísimas gracias, presidente.

Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador Arduh.

Tiene la palabra el legislador Rossi.

Sr. Rossi.- Gracias, presidente.

La política en general, y la Argentina en particular, pasan por un momento muy...

Sr. Presidente (González).- Legislador: ¿podría desplazarse dos bancas hacia su izquierda? No es que nos agrade verlo, pero forma parte de la obligación.

Sr. Rossi.- ¿Acá está bien?

Sr. Presidente (González).- Ahí está perfecto.

Sr. Rossi.- No me sienten en la banca de Cossar, que después Fortuna se la va a agarrar conmigo. (Risas)

Gracias, presidente.

En nombre del bloque de la Unión Cívica Radical, voy a hacer uso de la palabra respecto del proyecto 31990/E/20 y, después, la legisladora Marisa Carrillo va a hacer referencia al 31991.

Decía que la Argentina, y la política en general, están atravesando un momento muy particular. A los ciudadanos, a la habitual crítica que se les hace a los administradores de la cosa pública en virtud de que en muchos casos no hay referencias o no hay logros concretos en muchas cuestiones que tienen que ver con la calidad de vida de los habitantes, se les suma un año particular de pandemia, de crisis económica, de pérdidas de puestos de trabajo, de una situación complicada y difícil, muchos con miedo a verse afectados en su salud, por la pandemia.

Pero, aparte de eso, Córdoba ha vivido un año particular también desde el punto de vista ambiental. Primero, porque sufrimos más de 300.000 hectáreas quemadas, muchas de ellas de bosque nativo; un desastre, desde el punto de vista ecológico.

Aparte de eso, venimos con una rémora, que es la de que desde hace más de 5 años que el Gobierno de la Provincia no establece el Mapa de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos e incumple con la Ley Nacional que establece que cada 5 años hay que actualizarlo. Eso genera, obviamente, que en la población haya problemas, dificultades y rechazos a distintos proyectos que tienen que ver con una lesión al medio ambiente; no solamente son los jóvenes los que hoy reclaman una mejor calidad ambiental, sino que toda la sociedad en su conjunto está embanderada a través de esas cuestiones.

Nosotros no estamos en contra de las obras, no estamos en contra del avance y del progreso. Sabemos de las dificultades y de la necesidad de construir una ruta alternativa a la 38; sabemos de los accidentes y de los problemas de inseguridad vial que se producen allí; pero nos parece que, cuando uno tiene que gestionar y trabajar para dar soluciones en ese sentido, hay que tener en cuenta esa particular sensibilidad que hoy tiene la sociedad respecto a determinados temas.

Hay cosas que hoy los políticos no podemos hacer; hay situaciones en las cuales no nos podemos adentrar y que, tal vez, en otras situaciones se pueden aceptar.

Veía hoy con asombro y con vergüenza, por ejemplo, cosas que hacen desde el Gobierno Nacional, como festejar un relato de Víctor Hugo Morales cuando sale un avión a Rusia, o los barbijos que se ponían, como si esto fuera un viaje a la Luna o la solución a todos nuestros problemas, en una situación difícil, complicada, que exige seriedad, sobriedad, actuación en conjunto.

Como digo, no hay que ir en contra de esa sensibilidad que tiene la gente respecto del ambiente. Nosotros vamos a pedir, como bloque de la Unión Cívica Radical, que este proyecto vuelva a comisión, para debatirse, para discutirse; y, si no vuelve a comisión, vamos a votar en contra de este proyecto y digo los argumentos.

Miren, decía recién que nadie está en contra del progreso, en contra de que se construya una autovía, de que trabajemos para mejorar las condiciones de seguridad en esa Ruta 38. Es cierto que se ha pasado la traza del Este al Oeste y se ha buscado alguna alternativa que tiene que ver con esos diálogos y ese debate que se dio en el 2018, respecto de por dónde tenía que atravesar la ruta.

Pero, estamos a las apuradas; este un proyecto que necesita debate, consenso, acuerdo, escuchar a todas las partes, y la Legislatura tiene que estar a la altura de las

circunstancias y vehiculizar ese diálogo, a través de las comisiones que correspondan, fundamentalmente la Comisión de Ambiente, para escuchar a todos. Habrá que escuchar si está bien que la traza pase por allí, habrá que escuchar las alternativas que propone la gente que está trabajando en defensa del medio ambiente, habrá que escuchar a los vecinos de esa zona para ver si está bien o no allí.

Pero hoy se avanza de arremetida, prácticamente sin ningún tipo de discusión; se retoma sin ninguna explicación una discusión que se dio hace dos años y se avanza en la declaración de utilidad pública. Cuando uno declara de utilidad pública, que es el paso previo a la expropiación, es porque concretamente se está avanzando en el proyecto. Se habla de licitar en el mes de marzo -de aquí a tres meses no más- la obra, con lo cual se está diciendo es que prácticamente no va a haber debate, no va a haber participación, no se va a escuchar a nadie, y creo una obra de esta magnitud tiene que tener ese debate concreto y esa búsqueda de consenso.

Aquí podríamos, tranquilamente, antes de avanzar, buscar una discusión ambiental, buscar esa licencia ambiental que hace falta y que la Secretaría de Ambiente exige para avanzar en un proyecto de estos; se podría avanzar en escuchar en una Audiencia Pública, con mucha anticipación, a los distintos sectores que están en pugna.

Se podría trabajar, concretamente, en explicar porque aquí se habla, por supuesto, de un costo de 100 millones de dólares, de los cuales 75 pone la Corporación Argentina de Fomento; otra vez la deuda y otra vez obras sin el respaldo de fondos concretos de la Provincia; otra vez más deuda atada a moneda extranjera, otra vez más deuda que va a crecer con el resfrío y las minidevaluaciones que sufre el dólar todos los días; otra vez incertidumbre y aumento de esa enorme deuda pública que tiene la Provincia, que carcome a las próximas generaciones y que el Gobierno está buscando tirarla para la próxima administración.

Digo: diálogo, consenso, acuerdo, búsqueda de soluciones, escuchar a las partes en pugna; por discutir, por debatir, las obras salen de manera más robusta, se las apropian mucho más los cordobeses.

Por eso -insisto-, no estamos en contra de la obra, pero sí estamos en contra de que se haga de arremetida, sin debate, sin discusión, sin escuchar a las partes, arrasando e imponiendo. Creo que ese no es el camino, creo que esa no es la solución y que hoy, con la situación complicada que tiene la Argentina y la Provincia de Córdoba en particular, lo que hace falta es escuchar amigablemente a las partes y saber que nadie es dueño de la verdad, que no hay una verdad única y que la verdad se construye de lo que puedan aportar cada uno de los vecinos, sobre todo, los de la región de Punilla.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador Rossi.

Tiene la palabra el legislador García Elorrio.

Sr. García Elorrio.- Presidente: cada intervención del legislador Fortuna, cada vez que se dedique a mi persona, me obliga a cambiar todos los discursos.

Fíjese, es una cosa difícil de manejar porque, por ejemplo, dice el diccionario: "dícese masoquista aquel al que le gusta que lo castiguen y goza con el castigo". Podría, al momento de referirme a estas leyes, repetir lo que les he dicho siempre en materia de deuda pública, y tengo el temor de que, si no lo digo, después el legislador Fortuna me diga que he cambiado de opinión.

En la ley de recién me parecía no sé qué, me parecía hasta duro repetir todo lo que he dicho de lo que pienso de la seguridad en Córdoba, que se los dije el miércoles pasado; dije cosas que eran muy duras, y digo: hoy voy a mostrarles caminos de positividad, caminos hacia adelante. Pero ¿qué pasa?, si ahora, cuando tengo que hablar de esto, no les fundamento en cosas que se han aburrido ustedes de escucharme decir, tengo miedo de que diga el legislador Fortuna que por fin he entendido el equilibrado endeudamiento de la Provincia. Entonces, me voy a referir al desequilibrado endeudamiento de la Provincia de Córdoba.

Pongámonos en la circunstancia hipotética -esto no ha sucedido, señor presidente, pero puede suceder- que uno tenga que mostrarle a extranjeros que vienen a la Provincia de Córdoba y los lleve a pasear por la zona del Centro Cívico, toda esta zona, y te digan: "Che, qué linda la Casa de Gobierno", no está pagada; "Che, qué linda la terminal del frente", no está pagada; "Che, qué lindo faro que han hecho allí arriba", no está pagado; "Che, qué linda Legislatura que han hecho", bueno, hemos

emitido unos bonos con los acreedores de la Provincia, podrían no estar pagados; “qué linda circunvalación que tienen”, no está pagada, ino está pagada!

El gran mérito de Schiaretti es haber pasado a la historia como el gran constructor de obras y haber bloqueado la información a la gente de forma tal que los cordobeses están convencidos de otra cosa. Para eso hay que disponer de una chequera prominente y manejar los medios de comunicación social, en fin, hace falta una serie de cosas.

Entonces, si los llevara a estos extranjeros por la Circunvalación, no está pagada, y están por hacer una tercera mano y no sé con qué plata la van a hacer; y después los llevo para Pilar y les muestro la gran obra termoeléctrica de la Provincia, y no está del todo pagada, ino está pagada!; “y mirá esos gasoductos troncales”, y no están pagados. ¿Saben ustedes lo que estoy diciendo?: no están pagados. Son bonos, títulos, cosas que se han tirado para adelante.

Miren, las obras de Schiaretti 2007-2011, un Boncor al 2017, quinientos y pico de millones de dólares; cuando llegó el 2017, ini las manos le pusieron, ni las manos!, pasó derecho al 2021, y ahí vinieron con 1.600 millones de dólares más. Y ahora tampoco “ni las manos”.

Acá, el 9 de diciembre pasó una cosa muy grave, que nadie se da cuenta o nadie la quiere ver; el 9 de diciembre pasó un vencimiento de deuda que no se atendió, de 25 millones, pero pasó algo mucho más grave: aprobaron un Presupuesto donde unilateralmente sacamos de la obligación de pago del año 2021 una deuda de 725 millones de dólares. Es todo un mundo de fantasía, es toda una fantasía y. ahora, como si todo eso fuera poco, 100 millones de dólares más para la Autopista de la Ruta 38. ¿Quién lo va a pagar a eso?

Razonen: ¿quién va a pagar? Así decía un abuelo mío; cada vez que veía mucho movimiento en la casa, que se juntaba mucha gente a comer un asado decía: “¿y quién va a pagar todo esto? Esa es la pregunta que me hago cuando veo todo este delirio tremens del dúo Sosa-Schiaretti, que es un delirio tremens porque no miran ni lo obvio. Cuando veo todo esto me pregunto qué gobernador va a pagar todo esto, porque no le va a alcanzar. Así cualquiera gobierna una provincia.

¿Quién pone en duda que hacen falta mejores rutas en los valles turísticos? Nadie puede poner eso en duda. ¿Quién puede poner en duda que una variante que corra en paralelo a la Ruta 5 y, de alguna forma, los fines de semana -sobre todo, al final de los fines de semana- evite toda esa constelación o arremolinamiento de vehículos que hay sobre la Ruta 5, arriba de Anisacate? Nadie pone en duda eso.

¿Quién pone en duda que Córdoba pudiera tener un centro internacional de cohetería, como el que decía el ex Presidente Menem, para mandar gente a Corea en 15 minutos? Pero no se puede, porque no está la plata, sólo están las deudas.

¡Sólo están las deudas, Schiaretti, pará de una buena vez! ¡Sosa, serenate, porque Córdoba va a seguir existiendo! ¡No pueden poner a Córdoba de rodillas!

Y ahora, como si nada, como si no les hubiera entrado un mínimo estímulo, otro endeudamiento internacional en millones de dólares.

Me parece que esto es de una irresponsabilidad manifiesta; solamente lo pueden hacer porque los diarios y los principales medios de comunicación social les vienen perdonando la vida a ustedes; solamente porque les vienen perdonando la vida a base de plata; por eso ustedes pueden seguir haciendo estas locuras.

El primer reproche que le hago a esta expropiación -de la otra va a hablar María Rosa- es que Córdoba no está en condiciones financieras. Me dirán: “Pero, doctor, tenemos crédito”; ¡qué vamos a tener crédito, si nos tratan de “chantas los acreedores”! A mí me da vergüenza; en la tercera y cuarta negativa al arreglo de la deuda nos dicen que somos unos “chantas”.

Pregunto: ¿qué pensarán los acreedores de la Provincia de Córdoba, señor presidente, cuando mañana vean que hemos decidido acometer un nuevo crédito internacional en esta circunstancia? No sé, salvo que yo no entienda nada de nada, y a lo mejor los tipos dicen: “mirá”; hemos perdido la solvencia, la confianza y seguimos avanzando sin ningún problema.

Es tan patético lo que ha hecho Juan Schiaretti con la Provincia de Córdoba -no sólo él, sino todos los que en su momento lo acompañaban con los votos- que sólo por efecto de la devaluación de la moneda -en tres mega devaluaciones- tiramos 200 mil millones de pesos; empezamos el año 2018 con una deuda pública -habiendo

recibido toda la plata que venía de afuera- de 37 mil millones de pesos, y hoy son 250 mil millones de pesos, siempre y cuando consigamos dólares baratos.

¿Qué les quiero decir con esto? ¿Sabe lo que es tirar 200 mil millones de pesos? La ministra Jure vino la semana pasada -ayer o anteayer- a contarnos de las soluciones habitacionales para 100 mil personas, soluciones habitacionales para 100 mil cordobeses; 24 mil familias, multiplíquelo por cuatro, te da casi noventa y pico de mil cordobeses en una gravísima situación, porque es la gente que la está pasando realmente mal.

¿Saben cuánto tiene a su disposición la ministra Jure para enfrentar la situación de los más pobres, generalmente votantes de Hacemos por Córdoba, como ha sido una tradición desde el año '45 en adelante? ¿Saben cuánto tiene? Siete millones de dólares, y esperan de la Nación 18, para atender derechos humanos fundamentales, y los que fagocitó Juan Schiaretti y los tiró a la basura, por ser el Gobernador planetario que no pagó las obras. ¡No las pagó!, entiendan lo que les estoy diciendo, y no hay ni amague de que las vaya a pagar; encima, ahora 100 millones de dólares más.

Es tan triste el irrealismo que estamos viviendo en esta Provincia, es tan triste, que le pregunté -no sé quién vino- al legislador Limia, que venía a explicarnos esta segunda licitación, de la concesión de la Ruta 5, de esta nueva obra en la Ruta 5: "Limia: ¿de dónde va a salir la plata?". Dijo: "como dice el proyecto, el Ministerio de Finanzas es el responsable de conseguirla". A ver, ¿de dónde?, ¿quién le va a prestar plata a Córdoba?

Espero que arreglen en las próximas horas -voy a ser el primero en festejar-, antes de que los acreedores se enteren de que hoy están autorizando una obra -porque esto ya es un principio de autorización- que cuesta 100 millones de dólares.

El peronismo -por eso no entiendo más nada-, ustedes, que han sido gobierno, que han gobernado de la mano de los más humildes, han llenado de cemento a esta provincia y, encima, no han pagado el cemento, y ahora vienen con un déficit habitacional inmenso en esta Provincia a poner 7 millones de dólares.

A ver, en la Ruta 38, ayudamos...

¿Ustedes saben que la obra más cara del planeta es cordobesa? Por si no saben, se los cuento. Los 13 kilómetros finales del Camino al Cuadrado superaron en 400 por ciento la ruta más cara del planeta; ¿saben eso? Miren el esfuerzo que les costó a los cordobeses los 4.100.000 dólares de cada uno de esos kilómetros, porque a alguien se le ocurrió que la ruta -escuchen esto- tenía que pasar por el sur del cerro El Cuadrado, cuando estaba pensado pasar por el norte del cerro, donde la roca era sólida. Pero al intendente de Valle Hermoso, hoy senador de la Nación, le interesaba que pasara por el sur, donde la roca no estaba firme; hubo que hacerlo de nuevo, a ¡4.100.000 dólares el kilómetro!

Por supuesto, hicimos la denuncia; el fiscal anticorrupción, que es el vigía del tema, dijo que había habido un mal cálculo de un empleado de Vialidad.

Entonces, a ese valle, los cordobeses ya le pusimos una cantidad de dinero inmensa, y ese camino alivia muchísimo hacia el norte de Punilla. ¿No era más importante invertir en los sectores más humildes de la provincia de Córdoba?

Nos hemos visto patéticos esta semana, con la ministra Jure, y más en un momento...

Yo no termino de entenderlo al Gobernador; quisiera entenderlo. ¿Para qué?, si ya ganó cuanta elección había para ganar; ahora que nos deje vivir, que nos deje organizar las cuentas de la provincia de Córdoba; que alguien venga y ponga un poco de cordura.

Son 100 millones de dólares más, y no es lo único que hay.

Miren lo que nos espera en enero: 14 millones de dólares ahí no más, cuando comience enero, y 283 millones de pesos de deuda en febrero. ¡Todo es deuda! ¡Córdoba es toda deuda! ¡Todo es una mentira! ¡Córdoba es una mentira!

Si no hubieran estado blindados con los medios de comunicación social, ustedes no son gobierno. Así cualquiera gana elecciones.

En febrero, 16 millones de dólares, ahí no más, apenas empieza febrero, y otros 283 millones de pesos. No hay un periodista con la dignidad suficiente, en un medio grande, que les cuente a los cordobeses que ustedes son una mentira.

En marzo hay que pagar 18 millones de dólares más otros 283 millones, y así todo, todo. Y ya no pagaron el vencimiento de ahora, y quieren que les aprobemos 100 millones de dólares más.

Si ustedes quieren vivir en la mentira, háganlo; pero sepan que hay muchos que ya nos dimos cuenta de esto y vamos a trabajar para que lo sepan todos. Algún día los cordobeses van a saber cómo se puede mentir durante tanto tiempo, a tanta gente.

Nada más. Gracias.

Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador García Elorrio.

Tiene la palabra la legisladora Arganaraz.

Sra. Argañaraz.- Muchas gracias, señor presidente.

Respecto al proyecto que avanza en declarar de utilidad pública inmuebles para la construcción de la obra en la Ruta 38, es un proyecto que todavía no sabemos bien cuáles son los inmuebles que se expropiarán con exactitud. Estamos hablando de una autovía que tendrá más de 20 kilómetros, es decir, será una mega obra que va a atravesar el Valle de Punilla.

Este proyecto se trajo a la Legislatura sin mucha más información que un croquis, y se pretende votarlo hoy, a dos días de Navidad. Además, por lo menos nosotros y los vecinos, nos enteramos, a través de La Voz del Interior, de las declaraciones del presidente de la empresa Caminos de las Sierras de que se iba a licitar en marzo, o sea, quieren avanzar ya.

El Gobierno, en el año 2017, con la autovía en la zona Este, pretendía pasar por el pie de montaña, con las consecuencias que eso implicaba; la traza pasaba por un recorrido de más del 76 por ciento de bosque nativo. A esa ley también la querían hacer pasar, de hecho, expropiaron y licitaron sin consultar a los vecinos y vecinas de la zona, sin convocar a Audiencias Públicas y sin seguir los pasos que están en la Ley de Ambiente; esa ley no pasó producto, por supuesto, de la movilización popular. Ahora quieren volver a imponer esta ley sin hacer consulta popular, sin convocar a las audiencias y sin mostrar un estudio completo de impacto ambiental.

Pero, en un año en el que vimos cómo el Gobierno dejó pasar de manera escandalosa los incendios de más de 350 mil hectáreas -muchas zonas incendiadas son de la zona de la que estamos hablando, del Valle de Punilla-, incluso, no sabemos cuánto de esta obra va a tocar zonas incendiadas.

Estamos hablando de un Gobierno que dejó que suceda eso y tampoco resolvió una de las grandes consecuencias de los incendios en las zonas que es la emergencia hídrica.

Escuchamos a muchos legisladores que se vanagloriaban diciendo que se habían juntado con todos los intendentes de la zona, pero nosotros nos juntamos con las vecinas y los vecinos, y lo que nos dicen los vecinos de Biale Massé es que hay zonas en donde tienen que ir los bomberos a llevarles agua cada dos semanas porque no tienen agua potable.

Y hay cosas peores, como vecinos de comunidades indígenas campesinas que denuncian avasallamientos violentos, muy graves, porque tanto la construcción de esta autovía como emprendimientos inmobiliarios privados avanzan en terrenos ancestrales y quieren avasallar a comunidades como la de las Ticas y las del barrio Suncho Huayco, que denuncian esta violencia.

Mientras las vecinas y los vecinos plantean muchos problemas, tenemos que escuchar a legisladoras y legisladores -algunos se referencian al Gobierno nacional, muchos son oficialistas- decir, en los medios, que "esta vez no quieren tener problemas", que los vecinos, en realidad, son todos ambientalistas que no quieren ningún tipo de autovía, ningún tipo de obra pública. La verdad es que es muy loco pensar que exigir ser escuchados sea suficiente para este Gobierno para atacarlos.

Hay una realidad muy cruda en la zona de Punilla y, evidentemente, no todos viven la misma situación; pero, hablar de desarrollo punillense no va a tapar la realidad que viven miles de trabajadores, vecinos, comunidades indígenas -como decía antes- que, en medio de la pandemia, no tienen transporte público, no tienen dispensarios cerca, no tienen escuelas, no tienen agua. Y no es un capricho, porque ellos están dispuestos a discutir distintas alternativas; pero, también saben muy bien que la única forma de que este Gobierno los escuche es luchando, como lo hicieron en el 2017 y 2018.

Otro pequeño detalle que no nos dijeron, que no nos explicaron y que obviaron, es cómo se va a construir el tramo que atraviesa Biale Massé, prácticamente entera, sin que eso tenga un enorme impacto social, o cómo se va a atravesar la Reserva Hídrica Los Gigantes, sin que esto signifique un daño irreparable.

Pero el problema, señor presidente, no está en las autovías o en la construcción de las rutas, que nadie niega que son necesarias; el problema es que nos quieren convencer de que en esta alternativa se escuchó a los vecinos y a las asambleas cuando, en realidad, lo que se está haciendo es presentar una alternativa completamente nueva y negarles la voz, al mismo tiempo.

Ellos saben muy bien que para la planificación urbana es necesario escucharlos a ellos, que son los que más saben cuáles son las urgencias y las necesidades primarias, para que realmente sea una planificación integral. Además, los problemas de planificación urbana, y menos en esta crisis, en esta pandemia, no son solamente un problema de tránsito

Para mí, el problema más estructural está en que es completamente irracional la planificación urbana que se viene impulsando; destruyen el medio ambiente, se colapsan algunas zonas, se desutilizan otras zonas, se prioriza la construcción de countries, se prioriza la construcción de campos de golf, mientras se expulsan familias populares a la periferia; se desplazan comunidades indígenas para privilegiar negocios y el turismo.

Esa es la urbanización capitalista que, mientras deja a un montón de familias sin techo, al mismo tiempo va destruyendo la fauna, la flora, arruina el ecosistema y se reorganiza toda la circulación bajo un modelo extractivista que es el colmo de irracional, porque el Gobierno va a gastar 20 millones en plantines de algarrobo para reforestar zonas incendiadas y resulta que son plantines que no van a crecer en zona serrana, pero es un negocio. Mientras tanto, no son capaces de garantizar lo elemental, que es invertir para que la gente tenga agua potable.

Entonces, viendo todo esto, no es difícil desconfiar de la planificación que impulsa el Gobierno y confiar mil veces más en lo que dicen las vecinas y vecinos, que son los principales afectados.

Las obras viales se hacen centralmente pensando en los intereses de los grandes especuladores, los intereses turísticos o para el traslado de camiones con productos de exportación. Los problemas se van acumulando cada vez más, y acá no tienen responsabilidad los ambientalistas, ni los vecinos, ni las trabajadoras y trabajadores punillenses.

Por supuesto, necesitan mejorar la circulación y el transporte con respecto a cómo está la Ruta 38; muchos viajan a trabajar a la ciudad y necesitan mejor circulación; pero al Gobierno lo que primero le interesa es que la ruta tenga vista panorámica, que si hay camiones que trasladan productos de exportación tarden lo menos posible; y ya demostraron, con el intento anterior, que por unos minutos, para acortar el trayecto, para acelerar la circulación, son capaces de volar montañas y destruir lo poco que queda de bosque nativo.

Insisto: si ese proyecto no avanzó es porque hubo lucha de los vecinos de la zona.

Lo que las comunidades indígenas, los vecinos y las asambleas están buscando son mejores alternativas de construcción, pero que partan de respetar su terreno, su territorio; que partan de un estudio completo, estratégico ambiental total y, además, que se haga -y a eso lo vienen exigiendo desde hace años- un ordenamiento territorial participativo para poder cuidar los territorios nativos; y es lo mínimo elemental.

Incluso, no dejan de pensar alternativas para la circulación; las alternativas pueden ser muchas y complementarias, por ejemplo, rehabilitar la construcción del Tren de las Sierras; el mismo IPLAM ha considerado la necesidad de implementar sistemas de trenes livianos para el área metropolitana, incluido también el ramal del Tren de las Sierras. Nadie se opone a la construcción de autovías, o a la construcción de rutas, pero lo que se está exigiendo son condiciones racionales de planificación, con licencia social y con licencia ambiental. Incluso, un servicio de transporte público de calidad, estatal, bajo control de los trabajadores y los usuarios, ayudaría mucho al desarrollo urbano de la zona de Punilla.

Pero, por supuesto, si este fuera el interés del Gobierno hoy no estaríamos debatiendo a las apuradas este proyecto.

Desde ya, nuestro voto, como Frente de Izquierda, será negativo para ambos proyectos, y apostamos al desarrollo de la movilización popular porque, como se demostró en el año 2018, es la única forma de frenar este tipo de avasallamiento.

Muchas gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (González).- Legisladora Luciana Echevarría: la escuchamos.

Sra. Echevarría.- Gracias, señor presidente.

De acuerdo al informe y a lo dicho por el oficialismo en comisión, estamos a punto de votar dos proyectos de expropiación –uno para la autovía de Punilla y otro para el nuevo tramo de la Ruta 5–, por los que se busca garantizar dos obras públicas que sólo van a traer beneficios para la sociedad cordobesa, con las cuales se va a mejorar notablemente la calidad de vida de varias comunidades, reduciendo los tiempos de viajes y descongestionando el tránsito; además, se dice que se busca disminuir los accidentes; incluso, en el decreto del acuerdo por el crédito, se dice que se busca emitir menos dióxido de carbono.

También dicen, con relación a la Ruta 38, que la propuesta que traen hoy al recinto respeta todo lo planteado oportunamente por los sectores ambientalistas. Entonces, la primera pregunta que surge es por qué, si todo esto es verdad, estamos votándolos un 23 de diciembre, en un tratamiento exprés, a espaldas de la comunidad. Porque en estos momentos hay referentes de esa comunidad, afuera de esta Legislatura, reclamando justamente que los escuchen.

Apenas una semana pasó desde que ingresaron los proyectos, y esta votación se está por realizar sin más precisiones que dos planos borrosos. La respuesta es muy simple: no lo abren a la comunidad, ni dan un tratamiento mínimamente serio en este recinto, porque tienen plena conciencia de que estos proyectos afectan muchísimo al ambiente y, por lo tanto, no tienen licencia social para hacerlos.

Entonces, una vez más quieren votar, entre gallos y medianoche –o, lo que sería más preciso aquí, entre la sidra y el pan dulce–, dos proyectos que van en contra de lo que las comunidades demandan y reclaman, a punto tal, señor presidente, que estoy con ganas de presentar un proyecto para suprimir directamente las sesiones entre Fiestas, no porque no quiera venir a sesionar, sino porque ya es un ritual poco feliz del oficialismo aprovechar estas fechas para votar cosas en contra de los intereses populares.

Más allá de los posicionamientos políticos, por una cuestión de mínima seriedad, es imposible votar esto; en primer lugar, porque –insisto– no hay más precisión que unos mapas borrosos que marcan una traza por donde iría la autovía, en un caso, y la ruta en el otro, y con esto pretenden que avalemos.

Por más general que sea la expropiación, no sé cómo se supone que vamos a iniciarla sin que los proyectos de obra estén aprobados. En el caso de la Ruta 38, sólo está el aviso de proyecto en la página de Caminos de las Sierras, no hay ningún estudio de impacto ambiental al cual hayamos podido acceder, y en el caso de la Ruta 5 no hay nada de nada.

En segundo lugar, a pesar de que la información que tenemos es muy poca, podemos igualmente tener la certeza de que se afectan gravemente zonas de altísimo valor ambiental. La traza propuesta para la autovía de Punilla, por ejemplo, atraviesa la Reserva Hídrica Los Gigantes, que está protegida por la Ley 8.941; también afecta la Reserva Parque de Río Yuspe-Cosquín, a la Reserva Ecológica Natural y al Balneario El Portecelo.

En el caso de la Variante de Ruta 5, parte de la traza recorre la cicatriz de fuego reciente, demostrando que no sólo los empresarios usan el fuego para cambiar el uso del suelo, sino que acá el propio Gobierno, que debería estar remediando esas tierras, es el que pretende avanzar en obras sobre lo destruido.

Además –y siempre según lo reconoce el propio aviso de proyecto elaborado por especialistas de Caminos de las Sierras–, el proyecto de la autovía de Punilla se va a extender por más de 40 kilómetros, afectando un área que atraviesa zonas urbanizadas, áreas de interés arqueológico, zonas rojas de bosque nativo, áreas naturales protegidas, numerosas cuencas hídricas, algunos reservorios, cruce de ríos y arroyos, sectores de topografía escarpada que requerirán de voladuras y taludes; es decir, el impacto ambiental de esta obra es tremendo.

En tercer lugar, en realidad, lo más importante es la absoluta ausencia de la opinión de las comunidades afectadas por estos proyectos. Parece que la historia no les sirve para aprender que así no se hacen las cosas, señor presidente.

En el 2018, la comunidad de Punilla se los dijo claramente: “por ahí la ruta no va”, ¿y ustedes qué hicieron?, insistieron; les importó muy poco que el 80 por ciento de los participantes en la Audiencia Pública rechazaran la iniciativa, total, ustedes siempre cuentan con el aval de la Secretaría de Ambiente, cuyo único mérito hasta el

momento es haberse encargado un lindo sello que estampan en todos lados, sin ningún atisbo de responsabilidad.

Porque, a pesar de las apreciaciones que hacen algunas legisladoras oficialistas acerca de las asambleas ambientalistas, de que comen guiso con hongos alucinógenos, esos vecinos y vecinas, con o sin hongos alucinógenos, tuvieron la lucidez de frenar una obra que iba a realizarse arriba de un yacimiento de uranio, nada más ni nada menos; mientras los funcionarios, supuestos especialistas en la materia, iban a avanzar como si nada.

Hoy, de nuevo, los vecinos y las vecinas están diciendo “por ahí no”; hay monte nativo, hay cuencas muy importantes, hay reservas naturales y, de nuevo, no escuchan.

Las comunidades ya están manifestándose y lo van a seguir haciendo. Por eso, dudo de que realmente puedan avanzar, a pesar de las manos de yeso que hoy van a aprobar esto.

Me quiero detener en un aspecto porque se nos acusa, a quienes nos oponemos a estos proyectos, de estar en contra del progreso; incluso, un legislador en la comisión llegó a segmentar las opiniones según si pertenecemos o no al valle, como si para defender los bienes comunes uno tuviera que acreditar domicilio.

Otra legisladora hasta puso en duda si conocíamos la Ruta 38; sí, la conocemos bien, conocemos y recorremos toda la Provincia tomando, muchas veces, reclamos locales a los que los propios legisladores departamentales les dan la espalda.

Volviendo a la cuestión del progreso, me interesa porque realmente es un discurso que frecuentemente aparece cuando se quiere avanzar en este tipo de obras. Me acuerdo de que cuando acampamos contra Monsanto decían lo mismo; representantes de este Gobierno provincial, los del actual Gobierno nacional, decían que no queríamos el progreso. Sería interesante ver de qué progreso hablan, qué entienden por progreso. En Punilla, por ejemplo, están en una emergencia hídrica tremenda, faltan escuelas, faltan centros de salud, tienen un déficit habitacional importante.

Por eso, sería importante que estas comunidades pudieran opinar sobre cuáles son sus prioridades para invertir fondos públicos; pero no, como dijimos cuando se trató el Presupuesto, sólo algunos empresarios privilegiados pueden opinar sobre las obras necesarias en esta Provincia.

Pero, aun cuando nos enfocamos en los caminos, en la necesidad de transitarlos en el menor tiempo posible, de evitar embotellamientos, demoras, incluso, accidentes, cosas en las que, por supuesto, todos estamos a favor, también hay que decir que hay alternativas mucho más económicas que las propuestas, mucho más amigables con el medio ambiente.

No es verdad que las organizaciones ambientalistas no hayan propuesto otras alternativas. Además de proponer otras trazas posibles, una de las alternativas que los vecinos plantearon es la posibilidad de mejorar y reconstruir la red ferroviaria en Punilla. La respuesta es que eso no es jurisdicción provincial. Sin embargo, este millonario préstamo que toman para pagar la obra tiene garantía de Nación. Si pudieron sentarse para ponerse de acuerdo con este préstamo, bien podrían evaluar alternativas con miras más estratégicas y a largo plazo.

Nosotros partimos de una premisa: si algo destruye, enferma y contamina, no es progreso.

Estuve en contacto con vecinos y vecinas de la Asamblea de Paravachasca, y una de las preocupaciones que ellos plantean es que la inversión en infraestructura que plantea el Gobierno siempre se reduce a un desarrollo basado principalmente en el crecimiento económico de unos pocos.

Otros aspectos, como el equilibrio territorial, la equidad social y la participación ciudadana quedan completamente desdibujados. Por eso, sería muy importante que escuchen a las comunidades que son las verdaderas afectadas. Además, porque es lo que dicen las leyes vigentes, desde tratados internacionales a los que nuestro país adhiere, pasando por la Ley General de Ambiente 25.675; la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos 25.831, incluso las provinciales, como la Ley 10.208 y la Ley de Bosques 9814. Esta última dice, expresamente, que no puede haber ningún proyecto de estas características sin informe de impacto ambiental y sin audiencia pública; sin embargo, ustedes pretenden avanzar ahora con estas expropiaciones sin contar con ninguno de los dos, porque para ustedes los mecanismos de participación son, en el

mejor de los casos, un mero trámite formal, por eso, además, los proponen para los meses de enero y febrero. Una burla completa.

Leí ayer que nuestra Provincia es pionera en materia de legislación ambiental, pero que este Gobierno provincial es pionero en violarla, y la verdad es que no puedo estar más de acuerdo con esta afirmación. Las leyes están, pero, como siempre decimos, sin control popular son menos que letra muerta.

Mal que le pese al oficialismo, son las organizaciones ambientalistas y los vecinos y las vecinas de las comunidades quienes se están movilizandando cada vez más por la defensa de nuestros bienes comunes, quienes logran que se declaren zonas protegidas, quienes lograron arrebatar la Ley de Bosques, quienes ponen el cuerpo para apagar los incendios, en definitiva, quienes hacen lo que el Gobierno debería hacer y no hace.

En la comisión se nos dijo que ahora sólo se expropia y que después se van a implementar mecanismos participativos. Insisto, no tiene lógica aprobar una expropiación si no saben si van a poder concretar las obras, salvo que estén decididos a avanzar sin importarles la opinión de la gente y sin importarles lo que digan los estudios de impacto ambiental, y eso es lo que queda bien evidente con esta votación.

Por último, hay otro planteo en el que algunos se detuvieron, y es muy preocupante, que tiene que ver con el financiamiento de estas obras. En el caso de la Autovía de Punilla, sabemos que es con una nueva deuda en moneda extranjera por 75 millones, con todo lo que eso implica en este contexto.

Resulta realmente llamativo que esta Provincia quebrada, que no logra cerrar con los bonistas, siga insistiendo en endeudar a toda la población para planes y proyectos que ni siquiera cuentan con consenso social y que deberán pagar no sólo la población actual, sino, sin duda, las generaciones que vengan.

Por estos motivos, rechazamos ambos proyectos y tomamos el reclamo que se está sintiendo con fuerza en las calles y que seguirá creciendo para evitar que avancen -y encima en nombre de los vecinos y vecinas- en esta nueva destrucción de lo que es de todos.

Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.

Tiene la palabra el legislador Cossar.

Sr. Cossar.- Gracias, presidente.

Faltan días para que termine el año 2020 y vamos a estar cumpliendo nuestro primer año de los cuatro años de mandato que tenemos en la Legislatura.

La verdad es que cuesta acostumbrarse no a escuchar opiniones distintas a las nuestras -de eso se trata la democracia, de respetar la opinión del otro-, pero sí a escuchar de manera recurrente, permanente, agravios que tienen que ver con la persona; y más cuesta acostumbrarse -lo dije recién, cuando hablaba del proyecto anterior- a la inseguridad.

Tampoco nos tenemos que acostumbrar a esto de que agraviar de manera personal es gratuito, y a que cuando uno solicita una intervención no pretende alterar el orden del debate, es simplemente una intervención, y tenemos un triste récord: en el año, de veinte solicitudes de intervención, de cualquier legislador de la oposición, todas absolutamente negadas, y lo digo, presidente porque sé de su experiencia.

Uno de los primeros proyectos que traté acá fue casi un homenaje en vida que le hizo la Legislatura a usted; lo voté, por cómo había conducido en estos años esta Legislatura, y ojalá en los próximos tres años podamos cambiar esta mala costumbre de agraviar, de agredir sabiendo que se cierra el debate y no dar posibilidades de hacer una intervención, y de ejercer la mayoría de manera autoritaria.

Decía recién un legislador de Hacemos por Córdoba que no habíamos sabido cortar los yuyos. Es probable que cuando estuvimos en la gestión no aprobamos la materia de cortar los yuyos, o no lo hicimos con excelencia. De lo que estoy seguro es de que no nos quedamos de brazos cruzados viendo cómo se incendiaban 300.000 hectáreas de bosques, de eso estoy seguro.

Decía, también un legislador de Hacemos por Córdoba, que no habíamos cumplido en brindar servicios públicos a los vecinos. Es probable que no cumplimos con un grado de excelencia, pero de lo que estoy seguro es de que nosotros no tenemos ninguna responsabilidad en el asesinato de ningún vecino; de eso estoy seguro, absolutamente seguro, y más seguro estoy de que jamás, cuando ejercimos la función pública, encubrimos a los asesinos de nuestros vecinos de Córdoba, de eso estoy seguro, presidente.

Es probable que no les guste a algunos legisladores, a unos pocos -la inmensa mayoría creo que aceptan que nosotros pensemos distinto, somos de partidos distintos, concebimos...

Sr. Presidente (González).- Legislador Cossar: con toda prudencia le pido que vayamos al tema, estamos totalmente fuera del tema en discusión.

Sr. Cossar.- Es una introducción para que se interprete correctamente, porque en el proyecto anterior dije que sentía miedo no a caminar, tengo miedo a que me maten o a que maten a algunos de mis hijos. Ojalá a ninguno le suceda, ojalá ninguno tenga que llorar la muerte, entonces, como se interpreta mal, hago esta introducción para que no se me vuelva a interpretar mal lo que voy a decir con respecto al proyecto en cuestión.

No tengo miedo, tengo 52 años y camino bien derecho por la calle; miedo tengo a que me maten a uno de mis hijos, como les pasó a varios, como le pasó a Blas Correa, que le mataron a su hijo. Muchos de los que hoy están acá los encubren, algunos.

Voy a hablar de la Ruta 38, presidente, por el respeto que usted y la mayoría de Hacemos por Córdoba me merecen. A posteriori va a hablar la legisladora Carrillo, quien va a hacer referencia a la Ruta 5.

Nosotros, desde el bloque de la Unión Cívica Radical, vamos a votar en contra de estos dos proyectos. Eso no significa que, en el caso puntual de la Ruta 38, no entendamos que existe una problemática real del Valle de Punilla que se debe resolver, una demanda de tránsito que se incrementa notablemente en períodos turísticos; somos conscientes. Basta para ello analizar la información disponible de la Dirección Nacional de Vialidad, en la que se observa un aumento del tránsito medio diario, anual, de 2.761 vehículos-día entre los años 2010 y 2017; los problemas de congestión y accidentes en travesías urbanas e intersecciones, y consideramos como un comportamiento estacional similar en ambos períodos que se producen en ambos años, en los meses de mayor demanda turística.

Además, presidente, somos conscientes de la necesidad de integrar la zona sur provincial con los corredores este-oeste, norte-sur, noroeste-suroeste para el desarrollo económico.

Pero esta realidad, este problema, no implica aprobar cualquier proyecto de ley de declaración de utilidad pública y expropiación de inmuebles para efectivizar la traza de un proyecto vial que no ha sido puesto a consideración en tiempo y en forma; que tanto los legisladores -y menos los legisladores de la oposición- como la comunidad misma afectada, directa e indirectamente, conocemos en su totalidad. Necesitamos, necesita la gente, necesitan los vecinos contar con información sólida y rigurosa que explicita las razones técnicas, ambientales y económico financieras que motivan al Poder Ejecutivo a elegir la alternativa que se propone en la traza que figura en el Anexo 1 del proyecto de ley.

Preguntamos, por ejemplo, ¿por qué una autovía y no una doble calzada, mejorando la ruta que ya existe?; preguntamos, ¿cómo es posible que el Poder Ejecutivo eleve un proyecto de ley de utilidad pública y expropiación, de acuerdo a un croquis de ubicación genérico y que sólo se plasma en una página? Prácticamente, es firmarles un cheque en blanco para comprar un número de inmuebles de desconocida superficie por, obviamente, desconocido presupuesto.

Resulta menester indicar algunos aspectos que, a nuestro criterio, son relevantes, presidente. No se indican inmuebles ni superficies, porque el proyecto sólo está en etapa de factibilidad, pero no se cuenta con anteproyecto y, por ende, tampoco se cuenta con proyecto ejecutivo.

La traza atraviesa zona de bosque nativo, de acuerdo a lo establecido en la Ley 9814 y su decreto reglamentario, y ello trae, en consecuencia, además, la afectación de la fauna.

Téngase presente, presidente, que la Ley 9814, de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos indica, en su artículo 14, que en las categorías de conservación 1 -rojo- y 2 -amarillo- se podrá autorizar la realización de obras públicas de interés público o de infraestructura, y "para el otorgamiento de dicha autorización, la autoridad de aplicación deberá, en su caso, someter el pedido a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y su correspondiente Audiencia Pública".

Me olvidé de decir que suscribí en un todo, en un 100 por ciento, las palabras de la legisladora Luciana Echevarría, porque creo que describió muy bien la situación,

es muy probable que yo reitere varios puntos de los que ella ya mencionó, pero creo que corresponde, porque estamos fijando -como lo que dijo el concejal Rossi y lo que va a decir la legisladora Carrillo- la posición de bloque de la Unión Cívica Radical -perdón, legislador Rossi, es que me lleva tanto al pasado algún legislador que por ahí creo que estamos en la municipalidad.

Por su parte, presidente, la Ley de Ambiente 10.208 indica, en su artículo 15, que los proyectos públicos y privados consistentes en la realización de obras, instalaciones o cualquier otra actividad comprendida en el listado que, compuesto de 5 fojas, forman parte de la presente ley, como Anexo 1, deben someterse obligatoriamente al proceso de evaluación de impacto ambiental, previo a su ejecución. El proyecto que nos ocupa está contemplado en ese Anexo 1, inciso 10).

Además, en el artículo 18 de dicha ley, se entiende por "proyecto a la propuesta que realicen o proyecten realizar personas físicas o jurídicas -públicas o privadas- a desarrollar en un determinado tiempo y lugar. Puede estar referido tanto a políticas de gobierno, generales o sectoriales, programas provinciales, regionales o locales, proyectos de construcciones o instalaciones, como otras intervenciones sobre el medio natural o modificado".

El proyecto de ley que se pretende aprobar, presidente, no incluye -es un poco tedioso todo esto que uno va mencionando, pero es importante, porque las versiones taquigráficas quedan para el tiempo, para cuando la sociedad venga a pedir rendir cuentas- las superficies, ni los datos catastrales de los inmuebles que pretenden expropiar; se encuentra en la etapa A -idea, prefactibilidad, factibilidad y diseño del proyecto- y resultaría obligatorio realizar el estudio de impacto ambiental y Audiencia Pública, en forma previa al dictado de la ley de declaración de utilidad pública.

Se detectan áreas protegida potencialmente afectadas por el proyecto: Reserva Hídrica Los Gigantes, Reserva Parque Recreativo Natural y Cultural Río Yuspe-Cosquín, Reserva Naguan Tica, Reserva Ecológica Natural y Balneario El Portecelo.

Condicionantes socioeconómicos: el proyecto tendrá un fuerte impacto sobre las propiedades privadas -viviendas-, parte de la traza, etapa 1, se plantea por zonas urbanas, lo que impacta de forma directa sobre los asentamientos urbanos. Si bien el diagrama de la travesía se esfuerza en minimizar el impacto sobre viviendas, en muchos sectores resulta imposible, fundamentalmente en la zona de Biale Massé; es decir, dicho en criollo, por más que lo quieran ocultar, es claro que va a impactar, y mucho, en la zona de Biale Massé, en lo que tiene que ver fundamentalmente con las zonas urbanas.

Tramos 1 y 2, conexión traza zona urbana Comunas de San Roque, adecuación E55. El principal condicionante socioeconómico identificado en estos dos tramos es la generación de un efecto barrera entre la urbanización y el acceso al Embalse, debido a la construcción de la vía con característica de autovía.

Además de la traza, hay una ocupación de terreno donde hoy se encuentran instituciones que, entre otras actividades, ofrecen espacios de recreación deportiva.

Otro condicionante socioeconómico de importancia es la cantidad de expropiaciones de viviendas y terrenos de privados dentro de una zona urbana con cercanía al Embalse, por lo que se supone que el valor de la tierra es mayor.

Tramo 3, Cruce Embalse. El principal condicionante socioeconómico son las expropiaciones a realizar de terrenos de alto valor económico por su cercanía al Embalse y su entorno natural de bosque.

Tramo 4, Quebrada y Urbanización. En este tramo se han identificado dos condicionantes principales; uno, expropiaciones de terrenos rurales destinados a la producción avícola, principalmente, generando así una necesidad de estudiar la situación catastral de cada predio; dos, generación post construcción de una nueva frontera de urbanización hacia el oeste, ocupando así espacio de bosque nativo y resultando la necesidad de expandir los servicios municipales más allá del ejido municipal vigente.

Tramos 5, Zona Periurbana y Rural 1. En este tramo se identifican no sólo los mismos condicionantes del tramo anterior respecto a la necesidad de expropiación de terrenos rurales y la generación de una futura nueva frontera de urbanización, sino que, además, debido a la localización de sectores vulnerables, sería necesario implementar un proceso de relocalización de sectores urbanos.

Tramo 6, Costa y Cruce del Río Cosquín. El principal condicionante socioeconómico son las expropiaciones a realizar de terrenos de alto valor económico por su cercanía al curso de agua del Río Cosquín y su entorno natural de bosque nativo.

Zona 7, Periurbana y Rural 2. En este tramo se han identificado dos condicionantes principales: primero, expropiación de terrenos rurales destinados a la producción local y, segundo, generación post construcción de una nueva frontera de urbanización hacia el oeste, ocupando así espacio de bosque nativo.

Condicionantes culturales y arqueológicos. Se presume altamente probable que en toda la traza propuesta se encuentren sitios de alto valor arqueológico y cultural, siendo necesario realizar un estudio e informe de prospección arqueológica previa.

Pueblos Originarios. La línea de base ambiental del proyecto deberá contemplar, entre otros aspectos relevantes, el relevamiento de los pueblos originarios con personería jurídica y geolocalizarlos, de manera de verificar la incidencia del proyecto.

Así las cosas, presidente, aburrido quizás para algunos, pero necesario, este bloque de la Unión Cívica Radical considera poco serio aprobar de esta manera el proyecto que se eleva, sin perjuicio de reconocer la importancia que tiene resolver la problemática de la actual traza, atento el incremento de la demanda de tránsito; esa es una realidad que nadie niega. Pero ello debe realizarse en base un proyecto vial que contemple la minimización de impactos ambientales negativos y, en su defecto, su compensación o mitigación. Para ello, presidente, resulta necesario realizar el estudio de impacto ambiental con la obligatoria participación ciudadana, en el marco de la Ley 10.208, de Ambiente Provincial, y la Ley de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo.

Como proyecto vial, entendemos que sería muy positivo que contemplara, además, los lineamientos que hemos propuesto, hace poco, en nuestro proyecto de ley de movilidad sustentable -ingresado en esta Legislatura y que, como tantos otros, no hemos logrado ni siquiera que se discuta en comisión-, que promueve la formulación de un plan estratégico de movilidad sustentable para Córdoba. Estamos proponiendo que la Provincia de Córdoba tenga un plan estratégico de movilidad sustentable con tratamiento especial de la infraestructura interurbana.

No entendemos, presidente, por qué una obra de esta envergadura, que fue planteada por tramos -ambas expropiaciones ingresaron planteadas para un tramo-, chasquidos de dedos, en poquísimas horas, lo que empezó planteado por tramos ahora avanza sobre el todo; con el mismo proyecto, con la misma información, cambiaron y ya no pretenden expropiar un tramo, sino que pretenden declarar de utilidad pública y sujeta a expropiación la totalidad de ambos proyectos.

No entendemos por qué en este año, 2020, que fue planteado por el mismo oficialismo como un año de una dificultad manifiesta, se avanza con un proyecto que reclama participación ciudadana, sin tenerla; que reclama información, sin tenerla. Ambos derechos, presidente -la participación ciudadana y la información-, están expresamente en el Acuerdo de Escazú, que fue ratificado por el Congreso de la Nación hace poquísimos tiempo.

Creemos, presidente, que aprobar sin debatir, sin consensuar con la ciudadanía que verá afectados sus intereses y la capacidad de decidir por su calidad de vida, se aleja de manera absoluta de lo que el concepto de sustentabilidad significa.

Se puede avanzar sin desarrollo, pero sólo se puede desarrollar si se garantiza el bienestar social y ambiental. Se puede avanzar sin desarrollo, pero sólo se puede desarrollar si se garantiza el bienestar social y ambiental.

Cuando está en juego lo público, la forma es tan importante como el fondo, presidente. Los medios son tan esenciales como las causas. Son miles de kilómetros, son millones y millones de pesos, son miles de familias involucradas.

Entonces, desde la Unión Cívica Radical, entendemos que no puede ser a cualquier precio, no puede ser de cualquier modo, no puede ser sin debate, no puede ser sin participación, no puede ser sin información, no puede ser unilateral. Nada que sea público, como son estos dos proyectos, puede ser tratado de esta manera.

Es todo, señor presidente.

Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.

Tiene la palabra la legisladora Nadia Fernández.

Abra su micrófono, por favor, legisladora Nadia Fernández.

Sra. Fernández.- Está abierto, presidente.

¿Ahí está? ¿Me escucha, presidente?

Sr. Presidente (González).- Perfectamente. Prosiga, legisladora.

Sra. Fernández.- Decía que me llama la atención que algunas fuerzas políticas que integran el Poder Legislativo de esta Provincia, que son importantes, históricas, que tienen o han tenido intendentes en la zona de Punilla, estén en contra de una obra de semejante envergadura, que es muy esperada en el valle.

Entiendo que mis colegas legisladores de la zona seguramente van a intervenir, pero me parece importante decir algunas cuestiones.

Primero, la importancia de realizar una obra de estas características, porque nuestra provincia está en condiciones de encarar obra pública aún en tiempos de pandemia; eso habla de la solidez del equipo de Gobierno que la administra la Provincia, señor presidente, que es capaz de encarar una obra de estas características, junto a otra serie de obras que fueron anunciadas y conocidas al momento, incluso, de discutir el Presupuesto la semana pasada o la anterior.

Por otro lado, quiero decir que es importante distinguir algunas cuestiones. Escuché al legislador preopinante –no me voy a remitir al pasado o tan al pasado– hablar del ambiente, haciéndose eco de algunas organizaciones serias –porque las hay, muy serias–, como el Foro Ambiental, que muchas veces tiene opiniones en contrario a este Gobierno –le diría que casi la mayoría–, y que denunció al Intendente Mestre el año pasado, quien fue imputado por la Fiscal Filoñuk por incumplir la normativa ambiental nacional.

Con el tema de la “Ficha Limpia”, ese proyecto que quieren discutir, algunos están más sucios que una papa; la verdad, no puedo creer esto de una fuerza política tan importante y respetable. Dolina decía que había dos buenas formas de ser argentino –yo digo de ser cordobés–: una, es ser peronista, y la otra buena forma es ser radical; pero, evidentemente, algunos no están a la altura de las circunstancias y no tienen una mirada estratégica de lo que supone hacer una obra de estas características.

Por un lado, quiero decir que nosotros, este Pleno, trabaja hasta el 30 de diciembre, como lo establece la Constitución Provincial; no nos escondemos de nada, no necesitamos ocultarnos de nada ni legislar entre “gallos y medianoche”. La Legislatura funciona hasta el 30 de diciembre, salvo excepciones; así que, si alguno se quiere ir antes, que pida licencia; si quieren tomarse vacaciones, que se las tomen, pero esta Legislatura puede legislar y aprobar leyes hasta el 30 de diciembre, y así lo va a hacer. Acá no nos ocultamos de nada; los 51 legisladores de Hacemos por Córdoba, al aprobar este tipo de proyecto, lo podemos hacer poniendo la cara y con la frente bien alta, señor presidente, muy alta.

También, quiero decir, en relación a este proyecto puntual –por mucho de lo que se dice–, que el anteproyecto fue presentado por Caminos de las Sierras; de hecho, hubo una reunión con legisladores de la zona y con intendentes de todos los partidos políticos, que son los que, en definitiva, tienen representación y legitimidad en esa zona; son los que representan a los vecinos juntos con sus Concejos Deliberantes, porque esa legitimidad y esa legalidad en la representación está dada toda vez que se presentan cada cuatro años a elecciones.

Nosotros tenemos un sistema de representación en los municipios, en la provincia y en la Nación; no somos la Atenas del siglo V antes de Cristo, presidente; no resolvemos la obra pública estratégica de esta Provincia a través de asambleas de referentes testimoniales en el tema, francamente.

También hay que distinguir, en esta masa crítica de asambleas y organizaciones ambientalistas en donde, reitero, hay algunas que respeto muchísimo; nosotras las escuchamos; nosotros sí escuchamos y estamos dispuestos a escuchar a todo el mundo, cumpliendo con la normativa vigente que establece los canales de participación ciudadana en materia ambiental.

Este proyecto fue presentado por Caminos de las Sierras; está colgado en su página; hay un aviso del proyecto; ya entró a la Secretaría de Ambiente para cumplir con la normativa y con el cursograma necesario.

Están en conocimiento la Dirección Provincial de Vialidad, la Secretaría de Ambiente, la Agencia Córdoba Cultura, la Agencia de Turismo; nosotros, como Legislatura; las comunas y las municipalidades y, además, está en cumplimiento de las normativas y criterios de la normativa nacional y provincial.

Entonces, creo que, primero, hay que tener presente que nosotros tenemos la obligación de pensar esta Provincia, de visualizar políticas a largo plazo. Y cuando imaginamos, cuando planteamos –mejor dicho- y discutimos un proyecto de estas características, que no es más que una expropiación –porque por eso hay que empezar-, me parece que es necesario tener la seriedad para saber cómo se resuelven este tipo de cosas.

Cuando el proyecto entra a la Secretaría de Ambiente, a partir de ahí, desde la Secretaría de Ambiente se hace la convocatoria a las audiencias públicas, en enero, en febrero, cuando se disponga. La verdad es que eso no es ocultar nada.

También quiero decir, atendiendo al proceso, porque fue una obra muy discutida entre el idealismo ambientalista y la realidad, que nosotros, dentro de nuestra política de Gobierno, tenemos el progreso, pero conciliado con la protección de nuestro ambiente.

Y no me hablen de incendios, presidente, porque expusimos largamente la cuestión de los incendios, respondimos todos los pedidos de informes; cuando veo, a veces, que se hacen afirmaciones mintiendo, directamente, ya no hay posibilidad de discutir. Lo entiendo porque tienen ninguna responsabilidad de Gobierno, entonces, queman todas las naves porque no les importa nada, y dicen cualquier cosa; por eso, no voy a entrar en ese tema.

Pero quiero decir que, una vez que se haga la Audiencia Pública, se va a escuchar a todos los sectores, como ya se hizo una vez. Y también quiero recordar que, en las audiencias públicas, además de los planteos de las organizaciones ambientalistas, al menos de las más serias –reitero-, de las más organizadas, de las que tienen cuadros integrales, formados, como el Foro Ambiental que lo denunció a Mestre, también hay otras que hicieron algunos planteos, y uno de esos planteos, el más importante –le diría-, fue el de la traza, el de la actual traza que presentó Caminos de las Sierras, que es que vaya por el Oeste.

Esto no es un invento nuestro, presidente; esto es porque se escuchó; esto es porque tenemos la capacidad y la madurez suficiente para saber hasta dónde avanzar, en el cumplimiento de la normativa, cumpliendo con todas las leyes y, por supuesto, protegiendo el bienestar general.

Fíjense que, en aquel momento –le estoy hablando del 5 de octubre de 2018-, en diarios nacionales, en el Diario La Nación –se lo voy a citar textual-, Fernando Barri, que es investigador de la UNC e integrante de la Asamblea Punilla, admitió –leo textual- que “desconocen si en la resolución oficial hay también cuestiones presupuestarias”; apuntó que “entiende que excede ese punto la problemática que se le presenta a las organizaciones ambientales”; y dijo: “Vieron que este trazado era muy resistido, pero también inviable; por el Oeste –siguió diciendo- es posible y es mucho mejor”. Esa fue, básicamente, la conclusión de todas las organizaciones, las que antes eran grupos de manipulación psicológica o sectas con terapias alternativas ocultas en las sierras y las organizaciones ambientales serias, con las que se puede hablar, dialogar, y que muchas veces traen ideas y planteos serios como, por ejemplo, el que hicieron ante la fiscal Filoñuk cuando se lo imputó a Mestre.

Entonces, presidente, aquí se puso en duda la legitimidad y la legalidad de la representación que tienen los intendentes de la zona, de todos los concejales de la zona, de los legisladores de la zona, de las Cámaras, de los vecinos en general. Hablan de los vecinos en general. ¿Qué es “los vecinos en general”?, no lo sé, presidente, francamente.

Ahora, lo que sí sé es que este proyecto, hasta el momento, es un aviso de proyecto donde estamos haciendo una expropiación; estamos declarando, en el marco de la normativa provincial, la expropiación, a los fines de garantizar que sea posible, de una vez por todas, la realización de una ruta que es sumamente estratégica para la conectividad de esta Provincia, en términos regionales y nacionales, presidente.

Entonces, cualquiera que tenga voluntad de acción política, cualquiera que tenga voluntad de ofrecerles algo a los ciudadanos, no puede oponerse a una ley y a una obra de estas características.

Nada más, presidente.

Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.

Tiene la palabra la legisladora Marcone.

Sra. Marcone.- Gracias, señor presidente.

La verdad es que este sistema de contestar diciendo “y a vos más” -ya lo he dicho varias veces-, no sé si será por mi edad, pero me parece que le quita altura al debate y, además, le quita seriedad a lo que estamos hablando.

Voy a leer una nota que me llamó la atención: “La administración de Juan Schiaretti entiende que la recaudación se encuentra a niveles bajos que arrastra desde hace más de un año, y que el Ahorro Corriente va a mermar lo suficiente como para acotar sustancialmente el margen para obra pública. A esto, hay que adicionarle la casi nula posibilidad de conseguir préstamos en el mercado externo, a tasas razonables; al menos, por ahora, hasta que se establezca el tipo de cambio y se concrete, a nivel nacional, un acuerdo por el pago de la deuda. Con fondos limitados, el foco estará puesto en tres obras viales grandes en el Gran Córdoba y en proyectos de mediana envergadura estratégicamente diseminados en la geografía provincial. Así lo interpretan en el Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento, a cargo de Ricardo Sosa, desde donde argumentan que, a diferencia de otros años, en los que la obra estuvo centrada en grandes proyectos, esta vez la inversión estará distribuida en numerosos trabajos medianos. Hay tres obras viales que se destacan en el Presupuesto: la continuación de la Autovía de la Ruta 38 hasta La Cumbre, la finalización...”

Sr. Presidente (González).- Perdón, legisladora.

La legisladora Nadia Fernández le solicita una interrupción, ¿se la concede?

Sra. Marcone.- Sí, como no.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra, legisladora Fernández, brevemente, por favor.

Sra. Fernández.- A través suyo, señor presidente, quiero que me aclare, si puede, cuando termine de leer la legisladora Marcone, a qué se refiere con “altura”, en cuanto al debate, cuando dice que le quita altura y que le quita calidad. Quiero que repita y diga a qué se refiere, o a quién se refiere.

Gracias, presidente.

Sr. Presidente (González).- Continúe, legisladora Marcone.

Sra. Marcone.- Concretamente, señor presidente, me refiero a los legisladores de Hacemos por Córdoba, a la legisladora preopinante y al doctor Francisco Fortuna, quienes para justificar la validez de una obra atacan a quienes opinan distinto de ellos. Creo que eso le quita altura al debate, porque creo que lo que estamos analizando es la obra y los antecedentes para poder justificarla; nos guste o no, a quienes están en Hacemos por Córdoba y a quienes estamos en las minorías, que no siempre somos oposición.

Sigo con mi lectura. “Hay tres obras viales que se destacan en el Presupuesto: la continuación de la Autovía de la Ruta 38 hasta La Cumbre, la finalización del tercer carril de la Circunvalación de la Capital, y la extensión de la Autovía de la Ruta Provincial 5 hasta Anisacate, y luego hasta a Villa Los Aromos. Si cerramos el financiamiento, esas serán prioritarias.”

Esta nota, de la Revista Regional de Alta Gracia, no data de este período, data de fines del año 2019, o sea que estamos discutiendo sobre obras que, con muy buena intención, se programan y se ponen en las planillas de obra, ejercicio tras ejercicio, pero que no se logran llevar a las efectividades conducentes.

Mire, señor presidente, son dos las obras que, en las planillas de la ACIF figuran, y que dividen el trabajo que se va a hacer desde el nudo de Alta Gracia hasta Anisacate y desde Anisacate hasta Villa Los Aromos. La primera parte, hasta Anisacate, es la Obra 3277, que tiene financiamiento de la ACIF; pero, curiosamente, esta obra ya fue presupuestada para el año 2018 y para el año 2019.

Antes de que me lo pregunten, ni en el 2018, ni en el 2019, ni en el 2020 se ejecutó absolutamente nada. Lo curioso es que, en 2018 y en 2019, quien iba a ejecutar la obra era Caminos de las Sierras; en ambos años el presupuesto asignado era de 150 millones de pesos; para el año 2020 ya tenía un presupuesto de 930 millones de pesos. Para este año, esa obra tiene un presupuesto de 1.340 millones de pesos, unas monedas más. O sea que, en realidad, si lo transformamos a dólares, esa primera etapa perdió, en dólares, el 6 por ciento de su valor.

Pero, la segunda etapa...

-Se interrumpe el audio.

Sra. Marcone.- Perdón, señor presidente.

Según vemos en el esquema que nos acercaron, en la pequeña hoja en la tuvimos que dilucidar de qué se trataba, esta parte menor de la obra tenía asignada, para el Presupuesto 2020, 624 millones de pesos que, a dólares de ese momento, eran 9.298.808 dólares; si a esos dólares los transformamos al valor que está consignado para el Presupuesto de este año, deberíamos haber tenido, como asignación en pesos, 948 millones y medio. ¿Saben cuánto tiene? 1.773.990.000 pesos; casi duplica el valor en dólares de lo que tenía asignado en el Presupuesto anterior. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué se ha modificado? No lo sabemos.

Entonces, aparte de todas las objeciones que ya se han manifestado en este recinto respecto a la inoportunidad, a la falta de financiamiento, al endeudamiento que va a requerir y a la falta de un estudio ambiental serio, cuando se empezó a discutir esta obra en la Legislatura, les recuerdo que el lunes leímos en todos los medios las declaraciones del presidente de Caminos de las Sierras en las que decía que esto era simplemente un aviso de proyecto; o sea, un proyecto que desde el año 2018 está en danza, y que ha ido teniendo variaciones en su asignación, como las que acabo de señalar, me parece que, por lo menos, adolece de seriedad.

Tendrá que ver con lo...

-Se interrumpe el audio.

...acostumbrado Hacemos por Córdoba. Nosotros, señor presidente, creemos que las obras que benefician a los pobladores de la Provincia de Córdoba deben ser hechas, pero deben ser hechas con seriedad, con un análisis realmente profundo, analizando todas las aristas que hay que analizar; pero, sobre todo, nos preocupa esta inconsistencia y esta liviandad con que se viene, desde hace cuatro ejercicios -este sería el quinto-, tratando una obra que de 150 millones de pesos originales, el primer tramo, ahora va a estar en 1.340 millones, y el segundo tramo, de 624 millones casi se triplicó, porque pasó a 1.774 millones. Díganme si podemos prestarle el acuerdo a algo que tiene una asignación y un tratamiento, desde lo proyectado, tan errático y con tan poco sustento.

Por todo esto, reafirmo el voto negativo de nuestro bloque a ambos proyectos de expropiación.

Nada más, señor presidente.

Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.

Tiene la palabra la legisladora Carrillo.

Sra. Carrillo.- Gracias, presidente.

Sobre la presente declaración de utilidad pública y la expropiación de los bienes necesarios para la ejecución de las obras "Variante Ruta Provincial Nº 5, Tramo Rotonda Ruta Provincial Nº 5 y el acceso a la localidad de Villa Los Aromos", como recién lo manifestó el legislador Cossar, este bloque no va a acompañar estos proyectos.

Voy a manifestar lo siguiente: es cuestión de transitar los fines de semana por la Ruta Provincial Nº 5, a la altura de Villa Los Aromos, y ver la gran cantidad y el flujo constante de vehículos que se dirigen a la zona del Dique Los Molinos para reconocer que es necesario buscar estrategias y obras complementarias para evitar congestiones de tránsito en dicha zona, si bien es preciso remarcar que las mismas ocurren principalmente en días y horarios pico, es decir, a simple vista existe tránsito constante, pero la congestión se da en momentos puntuales.

En base a ello, se puede intuir la necesidad de generar una obra que descomprima la situación existente, pero lo que nos llama la atención y nos pone en alerta es la forma.

Al igual que el oficialismo, reconocemos cuáles son las necesidades de los habitantes de nuestra Provincia, pero queda en la forma apresurada y sin la presentación total de comprobantes que acrediten la urgencia de sus actos nuestra diferencia.

Por ejemplo, no hay un proyecto de perspectiva sobre cuánto es el costo de implementación del proyecto, lo cual es por demás llamativo y nos enciende las alarmas.

La situación financiera de la Provincia es por demás preocupante, sin embargo, se aventuran en una declaración de utilidad pública, expropiación y obra, sin siquiera decir cuánto dinero nos va a costar a los cordobeses esta obra. Parece que vivieran en una realidad paralela, donde no hay deuda o que tuviesen la maquinita de imprimir.

En segundo lugar, y que de forma complementaria agrava la situación, la obra implementada -y esto es más que nada para que la sociedad en su conjunto lo sepa, porque ustedes ya lo saben- al ser realizada por Caminos de las Sierras esquivó el control del Tribunal de Cuentas, por lo tanto, no sólo no nos dicen cuánto nos va a salir, sino que tampoco se va a controlar, salga lo que salga.

Además, cuando se consultó en el tratamiento en comisión sobre partidas asignadas a dicha obra, la respuesta fue negativa y de incertidumbre, por ende, no hay crédito asignado para su ejecución, ni se sabe de dónde se va a sacar la plata.

Por último, y aunque la legisladora de Hacemos por Córdoba nos haya dado la orden de que no hablemos de incendios, voy a hablar de incendios, voy a hablar de gastos, voy a hablar de educación, voy a hablar de todo lo que los legisladores tenemos el derecho de hablar, porque creo en el ejercicio de la democracia, en esa democracia que en el año '83 vino de la mano de un radical, de uno de los hombres más importantes de la República Argentina.

La situación de los incendios en la Provincia de Córdoba, particularmente este año, fue muy grave; quizás ya olvidaron lo que se vivió y es por ello que no han llamado a consultar a agrupaciones ambientalistas, porque también se suma que, por más que no sean requisitos obligatorios el estudio de impacto ambiental y la Audiencia Pública, no han sido presentados ni realizados.

Acabo de escuchar, también, que hubo reuniones con distintas entidades ambientalistas y con autoridades comunales; quiero pensar que ha sido en otra Legislatura, no en esta, porque no hemos tenido la oportunidad de participar de ellas. Por ende, no escucharon a la comunidad. Mi pregunta es: si no escucharon a la comunidad, ¿cómo conocen realmente la situación de esta población, más que nada a partir de este año de pandemia e incendios?, ¿cómo piensan insertar esta obra en esa zona?

Señor presidente: recapitulando, la congestión, principalmente en momentos pico de la temporada, existe; seguramente, muchas personas, en determinados momentos, estén urgidas por esta obra; por ello, no la rechazamos, pero no podemos acompañar las formas avasalladoras de este Gobierno, al que no le importa la situación financiera de la Provincia, quebrada y sin arreglo hasta hoy, y el escaso diálogo que utilizan para llevar adelante lo que a ustedes les parece correcto, sin estudio de impacto ambiental, sin escuchar a los vecinos y vecinas de la zona, sin escuchar a los grupos ambientalistas y demás actores.

Hace un momento, el legislador Rossi también manifestó que no somos dueños de la verdad, hay distintas opiniones y todas son importantes.

Como vecina de ese Departamento, y conociendo de cerca -tal vez es esto, principalmente, lo que me autoriza a hablar- lo que cada fin de semana sucede a lo largo de toda la Ruta 5, desde Alta Gracia, recorriendo las localidades de Anisacate, Villa La Bolsa, Villa Los Aromos, La Serranita, hasta llegar al Valle de Calamuchita, sé de la importancia de esta obra; sé de la importancia de brindar una solución a los vecinos.

He vivido mi infancia en Villa Anisacate, y la familia de mis padres todavía vive ahí. Sé que todos soñamos con el progreso, pero con el progreso con mayúsculas, con un progreso responsable, un progreso serio, con un progreso proyectado donde hayan participado todos los actores e interesados en el mismo.

Hoy, nuevamente me pregunto: ¿cuál es la razón para aprobar algo tan importante para la gente, sin la debida discusión y participación? Hubiera sido muy importante y enriquecedor haber trabajado en un proyecto integral, en el que hubieran intervenido con su aporte las comunas, el turismo, las comunidades regionales, las entidades ambientalistas y los vecinos, para que esta obra se insertara en un proyecto general de desarrollo de la zona.

Tengo la esperanza de que con el tiempo podamos empezar a pensar en grande, buscando soluciones generosas que enriquezcan de verdad a los cordobeses y que sean con una administración responsable y clara de lo que se invierte y de cómo se paga.

Estoy convencida de que el progreso es lo que todos buscamos, es con lo que todos soñamos, es lo que perseguimos, y esperamos que el Estado ayude, por ejemplo, con estas obras, pero responsablemente, no con un progreso que termine reflejando que se olvida de los medios y sea sólo el fin su propia justificación.

Gracias, presidente.

Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.

Tiene la palabra la señora legisladora Mariana Caserio.

Sra. Caserio.- Gracias, señor presidente.

Vengo a fundamentar el proyecto 31990/E/20, referido a una obra sumamente importante para nuestro Departamento Punilla.

He escuchado con atención todos los fundamentos que ha esgrimido la oposición para, de alguna forma, no acompañar una obra que es de vital importancia para nuestro Departamento; he escuchado muchos absurdos y muchas contradicciones.

Vuelvo a decir: parece que molestó que haya dicho, en una reunión de comisión, que sinceramente no conocen nuestro Departamento, porque quien realmente lo conociera y recorriera la actual Ruta Nacional 38 no podría ponerse en contra de una obra tan esperada y tan necesaria para el progreso –palabra muy bastardeada hoy, en este recinto– de un departamento cuyos habitantes merecen vivir mejor y tener la oportunidad de una mejor calidad de vida.

¿Por qué digo esto? Porque nuestro Departamento es netamente turístico, y cuando digo esto no hablo de unos pocos, hablo de muchas familias que realmente viven de la industria más importante de nuestra Provincia. Pero parece que eso no cuenta, parece que solamente tendríamos que escuchar a un grupo minoritario, ambientalista; ese es el grupo que hoy la oposición está defendiendo, porque esta obra tiene el aval de la gran mayoría de los vecinos de Punilla, y eso es indiscutible.

Entonces, que hoy la oposición venga a defender un grupo minoritario, realmente no se entiende. Sí entiendo lo de algún bloque, de algunas legisladoras que están defendiendo a sus votantes –porque no tengo ninguna duda de que ese grupo minoritario es votante de ustedes–; lo que no entiendo, lo que realmente me cuesta entender es al resto de la oposición que, como dijo la legisladora Nadia Fernández, tiene representación política, que tiene intendentes y hoy están desconociendo lo que sus propios intendentes les están pidiendo.

Por eso, pongo en duda la representación que tienen hoy. ¿Qué representación tienen, cuando ni siquiera son capaces de escuchar a sus propios intendentes, cuando hoy no están escuchando a los vecinos de Punilla que, en su gran mayoría, les están solicitando –y, seguramente, algunos los han votado– que escuchen este reclamo? Entonces, se pone en duda a quiénes están representando.

¿Por qué digo que no conocen nuestro Departamento o no han transitado la actual Ruta Nacional 38? Es una ruta que tiene una accidentología vial enorme, que ha quedado totalmente obsoleta; no tengo dudas de que debe ser una de las peores rutas que tiene la provincia de Córdoba, porque se inunda, porque es oscura, porque realmente es intransitable, y no solamente en épocas de verano cuando triplica la cantidad de vehículos, sino todo el año.

He escuchado las palabras “diálogo”, “escuchar”, y puedo hablar claramente, y con propiedad, porque fui parte de la Audiencia Pública del 2018, que se hizo en la localidad de Santa María de Punilla, y no quieren ser escuchados y no nos quieren escuchar, realmente, me quedé muy sorprendida –de esto puede dar fe mi compañero legislador Miguel Maldonado y todos los intendentes que en ese momento nos hicimos presentes en la Audiencia Pública– porque no nos querían escuchar.

Yo fui quien inició, como oradora, esa Audiencia Pública y puedo dar fe –y hay videos de eso– de que no escucharon ni una sola palabra de lo que tenía para decir, y cuando nos quisimos quedar a escuchar cuáles eran sus argumentos, tampoco pudimos porque el grado de violencia que ejercen estos grupos es alarmante.

Entonces, quiero pedirles, por favor, que si ustedes están representando a un grupo minoritario que es altamente violento, que falta el respeto –como todo el mundo en la Audiencia Pública lo pudo comprobar–, piensen un poquito; son cosas que hoy, a esta altura, en democracia no podemos tolerar.

Yo sufrí agresiones de todo tipo, en mi persona; no vengo a contar esto para hacerme la víctima, vengo a decir que cuando bregamos por el diálogo y por la escucha tenemos que hacerlo de quién lo pide, y eso no fue algo que pasó y no es algo que va a pasar.

En ese momento, escuchamos esos reclamos de que el nuevo trazado de la Ruta alternativa a la 38 no podía ir por el Este; tenía sus inconvenientes, se planteó en la Audiencia Pública y escuchamos ese reclamo; en ese mismo momento, quienes hablaron en la Audiencia Pública, hasta que nos tuvimos que retirar, plantearon que el

trazado tenía que ir por el Oeste, y es lo que estamos haciendo hoy. Porque venimos a presentar un proyecto que escuchó ese reclamo y, hoy, la nueva traza va por el Oeste.

Pero no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Porque, como dije en comisión, y lo reitero, no es el problema de la traza, es el problema de la obra. Entonces, lo que solicito es que sinceren, pero no conmigo, no hace falta; sincérense con los vecinos de Punilla, que no quieren la obra. Si no, lo que tendríamos que proponer, señor presidente, es que la obra se haga por el aire, porque por el Este no se puede, por el Oeste tampoco, entonces, ¿de qué estamos hablando?

Se dan cuenta de que hoy hemos tenido un debate totalmente vacío, porque están tratando de defender algo que es indefendible, porque no quieren la obra, y a esa explicación la tendrán que dar, porque son representantes del pueblo, ante mi Departamento, ante la gran mayoría de los vecinos que tienen muchísima necesidad de tener una nueva autovía para poder seguir creciendo, para poder seguir teniendo conectividad, porque tenemos una economía interna que vive del turismo.

He escuchado muchas cosas. Lamento decir -fui anotando, porque a veces tengo poca memoria- que he escuchado a un legislador hablar de doble mano; no podemos solicitar algo que realmente es inviable, tenemos que tener más seriedad para hablar de algo que no conocemos. Decir que se puede hacer una doble mano cuando es una ruta que cruza todas o casi todas las localidades de Punilla, es totalmente inviable.

Nos estamos quejando porque se están quejando por las expropiaciones que se hayan tenido que hacer en el nuevo trazado, y les digo: ¿ustedes saben las expropiaciones que deberían hacer si hacemos doble carril? No, no tienen idea, realmente no tienen idea.

He escuchado a algún legislador hablar del Gobierno nacional. Estamos sin memoria para recordar cuál es la herencia que nos dejó el Gobierno de Macri, cuál es el país que heredamos del Gobierno de Macri; no podemos ser tan livianos en las apreciaciones que hacemos y tenemos que tener memoria.

Me tildaron -obviamente que no me nombran- como que defiendiendo el Gobierno nacional; sí, defendiendo este Gobierno nacional porque este Gobierno nacional puso en el Presupuesto esta obra tan necesaria para nuestro Departamento, y tiene puesto 1.000 millones para este año y 1.500 millones para el año que viene. Por suerte, no somos como el Gobierno de Macri, que se cansó de tener propaganda diciendo que venía un montón de plata, incluso para el inicio de esta obra, y nunca vino nada; jamás, en cuatro años, mandaron un peso a Córdoba. Por suerte, nosotros no somos ese gobierno.

También he escuchado a algún legislador -no voy a dar nombre tampoco, porque después empiezan las interrupciones- acordarse del senador nacional. Qué casualidad que nos acordamos hoy del senador nacional, ¿será porque estamos un poco nerviosos, porque estamos enojados, a lo mejor, por el voto del aborto y traemos todo a este recinto, que no tiene nada que ver? Realmente, es para pensar y recapacitar.

He escuchado hablar del tren. Sí, como legisladores, estamos haciendo un esfuerzo enorme y estamos trabajando junto a todos los intendentes para volver a traer el tren a Punilla, pero una cosa no tiene nada que ver con la otra.

La verdad es que hemos escuchado muchas cosas que no tienen referencia con nada; hemos escuchado que quieren la obra, pero, en realidad, no la quieren; hemos escuchado que saben de la problemática que tiene la actual Ruta 38, pero no quieren la nueva autovía. Entonces, la verdad es que todo es muy contradictorio.

He escuchado referirse en forma despectiva a nuestro Gobernador, usando la palabra "patético", que entiendo que no ha sido hacia la persona del Gobernador, pero sí hacia su gestión, y nos olvidamos de que este Gobernador ganó con el 57 por ciento de los votos, que tiene legitimación de todos los cordobeses.

Entonces, necesitamos ser más respetuosos en este recinto. Cuando decimos que "se baja la altura del debate", ¿cómo es la democracia? ¿La democracia es para algunos o es para todos? Porque parece que algunos sí pueden decir un montón de barbaridades en este recinto y nosotros tenemos que mirar, porque cuando opinamos o decimos algo en el mismo sentido, ¡ah, se baja la altura del debate! En verdad, es un concepto de la democracia bastante raro.

Creo que el odio que tienen, ese odio hacia el Gobierno de Córdoba, hacia nosotros, hacia el Gobernador, hoy los está nublando. Realmente, creo que por eso que hoy no pueden ver la necesidad y que no tienen ningún argumento para oponerse a esta obra; solamente se oponen por ese odio que tienen de no poder aprobar nada en este recinto. Esa es la verdad, porque a esta obra la necesitamos, esta obra tiene el consenso de la sociedad en su conjunto y tiene el consenso de los intendentes.

Acá quiero hacer un paréntesis y agradecerles a los intendentes de Punilla con quienes, dejando de lado cualquier diferencia política -que las tenemos, como cualquier Departamento-, pasadas las elecciones, hemos trabajado siempre, codo a codo, en beneficio de los vecinos, y eso nunca nos ha nublado la vista; el odio nunca nos ha nublado la vista para pensar qué es mejor para los vecinos.

Entonces, le pido a la oposición que realmente deje de lado el odio y se ponga a legislar a favor de los vecinos que los votaron. Hoy están sentados en este recinto gracias a esos vecinos que confiaron en ustedes, entonces, tómense el trabajo de ver cuántas son las personas que realmente quieren la obra en Punilla y no cuáles son los grupos minoritarios que no quieren la obra y que -ya quedó más que claro- así vaya por el Oeste, por el Este o por el aire no van a acompañar este proyecto.

No entiendo para qué nos vamos tanto en debates que no tienen sentido, porque ¿saben cómo se terminaba esto hoy? Diciendo: “no queremos la obra”, a eso lo tienen que hacer y referirse a los vecinos de un departamento al que ustedes quieren privar de la posibilidad de progreso y de la posibilidad de vivir mejor.

Hablan de que este Gobierno solamente hizo asfalto; deberían estar contentos de vivir en una provincia que ha crecido durante estos 20 años, y de gobernadores que han hecho historia en esta Provincia. No voy a ponerme a sacar lo que hicieron o no hicieron ustedes, porque no tiene sentido, ustedes lo saben bien.

La verdad es que una cosa no quita a la otra, y tener una provincia pujante, una provincia con obras, no quiere decir que no nos hayamos ocupado de la gente que necesita, porque tenemos un montón de programas pensados para el que más necesita; porque eso es nuestro movimiento, siempre hemos defendido a los que más necesitan.

Y así hemos trabajado en este Departamento, que es Punilla, junto a los intendentes, junto a mi compañero Miguel Maldonado, recorriendo el Departamento todo el tiempo, porque somos gente de trabajo que ha recorrido este Departamento infinidad de veces; hemos estado siempre al lado de los vecinos y hemos tratado de llevar todas las soluciones que los vecinos necesitaban.

Estoy muy orgullosa del trabajo que hacemos en Punilla, muy orgullosa de tener una madurez política y estar a la altura de las circunstancias, trabajando sin miramientos políticos; eso es lo que esta Cámara tendría que hacer, y es lo que les pido a los legisladores. Dejemos el odio de lado.

Señor presidente: solamente quiero decir que adelante el voto positivo de nuestro bloque.

Gracias.

Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.

Tiene la palabra el legislador Fortuna.

Sr. Fortuna.- Señor presidente: voy a ser muy breve.

Escuché atentamente a las legisladoras Mariana Caserio y Nadia Fernández, ambas poniendo sobre la mesa y dejando absolutamente claro cuáles son los aspectos centrales en la discusión de estos dos proyectos de ley que tienen que ver con la declaración de utilidad pública y sujetos a expropiación de los inmuebles para la Ruta alternativa a la 38, tramo Costa Azul-La Cumbre; y con la declaración de utilidad pública y sujetos a expropiación de los inmuebles para la Variante Ruta Provincial Nº 5, tramo Rotonda Ruta Provincial Nº 5 y accesos a Villa Los Aromos.

Realmente, me parece muy importante, señor presidente, porque se han puesto de manifiesto cuestiones que hacen a una decisión política del Gobierno de la Provincia de Córdoba, del Poder Ejecutivo, en un momento muy especial; eso tiene un enorme valor, porque, precisamente, estamos concluyendo un año en el que, hace pocos días, hemos sancionado el Presupuesto de la Provincia y en el que hay una decisión política de invertir en obras de infraestructura como una herramienta fundamental para el desarrollo de esta querida Provincia, para morigerar las consecuencias de esta situación de crisis y de pandemia que hemos tenido, y que vamos a seguir teniendo por un tiempo.

El Poder Ejecutivo toma las previsiones en el momento oportuno y dispone de las decisiones y de la legitimidad que les da este Poder Legislativo a esas decisiones; porque siempre, señor presidente, cuando el Poder Ejecutivo toma una decisión la comparte con el Poder Legislativo, y de otra manera tampoco podría ser. Las cuestiones de forma se cumplen y son las cuestiones de fondo las que tenemos que discutir hoy.

Es importante que hoy declaremos de utilidad pública los trazados de estas futuras rutas. ¿Son importantes para los vecinos del interior de esas regiones?, ¿son importantes para la Provincia de Córdoba o no? Esa es la cuestión de fondo.

Es importante que no detengamos la Provincia por los antecedentes de este año 2020, que ha sido tan difícil. Siempre vienen aquí los legisladores de la oposición a pedir que avancemos y hagamos cosas; hoy tienen la oportunidad de acompañar y, lamentablemente, algunos, que siempre encuentran motivos, encuentran también hoy motivos para no acompañar.

No me extraña, señor presidente. ¡Qué me va a extrañar! El doctor Aurelio García Elorrio, permanentemente, tiene como muletilla, la deuda; el doctor García Elorrio no sé dónde vive, señor presidente. Se habrá preguntado, el año pasado, después del proceso electoral en el que el Gobernador Schiaretti obtuvo el 57.5 de los votos, ¿habré estado equivocado diciendo estas cosas que digo permanentemente en la Legislatura, cuestionándolo a este hombre en todas las cosas que hace?, ¿habré estado equivocado?, ¿cómo puede ser que casi el 60 por ciento de la gente piense de una manera diferente a la que yo pienso? Entonces, eso es bueno, lo valoré antes, cuando el legislador reflexionó; lo valoré porque me pareció que había evolucionado en su manera de mirar la realidad.

Pero, bueno, también en esto quiero decir algo, señor presidente, porque va en línea con algo que no me gusta. Nosotros somos respetuosos, más allá de que hagamos referencia, a través suyo, al nombre de algún legislador, que también a uno lo nombra; no tiene absolutamente nada de malo que uno mencione que otro legislador o legisladora está diciendo algo respecto de un tema.

El problema está, señor presidente, en que en este recinto sí se usan epítetos, se usan palabras, se usan calificativos que son muy dañinos. No sé si el legislador García Elorrio sabe lo que quiere decir “delirium tremens”; no sé si lo sabe, pero lo dijo antes, haciendo referencia al Poder Ejecutivo provincial. ¿Sabe lo que quiere decir eso, legislador? Precisamente, vaya, léalo, si no lo aprendió o no lo sabe, y después se va a dar cuenta de que tuvo una falla grave al mencionar, al descalificar de esa manera a los miembros del Poder Ejecutivo provincial. Pero no lo vamos arreglar con García Elorrio, porque él va a seguir diciendo que la deuda, la duda y la deuda.

Entonces, cuando él se pregunta ¿qué pasa con la autovía? ¿La quiere o no la quiere a la autovía? Si la quiere, vea cómo hace para ayudar a que esté esa autovía, y no invente permanentemente temas que no tienen que ver con la realidad.

Córdoba invirtió 5.500 millones de dólares; el 55 por ciento lo hizo con fondos propios, el resto con un programa de endeudamiento, porque, efectivamente, cuando uno trabaja para varias generaciones no puede hacer todo con los gastos corrientes del Tesoro provincial, señor presidente. Eso es pensar con atraso, eso es quedarse en el siglo pasado.

El legislador García Elorrio quiere que la Provincia siga en el siglo XIX o XX; ese es el problema que tiene; tiene que ponerse al frente del espejo y decir: “¿qué quiero para mi provincia? Esto”. Bueno, perfecto, que no siga, entonces, con ese discurso, porque es un discurso que atrasa, que está fuera de la realidad.

No nos va a convencer a nosotros con este tema de la deuda, porque es una cuestión que no tiene nada que ver con la realidad. Córdoba va a cubrir sus responsabilidades, como lo hizo históricamente; vamos a seguir haciendo lo que tenemos que hacer, mal que le pese al doctor Aurelio García Elorrio.

El legislador Cossar, cada vez que puede y tiene oportunidad, también plantea cuestiones de forma.

Señor presidente: realmente, creo que hay que dejarse de hipocresías. En un momento determinado, cuando se le preguntó, por un medio gráfico de esta Provincia, qué pensaba de la Legislatura, dijo que la Legislatura defraudaba a la gente, que en la Legislatura defraudamos a la gente. Si esa es la mirada que tiene el legislador respecto del trabajo de los 70 legisladores, realmente, es una mirada muy corta, muy mezquina y que, efectivamente, pone en evidencia la manera de sentir y pensar que tiene él de

su propio trabajo. Porque viene acá y dice que esto es sin debate, y acá estamos debatiendo; dice que es sin participación, cuando la participación de la gente va a quedar habilitada después que se autoricen estas expropiaciones; que no se va a consultar, pero claro que se va a consultar.

La legisladora Mariana Caserío participó, junto con los legisladores, intendentes y jefes comunales que estuvieron los otros días aquí, con nosotros, comentándonos sobre la importancia que ellos veían en la ejecución de estas obras, y ellos están todos de acuerdo. Los únicos que no están de acuerdo son ustedes. ¡No se equivoque, legislador Cossar! El que está fuera de la realidad es usted; el que no ve la realidad, es usted. El resto vemos la realidad y sabemos que son cuestiones de fondo; no hay que buscar argumentos superficiales para negar el apoyo a una obra de esta naturaleza y de esta envergadura, y con el sentido que tiene para la región y para todos los cordobeses. Pero, dejemos ahí al tema, porque vamos a tener posibilidades de seguir conversando y de seguir hablando en otro momento.

Antes de cerrar el debate, y en vísperas de la Navidad, señor presidente, quiero desearles a todos y a cada uno de los legisladores y legisladoras, y a todo el personal de esta Casa, realmente que la pasen de la mejor manera posible, con sus familiares y con sus seres queridos; que podamos, de alguna manera, recuperar la fe y la esperanza que todos necesitamos, porque realmente es tan necesario ese alimento del alma para que en esta Navidad podamos compartir un momento de felicidad con nuestros seres queridos. Les deseo, más allá de cualquier otra cuestión, del calor de los debates, de las disidencias y de las opiniones encontradas, que efectivamente podamos estar de la mejor manera posible junto a nuestros seres queridos en esta Navidad.

Después, señor presidente, también quiero agradecerle a cada uno de los legisladores de nuestro bloque y a todo el equipo de esta Cámara por el trabajo que han venido realizando durante todo este año, que ha sido realmente tan difícil, en el que hemos hecho un trabajo muy importante, con compromiso, esfuerzo y participación. Eso es valioso, señor presidente.

Por eso, quería que mis últimas palabras fueran estas, antes de ratificar, por supuesto, el apoyo de nuestro bloque a las dos leyes que están en consideración y pedir el cierre del debate.

Muchas gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de orden del cierre de debate formulada por el legislador Fortuna.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.

Voy a poner en consideración en general y en particular, en una misma votación, el proyecto 31991/E/20, tal como fuera despachado por las Comisiones de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado en general y particular.

Se comunicará al Poder Ejecutivo.

Pondremos ahora en consideración en general y en particular, en una misma votación, el proyecto 31990/E/20, tal como fuera despachado por las Comisiones de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado en general y en particular.

Se comunicará al Poder Ejecutivo.

**PROYECTO DE LEY
31990/E/20**

**Al Señor
Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel CALVO**

S / D

Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo que preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3º de la Constitución Provincial, a fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el que se propicia declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación los bienes necesarios para la ejecución de las obras: "Ruta Alternativa a Ruta Nacional Nº 38 – Tramo 1: Variante Costa Azul – la Cumbre en la Sección comprendida entre Variante Costa Azul (Pr. 0+000) y el Acceso a la Localidad de Molinari (Pr. 21+500)".

El presente proyecto se fundamenta en las disposiciones de la Ley Nº 6394 - Régimen de Expropiación.

Por las razones expuestas, pongo el presente a consideración de la Legislatura de la Provincia para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.

Sin otro particular, saludo a Usted con distinguida consideración.

DIOS GUARDE A UD.

Juan Schiaretti, Jorge Córdoba, Ricardo Sosa

**LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY**

ARTÍCULO 1º. - DECLÁRASE de utilidad pública y sujeto a expropiación para la ejecución de las obras: "RUTA ALTERNATIVA A RUTA NACIONAL Nº 38 – TRAMO 1: VARIANTE COSTA AZUL – LA CUMBRE EN LA SECCIÓN COMPRENDIDA ENTRE VARIANTE COSTA AZUL (Pr. 0+000) Y EL ACCESO A LA LOCALIDAD DE MOLINARI (Pr. 21+500)", los inmuebles necesarios para llevar a cabo la obra mencionada, de acuerdo al Croquis de Ubicación que compuesto de una (1) foja útil se acompañan y forma parte integrante de la presente Ley. En todos los casos, se individualizarán los bienes requeridos de acuerdo a lo establecido en la Ley Provincial Nº 6394.

ARTÍCULO 2º. - El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar presupuestariamente lo dispuesto en el artículo 1º de la presente ley. -

ARTÍCULO 3º. - De forma.

Juan Schiaretti, Jorge Córdoba, Ricardo Sosa

DESPACHO DE COMISIÓN

Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 22 de diciembre de 2020

A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:

Las Comisiones de OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y COMUNICACIONES y de ECONOMÍA, PRESUPUESTO, GESTIÓN PÚBLICA E INNOVACIÓN, al dictaminar acerca del **Proyecto de Ley Nº 31990/E/20**, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación para la ejecución de las obras: "Ruta alternativa a Ruta Nacional Nº 38 - Tramo 1: Variante Costa Azul - La Cumbre en la sección comprendida entre Variante Costa Azul (Pr. 0+000) y el Acceso a la localidad de Molinari (Pr. 21+500)", los inmuebles necesarios para llevar a cabo la obra mencionada de acuerdo al Croquis de Ubicación, ACONSEJAN, por las razones que en el Plenario dará el señor miembro informante, PRESTARLE APROBACIÓN, de la siguiente manera:

**LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:**

ARTÍCULO 1º.- Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles necesarios para la ejecución de la obra: "Ruta Alternativa a Ruta Nacional Nº 38 - Tramo: Variante Costa Azul - La Cumbre", de acuerdo al Croquis de Ubicación que, compuesto de una foja, se acompaña y forma parte integrante de la presente Ley como Anexo I.

En todos los casos se individualizarán los bienes requeridos de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 6394 -Régimen de Expropiación-.

ARTÍCULO 2º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º de la presente Ley.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

Leg. LATIMORI, Raúl Horacio, Leg. ARGANARAZ, Iohana, Leg. CARPINTERO, Leandro, Leg. RUFÉIL, Rodrigo Miguel, Leg. RUIZ, Alejandro Antonio, Leg. AMBROSIO, Alberto Vicente, Leg. GUDIÑO, Daniela Soledad, Leg. GARADE PANETTA, María, Leg. GARCÍA ELORRIO, Aurelio, Leg. LIMIA, Luis Leonardo, Leg. BLANGINO, Juan José, Leg. RINALDI, Julieta, Leg. SCORZA, Adrián Rubén, Leg. ZORRILLA, Ricardo Roberto, Leg. RONGE, Jaqueline Viviana, Leg. PALEO, Silvia Gabriela, Leg. COSSAR, Marcelo Arnolfo, Leg. MARCONE, María Rosa.

**PROYECTO DE LEY – 31990/E/20
TEXTO DEFINITIVO**

**LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10734:**

Artículo 1º.- Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles necesarios para la ejecución de la obra "Ruta Alternativa a Ruta Nacional Nº 38 – Tramo: Variante Costa Azul – La Cumbre", de acuerdo al Croquis de Ubicación que, compuesto de una foja, se acompaña y forma parte integrante de la presente Ley como Anexo I.

En todos los casos se individualizarán los bienes requeridos de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 6394 – Régimen de Expropiación-.

Artículo 2º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º de la presente Ley.

Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

**DADA EN CÓRDOBA, A LOS VEINTITRÉS DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO
DOS MIL VEINTE.**

Cr. Manuel Fernando Calvo

Vicegobernador

Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

**PROYECTO DE LEY
31991/E/20**

**Al Señor
Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel CALVO
S / D**

Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo que preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3º de la Constitución Provincial, a fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el que se propicia declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación los bienes necesarios para la ejecución de las obras: "Variante Ruta Provincial Nº 5 – Tramo: Rotonda Ruta Provincial Nº 5 (Km. 25,5) y el Acceso a la Localidad de Villa Los Aromos (km. 45,2)".

El presente proyecto se fundamenta en las disposiciones de la Ley Nº 6394 - Régimen de Expropiación.

Por las razones expuestas, pongo el presente a consideración de la Legislatura de la Provincia para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.

Sin otro particular, saludo a Usted con distinguida consideración.

DIOS GUARDE A UD.

Juan Schiaretti, Jorge Córdoba, Ricardo Sosa

**LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY**

ARTÍCULO 1º. - DECLÁRASE de utilidad pública y sujeto a expropiación para la ejecución de las obras: "VARIANTE RUTA PROVINCIAL Nº 5 – TRAMO: ROTONDA RUTA PROVINCIAL Nº 5 (Km. 25,5) Y EL ACCESO A LA LOCALIDAD DE VILLA LOS AROMOS (Km. 45,2)", los inmuebles necesarios para llevar a cabo la obra mencionada, de acuerdo a la Planimetría General que compuesto de una (1) foja útil se acompañan y forma parte integrante de la presente Ley. En todos los casos, se individualizarán los bienes requeridos de acuerdo a lo establecido en la Ley Provincial Nº 6394.

ARTÍCULO 2º. - El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar presupuestariamente lo dispuesto en el artículo 1º de la presente ley. -

ARTÍCULO 3º. - De forma.

Juan Schiaretti, Jorge Córdoba, Ricardo Sosa

DESPACHO DE COMISIÓN

Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 22 de diciembre de 2020

A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:

Las Comisiones de OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y COMUNICACIONES y de ECONOMÍA, PRESUPUESTO, GESTIÓN PÚBLICA E INNOVACIÓN, al dictaminar acerca del **Proyecto de Ley Nº 31991/E/20**, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación para la ejecución de las obras: "Variante Ruta Provincial Nº 5 - Tramo: Rotonda Ruta Provincial Nº 5 (km 25,5) y el Acceso a la localidad de Villa Los Aromos (km

45,2)”, los inmuebles necesarios para llevar a cabo la obra mencionada, de acuerdo a la Planimetría General, ACONSEJAN, por las razones que en el Plenario dará el señor miembro informante, PRESTARLE APROBACIÓN, de la siguiente manera:

**LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:**

ARTÍCULO 1º.- Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación los in- muebles necesarios para la ejecución de las obras: “Variante Ruta Provincial Nº 5 - Tramo: Alta Gracia - Intersección Ruta S- 495”, de acuerdo al Croquis de Ubicación, compuesto de una foja, se acompaña y forma parte integrante de la presente Ley como Anexo I.

En todos los casos se individualizarán los bienes requeridos de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 6394 -Régimen de Expropiación-.

ARTÍCULO 2º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º de la presente Ley.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

Leg. LATIMORI, Raúl Horacio, Leg. ARGANARAZ, Iohana, Leg. CARPINTERO, Leandro, Leg. RUFÉIL, Rodrigo Miguel, Leg. RUIZ, Alejandro Antonio, Leg. AMBROSIO, Alberto Vicente, Leg. GUDIÑO, Daniela Soledad, Leg. GARADE PANETTA, María, Leg. GARCÍA ELORRIO, Aurelio, Leg. LIMIA, Luis Leonardo, Leg. BLANGINO, Juan José, Leg. RINALDI, Julieta, Leg. SCORZA, Adrián Rubén, Leg. ZORRILLA, Ricardo Roberto, Leg. RONGE, Jaqueline Viviana, Leg. PALEO, Silvia Gabriela, Leg. COSSAR, Marcelo Arnolfo, Leg. MARCONE, María Rosa.

**PROYECTO DE LEY – 31991/E/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10705:**

Artículo 1º.- Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación los in- muebles necesarios para la ejecución de las obras: “Variante Ruta Provincial Nº 5 - Tramo: Alta Gracia - Intersección Ruta S- 495”, de acuerdo al Croquis de Ubicación, compuesto de una foja, se acompaña y forma parte integrante de la presente Ley como Anexo I.

En todos los casos se individualizarán los bienes requeridos de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 6394 -Régimen de Expropiación-.

Artículo 2º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º de la presente Ley.

Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

DADA EN CÓRDOBA, A LOS VEINTITRÉS DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

Cr. Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

-8-

A) HOSPITAL SAN ANTONIO DE LA CARLOTA. PERSONAL. DESEMPÑO ANTE LA PANDEMIA GENERADA POR EL VIRUS COVID-19. BENEPLÁCITO.

B) BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA CIUDAD DE LA CARLOTA. DESEMPEÑO EN LA CONTENCIÓN DE LOS FOCOS DE INCENDIOS RURALES EN LA CARLOTA Y OTROS PUNTOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. BENEPLÁCITO.

C) EX MÚLTIPLE CAMPEÓN ARGENTINO Y VARIAS VECES REPRESENTANTE OLÍMPICO Y MAESTRO INTERNACIONAL, PROF. GUILLERMO GUSTAVO SOPPE, ACTUAL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, NOMINADO PARA LOS PREMIOS CÓNDROR 2020. 50 AÑOS DE TRAYECTORIA EN EL AJEDREZ. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.

D) CANTAUTORA ANA ROBLES, RADICADA EN ALTA GRACIA. GALARDÓN OBTENIDO CON SU TEMA “CIELO Y SERENATA”, EN EL “CONCURSO IBEROAMERICANO 100 AÑOS DEL NACIMIENTO DE CHABUCA GRANDA”, OTORGADO POR LA REPÚBLICA DEL PERÚ. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.

E) ACTOR DANIEL PEDRO ARÁOZ. BENEPLÁCITO Y RECONOCIMIENTO.

F) FIESTA DE LA FAMILIA, EN LA FRANCIA. 25º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.

G) DÍA INTERNACIONAL DE LA EDUCACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.

H) BIENAL DE MÚSICA CÓRDOBA, ORGANIZADA POR EL SINDICATO DE MÚSICOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.

I) STÉFANO TIEZZI. DESIGNACIÓN COMO NUEVO PORTADOR DE LA BANDERA MAYOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MARÍA (UNVM). ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.

J) CLUB RECREATIVO CONFRATERNIDAD, DE LA LOCALIDAD DE SAMPACHO. 89º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.

K) SR. WALTER NICOLÁS MARTÍNEZ DE BELL VILLE. ELECCIÓN COMO UNO DE LOS "DIEZ JÓVENES SOBRESALIENTES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA", POR PARTE DE LA BOLSA DE COMERCIO DE CÓRDOBA. BENEPLÁCITO.

L) DÍA INTERNACIONAL DEL MIGRANTE. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.

M) NATALICIO DE JESUCRISTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.

N) TRABAJADORES RURALES. RECONOCIMIENTO OTORGADO POR EL GOBIERNO NACIONAL Y LUCHA GREMIAL DE LA UATRE. BENEPLÁCITO.

O) DOCUMENTAL "LA PANDEMIA EN LOS HOSPITALES UNIVERSITARIOS". RECONOCIMIENTO Y FELICITACIÓN.

Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno

Sr. Presidente (González).- Conforme a lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento Interno, vamos a dar ingreso y tratamiento a los siguientes proyectos de declaración: 31997, 31998, 32004, 32005, 32007, 32008, 32011, 32016, 32018 al 32024/L/20, sometiéndolos a votación conforme al texto acordado.

Se deja constancia de que el bloque Encuentro Vecinal Córdoba se abstiene en todos los proyectos mencionados, excepto en el proyecto 32022/L/20; que la legisladora Noel Argañaraz consigna su abstención en los proyectos 32022 y 32023/L/20, y que la legisladora Echevarría consigna su rechazo al proyecto 32022 y su abstención en el proyecto 32023/L/20.

En consideración, entonces, la aprobación de los proyectos enumerados.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.

PROYECTO DE DECLARACIÓN

31997/L/20

**LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA**

DECLARA:

Su beneplácito por el desempeño de todo el personal que conforma el equipo del Hospital San Antonio de La Carlota por la tarea realizada ante la pandemia generada por el virus Covid-19.

Leg. Viviana Ronge

FUNDAMENTOS

El Hospital San Antonio fue inaugurado el día 02 de octubre de 1906, con el nombre de "Pan para los Pobres", años después el día 02 de febrero de 1947 se re-inaugura bajo la denominación actual hospital zonal "San Antonio". Finalmente en el año 1951 pasa a depender de la Provincia de Córdoba siendo que, hasta ese entonces, lo hacía del gobierno nacional. Su larga historia se ha visto marcada por el agradecimiento constante de los vecinos de La Carlota y alrededores que a través de los años han confiado en el equipo de trabajo conformado por el personal de salud, profesionales médicos y auxiliares médicos como así también por empleados administrativos, de mantenimiento y limpieza que en conjunto conforman un equipo humano muy valioso con valores claros que tienen como principal objetivo el cuidado de la salud de toda la comunidad Carlotense.

Cabe destacar que este año por la pandemia generada por el virus Covid-19 todo el personal se vio inmerso en una compleja situación sanitaria, sin precedentes, con extensas jornadas laborales expuestos a grandes riesgos en su salud, como así también para su familia, sin embargo la dedicación, entrega, vocación y calidad humana de todo el personal han logrado mantener bajo control la pandemia, brindando tranquilidad a la comunidad.

Por lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen la presente iniciativa.

Leg. Viviana Ronge

**PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31997/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:**

Su reconocimiento al personal que integra el equipo de salud del Hospital San Antonio de la ciudad de La Carlota, por la tarea desarrollada ante la pandemia generada por el virus Covid-19.

**PROYECTO DE DECLARACIÓN
31998/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:**

Su beneplácito por el desempeño de los Bomberos Voluntarios de la ciudad de La Carlota que participaron en la contención de los focos de incendios rurales que acecharon a La Carlota, como así también en diferentes puntos de la Provincia de Córdoba.

Leg. Viviana Ronge

FUNDAMENTOS

La sociedad de Bomberos Voluntarios de La Carlota fue fundada el día 03 de Enero de 1960 y desde ese momento por apoyo y donaciones de la población se convirtió en una entidad de bien público, que a tan solo tres años de iniciada su actividad lograron adquirir su primera autobomba. El tiempo ha marcado el progreso y el prestigio de este cuerpo activo que en la actualidad cuenta con un plantel equipado y capacitado que despliega un constante accionar, no solo en los siniestros específicos de La Carlota y alrededores, sino también actuando en la Ruta Nacional N°8 y Ruta Provincial N° 4.

Este año ha sido particularmente dramático para el combate del fuego, los vientos sumados a la sequía, elevaron en "extremo" el riesgo de incendios en toda la provincia, lo que generó un mayor esfuerzo de nuestros Bomberos Voluntarios que con su vocación de servicio y arduo trabajo lograron contener el fuego y así evitar mayores tragedias, poniendo en riesgo su propia vida. En el caso del cuartel de La Carlota brinda apoyo fuera de su jurisdicción cuando se lo solicitan, como ocurrió este año en los incendios forestales de las Sierras de Córdoba, en la zona de Alpa Corral y tantas otras veces donde lo primordial es la colaboración y ayuda ante la urgencia afrontando esa tarea con dedicación, entrega y sacrificio.

Por lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen la presente iniciativa.

Leg. Viviana Ronge

**PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31998/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:**

Su reconocimiento a los integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Carlota por su participación en la contención de los focos de incendios rurales que acecharon a la mencionada ciudad, sumado a su comprometida tarea también en diferentes puntos de la provincia.

**PROYECTO DE DECLARACIÓN
32004/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:**

Su Adhesión y Beneplácito por cumplirse 50 años de trayectoria en el Ajedrez del ex múltiple Campeón Argentino y varias veces representante Olímpico y Maestro Internacional, el Prof. Guillermo Gustavo Soppe, actual Presidente de la Federación de Ajedrez de la Provincia de Córdoba, nominado para los Premios Cóndor 2020.

Leg. Matías Chamorro.

FUNDAMENTOS

Este año se cumplen cincuenta años de los primeros pasos del Maestro Internacional de ajedrez Guillermo Soppe en esta disciplina deportiva y que fue y sigue siendo una figura destacada en este ámbito.

El ajedrecista de cuna cordobesa fue ganador de más de 40 torneos Nacionales e Internacionales. Entre sus resultados obtenidos durante su trayectoria deportiva puede mencionarse que fue dos veces Campeón Argentino Absoluto (San Luis 1990 y Caseros 2003), seis veces representante olímpico (Novi Sad 1990, Manila 1992, Erevan 1996, Estambul 2000, Calvia 2004), representante Argentino a la Copa de Oro y medalla de bronce individual (Lucerna 1985). Además obtuvo el Título de Maestro Internacional en el Torneo Panamericano (Santiago de Chile 1987), fue representante Argentino al Campeonato Mundial de Cadetes (Cagnes Sur Mer 1977), fue Campeón Panamericano por equipos (Villa Gessell 1985) y Sub Campeón Mundial por Equipos categoría sub 26 y medalla de plata individual.(Puerto Rico 1986). En 1998 fue Campeón Argentino por Equipos en La Falda. Así mismo se consagró Sub Campeón Copa de Campeones por equipos Liga Nacional (Moreno 2009) y Campeón por Equipos de los Juegos Abiertos de Brasil San Pablo 1997.

Ha alcanzado el título de Maestro Internacional de Ajedrez de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) y de Profesor especializado en la enseñanza y práctica del ajedrez. Es un promotor incansable del ajedrez en ámbitos educativos formales y no formales. Fue profesor en Escuelas de la Ciudad de Córdoba, en los sindicatos AGECE, Luz y Fuerza, y Suoem, y del Club Atlético Belgrano.

Guillermo es promotor de la disciplina en el ámbito académico y profesional, es profesor de La Caja de Previsión Social para Profesionales de Ciencias Económicas, integrante del proyecto Universidades Populares de la UNC, y Profesor del Programa Comenzar de la UCC. Participó en Congresos, como el Edujaque, y fue disertante en congresos de ajedrez que organizó con la Universidad Nacional de Córdoba.

El ajedrecista ha sido Director del Proyecto Ágilmente Pami, Consultor del Ministerio de Educación de la Nación en el área Ajedrez, Director del programa de ajedrez en escuelas Municipales, asesor para el programa provincial de ajedrez escolar del ministerio de Educación de la Provincia y Asesor del programa Jaque Mate a la Exclusión del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos con la finalidad de difundir esta práctica deportiva.

Es preciso mencionar su participación en las organizaciones que promueven la disciplina, ejerciendo como Presidente Federación de Ajedrez de la Provincia de Córdoba, como Vocal de la federación Argentina de Ajedrez y como Integrante de la sub Comisión de Ajedrez Social de la Federación Internacional de Ajedrez.

A este recorrido se le agrega su rol como Instructor de la Agencia Córdoba Deportes, como Capitán del equipo Olímpico Argentino. (Turín 2006), como entrenador FIDE Trainer 2015 y como entrenador y Capitán Juegos Panamericanos de la Juventud Montevideo 2016

Ha sido parte de la organización de eventos importantes, que fueron pioneros, como el match semi presencial por internet entre equipos de la Academia y el equipo de la empresa Bantel quienes jugaron desde Córdoba contra una selección mundial de alumnos de Ajedrez HOY. Los Juegos Nacionales Evita, disputados en La Rioja, también lo encontraron trabajando.

Es una figura trascendental para el ajedrez en la provincia y eso le ha merecido la nominación para los Premios Cóndor 2020 al deporte de Córdoba Presidente de la Federación de Ajedrez de la Provincia de Córdoba. La premiación que se llevará a cabo el 23 de diciembre en el Estadio Kempes tiene como objetivo que persiguen estas distinciones es el de brindarle un reconocimiento público a deportistas, entrenadores, dirigentes y figuras allegadas a la actividad deportiva, por la labor, mérito y logros obtenidos

La vocación del actual integrante de la Comisión de Atletas de la Federación Argentina de Ajedrez y Profesor de la Academia Internacional Ajedrez Hoy queda expresada en su práctica y en su testimonio que dice: "Estoy convencido que todo el mundo debiera conocer nuestro juego porque algún beneficio siempre le quedaría. En eso nuestro amado juego tiene algo en común con el arte: No son imprescindibles pero sí necesarios para la humanidad.

Por todo lo expuesto, Sr. Presidente, entendiendo la importancia de visibilizar los aportes sociales deportivos del Dirigente nominado, solicitamos se apruebe este Proyecto de Declaración.

Leg. Matías Chamorro.

PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32004/L/20

TEXTO DEFINITIVO

**LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA**

DECLARA:

Su reconocimiento a la trayectoria desarrollada durante 50 años en la práctica de ajedrez, del ex múltiple Campeón Argentino y varias veces representante Olímpico y Maestro Internacional, Prof. Guillermo Gustavo Soppe, actual presidente de la Federación de Ajedrez de la Provincia de Córdoba, quien fuera nominado para los Premios Cóndor 2020.

PROYECTO DE DECLARACIÓN

32005/L/20

**LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA**

DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el galardón obtenido por la cantautora radicada en Alta Gracia, Ana ROBLES, quien, con la composición de la música, autoría de la letra e interpretación de su tema "Cielo y Serenata", resultara ganadora del "Concurso Iberoamericano 100 Años del Nacimiento de Chabuca Granda", otorgado por la hermana República del Perú.

Leg. Natalia de la Sota

FUNDAMENTOS

"Nunca puse un pie en Perú, sin embargo crecí escuchando su música. Tengo el recuerdo de vals y marineras sonando en casetes porque a mis padres les encantaban, y también los cantábamos en reuniones familiares, como parte del entorno musical en el que crecí" Así empieza contando Ana Robles su emoción por el galardón obtenido y su admiración por la peruana Chabuca Granda, de quien en septiembre de este año se cumplieron los cien años de su nacimiento.

Ana Robles es cantante, compositora y pianista nacida en La Rioja y, desde hace más de cuatro años, ha elegido a nuestra Alta Gracia como lugar de residencia y, seguramente, un lugar también de inspiración para su arte. Un arte musical que hunde sus raíces en el folklore y fluye por el jazz y lo clásico y, en fin, sin encerrarlo egoísta en algún género específico, su arte es de un decir con gracia, consistencia, belleza, mucho profesionalismo y técnicamente intachable.

Ana Robles es la autora e intérprete del tema "Cielo y Serenata", que entre 357 obras presentadas al concurso con que el Perú celebra los cien años de su prócer musical Chabuca Granda, se alzó con el primer premio en fallo unánime de un jurado prestigioso y exigente, especialmente designado para el magno evento.

Es un orgullo que una excelente música argentina, con su composición e interpretación, sea quien mejor puede homenajear a Chabuca, y para los cordobeses es también un orgullo que esta gran música e intérprete haya elegido nuestra tierra para hacer su vida y su arte.

Por las razones expuestas, solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.

Leg. Natalia de la Sota

PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32005/L/20

TEXTO DEFINITIVO

**LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA**

DECLARA:

Su reconocimiento y felicitación a la cantautora radicada en la ciudad de Alta Gracia, Ana Robles quien, con la composición de la música, autoría de la letra e interpretación de su tema "Cielo y Serenata", fuera consagrada ganadora del "Concurso Iberoamericano 100 años del nacimiento de Chabuca Granda", otorgado por la hermana República del Perú.

PROYECTO DE DECLARACIÓN

32007/L/20

**LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA**

DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento a la vasta trayectoria nacional e internacional del prestigioso actor cordobés Daniel Pedro Aráoz, destacando su compromiso social y comunitario.

Leg. Diego Pablo Hak, Leg. Nadia Vanesa Fernández, Leg. Cristina Alicia Pereyra. Leg. Patricio Eduardo Serrano, Leg. Leonardo Limia

FUNDAMENTOS

Daniel Pedro Aráoz no es solamente un actor que ha cosechado reconocimientos a nivel nacional e internacional. Su talento, demostrado en sus trabajos realizados en grandes filmes argentinos, series de televisión, obras de teatro, en la comedia, el humor o el drama, se complementa con un alto compromiso social y político, y en el hecho de llevar a todas partes la bandera argentina y cordobesa.

En este 2020, Aráoz cumplió 40 años con la actuación, desde sus inicios en el teatro independiente cordobés, que le abrió las puertas a una carrera extraordinaria cruzando todas las fronteras. Desde hace tres décadas está radicado en Buenos Aires, pero nunca se olvidó de sus comienzos.

En octubre, Daniel Aráoz obtuvo el galardón como mejor actor en el Festival de Cine de Oldenburg (Alemania) por su participación en la película "La noche más larga", producida con apoyo del Polo Audiovisual del Gobierno de Córdoba. Fue el primer largometraje en ganar el concurso a Coproducción, en 2017.

Este fue el último de muchos premios recibidos en su carrera, desde que obtuvo el Cóndor de Plata como mejor actor en 2011 por su trabajo en la película argentina "El Hombre de al lado", que lo colocó en un lugar destacado de la escena audiovisual argentina e internacional.

Aráoz nació en la Ciudad de Córdoba en el año 1962. Aquí comenzó sus experiencias actorales a principios de la década de 1980, con reconocidos maestros de las artes escénicas.

Una de sus primeras actuaciones fue en la obra "La jaula /Vida y lucha de nuestra clase obrera", de Julián Romeo. Luego protagonizó "El mundo es un espectáculo" con Raúl Ceballos en su personaje de Doña Rosa; "Fuenteovejuna", de Lope de Vega; "Caldo de Cultivo", con la dirección de Jorge Petraglia; "Gracias Electroshock", de su autoría, junto a Norman Briski, con quién también codirigió.

También actuó en "Los 90 no son nada" y varios unipersonales como autor y director, entre los que se destacan "Art dCoke" y "Lo peor de nosotros mismos", junto a Atilio Veronelli.

Asimismo, fue dirigido por Alberto Ure en "10 minutos para enamorarse", por Julio Ordano en "La Mesa de los Galanes" de Roberto Fontanarrosa, y por Marcelo Alfaro en "Uno nunca sabe", también de Fontanarrosa.

Con respecto a su carrera televisiva, en los años 80 ingresó al programa "La Noticia Rebelde" conducido por Raúl Becerra, Jorge Guinzburg, Carlos Abrebaya y Adolfo Castello, uno de los más exitosos de la época. Luego tuvo roles destacados en programas como "El mundo de Antonio Gasalla", "Rebelde sin pausa", "De la cabeza", "Club Social y Deportivo", "Cara y seca", "La barra de la tele", "Por el Nombre de Dios", "Café Fashion" y "Un cortado".

En su carrera cinematográfica hay que destacar films como "El hombre de al lado"; "8 tiros"; "Una especie de familia"; "El Potro: lo mejor del amor"; "La odisea de los giles". Su último éxito, la película "La noche más larga" dirigida por Moroco Colman, y realizada con el apoyo del Polo Audiovisual que depende de la Agencia Córdoba Cultura del Gobierno de Córdoba y del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).

Por si fuera poco, su compromiso social también merece ser subrayado. Aráoz no es un hombre que rehúya a hacer comentarios sobre la coyuntura de nuestra sociedad. Cuando los hace, demuestra su vocación de bregar por una Córdoba y una Argentina más justas, con oportunidades para todos y todas.

En fin, este talento originario de "La Docta" da cuenta de una versatilidad notable, de allí mi intención de reconocer su inmensa trayectoria. Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto de declaración.

Leg. Diego Pablo Hak, Leg. Nadia Vanesa Fernández, Leg. Cristina Alicia Pereyra. Leg. Patricio Eduardo Serrano, Leg. Leonardo Limia

PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32007/L/20

**TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:**

Su reconocimiento a la vasta trayectoria nacional e internacional del prestigioso actor cordobés Daniel Pedro Aráoz, destacando su compromiso social y comunitario.

**PROYECTO DE DECLARACIÓN
32008/L/20**

**LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:**

Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 25º aniversario de la "Fiesta de la Familia", celebrada el día 19 de diciembre en la localidad de La Francia, departamento San Justo.

Leg. Ramón Giraldi, Leg. Alejandra Piasco

FUNDAMENTOS

El pasado 19 de diciembre, la localidad de La Francia, radicada en el departamento San Justo, se vistió – virtualmente- de gala para festejar las Bodas de Plata de la tradicional Fiesta de la Familia, que año tras año constituye la prodigiosa manera de concluir un ciclo de perseverante labor por parte de la comunidad.

El evento, que por las razones pandémicas públicamente conocidas, debió ser "transmitido en vivo (a las 21.30 hs.) por redes sociales y televisión", tuvo como escenario al Teatro Moderno de la citada localidad, donde contó con "las actuaciones de artistas locales, (entre ellos), Mario Vega y su conjunto, Milagros Cotella, Pueblo Grande y el Taller Municipal de Folclore EL QUIDEL"; y, al mismo tiempo, se desarrollaron en un ámbito artístico de la ciudad de Córdoba, las presentaciones de El "Mudo" Esperanza y el grupo Ceibo.

Toda reunión que tenga como protagonista a la familia congregada bajo la forma de un evento, constituye una circunstancia de esparcimiento y júbilo, porque la familia sigue siendo "la unidad básica de la sociedad", más allá de las transformaciones que en las últimas décadas exhiba el concepto.

En el núcleo familiar se congregan distintas generaciones, de las cuales destacamos a dos: la de los nietos por un lado, y la de los abuelos, por el otro, ya que "los niños son el futuro, la fuerza que nos lleva adelante, en los que ponemos la esperanza"; en tanto que "los abuelos son la memoria de la familia". A este pensamiento, cuyo autor es el Papa Francisco, el propio

Sumo Pontífice lo perfecciona señalando que “la familia es un tesoro precioso. Hay que sostenerla y protegerla siempre”.

De esta manera, toda festividad que involucre a esta trascendente unidad social, es digna de reconocimiento, porque según el texto del Artículo 60 de la Constitución de la Provincia de Córdoba “el Estado difunde y promueve todas las manifestaciones de la cultura desde una perspectiva nacional que se complemente con las provinciales y regionales”, y también, porque la idea de familia está presente en el Artículo 34 de la Carta Magna, cuando manifiesta lo siguiente: “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad y debe gozar de las condiciones sociales, económicas y culturales, que propendan a su afianzamiento y desarrollo integral”.

Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, solicitamos la aprobación de la presente iniciativa.

Leg. Ramón Giraldi, Leg. Alejandra Piasco

**PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32008/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:**

Su beneplácito por la conmemoración del 25º aniversario de la “Fiesta de la Familia”, celebrada el pasado 19 de diciembre en la localidad de La Francia, Departamento San Justo.

**PROYECTO DE DECLARACIÓN
32011/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:**

Su adhesión y beneplácito a la celebración del Día Internacional de la Educación el 24 de enero de 2021.

Leg. Sara del Carmen García

FUNDAMENTOS

La declaración de beneplácito por la celebración del Día Internacional de la Educación el 24 de enero de 2021, proclamada por UNESCO, viene a colación de una serie de reflexiones. En primer lugar, el agradecimiento a los docentes por el denodado esfuerzo para continuar las clases en entornos virtuales. El transcurso de este año ha implicado sin dudas adaptaciones a sistemas y plataformas hasta ahora desconocidos por muchos docentes.

Por otro lado, consideramos que el cierre de este año bisagra nos debe encontrar en sesuda reflexión acerca del sistema educativo y su devenir en esta cambiante sociedad. El actual contexto ha acelerado modificaciones en nuestra forma de vivir y la educación deberá estar dentro de los nuevos esquemas, velando por el desarrollo de todos los jóvenes. La educación como proceso tiene el desafío y la capacidad de transformar. Para ello el sistema educativo debe replantearse de cara a la revolución digital, aportando las herramientas necesarias y comprendiendo su rol en un contexto renovado. A su vez, la escuela deberá asumir las preocupaciones globales como la emergencia ambiental.

Por último, queremos mencionar que en septiembre se cumplió el 5to aniversario de la aprobación del documento “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” de Naciones Unidas, realizada en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible en Nueva York en septiembre de 2015. Los ejes de desarrollo sostenible tienen a las esferas económica, social y ambiental de manera integrada e indisoluble. El compromiso asumido por nuestro país adhiere a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre los cuales se ubica en el número 4: “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos”. Múltiples esfuerzos se deberán orientar para la consecución de las metas proyectadas. Cabe destacar que la voluntad de profesionalización del claustro docente, con la modificación del estatuto docente el pasado 16 de diciembre, constituye un paso en esa dirección.

Por lo expuesto ut supra es que solicito que esta Legislatura declare su adhesión y beneplácito

Leg. Sara del Carmen García

**PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32011/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:**

Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional de la Educación”, a celebrarse el 24 de enero de 2021.

**PROYECTO DE DECLARACIÓN
32016/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:**

De "Interés Legislativo" la BIENAL DE MUSICA CORDOBA, a desarrollarse entre los meses de marzo a noviembre de 2021, organizada por el Sindicato de Músicos de la Provincia de Córdoba, con motivo de festejar el centenario de creación de dicha organización gremial.

Leg. Sara García, Leg. José Emilio Pihen

FUNDAMENTOS

La presente declaración de interés legislativo tiene como objetivo principal acompañar al Sindicato de Músicos de la Provincia de Córdoba, en la celebración del centenario de su creación, los cuales han organizado la **BIENAL DE MUSICA CORDOBA LA BIENAL DE MUSICA CORDOBA**, es un evento PIONERO que se erige como una usina de pensamientos y re significación de la actividad musical.

Esta tiene como objetivo, no solo celebrar los cien años del sindicato, sino además promover eventos en forma virtual y/o presencial, o en forma conjunta, durante los meses de marzo a noviembre de 2021, con el propósito de ser una "usina de pensamiento y reflexión", con la elaboración de ejes de trabajo que se articulan, tales como: Educativo; Social; Internacionalización; etc.-.

Se convocarán a referentes de diversas industrias culturales de la Provincia de Córdoba para la creación de eventos interdisciplinarios, destacándose la producción local con acento en la proyección de los artistas cordobeses tanto a nivel nacional como internacional. Se realizarán eventos de música y diseño; música y teatro/danza; y música y gastronomía.

Más aún, la Bienal cierra con un festival que planea un impactante movimiento de intervenciones urbanas. Contempla la posibilidad de elaborar seminarios con diversas instituciones tales como la Facultad de Antropología, Facultad de Artes, Universidad de Villa María, UPC y Conservatorios Provinciales. Contiene la propuesta de creación de un programa distinto: "Voz al Barrio". El mismo se ha pensado con la intención de promover la creación de cooperativas de trabajo artísticas

El Sindicato de Músicos de la Provincia de Córdoba, promueve la realización de este evento, con la expectativa de que la Bienal de Música Córdoba se constituya en un espacio de reflexión, cultural, artístico, novedoso, que impulse y desarrolle aún más la actividad musical de nuestra provincia. -

Queremos celebrar esta iniciativa de la entidad sindical, proyecto que consideramos importante, singular y deseamos sea perdurable en el tiempo, dirigido a todos los cordobeses, a los músicos y artistas de nuestra provincia y país. -

Por las razones expresadas, es que se solicita la aprobación del presente proyecto de declaración. -

Leg. Sara García, Leg. José Emilio Pihen

**PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32016/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:**

Su adhesión y beneplácito por la realización de la "Bienal de Música Córdoba" que, organizada por el Sindicato de Músicos de la Provincia de Córdoba en el marco del centenario de su creación, se desarrollará desde el mes de marzo y hasta noviembre de 2021.

**PROYECTO DE DECLARACIÓN
32018/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:**

Su adhesión y beneplácito por la designación de Stéfano Tiezzi como nuevo portador de la Bandera Mayor de la Universidad Nacional de Villa María (UNVM), distinción alcanzada con un promedio de 9,97, uno de los mejores promedios de la historia de esta Universidad, sino el mejor.

Leg. Adela Guirardelli

FUNDAMENTOS

Sr Presidente, nuestro abanderado¹, oriundo de Corral de Bustos, el profundo sur cordobés, con tan solo 22 años ha logrado atraer la mirada de personas e instituciones. No es común que, desde la academia, la militancia o la ciudadanía, distintas voces converjan para celebrar las virtudes y cualidades de un estudiante.

Cabe pensar entonces en la emergencia de una generación formada por la universidad pública; esta circunstancia hace más meritorios los logros de Stéfano Tiezzi, pues en su despliegue se perciben, además de la impronta de la institución y como constitutivo de dicha generación, una búsqueda de lo colectivo, un compromiso con la excelencia académica y un horizonte común con sus pares: la construcción y acceso a derechos como forma de potenciarse juntos.

Esta generación respira con acierto en su propio territorio y en su propia época, inspirándonos a ser mejores hombres y mujeres, profesionales y servidores públicos. A no admitir la injusticia social y a buscar de otra manera la construcción de lo porvenir. Por todo ello, pedimos a esta Honorable Legislatura que nos acompañe.

Leg. Adela Guirardelli

**PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32018/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:**

Su adhesión y beneplácito por la designación del Sr. Stéfano Tiezzi como nuevo portador de la Bandera Mayor de la Universidad Nacional de Villa María (UNVM), distinción alcanzada con un promedio general de 9,97, siendo uno de los mejores de la historia de la institución educativa.

**PROYECTO DE DECLARACIÓN
32019/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:**

Su ADHESIÓN y BENEPLÁCITO por la conmemoración del 89º aniversario de la creación del Club Recreativo Confraternidad de la localidad de Sampacho, departamento Río Cuarto, a celebrarse el día 30 de enero de 2021.

Leg. Juan Carlos Castro.

FUNDAMENTOS

El Club Recreativo CONFRATERNIDAD fue fundado el 30 de enero de 1932 por un grupo de empleados ferroviarios, cuyo objetivo era el de conformar un equipo de fútbol para competir en la localidad y la zona, en reemplazo de lo que era el Club Sportivo Unión. Su nombre "CONFRATERNIDAD" hace alusión a la mutual del gremio que cobijaba a varios de sus fundadores, el gremio de "La Fraternidad". Su primer presidente fue el Dr. Ventura Baigorria, oriundo de la ciudad de Villa Dolores y radicado en Sampacho.

El 9 de Julio de 1956, la Marina Guerra de La Nación visita Sampacho, y producto de la gestión del vicealmirante DIEZ, ferviente simpatizante de la entidad, se realiza un partido de fútbol entre su equipo y el de Confraternidad. El hecho motivó que el estadio del Club lleve por nombre "ALMIRANTE BROW", en honor al ilustre marino cuyo busto fue donado por la mencionada fuerza. Al mismo tiempo el evento derivó en una tradición que se mantuvo durante largos años: el día 8 de julio se organizaba una cena-baile y el día 9 de julio se jugaba un partido de fútbol entre el local y la armada u otro equipo de ocasión.

El 9 de Julio de 1966 la institución inaugura su sede en calle Rivadavia, un edificio de tres plantas con salón de baile, donde un año después comenzaría a funcionar el "Cine Monumental".

Estos sucesos con el pasar de los años dieron lugar a la creencia popular de que el aniversario de la entidad era el día 9 de Julio, lo que determinó que, al pasar el tiempo, las propias comisiones así lo festejaran, produciéndose una disociación entre la fecha de fundación y la celebración de la misma.

La institución tiene un fuerte crecimiento en los años sesenta y setenta. A la ya mencionada inauguración de su sede social, se le sumó la construcción de la cancha de bochas techada, y la cancha de fútbol con sede en calle Pueyrredón y Castelli, compitiendo en ambas disciplinas a nivel regional.

¹ Aclaremos que, si bien hubo una estudiante, María Angélica Fuentes, que obtuvo el promedio de diez (10) en el año 2009, ésta cursaba la Licenciatura en Ciencias De la Educación, carrera articulada con una duración prevista de sólo dos años con el cursado de diez (10) materias nada más y es considerada una carrera de ciclo de complementación curricular; en tanto, Ciencias Políticas, carrera cursada por Stéfano Tiezzi y con cuarenta y dos (42) materias, es considerada una carrera de ciclo completo.

Sobre mediados de los años ochenta, se deja la práctica del fútbol masculino, iniciando, sobre final de la década, un periodo de deterioro institucional que va a profundizarse en los años noventa y en el nuevo siglo, con falta de cumplimiento de sus obligaciones jurídicas y estatutarias.

Al mismo tiempo, las estructuras sufren la falta de mantenimiento, son alquiladas a privados a bajo costo, o incluso, como es el caso del predio de la cancha de fútbol son abandonadas sin uso alguno. El proceso tiene su punto culmine cuando en el año 2015 una comisión en pleno renuncia, y la entidad queda en manos de una familia que va a usufructuar de la entidad para beneficio propio.

El 11 de octubre de 2018, toma posesión del club una comisión normalizadora, que da paso a una nueva comisión directiva. Se vuelve a confeccionar un padrón de socios, permitiendo la asociación por primera vez en varios años, se recupera el salón de la institución que estaba alquilado a un privado, se concede el bar, y se participa de la Liga Regional de Fútbol y de la Liga Moldense de bochas. En el camino de recuperación trazado, celebrar el aniversario de la institución el día de su fundación - 30 de enero -, resulta de vital importancia, pues hace a la identidad misma del club.

Club Recreativo Confraternidad tiene un fuerte arraigo popular, cuenta actualmente con doscientos setenta socios activos, y más de cien niños hacen deportes en sus instalaciones. El cariño de sus simpatizantes, y su apoyo, ha permitido ir recuperando instalaciones, estructuras, bienes y disciplinas en poco tiempo.

De cara al futuro tiene dentro de sus proyectos, equipar el salón de fiestas con el tendido de un nuevo sistema eléctrico, reacondicionar su sede social, terminar los vestuarios de mayores de la cancha de fútbol once, realizar vestuarios para su cancha de fútbol siete; y en cuanto a lo deportivo, dar inicio a la práctica de fútbol femenino.

Por su historia, y por lo que significa el Club para esta localidad del sur Cordobés, le rendimos HOMENAJE en un nuevo aniversario y solicito a mis pares acompañen este proyecto.

Leg. Juan Carlos Castro.

**PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32019/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:**

Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 89º aniversario de creación del Club Recreativo Confraternidad de la localidad de Sampacho, Departamento Río Cuarto, a celebrarse el día 30 de enero de 2021.

**PROYECTO DE DECLARACIÓN
32020/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:**

Su beneplácito al reconocimiento recibido por el Sr. Walter Nicolás Martínez DNI 37.627.941, de la localidad de Bell Ville, departamento Unión, provincia de Córdoba; quien resultó elegido como uno de los "Diez Jóvenes Sobresalientes de la provincia de Córdoba", en el certamen organizado por la Bolsa de Comercio de Córdoba, el pasado 17 de diciembre de 2020.-

Leg. Dardo A. Iturria

FUNDAMENTOS

Desde hace de 30 años, la **Bolsa de Comercio de Córdoba** premia a **jóvenes cordobeses** que se destacan en diferentes ámbitos, como labor social, política, académica, profesional, deportiva, artística y cultural, de emprendedurismo y ejemplo de vida.

Este 2020, un año muy especial por la pandemia del coronavirus, se llevó a cabo la **34º edición del certamen** y dio a conocer quiénes fueron los diez jóvenes sobresalientes del año.

Año a año se proponen multiplicar valor y llegar a más jóvenes para así demostrar no sólo el potencial que guarda la juventud de cara al futuro, sino también el impacto que sus ideas transformadoras tienen en el presente.

El pasado jueves 17 de diciembre, la Bolsa de Comercio de Córdoba llevó adelante la ceremonia de Premiación en el Hotel Quorum de la ciudad de Córdoba, ocasión en que Nicolás Martínez, un joven con capacidad visual disminuida, oriundo de Bell Ville, Dpto. Unión obtuvo uno de los galardones.

La distinción a Nicolás, obtenida por sus propios méritos, mereció la atención de un calificado jurado que debió intervenir sobre 310 postulaciones, 47% de las cuales correspondieron a jóvenes que residen en el interior cordobés.

Nicolás fue elegido como joven destacado en la categoría "Ejemplo de Vida": Walter Nicolás Martínez de 26 años de edad oriundo de la localidad de Bell Ville, es un joven con discapacidad visual. Este año se recibió de Abogado, tras 8 años de estudios. Al inicio de su carrera obtuvo una beca de la Fundación Sudecor, que le permitió cursar sus estudios en la

Universidad Siglo 21. Desde segundo año hasta la actualidad, la (FUPEU) Fundación para la Enseñanza Universitaria de Bell Ville lo benefició con una pasantía rentada.

Formó parte de la Asociación de Ajedrecistas Ciegos de Argentina. Fue campeón de ajedrez a nivel municipal y subcampeón a nivel provincial y nacional.

Además fue ganador en el Concurso de dibujo en Braille y pintura en la Escuela Superior de Bellas Artes Fernando Fader de Bell Ville.

Actualmente, es un activo participante del proyecto comunitario "Ponte en mi lugar", que consiste en mostrar que las personas con discapacidad tienen las mismas posibilidades que las personas sin discapacidad.

Es miembro de META, Movimiento Estamos Todos en Acción, una ONG internacional que se dedica a la difusión y concientización sobre los derechos de las personas con discapacidad".

Como habrán notado la vida de Nicolás es digna de ejemplo, por lo cual recibió el galardón como "Joven Sobresaliente", y por eso solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.

Leg. Dardo A. Iturria

**PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32020/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:**

Su beneplácito por el reconocimiento recibido por el Sr. Walter Nicolás Martínez, oriundo de la ciudad de Bell Ville, Departamento Unión, quien fuera elegido como uno de los "Diez Jóvenes Sobresalientes de la provincia de Córdoba", en el certamen organizado por la Bolsa de Comercio de Córdoba, evento desarrollado el pasado 17 de diciembre.

**PROYECTO DE DECLARACIÓN
32021/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:**

Su adhesión y beneplácito al Día Internacional del Migrante, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas a celebrarse cada 18 de diciembre, llevando como lema este 2020, Reimaginar la movilidad humana.

Leg. Luis Carlos Lencinas

FUNDAMENTOS

La Asamblea General de las Naciones Unidas decide proclamar el 18 de diciembre Día Internacional del Migrante.

Lo proclama el 4 de diciembre del año 2000 en la Resolución 55/93.

Como lema este año propone Reimaginar la movilidad humana exponiendo que: "en la actualidad, la globalización, junto con los avances en las comunicaciones y el transporte, ha incrementado en gran medida el número de personas que tienen el deseo y la capacidad de mudarse a otros lugares".

Considero de gran importancia impulsar el intercambio de experiencias, afianzando el vínculo entre la migración y el desarrollo, ofreciendo oportunidades para las mejoras sociales y económicas tanto del lugar de origen como el de destino.

Leg. Luis Carlos Lencinas

**PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32021/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:**

Su beneplácito por la conmemoración, el pasado 18 de diciembre y bajo el lema "Reimaginar la movilidad humana", del Día Internacional del Migrante.

**PROYECTO DE DECLARACIÓN
32022/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:**

De adhesión y beneplácito al 25 de Diciembre del año 2020, en el cual la religión del cristianismo conmemora el natalicio de Jesucristo.

Leg. Matías Viola

FUNDAMENTOS

La Navidad es una de las festividades más importantes del cristianismo, junto con la Pascua de resurrección y Pentecostés. Esta solemnidad, que conmemora el nacimiento de Jesucristo en Belén, se celebra el 25 de diciembre en la Iglesia católica, en la Iglesia anglicana, en algunas comunidades protestantes y en la mayoría de las Iglesias ortodoxas.

La Navidad inicia un periodo llamado tiempo de Navidad, que finaliza con la solemnidad del Bautismo del Señor. Coloquialmente, al periodo que comienza con la Navidad y finaliza con la Epifanía del Señor también se le conoce como pascuas.

El verdadero significado de la navidad tiene que ver con poder apreciar ciertos valores que muchas veces por distintas cuestiones, quedan relegados durante el año. En este sentido, se asocia a la unión, la familia, el amor, la paz, la esperanza y la solidaridad y éstos se desprenden de lo que es la navidad, que es el nacimiento de Jesús.

Por lo tanto, cuando hablamos de esta festividad, hablamos de aquel período que se inaugura con el nacimiento del niño Jesús y el mensaje que trajo para el mundo.

Por lo antes es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de adhesión y beneplácito.-

Leg. Matías Viola

**PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32022/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:**

Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 25 de diciembre del año 2020, en el cual la religión del cristianismo celebrará el natalicio de Jesucristo.

**PROYECTO DE DECLARACIÓN
32023/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:**

Su BENEPLÁCITO ante el reconocimiento otorgado por el Gobierno Nacional por el otorgamiento de un bono económico a los trabajadores rurales considerados esenciales este año de pandemia producida por el Covid – 19; y por la lucha gremial de la UATRE que se sigue manifestando en contraposición de la postura de las cámaras empresarias.

Leg. Juan Carlos Castro.

FUNDAMENTOS

Producto de la pandemia producida por el Covid -19 fue que por decreto presidencial los trabajadores rurales fueron declarados esenciales.

A partir del 18 de marzo habiéndose decretado el distanciamiento social obligatorio los trabajadores rurales no frenaron en su labor y fueron quienes, a pesar de los riesgos que implicaba la asistencia y traslado a los lugares de trabajo, continuaron con su labor para así llevar el alimento a los hogares.

En consideración de todo ello, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) realizó el pedido de un justo reconocimiento a estos trabajadores en formato de un bono económico de \$15.000. Ante la negativa de las cámaras empresarias, el Gobierno otorgó a través de su mayoría un bono de \$10.000 (a pagarse en los meses de diciembre de 2020, enero y febrero de 2021).

Dicha decisión se tomó en el seno de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario en el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

Por todo lo antes expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en este proyecto de declaración.

Leg. Juan Carlos Castro.

**PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32023/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:**

Su beneplácito por el reconocimiento otorgado por el Gobierno Nacional, mediante la entrega de un bono económico a los trabajadores rurales considerados esenciales este año de pandemia producida por el Covid-19, y por la lucha gremial de la UATRE que se sigue manifestando en contraposición de la postura de las cámaras empresarias.

**PROYECTO DE DECLARACIÓN
32024/L/20**

**LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:**

Su reconocimiento y felicitación a las Licenciadas Rebeca Bortoletto y María Eugenia Pasquali, por la idea y realización del documental "La Pandemia en los Hospitales Universitarios" que, bajo la dirección del Sr. Ricardo Giaroli, la coordinación del Sr. Decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNC, Dr. Rogelio Pizzi, y la colaboración de la Lic. Graciana Vivanco, en el diseño gráfico del mismo, constituye un emotivo homenaje y agradecimiento al trabajo de los profesionales y personal hospitalario, que se desempeñó durante la pandemia por el Covid-19.

Leg. Liliana Abraham, Leg. Alejandra Piasco

FUNDAMENTOS

El pasado 10 de diciembre, día en que se produjo el cierre del año académico de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, mediante el acto celebrado en uno de los jardines del Hospital Nacional de Clínicas, que presidió el decano de la mencionada facultad, Dr. Rogelio Pizzi y el rector de la Casa de Trejo, Dr. Hugo Juri, tuvo lugar la presentación del documental intitulado "La Pandemia en los Hospitales Universitarios"; producción que nació de la idea y realización de dos destacadas periodistas de nuestra provincia, las licenciadas Rebeca Bortoletto y María Eugenia Pasquali, respectivamente, contando a su vez, con la dirección a cargo del Sr. Ricardo Giaroli y la meritoria coordinación de la máxima jerarquía de la referida facultad, elaboración que constituye "un emotivo homenaje y reconocimiento al trabajo de los profesionales y personal hospitalario durante esta pandemia".

En dicha oportunidad, sólo unas pocas autoridades se hicieron presentes; además de las mencionadas, estuvieron allí los directores de los Hospitales Universitarios, Alberto Pons (Hospital Nacional de Clínicas) y Otilio Rosato (Hospital Universitario de Maternidad y Neonatología), y de las Escuelas de la Facultad de Ciencias Médicas, mientras que, "el resto de la comunidad pudo ver la transmisión en vivo a través de las redes sociales de la Facultad".

El documental sobre el flagelo que mundialmente nos aqueja, no sólo encierra una muestra de gratitud hacia hombres y mujeres que dedican considerable tiempo de su vida a abrazar con pasión, espíritu de entrega y capacidad, la profesión elegida, sino que "constituye un legado para que las próximas generaciones de estudiantes conozcan, a través del testimonio de sus protagonistas, cómo hubo que reconvertirse rápidamente ante la irrupción del Covid-19 en los hospitales universitarios: el Hospital Nacional de Clínicas y el Hospital Universitario de Maternidad y Neonatología".

Mientras el primer nosocomio se erigió como "referente en la Provincia de Córdoba en la atención de pacientes desde los primeros días de la aparición de la enfermedad"; el segundo de ellos, "continuó trabajando dando asistencia a las parturientas con todas las medidas necesarias de seguridad frente a la pandemia".

Ambos hospitales escuela de las carreras de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, extendieron su labor de formación profesional frente a la contingencia, "al tiempo que (alrededor de 5500) voluntarios se sumaron a las actividades programadas por el COE de la Provincia de Córdoba".

Para la preparación del video, que contó con el diseño gráfico de la licenciada Graciana Vivanco, debieron realizarse alrededor de 50 entrevistas a los distintos intérpretes, circunstancia que demandó más de ocho horas de grabación y un resumen documental de 32 minutos de duración, donde se alcanza a irradiar la "adecuación de los hospitales universitarios y su responsabilidad social en la comunidad a la que pertenece".

"El debate frente a la muerte, la relación con las familias en el distanciamiento, la recuperación de los pacientes, el parir en soledad o morir en soledad, son solamente algunas de las facetas que deja reflejado para las próximas generaciones, este documento".

En definitiva, esta representación audiovisual de la realidad, proporciona un "testimonio de la fortaleza, la resiliencia, los miedos, los vínculos, los cuidados, y la esperanza que dejó en cada uno de sus protagonistas la pandemia del COVID19".

Estimamos, entonces, que el equipo a cargo de la preparación del documental "La Pandemia en los Hospitales Universitarios" es merecedor de este reconocimiento, porque, en cierta forma, representa al pueblo de la provincia de Córdoba, deseoso de brindar su más sentido homenaje a los trabajadores que durante el presente año integraron uno de los grupos de labor esenciales para el cuidado y resguardo de la salud y vida de las personas en el ámbito social.

Por las razones expuestas y las que se manifestarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la aprobación de la presente iniciativa.

Leg. Liliana Abraham, Leg. Alejandra Piasco

**PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32024/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:**

Su reconocimiento y felicitación a las Licenciadas Rebeca Bortoletto y María Eugenia Pasquali, por la idea y realización del documental "La Pandemia en los Hospitales Universitarios" que, bajo la dirección del Sr. Ricardo Giaroli, la coordinación del Sr. Decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNC, Dr. Rogelio Pizzi, y la colaboración de la Lic. Graciana Vivanco en el diseño gráfico del mismo, constituye un emotivo homenaje y agradecimiento al trabajo de los profesionales y personal hospitalario, que se desempeñó durante la pandemia por el Covid-19.

Sr. Presidente (González).- No habiendo más asuntos que tratar, invito a la legisladora Mariana Caserio a arriar la Bandera Nacional del mástil del recinto.

-Así se hace.

Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.

-Es la hora 21 y 48.

Nora Mac Garry
Subdirectora del Cuerpo de Taquígrafos

Manuel Calvo
Vicegobernador
Presidente del Poder Legislativo

Fredy Horacio Daniele
Secretario de Coordinación
Operativa y Comisiones

Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo